

La política en el ocaso de la clase media

El ciclo 15M-Podemos

Emmanuel Rodríguez López



historia 17

traficantes de sueños

Colabora con la cultura libre

Desde sus inicios **Traficantes de Sueños** ha apostado por licencias de publicación que permiten compartir, como las Creative Commons, por eso sus libros se pueden copiar, distribuir, comunicar públicamente y descargar desde su web. Entendemos que el conocimiento y las expresiones artísticas se producen a partir de elementos previos y contemporáneos, gracias a las redes difusas en las que participamos. Están hechas de retazos, de mezclas, de experiencias colectivas; cada persona las recompone de una forma original, pero no se puede atribuir su propiedad total y excluir a otros de su uso o replicación.

Sin embargo, «cultura libre» no es sinónimo de «cultura gratis». Producir un libro conlleva costes de derechos de autor, traducción, edición, corrección, maquetación, diseño e impresión. Tú puedes colaborar haciendo una donación al proyecto editorial; con ello estarás contribuyendo a la liberación de contenidos.

Puedes hacer una **donación**

(si estás fuera de España a través de **PayPal**),

suscribirte a la editorial

o escribirnos un **mail**



>Rodea el Congreso, Madrid 24 de septiembre de 2012. Fotomovimiento (cc: by-nc-nd)

La política en el ocaso de la clase media

El ciclo 15M-Podemos

Emmanuel Rodríguez López

traficantes de sueños

Traficantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera una editorial independiente que contempla la publicación de una colección variable de textos críticos. Es, por el contrario, un proyecto, en el sentido estricto de «apuesta», que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida. La construcción teórica y práctica de la caja de herramientas que, con palabras propias, puede componer el ciclo de luchas de las próximas décadas.

Sin complacencias con la arcaica sacralidad del libro, sin concesiones con el narcisismo literario, sin lealtad alguna a los usurpadores del saber, TdS adopta sin ambages la libertad de acceso al conocimiento. Queda, por tanto, permitida y abierta la reproducción total o parcial de los textos publicados, en cualquier formato imaginable, salvo por explícita voluntad del autor o de la autora y sólo en el caso de las ediciones con ánimo de lucro.

Omnia sunt communia!

historia

Omnia sunt communia! o «Todo es común» fue el grito colectivista de los campesinos anabaptistas, alzados de igual modo contra los príncipes protestantes y el emperador católico. Barridos de la faz de la tierra por sus enemigos, su historia fue la de un posible truncado, la de una alternativa a su tiempo que quedó encallada en la guerra y la derrota, pero que en el principio de su exigencias permanece profundamente actual.

En esta colección, que recoge tanto novelas históricas como rigurosos estudios científicos, se pretende reconstruir un mapa mínimo de estas alternativas imposibles: los rastros de viejas batallas que sin llegar a definir completamente nuestro tiempo, nos han dejado la vitalidad de un anhelo tan actual como el del grito anabaptista.

Omnia sunt communia!

© del texto Emmanuel Rodríguez López, 2016.

© de la edición, Traficantes de Sueños, 2016.



Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material.

El licenciadador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.

Bajo las condiciones siguientes:

*Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciadador o lo recibe por el uso que hace.

*NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.

*CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.

No tiene que cumplir con la licencia para aquellos elementos del material en el dominio público o cuando su utilización esté permitida por la aplicación de una excepción o un límite.

No se dan garantías. La licencia puede no ofrecer todos los permisos necesarios para la utilización prevista. Por ejemplo, otros derechos como los de publicidad, privacidad, o los derechos morales pueden limitar el uso del material.

Primera edición de Traficantes de Sueños:

1500 ejemplares

Diciembre de 2016

Título:

La política en el ocaso de la clase media

Autor:

Emmanuel Rodríguez López

Traficantes de Sueños

taller@traficantes.net

Edición:

Traficantes de Sueños

C/. Duque de Alba 13

28012 Madrid

Tlf: 915320928

editorial@traficantes.net

Impresión:

Cofás SA

Calle de Juan de la Cierva, 58, 28936 Móstoles, Madrid

ISBN: 978-84-945978-4-8

Depósito legal: M-41714-2016

La política en el ocaso de la clase media

El ciclo 15M-Podemos

Emmanuel Rodríguez López

historia

ÍNDICE

Prefacio	15
Primera parte. El 15M, la fase movimiento	19
Una insurrección democrática (primavera de 2011)	19
Precedentes	21
El 15M se vuelve «hegemónico»	33
La crisis de «régimen» (verano de 2012)	46
«El alma del 15M»	57
«Techo de cristal» (otoño de 2012 y nuevo invierno)	69
Segunda parte. La fase Podemos	77
«Ganar» (invierno-primavera de 2014)	77
La «hipótesis Podemos»	86
Un nuevo partido: Vistalegre	92
Primera crisis: crecimiento rápido, erosión rápida (invierno de 2015)	99
La vía municipalista (mayo de 2015)	110
Las «elecciones del cambio» (verano-otoño de 2015)	120
Cómo desgasta un Parlamento (2016)	128
«El 15M en las instituciones»: primeras conclusiones	134
Tercera parte. Elementos de interpretación:	
crisis de régimen, clase media y Restauración	139
Crisis de régimen, pero ¿qué crisis?	140
La «nueva política»	153
La Restauración imposible	171
Epílogo. Prólogo a un debate estratégico	189



> Madrid 21 de mayo 2015. Biko (cc: by-nc/2.0)





> Plaza de Catalunya, Barcelona, 18 de mayo de 2011. Lablascovegmenu (cc by/2.0)

PREFACIO

Los cinco años que transcurren entre 2011 y 2016 comprenden el principio y el fin (aparente) de la mayor crisis política desde la confirmación de la democracia española en 1978. El colapso de la burbuja financiero-inmobiliaria, la política austeritaria impuesta por Europa, la insurrección pacífica iniciada el 15 de mayo de 2011, el abismo político abierto en forma de un inminente *default* en el verano de 2012, la irrupción de Podemos y el radical trastorno del sistema de partidos, constituyen los principales capítulos de esta crisis. En tan escaso tiempo, esta provincia europea de mediano tamaño ha estado al borde de ser sepultada por el agotamiento del ciclo financiero, la gestión antisocial de la crisis bancaria europea y la incapacidad del Estado y sus élites para hacer frente a las continuas oleadas de indignación y descontento.

No obstante, este libro no pretende abordar la crisis en todas y cada una de sus dimensiones. Las páginas que siguen se concentran en aquello que ha empujado al país a una particular bifurcación política y cuyo motor reside en la marea de protesta y movilización que se levantó tras el 15 de mayo de 2011. Desplegado en múltiples hilos, algunos de los cuales acabaron por dar forma a la apuesta electoral; caótico, multiforme e irreducible a una explicación simple, el interés de este movimiento está en haber convertido una situación turbulenta en una crisis política propiamente dicha. En cuanto a sus formas de expresión, organización y contenidos, lo ocurrido tras el 15M presenta dosis de innovación, intensidad y velocidad sin precedentes —al menos desde la década de 1970— y sin comparación posible con la mayor parte de los países del entorno, salvo lo ocurrido en Grecia.

En cuanto a su valor, inscrito en la trayectoria larga de la crisis europea, el 15M y luego Podemos han devuelto a la vida política un viejo debate estratégico que parecía arrinconado, también desde los años setenta. Es lo que en la tradición comunista se conoció como el problema de la «Revolución en Occidente». Término viejo y seguramente obsoleto, pero que despojado de toda reminiscencia tardobolchevique nos permite volver a pensar cuestiones como los límites de las actuales democracias, el cambio social posible e incluso la «forma» del Estado moderno en una época en la que crisis (su crisis) se ha vuelto permanente. Quizás el corte definitivo que representa el 15M respecto a la vieja izquierda, es que este nace en una época que ya no podemos considerar bajo el signo del «progreso». Nuestro tiempo viene marcado por la descomposición de las instituciones sociales y políticas que garantizaron la estabilidad de las democracias en Occidente: la solvencia soberana del Estado moderno, la reproducción de unas clases medias mayoritarias, la legitimidad de la representación democrática y la reproducción viable de unas élites políticas «nacionales».

El método de este libro es histórico. Podría decirse que es una historia del tiempo presente. Arranca el 15 de mayo de 2011 para desplazarse hacia adelante, siguiendo el curso del ciclo político, y hacia atrás, a la búsqueda de las continuidades y las rupturas que cincelaron los perfiles del periodo. En tanto «obra histórica» se desarrolla en una secuencia de fases o tiempos. Los años del 15M, o del «movimiento», hasta los debates de 2013, cubren la Primera Parte. El tiempo de Podemos y los municipalismos, hasta la prueba de las dobles elecciones generales de 2015 y 2016, comprenden la Segunda. A estos dos bloques, se añade un tercero, que se puede resumir como un análisis de la composición política y social del movimiento. El propósito es cruzar esta «sociología política» con aquellos elementos que en el futuro inmediato parecen impedir la estabilización social e institucional, y que se comprenden en ese tiempo largo de la crisis del capitalismo europeo.

Con estas «pruebas de interpretación», que son a su vez un pronóstico, se cierra el trabajo. Al mismo tiempo, se manifiesta su propósito: ¿cómo impedir la clausura de la crisis política abierta en 2011? ¿Cómo empujarla hacia una solución que no entrañe una simple restauración de lo existente? Y sobre todo, ¿qué elementos debemos incluir en una hipótesis estratégica que sirva a la próxima oleada de movimientos, a fin de superar los límites a los que se ha enfrentado esta fase?

Antes de comenzar la lectura, conviene insistir en los límites: este trabajo se presenta fundamentalmente como un análisis del motor de la crisis: el ciclo político que arranca tras el acontecimiento 15M y que luego sufrirá una serie de mutaciones con nombre de Mareas, movimiento por la vivienda, Podemos, candidaturas municipalistas, etc. En este marco no se analiza más que lo que resulta imprescindible para entender el ciclo político. Aspectos tan centrales como el desarrollo de la crisis económico-financiera, la gestión política de la misma por parte de la Unión Europea, la respuesta de las élites españolas al doble desafío de la crisis y del nuevo movimiento de protesta, en definitiva, lo que constituye la «otra cara» de la crisis, no son tratados más que de una forma tangencial.

Tampoco tiene un lugar relevante la «crisis catalana», impulsada por el ambiguo movimiento por la independencia de este país. Tal análisis merecería un libro aparte. La perspectiva que aquí se sostiene es que aunque muchos lo puedan considerar legítimamente como un movimiento de ruptura (y obviamente lo es con respecto del Estado español), aunque se trata de una respuesta social a la crisis y aun cuando lo que sucede en Cataluña se puede leer como el laboratorio de la crisis política que luego se manifiesta en el resto de España, el soberanismo catalán, por su composición social, el protagonismo de los viejos partidos (CiU y ERC principalmente) y la naturaleza de la llamada «sociedad civil catalana», no se puede comprender bajo el signo del 15M y lo que luego se llamó «nueva política». Por ser claros, y en contra de lo que muchos sostienen en Catalunya, en el proceso soberanista, la dirección de las élites política catalanas apenas fue realmente desbordada por un «abajo», que por otra parte se expresó con lógicas y formas distintas a las que promovió el 15M.

La mayor parte de este libro ha tenido multitud de versiones previas y parciales en un centenar de artículos que recorren todo el periodo. Estos se pueden encontrar en las editoriales y las colaboraciones colectivas del blog Madrilonia, fuente relevante de análisis sobre el 15M, y a su modo espacio de «discusión estratégica» del movimiento durante ese periodo; también en el blog Contraparte, alojado en *Público* poco después de la irrupción de Podemos, y en las colaboraciones que entre 2014 y 2016 se han ido publicando principalmente en *Diagonal* y *Ctxt*.

Este trabajo de «interpretación y lectura de la coyuntura» se enmarca dentro de un esfuerzo militante mucho más amplio, una red de compañeras y compañeros con los que en cada momento se ha tratado

de estirar la situación política, participar y acompañar los procesos que se consideraban más potentes y, sobre todo, buscar y trabajar sobre aquellas aperturas que parecían prometedoras. Estas páginas no hubieran tenido lugar sin las discusiones sostenidas dentro del marco del Instituto para la Democracia y el Municipalismo, que promueve la publicación, la red de espacios reunida en la Fundación de los Comunes y la constante aportación de Traficantes de Sueños.

PRIMERA PARTE

EL 15M, LA FASE MOVIMIENTO

Una insurrección democrática (primavera de 2011)

Como una corriente eléctrica, miles de cuerpos se habían reunido aquel 15 de mayo. La crisis, la crisis que se estaba llevando por delante decenas de miles de vidas, parecía, ¡por fin!, encontrar respuesta. Las expectativas puestas en aquella manifestación eran extraordinarias, la tensión irresistible. Decenas, centenares de grupos se habían adherido al llamamiento digital de Democracia Real Ya! En casi todas las grandes ciudades del país se había organizado una marcha. En Madrid, el recorrido siguió el curso habitual de las grandes manifestaciones: principio en Cibeles, final en la Puerta del Sol. A la altura de la desembocadura de la calle Alcalá, decenas de chicos y chicas golpearon con fuerza las vallas metálicas: «Lo llaman democracia y no lo es». Los golpes reproducían, por medios primitivos, el manifiesto de DRY: «No somos mercancías en manos de políticos y banqueros».¹

Hasta aquí, ¿todo normal? Unas semanas antes, los activistas del grupo Juventud sin Futuro² llamaron a otra manifestación con casi iguales cifras de participación. Y como en la convocatoria precedente

¹ Democracia Real Ya! (DRY) se había formado unos pocos meses antes, a partir de la conversación en redes de diversas plataformas y grupos; entre estos quizás el más importante fuera la iniciativa con el significativo nombre de «No les votes». El 16 marzo apareció la web de DRY, en la que se publicó el manifiesto que anunciaba la manifestación para el 15 de mayo. La adhesión a la convocatoria proliferó rápidamente con la incorporación de más de un centenar de colectivos y blogs que desde hacía algún tiempo realizaban un trabajo crítico y de movilización en respuesta a la crisis. Las consignas «apartidistas» fueron característica fundamental de la convocatoria.

² Juventud sin Futuro se formó poco antes del 15M. Tuvo su centro en la Universidad Complutense de Madrid y especialmente en las facultades de ciencias políticas y sociología. En su constitución estuvieron presentes algunos de los miembros más jóvenes de la asociación universitaria Contrapoder, animada por Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, y de Izquierda Anticapitalista, justamente lo que luego

también la marcha acabó con la lectura de un comunicado. Pero aquel 15 de mayo las cosas no acabaron con un simple ritual: una asamblea espontánea tomó el centro de la plaza. De entre tantos surgió una voz oportuna y necesaria. La idea: no disolver la energía allí convocada. «Como en Tahrir, como en Tahrir» se decía. La noche acabó en cargas policiales, pequeños disturbios extendidos por las dos orillas de Gran Vía-Sol (Malasaña y Lavapiés).

El primer intento de acampar en el centro de Madrid había sido abortado. Y sin embargo, al día siguiente se volvería a las plazas. Por facebook, por twitter, por redes sociales y por Internet, la emergencia social que se instituyó el 15 de mayo convocó su primera prueba de fuerza. La sorpresa: en la tarde del 16, varios miles de personas se reunieron en la Puerta del Sol. Esta vez, y a pesar de un improbable calabobos en el extremo climatológico madrileño, se improvisaron camastros hechos de cartones. Varias decenas de personas trataron de pasar la noche al raso en el centro madrileño. La policía intervino, pero ya era tarde. La semilla había germinado, las asambleas se extendieron por la docena de bocacalles de la plaza. Tras el éxito, se convocó nueva concentración.

Quizás el movimiento debió tomar el nombre de 17 ó 18 de mayo, porque fue en esos días cuando se «desbordó», cuando pasó de una iniciativa que venía de la mano de unos cuantos cientos de activistas a una movilización —insurrección sería una palabra más adecuada— de límites difusos e incontrolados. Desde entonces, «desborde» se convirtió en el término clave de todo el ciclo político, prueba de verdad de toda iniciativa con vocación de afectar a la «mayoría» y romper la agenda pública oficial. Y es que en esos días, la plaza no pudo aguantar el aluvión, caminar por Sol se convirtió en un acto alegre pero también axfisiante. Más de 30.000 personas se agolparon día tras día en la Puerta del Sol.

El martes 17, una marea ondulada, hecha de toldos azules, empezó a extenderse sobre las enormes baldosas de la plaza. Desde los andamios del edificio más cercano se colgaron lonas gigantescas con rótulos del tamaño de una persona. Debajo de un Himler convertido en Mickey Mouse se leía «no nos representan», al lado una pancarta animaba «People of Europe, rise up». El movimiento ya tenía imágenes, también

conformaría el doble núcleo de Podemos. Casi desde el comienzo, JsF centró su labor en la denuncia de las condiciones impuestas por la crisis a la juventud madrileña, y principalmente en lo que llamaron el «exilio», en referencia a los miles de jóvenes que tuvieron que migrar desde 2007. Para un desarrollo más amplio sobre el grupo véase el panfleto *Juventud sin Futuro*, Icaria, Barcelona, 2011.

medios propios. El acontecimiento, que nunca fue sólo madrileño, se extendió según el patrón de las grandes pandemias: primero decenas, luego centenares de ciudades, en pocos días había saltado fronteras y a la vuelta del verano se replicaría al otro lado del Atlántico de la mano de los Occupy.

Los poblados improvisados en forma de acampada dieron al movimiento unas «bases». Eran suficientes para sostener la protesta, organizar asambleas, repartir propaganda, o sencillamente comer y charlar junto a personas que nunca antes se habían tratado. Todo con el propósito de «hacer política», pero de hacerlo con muchos y quizás por primera vez.

Pasados los primeros días, la prensa, la clase política, el *establishment*, se ven forzados a reaccionar. Intentan encajar el proceso en clasificaciones ya probadas: «antisistema», «radicales». Su confusión es completa. Nadie sabe muy bien que pasa, ni siquiera los participantes de las acampadas. Pero es algo importante, seguramente lo más importante que ha ocurrido en los últimos años. A partir del día 19, las imágenes de las plazas —por lo general una foto aérea de la acampada Sol— ocupan portadas de todos los periódicos nacionales, locales y algunos internacionales. La tensión mediática y los intentos de clasificar, asimilar, absorber, reprimir, resultan apremiantes.

Ni siquiera las elecciones locales del 22 consiguieron devolver la agenda mediática al curso convencional de la política oficial. Fueron las elecciones más ninguneadas de la historia del país. Por primera vez no hubo «jornada de reflexión»: las acampadas persistieron y las manifestaciones también. En las elecciones, ganó el PP, pero con un 34 % de abstención y dos millones de votos menos que en las generales de 2008. Sería más correcto decir que perdió el PSOE de Zapatero, el mismo que había llegado a la presidencia tras las movilizaciones que siguieron al 11 de marzo de 2004, jaleado con un coro que sonaba a advertencia: «No nos falles». En aquellos días, en cambio, en las plazas se escuchaba sin cesar: «PSOE-PP la misma mierda es».

Precedentes

Pero ¿qué fue el 15M? Desde los primeros días, el movimiento de las plazas hizo correr ríos de tinta. Se intuía, con razón, que en la interpretación del fenómeno se jugaba el futuro político del país. «Ya nada será

como antes» se leía en el subtítulo del que fue el primer libro publicado sobre el movimiento.³ Pasados los años, se confirmó: el 15M partió en dos la historia de la democracia española.

Acontecimiento, irrupción, cortocircuito. La dificultad de leer el 15M reside en su carácter imprevisible. Su letra no estaba escrita en los hechos previos. En los meses anteriores, había tensión, expectativa, ganas, malestar, un cóctel de elementos palpables en el estado de ánimo, pero nadie, al menos nadie en su sano juicio, podía prever la magnitud del seísmo. El desplazamiento fue mucho más allá de lo que todos sus actores juntos hubieran podido imaginar. Y estos se vieron tan sorprendidos como muchos de los espectadores más distantes. Sencillamente no había precedentes, o al menos estos no eran claros: ni una memoria de insurrecciones pasadas, ni un horizonte estratégico, ni siquiera un repertorio de acciones disponible para el calibre de lo sucedido. Tan sólo las imágenes de lo ocurrido en la Primavera Árabe y especialmente en la plaza Tahrir servían de espejo.⁴ Faltaba el marco de interpretación. Pero había potencia. Con eso bastaba.

El 15M fue un vendaval, algo radicalmente nuevo, o al menos algo que se vivió como nuevo y que permitió abrir lo nuevo, en formas antes imposibles. Eso es lo que lo eleva a la categoría de los grandes acontecimientos. Conviene recordar que si para los participantes, que se contaron por millones en aquellas jornadas, fueron días de una alegría desbordante —algo grande se había desatado, aunque no se supiera muy bien qué—, para los actores políticos tradicionales la ocupación de las plazas cayó como un mazo. El ciclón político había desplazado, aunque fuera unos metros, posiciones que habían estado sólidamente asentadas durante décadas: la Constitución, la gramática política convencional, la legitimidad de la política hasta entonces existente.

³ Carlos Taibo, *Nada será como antes. Sobre el movimiento 15M*, Madrid, La Catarata, 2011.

⁴ La llamada Primavera Árabe iniciada con la Revolución de los Jazmines en Túnez en diciembre de 2010, a raíz de la autoinmolación del joven vendedor ambulante Mohamed Bouazizi, y sobre todo de la ocupación de la plaza Tahrir en el Cairo, ejercieron un extraordinario impacto en la opinión pública española. Invirtieron el estereotipo que hacía equivalente islamismo y terrorismo. De modo parecido, el desarrollo del movimiento de las plazas en España tuvo una fuerte inspiración en los acontecimientos en la otra orilla del Mediterráneo. Las similitudes en las formas organizativas y la composición social de los movimientos ha sido destacada por algunos trabajos. Véase, por ejemplo, Paolo Gerbaudo, *Tweets and the Streets. Social Media and Contemporary Activism*, Londres, Pluto Press, 2012.

La izquierda oficial fue seguramente la más descolocada. PSOE, IU y los grandes sindicatos bascularon entre el rechazo y la simpatía oportunista, pero siempre sin saber muy bien de qué se trataba. La prensa (las editoriales, las firmas de prestigio) fueron igualmente incapaces de ofrecer nada, más allá de los extremos del «boicot a la democracia»,⁵ y las imágenes obvias y manidas del malestar considerado legítimo: la chica o el chico de «máster y dos carreras», en paro o con un sueldo por debajo de los mil o los ochocientos euros. Tan sólo quizás los medios neocon se vieron sinceramente atrapados, fascinados de vérselas con un movimiento que atentaba contra los cimientos del sistema político (al igual que ellos), al tiempo que se veían obligados a atacarlo por una «solución» política diametralmente opuesta a la suya.⁶ Si se quiere tomar una metáfora tradicional: en ninguna otra ocasión de la historia reciente de la democracia española se había manifestado una distancia tan grande entre el «país real» y el «país oficial». Las máquinas de representación (los partidos) fueron sumidas en la perplejidad, las máquinas de producción de la opinión pública parlotearon sin parar, sin ser capaces siquiera de ocultar el hecho de que realmente tenían poco que decir.

Sin embargo, que el 15M fuera un acontecimiento, algo esencialmente nuevo y que fuese vivido como tal, no quiere decir que naciera de la nada, que no tuviera historia, algunos precedentes. El 15M tuvo sus condiciones necesarias en una corriente política que arrancaba de lejos: un hilo que a golpe de hemeroteca parece discontinuo, pero que se había ido hilvanado con materiales resistentes. Para muchos participantes, la memoria inmediata del movimiento de las plazas se remontaba siete años atrás, hasta las jornadas que siguieron al atentado del 11 de marzo de 2004. Esa mañana una serie macabra de bombas estalló en tres estaciones de tren del sur y sureste de Madrid, 190 personas perdieron la vida en unos atentados, que se produjeron cuatro días antes de la convocatoria de unas elecciones generales.

La determinación de la autoría de aquellos actos fue el precursor de la mayor batalla política del país en años. Concluía entonces la segunda legislatura de José María Aznar. El PP se había impuesto al

⁵ Este fue el titular la portada de *La Razón* del día 22 de mayo de 2011.

⁶ Durante esos días, estos medios explotaron a fondo la asociación del 15M con Bildu-ETA, con la extrema izquierda y con el radicalismo violento, y al mismo tiempo exploraron la posibilidad de darle una lectura que pudiera ser funcional a su campaña «regeneracionista». El 15M empujó la escena neocon hacia su definitivo arrinconamiento político. Sobre su ambivalencia inicial merece la pena revisar los contenidos de *Libertad Digital* de la última quincena de mayo de 2015.

partido socialista en las elecciones de 1996, tras casi catorce años de gobierno ininterrumpido de Felipe González. La primera legislatura de los populares siguió las pautas de la moderación y el respeto a algunos de los elementos que habían trabado la hegemonía socialista durante la mayor parte de la democracia: se mantuvieron leyes como las del aborto, se negoció con los nacionalistas catalanes la «gobernabilidad» del país y se estuvo a punto de cerrar una tregua definitiva con ETA.⁷ En las elecciones de 2000, Aznar revalidó, sin embargo, con mayoría absoluta. Las condiciones parecían óptimas para tratar de cimentar un marco cultural más idóneo para una hegemonía conservadora de larga duración. El motor de la renovación conservadora tenía aspectos esencialmente culturales e ideológicos. En lo fundamental no modificó la matriz heredada basada en la aplicación de las políticas neoliberales impuestas a escala europea —políticas siempre favorables al capital familiar español—, una orientación social y cultural claramente centrada en los segmentos de clase media, y la búsqueda de un cierto equilibrio político con la oposición de «izquierdas». No obstante, radicalizó algunos elementos que ya antes habían tenido algo de desarrollo, pero que podían marcar la diferencia con los socialistas, esto es, abrir la vía conservadora hacia una hegemonía no prestada de la «izquierda». Así por ejemplo, en materia económica, acentuó el marco ideológico neoliberal, inscrito en las políticas socialistas y en el proceso de integración europea, pero de la mano de un creciente señalamiento de los «colectivos subsidiados», al tiempo que se encomiaba la iniciativa privada y el «empleo» como principal vertebrador de la política social. En términos crudamente materiales, el gasto social en el país, siempre deficitario, descendió algunos puntos más, confirmando la posición de cola de España en esta rúbrica a escala europea; todo ello en un periodo de extraordinaria bonanza económica.⁸

⁷ Ciertamente, la llamada cultura de la Transición ha estado anclada en un claro predominio de la izquierda en materia cultural, apuntalado por década y media de gobiernos socialista. Es lo que en el país se reconoce con el término «progre», que recoge los viejos elementos de superioridad moral de la izquierda, cierta liberalidad en las costumbres y un respeto más bien superficial a los derechos civiles, todo ello sin tocar evidentemente ninguna materia fundamental del modelo de propiedad y de circulación de la renta.

⁸ Entre los años 2000 y 2004, periodo de fuerte crecimiento económico, el gasto público en salud, educación, vivienda y protección social tocó mínimos históricos respecto de mediados de los años ochenta. Véase por ejemplo las series del Barómetro Social de España, disponibles en www.barometrosocial.es.

En el campo propiamente político-ideológico, la nueva mayoría popular de Aznar profundizó la deriva autoritaria y estatista de los socialistas, sobre la base de una acentuación de los elementos más conservadores de la Constitución. Acabó así por definirse una suerte de «nacionalismo constitucional», que como en la época de González se apuntaló en la lucha contra el terror y el enemigo interno de ETA, pero que ahora se extendía a todos los nacionalistas periféricos, Convergencia catalana a la cabeza —con la que había pactado su primera legislatura—, y en ocasiones también a la izquierda, PSOE incluido. La segunda legislatura de Aznar trató de instaurar una suerte de experimento thacherista tardío, un desplazamiento neoconservador y agresivamente neoliberal de la cultura política española, que en realidad no sólo mostraba el cambio ideológico en las tornas políticas del país, sino también una incipiente crisis política de la democracia.

En línea con la política securitaria y de la guerra contra el terror, la política exterior se convirtió en el principal caballo de batalla de esta segunda legislatura. Empeñado en una política de prestigio internacional, Aznar trató de convertir al Estado español en el último vértice del triángulo atlántico en la «lucha contra el terror». Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 sobre Estados Unidos, el jefe del gobierno español resultó ser de los más solícitos en participar en la decisión de invadir Afganistán. A la guerra de Afganistán, siguió posteriormente la invasión de Irak y la secuencia de propaganda sobre las supuestas armas de «destrucción masiva» de Hussein. La intervención militar despertó una oleada de movilizaciones que atravesó todo el continente, y que volvió a reunir las fuerzas del movimiento global. Este se había articulado tras las protestas de Seattle, probándose en una serie de citas que culminaron en la contracumbre a la reunión del G8 en Génova durante el verano de 2001. En España, los sectores activos del movimiento global animaron las enormes manifestaciones contra la invasión de Irak. El 15 de febrero de 2003, en Madrid y Barcelona, salieron a la calle en torno a un millón de personas respectivamente: fueron al lado de Londres y Roma las convocatorias más exitosas del continente. Conviene recordar que las manifestaciones fueron organizadas de forma independiente, y a veces claramente hostil, a los sectores de la izquierda tradicional, y principalmente al partido socialista, que tibiamente también trató de sumarse.

Los atentados del 11 de marzo de 2004 se produjeron en un contexto que ya había alcanzado temperatura de ebullición. Y según un guión ya probado, el PP prendió el encendido de la máquina cultural

de la guerra contra el terror. Desde el principio, empujó la idea de que la autoría apuntaba inequívocamente a ETA. Los desmentidos de la izquierda abertzale y el *modus operandi* descuadraron, no obstante, este marco de interpretación. Convocada para el día siguiente con el significativo lema «Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo», la gigantesca manifestación del viernes en Madrid acabó en una escenificación del conflicto que se dirimía en torno a las diferencias sobre la autoría de los atentados. La insistencia en mantener la responsabilidad de ETA fue probablemente el mayor error de Aznar en toda su carrera y fue también el reflejo de su particular modo de empleo del poder del Estado. Al día siguiente, sábado, por correo electrónico y sobre todo por mensajes de móviles (sms) empezó a circular la convocatoria de una concentración espontánea primero en la sede del PP madrileño y luego en otras sedes de distintos puntos del país. Al final del mensaje se leía: «Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!». El *flash mob* acabó en un gigantesco encuentro de varios miles de personas que desde la calle Génova se desparramaron por el centro de Madrid. La agitada jornada de reflexión terminó en una fiesta política espontánea, que anunciaba los resultados electorales del día siguiente. La gestión de los atentados dio la puntilla a un gobierno ya demasiado desgastado. La VII legislatura de la democracia trajo de vuelta a los socialistas de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las jornadas de marzo de 2004 inauguraron también un diálogo político novedoso. Por primera vez, la política institucional había sido plegada por un movimiento que no se reconocía en los partidos, pero tampoco de una forma clara en el perfil «organizado» de los movimientos sociales.⁹ El movimiento contra la guerra y luego la respuesta a los atentados de marzo articularon formas de movilización nuevas, que operaban sobre la base de la autoorganización emergente y la agregación «en enjambre» de sujetos no siempre organizados.¹⁰ Tanto por su capacidad de convocatoria, como por su forma, aquellas jornadas fueron la primera prueba sobre la posibilidad del 15M.

⁹ Para un análisis de aquellas jornadas vertiginosas, véase el libro coral que recopila fragmentos de todo tipo escritos en aquellos días: *¡Pásalo! Relatos y análisis sobre el 11-M y los días que le siguieron*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004.

¹⁰ Se hablaba entonces de una lógica del enjambre o de *swarm*, que disipaba la idea centralizada de la organización. Véase *ibidem*.

Tras las elecciones de marzo, Zapatero trató de responder a la nueva coyuntura también con una propuesta de renovación de partido, e incluso de lavado del régimen político. Salvo en las regiones del sur peninsular —Extremadura y Andalucía principalmente—, el PSOE había perdido empuje y legitimidad, especialmente en las grandes ciudades. Su imagen fuertemente erosionada, estaba demasiado asociada a la corrupción del periodo de Felipe González, al autoritarismo de la vieja guardia y a una siempre sospechosa continuidad entre clase política y élite económica hecha de mutuas ventajas para ambos sectores. Zapatero probó un estilo político nuevo —el llamado «talante»—, dirigido por las consignas del «diálogo» y el «carisma». La recuperación de la centralidad socialista trató de apuntalarse, también, en la diferencia «cultural» con el neoconservadurismo de Aznar. Y en este propósito, Zapatero intentó un cambio del curso político: recogió las demandas del movimiento contra la guerra, que finalmente sólo cumplió a medias —se retiró de Irak pero no de Afganistán—; se apoyó en los sectores de la «cultura», con los que logró trabar una alianza estrecha —actores, cineastas, intelectuales—; recuperó también en su provecho el incipiente movimiento por la Memoria Histórica de la Guerra Civil;¹¹ inició una política de ampliación relativa de los derechos civiles, con la aprobación de la ley de matrimonio homosexual (2005) y un nuevo proyecto de ley de ampliación del derecho al aborto; e incluso, impulsó el desarrollo del Estado del bienestar, con los primeros proyectos de ley sobre la dependencia. Como también probara Aznar, trató de generar un marco mediático más favorable debilitando, en su caso, el lazo de su gobierno con el todopoderoso grupo PRISA y su periódico *El País*, identificados con la política socialista durante las décadas de 1980 y 1990, al tiempo que favorecía a otros medios.¹²

¹¹ El movimiento por la recuperación de la Memoria Histórica arrancó a finales de los años noventa y principios de los 2000. El propósito fundamental del mismo se cifraba en recuperar la memoria de los represaliados en la guerra y la postguerra. Se trataba de un movimiento variopinto, en el que el trabajo de reconstrucción histórica (con investigaciones y exhumaciones) se articulaba con posiciones políticas dispares. Seguramente los aspectos más interesantes apuntaban al pacto de silencio sobre el periodo que se selló durante la Transición. Las implicaciones penales cuajaron en 2007 en una serie de acusaciones penales por crímenes contra la humanidad que fueron inicialmente instruidas por el polémico juez Baltasar Garzón. Previamente el gobierno Zapatero publicó la conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica, que reconocía oficialmente a las víctimas del franquismo, asegurando su derecho a la verdad y a la reparación, pero sin ninguna implicación penal para los responsables.

¹² El principal gesto en este sentido fue el apoyo explícito al empresario Jaume Roures, accionista principal de Mediapro, a su vez propietaria del diario *Público* que se empezó a publicar en papel en 2007.

La última legislatura de Aznar y la primera de Zapatero, periodo que podemos considerar como de la primera crisis y renovación de la política española, se desarrollaron en una atmósfera expansiva de crecimiento económico, de aumento del empleo y del consumo, correlatos del largo ciclo financiero-inmobiliario que se había iniciado en 1997. La renovación de ambos partidos, y en cierta forma su alternancia, por medio de la exasperación de la diferencia cultural, se produjo así en un contexto favorable, que a la postre podía esconder el lento deterioro de la política institucional. Los atentados de marzo, los niveles ya altos de abstención y la irrupción de la Unión de Progreso y Democracia (UPyD) en 2006, de la mano de un lenguaje de regeneración y renovación democrática, dejaban entrever, no obstante, la persistente crisis de representación, manifiesta en la creciente desafección de la población respecto del juego institucional. En cierto modo, el antagonismo de ambos partidos sobre materias relativamente periféricas (los valores morales, la religión, la memoria) podía ser entendido como la antesala de una crisis mayor.

La reelección de los socialistas en 2008 se produjo, en cambio, en una situación social y económica distinta; ahora estaban en juego los elementos principales de la constitución material del régimen político español. Desde finales de 2007, la crisis de la banca de inversión de Europa y EEUU se unió rápidamente a los síntomas de agotamiento de la gran burbuja de activos española. Tras llegar a la Moncloa en la primavera de 2008, el equipo de Zapatero se enfrentó a la mayor depresión económica del país desde los años setenta. La política cultural resultaba sencillamente insuficiente para mantener el paso. A las primeras fórmulas basadas en la negación de la crisis, dictada por los grandes actores económicos, siguió una serie de medidas contracíclicas de apoyo a los principales sectores del capital nacional: la promoción inmobiliaria, las grandes constructoras y los bancos.¹³ Como no podía ser de otra manera, la política de socialización de pérdidas dictada por el gobierno Zapatero debilitó rápidamente su popularidad. El primer empuje de la crisis entre 2007-2010 se saldó con más de tres millones de parados, una rápida caída del consumo y la primera oleada de desahucios. En 2010, la posibilidad de

¹³ Las principales medidas en este sentido fueron el mantenimiento y aceleración de la inversión en infraestructuras de la mano del plan expansivo aprobado en 2005, las medidas contenidas en la Ley de Economía Sostenible (que permitía entre otras cosas convertir parte del stock de vivienda vacía en vivienda de protección oficial) y sobre todo la creación primero del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, y luego del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, diseñado para comprar activos bancarios y otorgar préstamos de saneamiento financiero con aval del Estado. Desde 2008, el FAAF dispuso de 30.000 millones de euros. Su sucesor, el FROB, consumiría en los años siguientes más de 50.000 millones de euros en ayudas a los bancos en dificultades.

una recuperación económica, propulsada por el estímulo contracíclico del gasto público se vio definitivamente abortada por las nuevas políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea y el comienzo de la larga serie de rescates que ese mismo año empezara con Grecia.

En la convocatoria del 15M, y en su organización posterior, se reconocía, en definitiva, una pequeña historia política, que tenía por centro la erosión del sistema de partidos español, y también una nueva lógica de movilización en red que se probó en las jornadas de marzo de 2004; pero también la constitución de una nueva generación de movimientos que se articularon frente o contra las políticas de Zapatero. Estos movimientos no se dejan reducir a un único patrón. De una parte, en los años de gobierno socialista se dieron los primeros pasos del movimiento de vivienda, posteriormente determinante del ciclo político. Surgido a partir de diversas plataformas entre 2003 y 2005, justo en los años centrales de la expansión inmobiliaria, este movimiento denunció los costes del modelo económico español: el alto precio de la vivienda, la tardía edad de emancipación de los jóvenes y los altos niveles de endeudamiento. En 2009, ya en plena crisis, una parte del movimiento derivó en la creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, especializada en la denuncia y bloqueo del creciente número de desahucios que se desencadenaron en cascada ante la imposibilidad de seguir pagando las hipotecas. En la misma línea, desde 2008 y 2009, se alinearon una serie de plataformas que denunciaban las políticas de recortes y privatización de los servicios públicos fundamentales.

Con otro estilo pero también crucial como soporte técnico y centro «imaginativo» —más que estratégico— del 15M, se debe reconocer un modo de hacer formateado en el hacktivismo y en el mediactivismo. Este espacio de experimentación política con las tecnologías digitales se había probado en los nuevos medios con base en la red,¹⁴ pero también en lo que propiamente deberíamos llamar las «luchas de Internet». Antes de la explosión 15M, muchos de los más jóvenes nacieron al

¹⁴ Este campo de experimentación política se inauguró en los años del movimiento global, cuando el desarrollo de la primitiva web 2.0 fue extensamente probado por los Indymedia, foros de noticias distribuidas y con comentario libre. Desde mediados de los 2000, este desarrollo se vio ampliado de nuevo con la extensión social de la tecnología blog y el nacimiento de una nueva esfera de comunicación y producción de opinión, la blogosfera. La generalización de las redes sociales, al final de la década, desplazó a los proyectos más experimentales y políticos, pero en cualquier caso cumplió un papel crucial en el nacimiento y extensión del 15M.

activismo en un medio digital volcado en la defensa de la neutralidad de la red, los combates contra el endurecimiento de la propiedad intelectual de Zapatero (la llamada ley Sinde¹⁵), la exploración de redes libres y todo lo que entonces empezaba a conocerse con el nombre de tecnopolítica. En un terreno más «convencional», resultó fundamental la dinámica organizativa y cultural que llevaba más de dos décadas cocinándose en movimientos urbanos, que por lo general tenían su base en los llamados centros sociales. Okupados o no, estos espacios se convirtieron, desde mediados de los años noventa, en sedes principales de socialización, ocio y «conspiración» política de los movimientos sociales juveniles. En las principales ciudades del país, fueron los activistas de los centros sociales los que dieron soporte logístico a las acampadas y quienes transmitieron rudimentos organizativos a las incipientes formas asamblearias del movimiento, así como ciertos repertorios de protesta basados en la guerrilla de la comunicación y la acción directa.

Esta rápida genealogía de los «precedentes» del movimiento de las plazas, no debiera impedir reconocer, sin embargo, lo fundamental: el 15M fue mucho más allá de los que las distintas generaciones de activistas podían imaginar. Aunque sólo fuera por su escala, por la masividad, aquello no era «algo» de los movimientos sociales. Antes al contrario, los movimientos sociales estallaron al toparse con esa insurrección improvisada que tuvo el efecto de reunir a todas las razas del activismo, disolviendo durante un tiempo sus diferencias vueltas irrelevantes ante la magnitud del acontecimiento. Conclusión necesaria: el 15M no tuvo una dieta de base «movimentista», mucho menos fue resultado de los «movimientos», y esto aun cuando fuera improbable que se pueda explicar al margen de un trabajo subterráneo, de sedimentación lenta, probablemente de décadas, que arrancaba de estas minorías activas.

Pero si el combustible social del 15M no estaba en los movimientos, estos no tuvieron más remedio que transmitir lo mejor de sí mismos. La ola 15M recogió y amplió un cierto espíritu libertario reconocible en las formas de hacer y comunicarse. «Sin líderes, sin

¹⁵ La Ley Sinde era un apartado de la Ley de Economía Sostenible aprobada bajo el gobierno Zapatero en mayo de 2009. Modificaba la ley de propiedad intelectual y la ley que regula el ámbito de los juicios «contencioso-administrativo». Básicamente permitía cerrar servidores en un plazo de pocos días, en el caso de que fueran acusados por una comisión de propiedad intelectual de alojar contenidos protegidos por esta ley. La función del juez quedaba relegada a autorizar o no las decisiones de esta comisión. La ley vulneraba claramente la libertad de expresión y comprendía expresamente las filtraciones a la prensa de documentos secretos y delitos económicos de políticos y empresarios.

jefes», fue una de las consignas inmediatamente naturalizadas en las plazas. Y durante meses todo se decidió en asambleas interminables. La moderación, la gestión colectiva del «cuidado», incluso la invención de un código de señales singular¹⁶ permitió generar una experiencia de autoorganización radicalmente democrática, compatible con el «micro libre», en el que hasta el más impensable de los «cualquiera» tenía su derecho a hablar.

Pero si las asambleas y la ocupación material de las plazas constituyeron la dimensión tangible (física) del movimiento, éste tuvo al mismo tiempo otra dimensión, «virtual», que resultó ser su principal canal de proliferación. El 15M se articuló en las redes, encontró en las mismas su canal práctico de organización y multiplicación. En aquel tiempo, se habló del 15M como «sistema-red» y de la tecnopolítica, término también «de época», como la capa nuclear del movimiento.¹⁷ Y en efecto, las acciones, los encuentros, las convocatorias circulaban primero en las redes, pero constituían algo mucho más importante. Facebook, pero especialmente twitter, se constituyeron como esferas propias de generación de opinión y acción, contestación de las falsas noticias de los medios, replicación vírica de las consignas, testeo del clima afectivo y de las predisposición colectiva a determinadas propuestas. Se habló entonces de una esfera pública post-mediática, una corriente política que discurría al margen, a veces en contra, del país oficial producido por los grandes medios de comunicación. La miniaturización de los dispositivos de conexión —el móvil con datos— permitía la producción y acceso inmediatos a la información sobre una manifestación, las decisiones de las acampadas o las acciones policiales. Gracias a la conectividad distribuida y en red, se llegó a disponer en tiempo real de una permanente ventaja táctica sobre el adversario, ya se tratara de una intervención policial o de un intento de «manipulación mediática». Gracias también a esta dimensión tecnopolítica, el 15M venció en todas las pruebas de la «opinión

¹⁶ Este código gestual estaba diseñado para facilitar los consensos en asambleas multitudinarias, de tal forma que la pura expresividad de los asistentes pudiera, si no facilitar la toma de decisiones, sí al menos calibrar el estado de ánimo general respecto de determinadas propuestas.

¹⁷ Véase a este respecto el análisis de Raúl Sánchez Cedillo, «El 15M como insurrección del cuerpo máquina», disponible en ateneucandela.info/sites/default/files/15_cuerpomaquina_yp.pdf. Al respecto de la «tecnopolítica» véase principalmente el trabajo del grupo «tecnopolítica», integrado en el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, pero formado y liderado por activistas 15M especializados en este campo, como Javier Toret Medina o Arnau Monterde: www.tecnopolitica.net

pública», dio literalmente la vuelta a todos los intentos de represión policial y de criminalización mediática, señalándolos como casos de abuso y arbitrariedad.¹⁸

Las acampadas de aquella primavera-verano de 2011 fueron una llamarada. Vivieron su apogeo en las semanas de mayo y junio en las que interrumpieron simbólicamente y materialmente los centros urbanos de casi todas las ciudades del país. Pero pasados 40, 50, a veces 90 días, fueron desmanteladas. Lo que la mayoría de sus participantes se había prometido —que lo vivido en aquella primavera no quedaría encerrado en aquellas semanas— se trató de organizar de otro modo. En muchas ciudades, la insurrección se «territorializó». En Madrid se optó por «ir» a los barrios y más de 100 asambleas salpicaron toda el área metropolitana.¹⁹

De una forma creativa, el #tomalaspazas dio el relevo a una fase de proliferación de los conflictos, de movimientos aumentados por aquella insurrección masiva y pacífica. En apenas unas semanas, los puñados de personas reunidas en piquetes de madrugada, determinadas a parar desahucios, pasaron de unos pocos a decenas, e incluso centenares de personas. Poco después, aparecieron las Mareas contra los recortes en sanidad y educación. Aquel verano, consignas a veces imposibles, como el #tomalaspayas se hicieron realidad con asambleas improvisadas en los principales puntos de las costas del país. Incluso, la visita del Papa en agosto, se transformó en motivo de protesta.²⁰ El 15M parecía haber dado la vuelta a la sociedad. Todavía no se podía imaginar su trayectoria pero, sin duda, no parecía ya una explosión episódica.

¹⁸ Las redes sociales y las grabaciones en móvil permitían difundir imágenes propias de los acontecimientos en tiempo real que desmentían claramente las interpretaciones policiales y de los grandes medios. Durante aquellos meses se generalizó el empleo del término «periodismo ciudadano», para hacer referencia a la capacidad de cualquiera de informar e interpretar los acontecimientos en los que normalmente era también protagonista.

¹⁹ De acuerdo con los informes de participantes, se puede calcular que en torno a 40.000 personas participaron de forma regular en las asambleas barriales del 15M madrileño durante los meses de verano y otoño de 2011.

²⁰ El Papa Benedicto XVI, de ideología inequívocamente conservadora, visitó España entre los días 16 y 21 de agosto, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Los actos organizados con fuerte soporte público fueron objeto de contestación por parte del 15M con una serie variopinta de acciones y una manifestación más bien modesta que se desarrolló el 17 de agosto en la Puerta del Sol.

El 15M se vuelve «hegemónico»

Pasado el primer golpe, los «expertos» se interrogan, se preguntan sobre el fenómeno. Metroscopia,²¹ el CIS,²² sorprenden con sus datos: la inmensa mayoría de la población —entre dos tercios y cuatro quintos— considera que el 15M «tiene razón», siente «simpatía» o incluso declara haber participado en las protestas.²³ ¿Por qué su éxito?

Durante las primeras semanas, en realidad durante el primer año y medio, todo intento de represión o criminalización sobre cualquiera de las convocatorias 15M se volvió como un bumerán contra los que lo iniciaron —Estado, medios de comunicación, policía—. A ello contribuía la masividad de las movilizaciones, el paradójico carácter pacífico de lo que no dejaba de ser una insurrección, la inteligencia colectiva que, una y otra vez, como en el judo aprovechaba la fuerza de su contrario para hacerlo caer.²⁴ Pero esto no explica, o al menos no del todo, la capacidad del 15M para generar consensos tan amplios. Tampoco acaba de explicarlo el alto nivel de hartazgo social con la crisis, las políticas de austeridad o el deterioro de la vida política. Había algo relativo al sujeto emisor, al sujeto de la protesta, a la «imagen» que desprendía el movimiento y que muchos sólo encontraban en televisión, que desparezaba las simpatías de la mayoría social.

¿Hubiera sido el mismo 15M si quienes protagonizaron las acampadas y las primeras manifestaciones se hubieran significado como sindicalistas, trabajadores despedidos o sometidos a los centenares expedientes de regulación de empleo entonces en marcha? ¿O si hubieran sido las chavalas y los chavales de las periferias urbanas, los mismos que caían dentro de ese 30 % de absentismo escolar, o dentro de esa cifra que superaba el 60 % de desempleo juvenil? En el primer caso, hubiéramos

²¹ La empresa Metroscopia, asociada a PRISA, ofrecía en sus encuestas realizadas los días 1 y 21 de junio unos niveles de «simpatía» hacia el 15M del 66 y el 64 % respectivamente. En la pregunta sobre si «tienen razón» los indicadores se disparaban al 81 y el 79 %.

²² El barómetro de junio del CIS recogía la siguiente pregunta «¿Cuál es su opinión con relación a los acontecimientos protagonizados por este movimiento?». Las respuestas «muy positiva» y «más bien positiva» sumaron el 70,3 %, las negativas sólo 12,7 %.

²³ De nuevo el CIS de octubre revela otra sorpresa. Más o menos el 16 % de los encuestados, que representaría unos 7,5 millones de personas, decía haber participado en manifestaciones recientemente, se trata de un importante incremento respecto a los anteriores barómetros en los que se incluyó esta pregunta.

²⁴ En el blog Madrilonia, bastante activo durante el primer año del 15M, se trató de razonar y discutir esta táctica en numerosas editoriales de aquel periodo. Véase www.madrilonia.org

asistido, seguramente, a una protesta legítima pero que, etiquetada de «sindical», relativa «al trabajo» —esa parte extrañamente negada en las sociedades de consumo «avanzadas»— hubiera sido aislada en un terreno considerado «particular», empujada al campo ideológico de la demanda corporativa. En el segundo caso, improbable a todas luces, se hubiera asistido a un desalojo policial sin ambages; al fin y al cabo, la rebelión de las «chonis» y los «quillos» hubiera sido una protesta incomprensible para una mayoría social acostumbrada a que la torpedeen con conceptos como generación «ni-ni» («ni estudian, ni trabajan») y con programas de televisión en los que las formas de ser de estos chicos sirve de entretenimiento, escarnio moral o medio de ridiculización clasista.²⁵ Tan sólo quizás algunos tertulianos de izquierdas hubieran tratado un «15M choni» con esa mezcla de compasión y paternalismo que se emplea para abordar el problema de los «pobres», cuando estos se levantan para dejar de serlo. Sobra decir que si el 15M hubiera sido un movimiento abanderado por cualquiera de estos grupos sociales, ni en sus formas de ser y expresarse, el 15M hubiera sido el 15M.

El grupo social que protagonizó el 15M tenía otro perfil. En los estudios que se hicieron y en las poquitas encuestas que atendieron a esta cuestión se confirmaba lo mismo que se podía reconocer con sólo darse un paseo por las plazas. La parte más destacable, y desde luego la más activa del 15M, correspondía con jóvenes entre los veinte y poco y los treinta y muchos. Predominaban abrumadoramente aquellos con estudios universitarios, blancos, «hijos» con nacionalidad española de «padres» con nacionalidad española.²⁶ El 15M estuvo protagonizado por los hijos de la clase media. Eran estos quienes sobresalían en las protestas, moderaban las asambleas y organizaban la característica comunicación tecnopolítica del movimiento. Sin duda, en las plazas había de todo, mayores y ancianos, jóvenes de otras extracciones sociales, sindicalistas, simples «currelas», todo el arco social que va desde las gentes

²⁵ Se trata de uno de los «temas» recurrentes de la televisión. De un modo u otro, está presente en los reality shows de «ligoteo» tipo Gran Hermano, Adán y Eva, o Hombres, Mujeres y Viceversa, pero es sobre todo el argumento central de los más moralizantes o disciplinantes tipo Hermano Mayor.

²⁶ Durante aquellos meses hubo cierta cantidad de estudios y trabajos que simplemente verificaron este rasgo mayoritario del perfil social más activo de las acampadas. Véase por ejemplo para la acampada de Logroño, Jaime Minguijón Pablo y David Pac Salas, «15M. Una explicación en clave sociológica», *Prisma Social. Revistas de Ciencias Sociales*, núm. 8, 2012; o para la de Cáceres, Borja Rivero Jiménez, Diego Allen-Perkins Avendaño y Jesús Márquez Neila, «Etnografía del movimiento 15M en la ciudad de Cáceres. Análisis de las asambleas a través de tres visiones del objeto de estudio», *Revista de Antropología Experimental*, núm. 13 (extra.), 2013, pp. 113-137.

muy acomodadas hasta los sin techo: una cierta transversalidad fue siempre característica y aspiración del movimiento. Pero el protagonismo y las funciones más destacadas correspondían a aquellos destinados a reproducir las funciones profesionales que supuestamente la moderna economía española requería, pero que ya no parecía capaz de ofrecer. Eran aquellos que la prensa y las cadenas de televisión definieron como «universitarios con máster, en paro o con salarios mileuristas».

Una parte muy pequeña de la sociedad española, que correspondía a unas generaciones —menguantes en términos demográficos—, en las que sólo el 30 % había logrado pisar las aulas de una universidad, había conseguido concitar enormes niveles de consenso y simpatía social; niveles muy por encima de lo que probablemente ningún otro segmento de la sociedad española hubiera logrado alcanzar. ¿Por qué? Para contestar a esta pregunta, se requiere de algo más que maravillarse con la capacidad de la sociedad española para reencontrarse con la política. Se necesita de un poco de esa sociología que trata de explicar las cosas más allá del sentido común.

La sociedad española no es muy distinta de la del resto de países occidentales. Es lo que se llama una sociedad de clases medias. Al emplear este término se alude a algo más que al hecho de que la mitad o más de sus miembros pertenezca —real o imaginariamente— al «estrato social medio», ya sea en términos de renta, consumo o estatus. Decir que una formación social es una sociedad de clases medias remite a una imagen de una sociedad estable y con altos niveles de consenso social; al fin y al cabo, a un conjunto de equilibrios que permiten el curso pacífico y apenas abroncado de esa formación social, que permanece anclada en una pertenencia mayoritaria —real o imaginaria, normalmente ambas cosas a la vez— a la clase media. Valga decir que esta autopercepción adscribe a los sujetos sociales fuera o «al margen» de lo que ha sido el gran motivo de conflicto del largo siglo XX, la confrontación capital/trabajo, o si se quiere en términos más viejos, la «lucha de clases».

La Transición y el nuevo régimen político. Una sociedad de consensos

Para entender lo que esto significa políticamente conviene hacer un poco de historia. La confirmación de España como una sociedad de «clases medias» tiene un pasado complejo, pero sobre todo un futuro cada vez más incierto. Arranca de los últimos 15 años del franquismo, la década larga del desarrollismo (1959-1973), un periodo en el

que la economía del país creció a un ritmo por encima del 7 % anual, sólo superado por Japón entre los «países desarrollados». Empujado por el rápido crecimiento económico, el país abandonó su pasado rural, para convertirse en una potencia industrial provista de altos hornos, plantas química, astilleros y grandes cadenas de montaje diseñadas para ensamblar desde automóviles y camiones hasta refrescos y procesados alimentarios. Como en el resto de Europa, con un retraso de algunas décadas si bien con mayor rapidez, España se incorporó al grupo de las sociedades fuertemente urbanizadas, llamadas entonces de «capitalismo avanzado», caracterizadas por la democratización relativa del consumo de masas y la expansión de las clases medias.

Los datos censales reflejan palpablemente esta transformación. Entre 1960 y 1981, el número de licenciados universitarios pasó de tan sólo 240.000 a más de dos millones. En ese mismo periodo, el número de campesinos y jornaleros agrícolas se redujo de cuatro millones largos a poco más de un millón. Bienes de consumo hoy habituales como el coche, la televisión o la lavadora se generalizaron en aquel periodo. En apenas veinte años, la vieja España, mayoritariamente rural, se había homologado a las normas culturales y las necesidades sociales orientadas por los grandes medios de comunicación de masas: sus niveles socioeconómicos eran similares al del resto de las sociedades occidentales.²⁷

Como no podía ser de otra manera, el «milagro español» —y este es su efecto más paradójico— apuró la contradicciones políticas. La industrialización y la rápida urbanización fueron los principales «logros» del último franquismo, pero en tanto «régimen político», la dictadura estaba particularmente mal dotada por enfrentar el reto de dar cuenta de estos gigantes cambios sociales. Sus instituciones políticas habían sido resultado de la respuesta improvisada y brutal a la crisis política y social de los años treinta. Su marcado carácter autoritario, que nunca se desprendió del todo de los tintes fascistas, no parecía el más adecuado para afrontar la gestión política del proceso de «modernización». En muy poco tiempo, la dictadura mostró su incapacidad de gobernar aquellas fuerzas sociales que su propia apuesta económica (el desarrollismo) había contribuido a generar.

²⁷ Véanse los Censos de población de 1960 y 1981, INE.

La década de 1970 siguió el curso de un ciclo de movilización sin precedentes, al menos desde los años treinta. En los dos segmentos sociales estratégicos de la nueva economía urbano industrial, la dictadura mostró un retroceso irreversible: las universidades, espacio privilegiado en la formación y reproducción de élites, y las fábricas, el nuevo aparato productivo que estaba detrás del fuerte crecimiento económico. Las duras huelgas de aquella década lograron empujar los salarios industriales de la mano de incrementos anuales del 25, el 30 e incluso el 40 %, apenas contrarrestados por los agudos episodios de inflación y subida de precios. La crisis marcó los últimos años de la dictadura y dio al traste con el periodo relativamente tranquilo del desarrollismo. El gran problema de la Transición fue, de hecho, esta crisis a un tiempo económica y social: la crisis fue el principio y fin del cambio político, el lugar al que se remitían constantemente la clase política del periodo —igual da franquista o antifranquista—, cuando hablaban de la necesidad de un «pacto social» que garantizara la estabilidad del «cambio».

La democracia española, definida en sus líneas generales en la Constitución de 1978, fue el resultado de un arreglo entre las viejas y las nuevas élites, el reformismo franquista y la izquierda institucional (PCE y PSOE). Pero el cambio político tuvo que bregar con una turbulenta corriente hecha de luchas y conflictos sociales. El sujeto que entonces se verificó como palanca de ruptura del franquismo —y no sólo en términos políticos— se identificaba con el movimiento obrero. La clase obrera se había recompuesto de su derrota en la Guerra civil durante los últimos años del franquismo. Su rejuvenecimiento y ampliación, a caballo del crecimiento económico, animó nuevas formas de lucha y expresión política, haciendo a la postre inviable el modelo de relaciones laborales de la dictadura. Lo que en la época se dio en llamar «centralidad obrera» no residía en el hecho de que todos los conflictos del periodo se pudieran reducir al antagonismo capital/trabajo, como que todos los proyectos de «cambio» —lo que entonces se llamaba la izquierda o las izquierdas— tenían que remitirse necesariamente al protagonismo obrero. En España, al igual que en Italia o en Portugal, la década de 1970 fue la última vez en la historia de Europa, en la que el «sujeto obrero» operó como un mantra para las izquierdas. Fue también el momento en el que las izquierdas acabaron por despegarse de la clase obrera para dar lugar a otro proyecto político, bien distinto.

El basculamiento de la izquierda hacia otra «cosa», se produjo alrededor del otro polo de conflicto dentro del franquismo, las universidades y las nuevas clases medias profesionales, radicalizadas y cada vez más enfrentadas a la dictadura. Se puede decir que la gran mayoría de la nuevas élites políticas de la izquierda salieron de este medio social. A pesar de sus diferencias, la nueva clase política compartió pronto el diagnóstico del reformismo franquista. El gran problema del cambio político, el «problema de la Transición» residía en contener y luego extinguir esta dinámica proliferante del conflicto obrero que tenía su centro en las luchas de fábrica, pero que progresivamente se había extendido a los barrios y a otros sectores sociales. El «pacto social» se convirtió en una condición del pacto político. Se explica así que la primera gran obra institucional de la Transición no fuera la Constitución, sino los acuerdos económicos de octubre de 1977 (los Pactos de la Moncloa) dirigidos a aplacar y subordinar la conflictividad laboral, a plegar el crecimiento de los salarios a la inflación, cargando la factura de la crisis a las espaldas de las clases populares. Primero la pacificación luego las instituciones: este, y no otro, fue el principio de la Transición.²⁸

Desde sus orígenes, la democracia española tuvo, por eso, un marcado carácter de clase que no se puede reducir a los intereses de las viejas oligarquías, la clase política franquista y el capitalismo familiar español. Su condición de clase se refiere, sobre todo, a su base social, a aquellos grupos sociales que sirvieron de soporte material y cultural al nuevo régimen político, las clases medias. De un modo no previsto, la democracia española interpretó una partitura que el franquismo no podía ejecutar, la de dar una expresión política adecuada a la nueva sociedad de clases medias que creció al calor del desarrollismo.

Ciertamente, se trataba de unas clases medias parcas y precarias, amenazadas por una crisis económica que, durante los primeros ochenta, fue testigo de cómo se disipaban los parámetros de progreso del desarrollismo. La primera década de la Transición fue de crisis y penuria económica, paro masivo, desindustrialización y depresión social. Los efectos de la crisis económica que arrancó en 1973 (crisis del petróleo) y llegó hasta 1986 (incorporación a la Comunidad Económica Europea) fueron, sin embargo, totalmente diversos en lo que se refiere a su impacto sobre los distintos segmentos sociales. El contraste fue intenso

²⁸ Para un desarrollo de este argumento véase del autor: *¿Por qué fracasó la democracia en España? La Transición y el régimen del '78*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015.

entre unas clases medias relativamente protegidas por una cierta expansión del empleo público y la rápida terciarización económica (que amplió el campo de las profesiones liberales), y unas clases populares (antes clase obrera) que en ese mismo periodo acabaron por perder toda presencia política. El movimiento obrero, que protagonizó la crisis del franquismo, sencillamente desapareció en los diez primeros años de democracia. Fue primero derrotado políticamente, luego integrado en los sindicatos democráticos y finalmente hecho trizas por el proceso de reconversión y desindustrialización, que terminó de minar las bases culturales de sus comunidades (los barrios obreros). Por eso la Transición tuvo, según la posición social y según la suerte de cada cual, un sabor ya a modernización y progreso, ya a derrota y desesperación.

Consolidada la democracia española, esta se constituyó como un régimen de y para las clases medias. Durante tres décadas, el nuevo régimen político se sostuvo sobre la base de un amplio consenso social que tenía su soporte material en ese puré social indiferenciado. Y sin embargo, las clases medias españolas demostrarían pronto su propia fragilidad.

El desmoronamiento de la sociedad de clases medias

En 2007, el año que se iniciara el *crash* de los mercados financieros globales, cuando todavía la crisis no había tenido efectos sobre el mercado de trabajo, la agencia tributaria española ofreció unos datos reveladores. A partir de las declaraciones sobre los rendimientos del trabajo, se descubría que 7,2 millones de trabajadores habían ingresado menos de 12.000 euros brutos anuales. Casi el 40 % de los perceptores de algún ingreso por trabajo eran trabajadores pobres; menos que mileuristas. En la categoría de «rendimientos» inmediatamente superior, se incluían poco más de cinco millones de trabajadores, que sumaban un cuarto de la población ocupada. Aunque los ingresos brutos de este segmento iban de los 12.000 a los 21.000 euros anuales, el ingreso neto medio de este segmento no alcanzaba los 15.000 euros. Era el segmento de los llamados mileuristas. La suma de ambos grupos, trabajadores pobres y mileuristas, alcanzaba a dos de cada tres trabajadores. Las franjas que en términos salariales se podían considerar propiamente «clases medias» —aquellos que aparecían en la estadística con ingresos brutos entre los 21.000 y los 60.000 euros—, apenas superaban el 30 % del total, seis millones de trabajadores. Los superasalariados eran una exigua minoría, el 3 %. Prácticamente sin variaciones pero con más de cuatro millones

de parados, esta misma estructura de ingresos se reproducía en 2011, el año que estalló el 15M.²⁹ ¿Tenía esta radiografía de la estructura salarial alguna correspondencia con la sociedad de clases medias en la que se reconocía (y todavía se reconoce) la mayor parte de la población, y sobre todo, podía seguir siendo el amable sostén de la democracia española?

Durante los treinta años que median entre 1978 y 2007 se sucedieron una serie de cambios de profundidad. En 1986, España ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea. Su economía encontró al fin un rumbo tras casi una década de estancamiento económico y crecimiento del desempleo. El logro residía en una adaptación exitosa a la incipiente globalización financiera que entonces hacía estallar (literalmente) las bolsas de Londres, Tokio y Nueva York. Aunque en estos años la tendencia a la desindustrialización apenas se invirtió, los mercados financieros españoles vivieron su particular *big bang*, sobrealimentados por la entrada de capitales extranjeros y la venta masiva de activos —acciones y empresas— a las grandes multinacionales europeas. Los años ochenta fueron la década prodigiosa de la enajenación de grandes empresas públicas —SEAT, ENSIDESA, Tabacalera—, de la compra de la mayor parte del sector de procesamiento alimentario por empresas francesas e italianas o de la industria farmacéutica por las compañías alemanas.³⁰ Empujada por la entrada de capitales, la economía española se disparó, pero ya no sobre la base del crecimiento industrial de los años setenta. En su lugar, el sector inmobiliario y la bolsa estaban dando forma a una nueva modalidad de crecimiento. Durante la segunda y la tercera legislatura socialista (1986-1992), el capitalismo español encontró su camino: España se convirtió en el «lugar» privilegiado de las burbujas financiero-inmobiliarias continentales.

De forma paradójica, algunas de los «defectos estructurales» de la economía española, como la excesiva musculatura de su sector turístico o su industria inmobiliaria, se convirtieron entonces en ventajas financieras capaces de capturar y fijar —al menos durante un tiempo— gran cantidad de capitales flotantes de todo el planeta en las economías

²⁹ AEAT, Estadísticas de declarantes de IRPF por tramos de rendimiento, 2011. Disponible en: http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas

³⁰ Quizás el mejor análisis económico del periodo, y desde luego el único con cierto valor crítico, es el de Miren Etxezarreta (coord), *La reestructuración del capitalismo en España 1970-1990*, Barcelona/Madrid, Icaria/Fuhem, 1991. Más enfocado a los aspectos financieros e inmobiliarios: Jose Manuel Naredo, *La burbuja inmobiliario-financiera en la coyuntura económica reciente (1985-1995)*, Madrid, Siglo XXI, 1996.

inmobiliarias costeras y metropolitanas. La fiesta económica duró hasta 1992, culminada con los fastos de las Olimpiadas de Barcelona y la construcción del primer AVE Madrid-Sevilla. Pero la experiencia no pasaría como un chaparrón pasajero. El nuevo «modelo económico» se repitió a escala ampliada a partir de 1997, y sobre todo de los primeros dosmil, tras la unificación monetaria europea. El territorio español, especialmente sus costas y sus principales ciudades, se convirtieron a partir de entonces en el escenario de la mayor feria inmobiliaria del planeta. En ningún otro país se produjo una combinación tan espectacular de construcción de infraestructuras, cimentación de suelo y crecimiento del precio de la vivienda.³¹

Para las clases medias españolas, este acelerado curso económico tuvo efectos contradictorios. Durante un tiempo, al menos hasta la crisis de 1992-1993, la expansión del empleo público y de las profesiones ligadas a la moderna economía de servicios —televisión, marketing, publicidad, servicios a las empresas, sanidad, educación, etc.— trajeron nuevas oportunidades de empleo y movilidad social. La ampliación de las clases medias siguió la inercia del tardofranquismo según el mismo patrón de expansión correlativa de la educación superior y del empleo profesional. A partir, sin embargo, de principios de la década de 1990, y sobre todo del relanzamiento económico de 1995, una serie de factores, que ya operaban como contratendencia, comenzaron a acentuar sus efectos; y acabaron por invertir la trayectoria.

De un lado, el continuo deterioro del mercado laboral, manifiesto en el aumento de la precariedad y el retroceso salarial, dejó de localizarse únicamente en los segmentos laborales de peor remuneración y menor cualificación. Durante los años ochenta, promovida por sucesivas reformas laborales, la erosión de las condiciones salariales actuaron sobre los segmentos de empleo más jóvenes, sobre el trabajo de servicios más descualificado y sobre la vieja clase industrial, debilitada por el paro y el desarme sindical. Pero tras la crisis de 1991-1993, la nueva ronda de reformas laborales, y la aplicación de las restricciones del Tratado de

³¹ Sobre este periodo seguramente la obra más completa sea Isidro López y Emmanuel Rodríguez, *Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010)*, Madrid Traficantes de Sueños, 2010. También merece la pena destacar el trabajo de José Manuel Naredo y su colaborador Antonio Montiel Márquez, *El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano*, Barcelona, Icaria, 2011. Por último, sobre las cuentas patrimoniales, véase: J. M. Naredo, Oscar Carpintero y Carmen Marcos, *Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española (1995-2007)*, Madrid, FUNCAS, 2008.

Maastricht sobre el gasto público, permitieron ampliar el ataque sobre los salarios, también a los segmentos profesionales. Entre 1995 y 2007, periodo en el que la economía española creció en un 60 % y se apuntaron más de siete millones de nuevos puestos de trabajo, los salarios permanecieron estancados, o incluso decrecieron en varios puntos porcentuales en el sector privado. El proceso de deterioro del mercado laboral ya no se detenía en la enorme masa de empleos infrarremunerados y altamente precarizados que generaba la nueva especialización turístico-financiero-inmobiliaria de la economía española. La precariedad se extendía, por primera vez, al propio corazón de las clases medias, a los empleos profesionales. Las prácticas de subcontratación, los falsos autónomos, la privatización o externalización de servicios públicos, afectaban a estos trabajadores, especialmente a las generaciones más jóvenes que se incorporaron al trabajo asalariado en aquellos años.

De otro lado, tres décadas de expansión de la educación universitaria acabaron por profundizar una crisis que venía de largo, y que tenía que ver con la devaluación de los títulos educativos. En 2007, el país contaba con más de ocho millones de trabajadores con algún título de educación superior, su economía apenas lograba mantener cinco millones de empleos que requirieran esas competencias. Antes por tanto de la crisis de 2007, había empezado a descomponerse uno de los mecanismos tradicionales de reproducción de las clases medias, atezadas en sus segmentos más jóvenes por la precarización de las profesiones liberales, la devaluación de las credenciales educativas y el deterioro generalizado de los salarios. Pero si la crisis de las clases medias venía de largo y sus principales elementos estaban apuntados con bastante anterioridad al colapso de la burbuja inmobiliaria de 2007, ¿por qué la descomposición de las clases medias no se hizo patente antes de 2011?

La crisis produjo un rápido aumento del desempleo, una creciente inseguridad económica y una rápida disminución de las expectativas laborales y vitales. No obstante, hay otro factor principal, sin el cual no se entiende la paradójica estabilidad de las clases medias españolas durante un periodo en el que todo parecía ir en su contra. Desde 1985, y también en la larga década de crecimiento de la economía española que se extiende de 1995 a 2007, las clases medias españolas se apoyaron en una muletas que no correspondían con sus medios tradicionales de reproducción —la expansión del empleo profesional, la protección

del Estado, las credenciales universitarias—. El comodín se encontraba en la especificidad del modelo de crecimiento español, en su eficacia, también social.

Durante los dos ciclos de crecimiento de la economía española (1985-1992 y 1995-2007) se siguió una pauta similar, alimentada por el rápido calentamiento del mercado inmobiliario, la entrada de capitales desde el exterior, el aumento del precio de los activos —fundamentalmente suelo y vivienda, pero también acciones y bonos de todo tipo— y el aumento del consumo doméstico. En un país donde la vivienda era un activo en propiedad para más del 80 % de las familias, las economías domésticas no se limitaban a jugar un papel financiero residual. En buena medida, la eficacia del modelo residía precisamente en la participación efectiva de toda la población.³²

En la última fase expansiva (1995-2007), el precio de la vivienda se multiplicó por un factor cercano a 2,5. En esos años, este bien no sólo se volvió inasequible para una parte importante de la sociedad, también hizo mucho más rico, aunque sólo fuera nominalmente, a los propietarios de vivienda, que en España eran la gran mayoría. Empujado por el crecimiento de precios, el patrimonio de las familias más que se duplicó. El incremento de la riqueza nominal familiar tuvo efectos sociales contradictorios. En un primer momento —durante toda la fase alcista— permitió, incluso a trabajadores con ingresos modestos pero con títulos de propiedad, tanto la posibilidad de obtener importantes plusvalías inmobiliarias —caso de vender propiedades—, como un chisposo acceso al crédito, dirigido al consumo y a la compra de nuevas viviendas. El efecto «virtuoso» de la burbuja inmobiliaria residía precisamente en esta conexión. Durante este periodo, una parte importante de las familias residentes en el país pudo compensar el estancamiento salarial por medio del acceso al crédito y gracias a la expansión de las rentas financiero-inmobiliarias.

El «goteo hacia abajo» de la riqueza financiera «creada» por el boom inmobiliario no fue tomado en cuenta por las formas de contabilidad convencional, pero tampoco en los análisis de la estructura social. El repentino enriquecimiento patrimonial de los hogares reforzó el principal axioma de la formación social española: la propiedad de vivienda como talismán y principal medio de reconocimiento de las clases

³² Para un desarrollo de este argumento véase Isidro López y Emmanuel Rodríguez, *Fin de ciclo...*, op. cit.

medias. Desde el franquismo, la vivienda en propiedad ha sido el mecanismo más eficaz de «desproletarización» de la mayoría social: vehículo de ahorro y acumulación del patrimonio familiar, recurso para épocas de escasez (como la jubilación) y forma de transmisión de patrimonio y estatus a las siguientes generaciones.

A la postre, sin embargo, los efectos sociales del modelo de crecimiento resultaron contradictorios y al final insostenibles. En la fase depresiva del ciclo, los factores mencionados se invirtieron rápidamente. A partir de 2007, la disminución de los precios de la vivienda produjo una disminución neta del valor de los patrimonios familiares. En pocos meses quedaron al descubierto los costes del sobreendeudamiento, y estos actuaron necesariamente como correlato al incremento de precios y la expansión de los activos inmobiliarios. El crédito hipotecario, que se había multiplicado por once entre 1997 y 2007, empezó entonces a pesar como una gruesa losa sobre el balance de unas economías domésticas, que observaban como su patrimonio y su renta salarial se disipaban a gran velocidad: EREs, paro, mayor precariedad.

La crisis devolvió a esa misma sociedad, que había festejado durante años una burbuja que era también de crédito y consumo, una imagen de sí misma mucho más pobre y frágil. Sencillamente, muchos descubrieron el significado material de la crisis subyacente de las clases medias, y que el crecimiento de base financiera había ocultado. El descolgamiento de amplias franjas de población resultó rápido y brutal, especialmente en los sectores más frágiles de la inflacionaria sociedad de propietarios, que en su mayoría venían de la vieja clase obrera reconvertida al trabajo de servicios poco cualificado o del nuevo trabajo migrante empleado en los trabajos peor remunerados. Entre 2008 y 2014 se sucedieron más de medio millón de ejecuciones hipotecarias y desahucios. El saqueo avalado por el Estado con su particular legislación hipotecaria³³ supuso que, en la mayoría de los casos, la pérdida de vivienda no implicara la cancelación de las importantes deudas contraídas. En un mercado laboral ya casi sin rigideces y que se ajustaba de forma automática a las demandas de empleo, el paro aumentó en paralelo a la disminución del consumo de las familias. En pocos años, la crisis había retirado las muletas financieras a unas infladas clases medias.

³³ Sobre el movimiento de vivienda y específicamente sobre la PAH merece la pena leer el libro de su portavoz Ada Colau, escrito con su pareja Adrià Alemany, *Vidas hipotecadas: de la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda*, Valls, Cudrilátero de Libros, 2012.

¿Qué simbolizaban entonces aquellos chicos y chicas que ocupaban las plazas durante la primavera de 2011? Sin que se puedan hacer generalizaciones absolutas, lo cierto es que representaron el malestar de la figura central de la formación social española. Al fin y al cabo, estos muchachos, ya algo talluditos, eran el espejo ideal («el futuro»), en el que debían reconocerse esas mismas clases medias ahora en proceso de descomposición. En sus exigencias de democracia, en su denuncia de la corrupción y de la dictadura financiera, en su simpatía y participación en el movimiento de vivienda, pero sobre todo en la imagen de injusta de un futuro truncado tras haber hecho todos los méritos necesarios (el estudio, el esfuerzo), se manifestaba la ruptura de las promesas sociales elementales que habían sostenido a la frágil formación social española. La ruina de la meritocracia era también la ruina de las clases medias y para ellas mismas la ruina de la democracia conquistada con «tantos sacrificios» en 1978.

Este juego de espejos, en el que se proyectaban y se devolvían imágenes deformadas, impulsó el rápido contagio de la revuelta. La pandemia se extendió en todas direcciones: por arriba, entre las generaciones mayores (de clase media) que con angustia experimentaban, por primera vez, como su posición social se despeñaba en el horizonte más bien lúgubre de sus hijos precarizados; pero también por abajo, entre los segmentos que se descolgaban de las clases medias, para caer en el espacio heterogéneo y complejo de las clases «bajas», que ciertamente se estaban llevando la peor parte de la crisis, pero que eran testigos privilegiados de como ni siquiera las seguridades más elementales quedaban garantizadas para el núcleo «legítimo» de las clases medias. Por todo ello, el 15M fue también un movimiento «de clase», que conectaba y al mismo tiempo daba expresión política a la descomposición del principal soporte de la democracia española. Y lo hacía además de una forma «progresiva», evitando el peligroso abismo de la guerra entre pobres y de la competencia por los recursos que podía haber derivado en una posible salida política de «derechas».³⁴

³⁴ Desde el estallido de la crisis, el avance de la extrema derecha en Europa ha resultado incontenible, hasta el punto de convertirse en la forma principal de expresión del malestar político en los países centrales. Por sólo señalar los principales partidos: el indiscutible predominio del Partido por la Libertad en Austria (con el 52 % de los votos en 2016), el partido del Pueblo Danés (21 % de los electores 2015), el Frente Nacional francés (primera fuerza en los sondeos de 2016), el avance del UKIP inglés hasta superar el 10 % en 2015 y la Alternativa para Alemania, primer partido de este tipo en encontrar acomodo electoral en este país desde la II Guerra Mundial. La crisis ha dibujado un mapa político de Europa cada vez más polarizado: el avance de nuevas fuerzas políticas de oposición en el Sur (Grecia, España e Italia) y la emergencia de la extrema derecha en el centro y el norte.

La crisis de «régimen» (verano de 2012)

Es 19 de julio de 2012. Ha pasado más de un año desde que estallara el 15M. Ochenta marchas, ochenta ciudades, ese es el programa del movimiento para esa tarde. Varios millones de personas se sienten con fuerza y ganas como para asistir. En Madrid, la manifestación tiene un tono extraño. Se grita: «No nos representan», «No hay pan para tanto chorizo». No es lo anómalo. Lo imprevisible se muestra en la composición de la convocatoria. El 19 se manifiestan juntos sindicalistas, activistas, movimientos sociales, pero también profesores, sanitarios, funcionarios de la administración pública, bomberos, policías, jueces... especies y razas tradicionalmente ajenas a la protesta. No es el 15M, pero el 15M ha transmitido sus formas.

La manifestación se convoca para responder al último paquete de recortes aprobado por el consejo de ministros: aceleración de la reforma de las pensiones, reducciones salariales a los funcionarios, subida de los impuestos al consumo, disminución de las prestaciones por desempleo. Pero las marchas van más allá de la protesta económica.

La madrugada se abre con noticias imposibles. Varias decenas de furgonetas de los antidisturbios amanecen con las ruedas pinchadas. Todo apunta a un sabotaje interno. Por lo tarde, los bomberos se ofrecen como servicio de orden. Venía ocurriendo desde hace un tiempo. La novedad está en que los policías municipales deciden sumarse. Asociaciones de jueces y fiscales dan también muestras de simpatía. Algo grave está pasando. Hay quien apunta a una crisis de gobernabilidad, de autoridad del Estado.

En ningún momento del largo ciclo de crisis que se abrió en 2007-2008, el Estado —ese conjunto de instituciones y creencias que sostienen el monopolio de la violencia física y simbólica— estuvo más cerca del colapso como en el verano de 2012. La tormenta se alimentó de fuerzas y elementos distintos. El principal: las temperaturas récord con las que se había iniciado el verano económico. El 9 de junio el ministro de Hacienda, Luis de Guindos, anunció su voluntad de solicitar a la UE un crédito de 100.000 millones para sanear el maltrecho sistema financiero español. Ese mismo día la prima de riesgo de los bonos de deuda española alcanzó los 574 puntos básicos. A esos precios, el Estado tendría que pagar unos intereses reales del 8-9 %. España había entrado en la zona de rescate, como antes le había pasado a Grecia, Irlanda y Portugal. Por detrás, casi al mismo paso, iban Italia y Bélgica.

Tras el colapso económico de 2008, la tibia recuperación de 2010 y el primer semestre de 2011, el gobierno se topó con el *diktat* europeo: «Freno al gasto público, políticas de austeridad», «la crisis la pagará la gente». El método era conocido, bastaba con interpretar al pie de la letra los estatutos del Banco Central Europeo (BCE). Desde 2008-2009, el BCE estaba emitiendo créditos blandos al ritmo de 250.000-350.000 millones de euros al mes, aproximadamente lo mismo que el PIB de Grecia y Portugal juntos. Las emisiones se hacían con un interés ridículo del 1-1,5 %. Estas operaciones resultaron enormemente lucrativas para las grandes bancos europeos. Posteriormente, estos mismos bancos dedicaron la mayor parte del dinero recibido a comprar las crecientes emisiones de bonos de deuda pública, que los Estados realizaban para sanear su propio sistema financiero. La banca privada obtuvo así unos beneficios sobre la deuda pública del 3, el 4, el 5 y hasta el 10 y 12 %, en el caso griego. Simplemente tenían que mover el dinero del BCE de un lugar a otro. Se estaba llevando a cabo la mayor operación de socialización de pérdidas de la historia de Europa.

Con el propósito de cerrar bien la tenaza, a partir de 2010, la UE impuso crecientes restricciones al crecimiento del gasto público. Y desde 2010, en paralelo a la propagación del miedo a la quiebra de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia, España), la prima de riesgo se desató. En su falsa posición de árbitro, el BCE se echó a un lado y dejó operar a los «mercados». Las quiebras se sucedieron en un país tras otro: Grecia (mayo de 2010), Irlanda (noviembre de 2010), Portugal (abril 2011). En junio de 2012 parecía el turno de España.

En aquel verano, la pregunta que inevitablemente circulaba por todas partes era ¿por qué el BCE no compra títulos de deuda pública, como hacía la FED en EEUU o el Bank of England en Reino Unido? ¿Por qué la UE no se decide por una política de crecimiento económico y de inflación moderada? ¿Por que se antepusieron los intereses de los grandes bancos europeos (Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, HSBC) a los de las poblaciones? Eran cuestiones que habían dejado de ser teóricas. Por primera vez se escuchaban en la calle, en boca de cualquiera. Y por primera vez un país tan «europeísta» como España empezaba a dejar de serlo.

En septiembre de 2011, PP y PSOE aprobaron la única reforma significativa de la Constitución desde su aprobación en 1978. El nuevo artículo 135 rezaba así: «1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las

Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros». La traducción del artículo podía ser como sigue: el control del gasto público y el pago de la deuda estaban por encima de cualquier otro criterio de interés nacional o social. La Constitución española incorporaba un fragmento de la Constitución alemana; al fin y al cabo, se hacía por solicitud (imperativa) de la UE y del gobierno alemán.

Mientras, se daban a conocer algunos datos sangrantes. Hacia mediados de 2012, cerca de 200.000 familias habían sido ya desahuciadas de sus casas. El número de parados había superado los 5,5 millones y caminaba rápidamente hacia los seis. La renta per cápita del país había disminuido en un 8 % respecto de 2008, al tiempo que el salario medio real registraba caídas peores. La política de recortes se había llevado por delante buena parte de los sistemas públicos de salud y educación. El descrédito ya no sólo de la clase política, sino del conjunto del régimen, completamente plegado a los intereses de los más poderosos —y ante todo de los grandes bancos europeos—, empezaba a rozar niveles estratosféricos, si bien todavía no había alcanzado su máximo.

En junio, se registró la querrela contra Bankia de la plataforma 15MpaRato —seguida poco después por UPyD— por falsedad documental y estafa mercantil. Los escándalos de corrupción empezaban a rellenar la sección «nacional» de los diarios. La crisis económica había traído una creciente escasez de recursos públicos y con ello una situación de penuria relativa del alimento predilecto de las redes político-empresariales. Las estrecheces fiscales habían quebrado también la *omertá* característica de las alianzas entre las élites. Desde 2010, se desencadenó una larga secuencia de vendettas en forma de chivatazos, soplos a la prensa, querrelas judiciales. En unos pocos meses se dieron a conocer las tramas Gürtel, Púnica, Palau, Pujol, etc. El PP de Valencia y Madrid, el PSOE andaluz y el partido de orden de Catalunya (Convergència) quedaron seriamente tocados por la interminable serie de noticias sobre financiación ilegal, prevaricación, nepotismo y fraude fiscal. Pero lo de Bankia era una cuestión mayor, apuntaba a Rodrigo Rato, el «mejor ministro de economía que haya tenido España», y además ex director gerente del FMI. Bankia destapaba las vergüenzas del rescate bancario español, concentrado en las cajas de ahorro, cuya dirección

dependía directamente de los partidos políticos, y que durante el ciclo inmobiliario operaron como brazo financiero de las tramas político-empresariales locales y autonómicas.

La crisis financiera se había llevado por delante la práctica totalidad del sistema de cajas de ahorro español, una banca semipública que debía haber tenido un mejor uso. La quiebra de las cajas, aparte de mostrar la fragilidad de los pilares del crecimiento económico, puso al descubierto los excesos de los consorcios político-empresariales: préstamos a interés cero a promotores, proyectos imposibles —como aeropuertos privados, casinos, urbanizaciones en medio de la nada, autopistas en paralelo a otras en funcionamiento— que no tenían más rentabilidad que la que producía su construcción, y sobre todo miles de contratos en los que la «amistad» y las comisiones fraudulentas resultaron ser el motivo fundamental, a veces el único motivo. Tras las sucesivas bancarrotas, el gobierno optó por la «bancaización» de las cajas, esto es, por el saneamiento de las instituciones con dinero público y su posterior privatización. El caso Bankia, resultado de la absorción por Caja Madrid de la quebrada Bancaja y otras cajas menores, simbolizaba todos los desmanes del ciclo inmobiliario, pero también el fracaso de la bancaización; de nuevo, con estafa ciudadana incluida, esta vez a los pequeños ahorradores.

Bankia salió a bolsa en julio de 2011. La necesidad de encontrar activos de calidad y de evitar la quiebra, llevó a la entidad a vender decenas de miles de «acciones preferentes». Un título financiero dudoso, que se ofrecía a los clientes de la caja como algo parecido a un depósito fijo. Realmente, las preferentes hacían a su titular accionista de la empresa, pero sin derechos efectivos. Miles de millones de euros de pequeños ahorradores se convirtieron en acciones preferentes de Bankia y otras cajas bancaizadas. Pero las medidas, más bien desesperadas, de la entidad de Rato no surtieron efecto. En mayo de 2012, Bankia fue nacionalizada, poco después, el ministro de Economía, De Guindos reclamó la intervención europea.

La intervención europea se produjo a través del conocido Memorandum de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés), eufemismo jurídico que en realidad establecía el rescate financiero sobre el sector bancario y, en general, la tutela de la troika sobre la economía española.³⁵

³⁵ El texto está disponible en las páginas web del Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda, con fecha del 20 de julio y título Memorando de Entendimiento sobre las condiciones

El MoU exigía, en primer término, la auditoría de las entidades financieras españolas, con el propósito explícito de localizar aquellas cajas bancarizadas que debían ser nacionalizadas y saneadas. El mecanismo de intervención consistía en la creación de un «banco malo», que se haría con los activos de esas empresas, principalmente suelo, créditos de dudoso cobro, promociones sin vender y viviendas. Por esta vía, la entidad resultante, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) habría de convertirse en la mayor inmobiliaria de Europa. Participada en un 45 % por el Estado, el otro 55 % pertenecía a las grandes aseguradoras y bancos saneados (como el Santander o el Sabadell), que de paso conseguían, gracias al volumen de mercado en manos de esta sociedad, tener un importante pie en el control de los precios y por lo tanto en la evolución del mercado inmobiliario. Y todo ello sin arriesgar nada: caso de pérdidas, estas eran avaladas por el Estado. Sólo el saneamiento de Bankia costó al FROB 23.000 millones, la mayor parte irrecuperable, una cifra similar al 2,4 % del PIB, o más de lo que se recortó en educación y sanidad entre 2010 y 2013. Crisis financiera, tramas políticas, gobierno a través de la deuda, fraude ciudadano, intervención europea, aparecían puntillosamente reunidos en el archivo de Bankia.

Más combustible para el fuego político: a finales de enero 2013 estalló otro escándalo de corrupción. Fue filtrado por su principal protagonista, Luis Bárcenas, tesorero del PP en los años dosmil. El asunto implicaba a toda la cúpula del partido. Durante varias semanas, Bárcenas estuvo ofreciendo en píldoras algunas anotaciones de su libreta contable, en la que se recogía el dinero que pagaban al partido las grandes constructoras del país, así como los pagos que el tesorero realizaba en sobres cerrados a los miembros de la cúpula popular. Era el negativo fotográfico de cómo España se había convertido en el país con más kilómetros de autovía de Europa y el segundo en vías de tren de alta velocidad en el mundo. El fomento de infraestructuras, la joya de la política de Estado en los años del *boom*, se había hecho también con conexiones fraudulentas. La carrera contra el llamado «déficit de infraestructuras» ya no podía ocultar el déficit mucho más concreto de gasto social, que en un ranking inverso ponía a España a la cola de Europa occidental. La libreta de Bárcenas apuntaba al equipo de gobierno, al propio Rajoy, que en noviembre había vencido por 15 puntos, sobre el socialista Rubalcaba.

El escándalo Bárcenas se produjo seis o siete meses después del punto álgido de la crisis del verano. Si hubiera coincidido con el rescate, probablemente el gobierno de Rajoy hubiese sido el más breve de la historia de la democracia. Pero la cuestión era entonces: ¿hay alguna alternativa al PP? El 15M coreó y gritó sin descanso «PSOE-PP la misma mierda es». Desde casi el principio, el objetivo político del movimiento fue la crítica al bipartidismo, convertido en sinónimo de inmovilismo y de secuestro de la democracia por una clase política inequívocamente corrupta. En un esfuerzo por dotar a esta crítica de un vuelo más alto, en ese verano se empezó a generalizar también el término «Régimen del '78». La elección tenía connotaciones fuertes. El término «régimen» había sido el edulcorante conceptual, aun con tintes de reproche, elegido para referirse a la dictadura de Franco. Emplearlo para caracterizar la democracia, y hacerlo con el apóstrofe ligado al año de la Constitución, expresaba una fuerte carga crítica sobre el modelo de Estado constitucional. Ponía en entredicho unas instituciones caducas, deficitariamente democráticas, cosificadas en el nominalismo constitucional, tantas veces señalado como el ideologema por excelencia de la democracia española.³⁶ Pero en el marco conceptual de la «politología» la definición era correcta: régimen se refiere a «unas determinadas instituciones y formas de relación entre Estado y ciudadanía», que ahora se veían severamente cuestionados.

También por aquellos meses se empezó a emplear otra concepto de prestigio entre los aspirantes a la alta teoría política, «crisis orgánica». El envejecido Gramsci, plegado sobre sus papeles en las cárceles de Mussolini, acuñó este término para designar aquellas situaciones en las que un «bloque de poder» se descomponía, fracturado por las luchas intestinas entre las distintas fracciones de la clase dominante, lo que le hacía cada vez más incapaz de sostener en torno a sí una alianza social suficiente como para reproducir un determinado «régimen político». Y ciertamente, entre 2011 y 2013, algo parecido a una «crisis orgánica» sacudió al Estado español. Aquellos años estuvieron dominados por el desconcierto y una descomposición rápida de un cuerpo político que parecía ya cadáver. El desvelamiento del poder desnudo de la oligarquía financiera (española y europea) y el repentino estallido político del 15M quebraron el espejo apacible de una solución política basada en las clases medias y el acceso

³⁶ El «constitucionalismo» en España ha sido la forma conservadora de la última frontera del régimen, más allá de la cual estaba el abismo terrorista. Instituciones y clase política venían así a chantagear a la población con «o nosotros o el terror».

generalizado al consumo. Durante esos largos años, las luchas distributivas entre las élites amenazaron con implosionar desde dentro a los partidos políticos; de forma más grave, quebraron algunos de los equilibrios fundamentales del régimen, principalmente los pactos inter-territoriales entre España y Cataluña, ya en proceso de descomposición tras el veto constitucional al nuevo Estatut de autonomía, la Diada de septiembre de 2011 y el giro soberanista de Convergència.³⁷

El 15M había roto la carcasa ideológica del régimen. La Constitución estaba en entredicho, más si cabe desde que fuera modificada con la nueva redacción del artículo 135. Pero el punto de mayor erosión estaba dentro del sistema de partidos: el turno en el gobierno, la ficción del recambio de actores, que conforman la base de legitimidad del parlamentarismo y del principio de representación, había entrado en barrena. Enfrentado, no obstante, a la crisis y a los gobiernos del PP, ¿por qué el 15M se reivindicó siempre como «ni de izquierdas, ni de derechas»? ¿Por qué no hubo identificación posible con los partidos de izquierda, ni siquiera con la minoritaria IU?

PSOE e IU llegaron a 2011 con graves déficit de legitimidad. En las elecciones de noviembre de 2011, la izquierda fue severamente derrotada. El PSOE se quedó en el 28,8 % de los votos, IU no llegó al 7 %. Su posición tampoco mejoró significativamente en los meses posteriores, cuando el desgaste del PP avanzaba a un ritmo demoledor. Por tomar un indicador que nunca antes había tenido tanta importancia social y política —también para el movimiento—, el barómetro del mes de julio de 2012 del CIS, otorgó una brutal caída a los populares que perdieron doce puntos respecto de los apoyos que tenían sólo ocho meses antes, un 32 % frente a un 44 %. Esta caída no fue en ningún caso aprovechada por las fuerzas de oposición. Hasta el segundo trimestre de 2013, el PSOE mantuvo una intención de voto tan baja como la de sus ya pésimos resultados de noviembre de 2011. IU, que había estado

³⁷ La ruptura del acuerdo entre las élites catalanas y del Estado se inició en la segunda legislatura de Aznar, a raíz del giro necon y nacionalista de los populares. No obstante, con la aprobación del recurso de inconstitucionalidad a algunos de los artículos del nuevo Estatut de Cataluña, aprobado por la mayoría del arco parlamentario catalán en 2006, se inició una nueva fase que podríamos considerar agónica. En respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional, el 10 de julio de 2010 se convocó en Barcelona una gigantesca manifestación con el lema: «Som una nació, nosaltres decidim». Acudió más de un millón de personas. Durante todos los años de crisis, uno de los aspectos más sorprendentes ha sido el enconamiento y la retroalimentación de este conflicto, animado por las derechas nacionalistas de uno y otro lado, por otra parte tradicionalmente predisuestas al pacto.

al borde de ser extraparlamentaria en las elecciones de 2008, apenas consiguió alcanzar su máximo histórico de 1995 con Anguita, cuando rozó el 10 %. Y tampoco el partido de la «regeneración democrática», la Unión Progreso y Democracia superó la barrera del 10 %.³⁸

El «no nos representan», lanzado a gritos en todas las manifestaciones desde el 15M, expresaba en las plazas lo que los estudios demoscópicos apenas podían intuir: una parte (creciente) de la población no se reconocía en ninguna de las opciones políticas existentes, y estaba peligrosamente en trance de abandonar las instituciones del régimen. El 15M y la ola de movimientos que le siguió parecían haberse empeñado en una crítica política que iba más allá de la crítica tradicional—de izquierdas— al «régimen». A diferencia de esta última que consideraba las insuficiencias de la democracia española como el resultado de la continuidad de algunos elementos fundamentales del franquismo — desde la clase política y la judicatura hasta el terrorismo de Estado y el «estilo de gobierno»—, la nueva crítica consideraba a los partidos de izquierda como un actor principal del régimen político.

El 15M empujó una revisión, en ocasiones sorprendente, de la memoria del país. Estaban en juego los consensos políticos que descansaban en la principal bisagra de la última mitad del siglo XX, la Transición.³⁹ De forma a veces intuitiva, la explicación que entonces trató de dar cuenta de los déficit de la democracia española empezó a apuntar al PSOE. Principal partido en el gobierno entre 1978 y 2011 (21 años de 33), el PSOE era, en efecto, el representante por antonomasia de la «ideología de la Transición». La ideología o «cultura de la Transición», según una fórmula que se ensayo en esos meses,⁴⁰ consistía

³⁸ Barómetros CIS, abril, julio y octubre de 2012 y enero de 2013.

³⁹ La crítica popular e inmediata a la Transición tuvo también su reflejo en la publicación de una serie de monografías y estudios críticos sobre la Transición, en muchos casos con una perspectiva que sólo hubiera resultado imaginable desde la marginalidad en los años previos. Así la muy voluminosa obra de Ferran Gallego, *El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia*, Crítica, Barcelona, 2008; Juan Antonio Andrade Blanco, *El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político*, Madrid, Siglo XXI, 2012; Xavier Doménech Sampere, *Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia (1939-1977)*, Barcelona, Icaria, 2012; Emmanuel Rodríguez, *¿Por qué fracasó la democracia en España? La Transición y el régimen del '78*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2013.

⁴⁰ El término fue puesto en circulación en aquellos meses a raíz de la intervención periodística organizada por Guillem Martínez, *CT o La cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española*, Madrid, De Bolsillo, 2012. Este libro produjo un debate productivo, pero que sólo

en una mezcla de elementos distintos, entre los que destacaban el componente «modernizador», que ya trató de destilar el último franquismo y que correspondía naturalmente con las aspiraciones de la «sociedad de clases medias»; y una sustancia viscosa que podríamos llamar «lo progre», a modo de izquierdismo rebajado, purgado de toda estridencia anticapitalista, pero cargado con la clásica superioridad moral de las izquierdas, especialmente en materia cultural. El país cultivado y amasado por esta ideología «transicional», podía pasar efectivamente por una sociedad liberal y «avanzada» en materia de derechos civiles, incluso más que las de su entorno —nada que presuponga una correspondencia directa con la «caspa cultural franquista—, y ser al mismo tiempo una de las sociedades con mayores desigualdades y menor gasto público social de la UE.

La crítica al PSOE se hacía también extensiva, si bien por otras razones, a la otra formación política que se reivindicaba como el frasco de las esencias de la izquierda, aunque como todas las fragancias puras, sólo se pudiera soportar en pequeñas dosis. A la IU heredera del PCE, que también entró en la crisis salpicada de escándalos de corrupción, con una dirección envejecida y ajena a casi todos los movimientos y realidades que empujaron el 15M, se le podía hacer una crítica histórica igualmente demoledora. Al fin y al cabo, el PCE de Carrillo había actuado como guardián de los pactos de la Transición, negociando su propia posición política a cambio de una función pacificadora, o si se quiere, de convertirse en «canal institucional» para la integración de la agitación social y obrera de aquellos años.⁴¹ Gestor, en definitiva, de la derrota obrera y de la institucionalización sindical, el PCE nunca llegó a recuperar un papel político relevante tras las elecciones de 1979. En los años siguientes se descompuso entre el desencanto de sus bases, el estalinismo interno y un oportunismo que apenas escondía su ineptitud estratégica. Su proyecto de continuidad, la Izquierda Unida que salió de 1986 y del movimiento anti-OTAN, apenas logró superar los déficit iniciales. Sobre estos mimbres, sorprende poco que la izquierda institucional fuera notablemente incapaz de expresar el enorme caudal de malestar que se acumuló a partir de 2007 y 2008. De la perplejidad

llegó arraigar en los entornos de movimiento y curiosamente también en los entornos académicos formados por españoles emigrados, principalmente en EEUU.

⁴¹ Sobre la historia del PCE en aquellos años existe una abundante bibliografía, léase el ya mencionado: Andrade Blanco, *El PCE y el PSOE en (la) transición...*

inicial, pasó en el mejor de los casos a seguir el flujo de las movilizaciones, sin desempeñar ningún papel significativo, ni siquiera de orientación o de apoyo.

Tampoco las grandes organizaciones sindicales tuvieron mayor éxito en esta tarea. Con un mercado laboral desarbolado y cada vez más individualizado por la fragmentación de las situaciones jurídicas y la abigarradas estrategias de subcontratación y externalización, los sindicatos —incluso los más vocacionales y honestos— se convirtieron en una suerte de reserva india en los sectores laborales en los que todavía se podía imponer cierto poder colectivo de contratación: las grandes empresas industriales y la administración pública. En 2007, España tenía una de las tasas de sindicación más bajas de toda la UE (un 13 %). Con unos sindicatos arrinconados en segmentos laborales minoritarios, convertidos en muchos casos en la «prolongación laboral del Estado»⁴² y poco propensos a romper la lógica concertación con la patronal, la mayor parte de la población en activo asistió desarmada a la secuencia de despidos, EREs y cierres que sucedió entre 2007 y 2012.

A pesar de algunos episodios de verdadero desbordamiento del conflicto —como en las huelgas de las subcontratas de limpieza del metro de Madrid de 2007⁴³ y algunas huelgas de los servicios de limpieza de algunas grandes ciudades—, la respuesta de los grandes sindicatos «a la crisis» se orientó según formas más o menos ritualizadas de protesta. Tal y como estaba previsto por sus propios convocantes, las dos huelgas generales de 2011 (29 de marzo y 14 de noviembre) constituyeron interrupciones puntuales de la producción en las grandes fábricas y en los transportes, pero sin ningún impacto significativo más allá del día

⁴² La legislación laboral española tiene algunos rasgos originales: institucionaliza la representación sindical a través del sistema de elecciones sindicales, garantiza el monopolio de la representación a los sindicatos «representativos» —aquellos con un número mínimo de votos— y establece un complejo sistema de «liberados sindicales», a cuenta tanto del Estado como de las empresas. Si a esto se añaden los ámbitos en los que el Estado delega parcelas de gestión propia sobre los sindicatos —principalmente la formación para el empleo—, los grandes sindicatos aparecen efectivamente como una prolongación de los aparatos de Estado dirigida inevitablemente al apaciguamiento del malestar laboral.

⁴³ Entre diciembre de 2007 y enero de 2008, las subcontratas de limpieza del metro de Madrid iniciaron una potente huelga que duró varias semanas. Durante este periodo, las instalaciones de metro permanecieron sucias y sin recogida de basuras. Finalmente el gobierno de Esperanza Aguirre se vio obligado a ceder a buena parte de las reivindicaciones de un colectivo profundamente precarizado, pero que supo organizarse para hacer presión sobre un punto clave en la imagen de la ciudad.

fijado para la protesta. De hecho, quizás lo mejor de ambos paros fueron sus lemas: «Quieren acabar con todo, con los derechos laborales y sociales», «Nos dejan sin futuro. Hay culpables. Hay soluciones». Pero detrás de las grandes palabras, los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) fueron merecidamente señalados como parte del problema, no de la solución.

Desde mucho antes de la crisis, la izquierda había dejado de servir como vehículo político de expresión del malestar. El primer llamamiento de Democracia Real Ya! se hizo con un tono incluyente y transversal, en el que no se reconocía ninguno de los elementos litúrgicos de la izquierda: «No somos ni de izquierdas, ni de derechas, somos gente normal», decía. Fue una de las claves de su éxito. Las declaraciones de este tipo fueron moneda corriente del 15M, que repetidamente se situó más allá de las identidades ideológicas tradicionales. Antes, sin embargo, que una celebración «post-ideológica» del «triunfo del capitalismo y la democracia», era la constatación de la incapacidad e ineficacia de las costrificadas ideologías de la izquierda para abrir un espacio de conflicto real. La izquierda, en su mayoría, no entendió esta característica fundamental del 15M y siguió sin entenderla durante todo el ciclo político.

El año 2012, *annus horribilis* del gobierno Rajoy y el régimen, no acabó en el agujero en el que amenazaba precipitarse durante aquel verano. En el lugar en el que en última instancia se dirimía la crisis española (Europa), donde realmente adquiriría sentido emplear la vieja categoría de «lucha de clases», las cosas empezaron a relajarse poco a poco. La prima de riesgo alcanzó su máximo histórico seis días después de la manifestación del 19 de julio, 638 puntos básicos. Bastaron, sin embargo, una serie de declaraciones del nuevo gobernador del BCE, Mario Draghi, tan ambiguas como que el «BCE hará todo lo necesario para sostener el euro», para que la prima de riesgo se despeñara 150 puntos en pocas semanas. En la apertura de la tenaza europea —siempre relativa y siempre vigilada por el gobierno alemán— pesó como factor principal la creciente inestabilidad política del flanco sur del continente. En Grecia, las elecciones de mayo y junio llevaron a Syriza primero a superar a los socialistas del PASOK y después a convertirse en una

sería alternativa de gobierno. En Italia, las elecciones locales de mayo registraron el paso fuerte del anómalo Movimento 5 Stelle.⁴⁴ Si España caía, si se la sometía al «experimento griego», y con ella también a Italia, probablemente se habrían dispuesto todos los elementos para que la chispa prendiese la estepa, demasiado recalentada, del sur de Europa.

«El alma del 15M»

¿Que quería el 15M? ¿Cómo se captura un acontecimiento, un movimiento que es sobre todo expresión y no representación de voluntades y de proyecto político? En la interpretación del 15M se juega la lectura del ciclo. Pero lo cierto, es que el 15M no se corresponde con ninguna explicación unívoca. Todas las simplificaciones que resultan ciertas y necesarias para hablar del 15M —del tipo «el 15M quería más democracia»— requieren, de hecho, de largos (larguísimo) circunloquios para volverse significativas.

Quizás la mejor forma de abordar el 15M consista en arrancar de su modo de ser, del modo en que fue. La radicalidad del 15M residió, en primer lugar, en su organización, en su forma de proliferar y comunicar. El 15M fue una insurrección pacífica, de masas, una irrupción antes que un movimiento. No careció por eso de organización. Antes al contrario, el 15M fue una demostración incontestable de la potencia de la autoorganización en red, policéntrica, sin sujeto. Por eso al 15M se le han aplicado —y probablemente así se entienda mejor— metáforas prestadas de los modos de conceptualización de los sistemas complejos, en donde priman las relaciones horizontales de simbiosis y cooperación, como las redes neuronales o los ecosistema naturales.⁴⁵

En su «capa» inmediata, física, el 15M adoptó, como hemos visto, las formas características de un movimiento asambleario, hiper-asambleario incluso. La asamblea abierta a cualquiera se convirtió en el modo de ser y de estar en y del movimiento. En las plazas, en los barrios, en las comisiones abiertas, se ensayaron, se corrigieron y se sofisticaron, hasta niveles en ocasiones bizarros, las formas de moderación, de comunicación —el lenguaje de signos característico del movimiento— y

⁴⁴ El M5S irrumpió en Italia en 2009, de la mano del cómico Beppe Grillo. En esas elecciones obtuvo varias alcaldías incluida la de Parma. Al año siguiente, en las elecciones de 2013, se convirtió en tercera fuerza con el 25 % de los votos.

⁴⁵ Véase de nuevo algunos de los trabajo reunidos en www.tecnopolítica.net.

de acuerdo. Pero estas asambleas eran sólo un medio de expresión, casi una carta de presentación que permitía incluir a todos. La asamblea no fue la forma de organización principal del 15M, pero dotó a este de una ideología asamblearia y consensualista que seguramente fue su principal sello de identidad.⁴⁶

El 15M puso en marcha una operativa de la insurrección, que no descansaba sobre su «capa» física. Su desarrollo comunicativo y organizativo se produjo en Internet, en las redes sociales. El movimiento arrancó primero en las redes, luego se encarnó en las plazas. Sin la ocupación de Sol o de plaza Cataluña no hubiera habido movimiento, pero su dimensión de «espacio red» fue lo que le permitió proliferar, comunicarse, crecer. En la red se lanzaron las principales iniciativas, se produjeron los contagios, se construyeron acuerdos. En la red, en definitiva, se desarrolló una democracia de tipo singular.

Se puede decir que el 15M prueba, ensaya, mejora —antes que inventa— un modo de organización compleja, que en las dimensiones del «movimiento», gigantescas en comparación con sus precedentes, se despliega como una suerte de democracia plebiscitaria. Artículos, post en blogs y muros de facebook, simples tweets son los analizadores principales de cada fase de la protesta. Forman la esfera deliberativa del movimiento. Pero estos no se pueden considerar de forma aislada, sino en una sucesión acumulativa, que a veces tiene una trayectoria exponencial. Si se producía el «desborde» en las redes, se producía en paralelo en las plazas. Pero cuando esto ocurría, difícilmente se podía hacer corresponder con una decisión en sentido tradicional. Cuando una iniciativa cuajaba era el resultado de una deliberación compleja,

⁴⁶ En tanto «práctica ideológica», el asambleísmo del 15M no se deja reducir a la crítica conservadora corriente que, heredada de los años setenta, representaba las asambleas como un mero instrumento de los grupúsculos radicales para imponer sus posiciones por medio de la demagogia o del agotamiento de los no organizados. Para el 15M, en cambio, las asambleas fueron un medio de inclusión «de masas». Por eso también la insistencia en el «consenso»: el objetivo era que todos se pudieran sentir reconocidos en los resultados de la asamblea. Esto no obsta para que en muchas asambleas se detectaran prácticas grupusculares que podían corresponder con la imagen de la crítica conservadora. De todas formas, el gran mérito del 15M fue el enorme respeto a los procesos asamblearios, que en no pocas ocasiones logró generalizar modalidades de acción y organización hasta entonces reservadas a los grupos militantes. El reverso del «asambleísmo consensualista» resultó, sin embargo, de su incapacidad para desarrollar discusiones políticas de calidad, que implican en ocasiones disensos broncos, y también tomar decisiones políticas fuertes. Sin duda, este fue el principal límite de la dimensión «física» del 15M.

materializada en un convencimiento colectivo, hecho de expectativas y de razonamientos, que finalmente se probaba en su propia capacidad para desarrollarse y contagiarse en la red.

La centralidad de la dimensión de organización en red, sobre una base «tecnopolítica», presuponía también una «tendencia política», una forma de entender lo político. En el 15M no hay discontinuidad entre organización y proyecto. La democracia que se efectúa en las plazas y en las redes se oponía a la democracia de los partidos, a las formas convencionales de representación. El proyecto político resultaba así necesariamente de una proyección, de una racionalización, de una prolongación de las propias formas de operar del 15M. Por resumir mucho, los elementos principales de este proyecto eran el rechazo intuitivo de las mediaciones, la discusión directa, la propuesta de cualquiera y el voto sin delegación. En buena medida, durante el 15M se reinventó la democracia directa a través de los dispositivos tecnológicos; tanto como para que la democracia en red, que el movimiento ensaya, se reclamase como democracia a secas. En sus propias palabras, democracia 2.0 (3.0).

Había, sin duda, mucho de ingenuidad en este estiramiento político del 15M. Y no todos obviamente estuvieron mudos y fascinados por la idea de una democracia sencilla, pura, inmediata y de base esencialmente tecnológica.⁴⁷ La ingenuidad residía en lo que los neocon llaman «buenismo», y que en gran parte se hizo sentido común del movimiento. Se trataba de una cierta forma de consensualismo que reivindicaba y promulgaba la posibilidad del acuerdo sobre la base de la palabra y las «metodologías de la inclusión».⁴⁸ Ciertamente, el 15M no renunció al conflicto. Supo localizar a sus adversarios: la clase política, el bipartidismo, las políticas de austeridad. Pero a partir de ahí consideró posible una alianza —sin mediaciones— de la mayoría social. El aterrizaje del

⁴⁷ Quizás en pocas otras ocasiones históricas, un movimiento haya hecho suyo de una forma tan encarnada este ideal de democracia consensualista, hasta el punto de producir una suerte de «materialización» de las enseñanzas teóricas de Habermas sobre la situación comunicativa ideal. Seguramente también, pocas veces se haya sido testigo de una forma tan palpable de los límites de este tipo de modalidad democrática consensualista y racional, en la que los conflictos políticos acaban por escurrirse por la puerta de atrás.

⁴⁸ Las asambleas 15M se desarrollaron con una atención exquisita a la recogida de turnos, la facilitación de palabras y el intento de integrar en las decisiones el mayor número de sensibilidades. En la mayor parte de las acampadas, se generaron grupos de «respeto» o «cuidado», que entre otras cosas trataban de garantizar este clima consensualista. Y sin duda, en muchos casos hubo un cierto «maravillamiento» o «ensimismamiento» con el método.

«meme» de los Occupy, el 99 % frente al 1 %, dio expresión a la pretensión de formar una mayoría casi universal y abierta a cualquiera; que tenía su perfecta correspondencia con el mismo estilo asambleario e inclusivo de las plazas.

De ahí, también, se deduce la pretensión casi obsesiva de «llegar», de incluir a la «gente normal». «Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos», decía el Manifiesto inicial de DRY. La fuerza y la masividad del 15M tuvo, en cierto modo, una forma evangélica, una forma de verdad revelada a aquellos que habían recibido la luz del acontecimiento de las plazas. Pero se trataba de una verdad laica, que no tenía misterio, que sólo requería de la participación activa en el propio movimiento. Por eso, para el componente activista mayoritario en el 15M se trataba de encontrar un mensaje simple, sin aristas, siempre inclusivo y con el acento puesto en las tonalidades emotivas positivas —la ilusión, la fuerza, el «si se puede»—. Desde el principio se está, así, a un solo paso del marketing político. Pero mientras el movimiento persistió (y con él «su verdad»), el 15M se mantuvo lejos de la política de mercado convencional.

El acceso a la «gente normal» tenía, como es previsible, sus inconvenientes. Se puede decir, sin ambages, que en el 15M existía algo que rozaba y casi empujaba a renegar de «lo político». Primero y de forma afortunada, se hizo caso omiso a los rituales de la izquierda, a sus ideologemas más convencionales sobre el poder, «los poderes fácticos» y los sujetos de referencia («la clase obrera» ya impotente). En apenas unas semanas, el 15M logró desplazar la gramática política de sus claves tradicionales izquierda / derecha, para fijarla en torno a algo mucho más abierto como el 99 %, o con otra metáfora topológica al conflicto entre «los de abajo» y «los de arriba». Sin embargo, a la hora de inventar un nuevo lenguaje político, el 15M se reconoció huérfano, y por ello casi afásico. Paradójicamente, al renunciar a la izquierda se quedó también sin tradición y anclaje en el pensamiento político.

Las causas, sin embargo, no se pueden acusar exclusivamente al 15M, sino más bien a su parte «propriadamente política», los activistas de los movimientos sociales, que en su mayoría fueron los encargados de dotarle de signos, de lengua y de formas organizativas, además de consistencia y desarrollo. Tras el movimiento de las plazas, muchos de estos activistas quedaron en estado de shock, fascinados con la potencia que se desplegó en aquellas semanas, abandonados —«enamorados» podría ser también

una palabra adecuada— a algo que sabían que ya no podían dirigir, ni tampoco controlar. La lógica del desborde se produjo también en términos políticos. Para ellos —quizás especialmente para ellos—, el 15M era la «gente en movimiento» y esta era la única verdad. No se necesitaba más que estar, los contenidos políticos resultaban accesorios, lo único que importaba era que estos se decidieran entre todos, de ahí la centralidad de la palabra «democracia». Entre estos activistas predominaba la misma tradición ágrafa de los movimientos sociales, satisfecha con el mero hecho de la movilización. En los casos más virtuosos, en los que «pensar» constituía una parte central de la política, el objeto de la reflexión era sólo la «situación concreta»: motivo de pensamiento complejo, alambicado, a veces de enorme potencia. Las materias centrales, tanto de la práctica y la teoría política revolucionaria, que la izquierda debía haber conservado —como el problema del poder, de la organización, la «táctica y la estrategia»— pasaron de largo en la agenda de los movimientos, como luego pasarían también de la del 15M.

La capacidad de pensar el 15M, y el ciclo de luchas que este había abierto, llegó andando el tiempo, pero siempre de forma demasiado intuitiva. No apareció hasta casi un año después, al menos si este «pensar» se entiende en términos propiamente políticos y no meramente expresivos. Conviene ser precisos en este punto. Desde el primer momento, el 15M desplegó una enorme capacidad para hacer proliferar la discusión política. La sociedad se «repolitizó» en 2011, se galvanizó en torno a la indignación contra el *diktat* financiero europeo, la corrupción política y todo aquello que la crisis revelaba. Al mismo tiempo, multitud de propuestas, que eran ya moneda corriente entre los movimientos sociales, se «socializaron» en aquellos meses: desde la Renta Básica⁴⁹ hasta la transición energética,⁵⁰ desde los distintos significados de la palabra feminismo hasta la reforma de la ley electoral. En casi todas las ciudades de cierto tamaño, los más activos fueron dando cuerpo a «comisiones»

⁴⁹ La Renta Básica, medida de consenso en las primeras fases del ciclo político, es una propuesta distributiva por la que toda la población sin excepción recibe un ingreso regular e incondicional, esto es, con independencia del nivel de renta o de la situación de empleo. La Renta Básica parte del presupuesto de la crisis irreversible del empleo y de la necesidad de desengancharlo de la renta. En las propuestas más consecuentes, los ingresos que requeriría esta medida se obtendrían por medio de una reforma fiscal, basada en un nuevo sistema de impuestos sobre la circulación y el beneficio financiero, lugares en los que objetivamente se concentra y acumula la riqueza en el capitalismo global.

⁵⁰ Se refiere a la transición a una economía sostenible basada en energías renovables. En sus versiones más consecuentes implica un desarrollo inmediato y forzoso debido al rápido agotamiento del petróleo y el calentamiento global, incompatibles a la postre con una economía capitalista.

que se desgajaban de la asamblea central, para reunirse en las plazas y calles aledañas a las acampadas. Los nombres eran variopintos y expresaban las distintas especializaciones, e incluso las diferentes preferencias ideológicas, de activistas y «expertos»: comisión de ecología, de feminismos, de la Unión Europea, de ley electoral, de política a corto plazo, de política a largo plazo, de educación, de sanidad...

Los actos de estas comisiones-asambleas fueron mucho más allá de la redacción de unos *cabiers de dolances* (de quejas y malestares); o incluso de un programa político de reformas. Se desarrollaron como una asamblea constituyente «desde abajo», un amplio proceso social y político de impugnación a la totalidad, en el que se discutía literalmente de todo y se proponía igualmente de todo. En algunos casos, el nivel de sofisticación de las propuestas llegó hasta los últimos detalles,

Sin embargo, y aquí está la paradoja, la idea de «proceso constituyente», presente casi desde las primera horas en las plazas, tardó en convertirse en moneda corriente. De hecho, la idea de «proceso constituyente» nunca fue un elemento de consenso del movimiento. Esta resistencia a «politizar el movimiento» no era propiamente de orden político, como podría haber sido el caso desde una perspectiva que considerara que el movimiento no debía convertirse en interlocutor del Estado, que debía mantenerse como un movimiento «desde abajo», esto es, como «pura expresión». ⁵¹ Antes bien, la mayor parte de los rechazos tenían que ver con la palabra «constituyente». Los argumentos corrientes eran «que proceso constituyente no se entiende», que «aleja a la gente», que la «sociedad no está madura».

El 15M tuvo siempre el problema de hacerse cargo de su propia potencia política, de dirigirla en términos conflictivos contra el Estado, contra los aparatos de Estado, por medio de una propuesta alternativa que efectivamente iba a fracturar el campo social, partiéndolo en dos: los del régimen y los antirégimen. De ahí, el éxito de los circunloquios ingeniosos, a veces muy afortunados, como aquel de «no somos anti-sistema, el sistema es anti-nosotros». Únicamente tras tocar fondo la

⁵¹ Esta posición existió y se mantuvo como la «oficialidad» del movimiento durante casi un año y medio. Quizás las mejores expresiones de lo que podríamos llamar la «autofascinación» con la potencias del movimiento, no exentas de iluminaciones brillantes si bien nunca en términos políticos o sociológicos, y a la postre estratégicos— se encuentran en los trabajos de Amador Fernández Savater escritos en aquellos meses y publicados en su mayoría en el blog Interferencias. Véase www.eldiario.es/interferencias.

crisis de Estado de aquel verano de 2012, y tras observar que ni siquiera el gobierno caía, se lanzó una propuesta que planteaba sin ambages el problema del poder: el «rodea el Congreso» del 25 de septiembre.

Quizás esta naturaleza amable del 15M, que le llevaba una y otra vez a encontrarse consigo mismo, aunque fuera en aquello que lo hacía más potente —sus presupuestos expansivos, inclusivos, radicalmente democráticos, pero a la vez ingenuos—, se pueda entender mejor en relación con los «contenidos sociales» del movimiento. Frente al lenguaje de la izquierda, del poder y del Estado, de la clase obrera y de los explotados, el 15M se expresó de forma abierta en términos «democratistas», el 99 %. Sólo tarde, torpemente, y a falta de otra alternativa mejor, recuperó la lengua del «ciudadanismo», si bien con «ciudadanía» sólo se pretendía de dar algo más de precisión política a aquello de la «gente». El lenguaje siempre es tramposo y el lenguaje político — sobre todo si es inmediato, si no exige reflexión— lo es doblemente.

En la atmósfera 15M, los enunciados se mezclaban: «La crisis es una estafa» pero «hay que llegar a la gente», «la gente lo está pasando mal», «lo que la gente quiere...». Pero ¿qué era la «gente»? La gente —de forma inmediata para los activos en el 15M— eran los «semejantes», que no habían sido alcanzados por la verdad-acontecimiento de las plazas. Una consigna coreada en plazas y pancartas nos da una pista: «Dormíamos, despertamos». Entre la «gente» y los «activos» —lo que luego se llamo la «ciudadanía organizada»—, las diferencias son sobre todo de generación y de género: la «vecina», la «madre», la «abuela», la «tía» a la que hay que convencer. La vieja lengua de las clases sociales o cierta cultura sociológica, por banal que fuese —clases sociales, sectores socio-laborales, etc.—, habían sido liquidadas en las décadas previas. Por eso, las «figuras sociales», siempre nombradas en femenino, a las que había que «convencer» eran ni más ni menos que las propias del entorno socialmente «retrasado» de los ya convencidos. España, como todas las «sociedades de clases medias», es una sociedad despolitizada.

El 15M politiza así con lo que tiene a mano, dejando a un lado y en bloque lo que sabe que no funciona, principalmente la izquierda, que en sus tradiciones profundas y más aprovechables tampoco conoce. El 15M politiza y se politiza a partir de lo que es, a partir de su composición social mayoritaria —o al menos de sus sectores más activos—: adultos jóvenes, con estudios, volcados en las plazas a partir de una comprensión intuitiva de la crisis de las clases medias, de su propia crisis. En este sentido, si el 15M redescubre «lo común» que constituye la política, se hace una

imagen de esta que sólo podía corresponder con su propia imagen. Por ser claros, en la ola de movilizaciones que se desata en 2011 —en el movimiento de vivienda, en las Mareas Blanca y Verde— domina un cierto pietismo laico. Aunque el lenguaje de los derechos sociales y su adquisición conflictiva esté presente en todo momento, especialmente entre la parte «más política» de estos movimientos, lo que proyecta socialmente tiende a coincidir con el humanismo más convencional de los derechos humanos. También, porque fueron el motor del «ciclo 15M», merece la pena analizar estos movimientos con algo de detalle.

Mareas, PAH, luchas por la sanidad y la educación, comparten que no son movilizaciones laborales. Consiguieron convertirse en «política 15M» porque de una u otra forma «afectaron» a la «mayoría», esto es, porque podían ser tomados como los lugares en los que se construía cierto «sentido común» según los patrones que operaron tras el movimiento de las plazas. Al lado de estas «luchas comunes», algunos conflictos laborales —subcontratas de limpiezas de Metro,⁵² los mineros de Asturias y León,⁵³ Coca-cola de Madrid, Movistar⁵⁴— consiguieron generar una simpatía generalizada, pero en ningún caso fueron los «acontecimientos» centrales del ciclo. Tampoco, a diferencia de los años setenta, desencadenaron una ola de solidaridad activa capaz de invertir las relaciones capital/trabajo. Treinta años después de la derrota política de la Transición; tras varias décadas de institucionalización sindical y de continuos procesos de reconversión y desindustrialización; tras un largo proceso de fragmentación del mercado de trabajo, de precarización,

⁵² Los paros se produjeron en julio de 2012, en la estela de unas huelgas mucho mayores que se realizaron durante 21 días entre diciembre y enero de 2007-2008. En un sector difícil, dominado por una alta rotación laboral, la subcontratación y la precariedad, las trabajadoras consiguieron vencer a la empresa y a la Comunidad de Madrid entonces gobernada por la muy neoliberal Esperanza Aguirre.

⁵³ Tras varias semanas de conflicto ininterrumpido, los mineros de las cuencas de Asturias, León y Teruel, organizaron una marcha minera sobre Madrid que llegó a la ciudad el 11 de julio de 2012. Fueron recibidos por colectivos y asambleas de la ciudad, y como en todo el ciclo de movimiento, su repercusión se multiplicó por el contagio del 15M. Sin embargo y a pesar de una estética de lucha muy dura (enfrentamientos, sabotajes, etc.), heredada de los años setenta y ochenta, los mineros no lograron frenar los última reconversión ordenada por la Unión Europea para un sector ya económicamente residual.

⁵⁴ En este caso, el conflicto fue sostenido por los técnicos de las contratas y subcontratas de la multinacional Movistar (antes Telefónica). Durante 74 días, que agotaron toda la primavera de 2015, mantuvieron una huelga con especial incidencia en Cataluña, que terminó finalmente con ligeras mejoras para los trabajadores. La huelga fue, como tantas otras veces, empujada por la movilización autónoma de los trabajadores, y «resuelta» de mala manera por los sindicatos mayoritarios.

de quiebra del derecho laboral como derecho colectivo, la clase obrera (sujeto político del conflicto laboral) carecía ya de consistencia material, cultural y simbólica. Los conflictos laborales se habían convertido en conflictos particulares. El trabajo, espacio de conflicto por antonomasia durante todo el siglo XX, parecía haber quedado desplazado definitivamente.

Frente al viejo conflicto sindical, las Mareas Verde y Blanca, y el movimiento por la vivienda se convirtieron en las nuevas luchas «universales». Fueron elevadas a la condición de «luchas comunes» precisamente porque no fueron laborales, o porque lo laboral no ocupó en ellas más que una pequeña porción. Valga decir que en el caso de las luchas por la educación y por la sanidad hubo motivos laborales —aumento de las horas de trabajo, despidos y recortes de personal, subcontrataciones—, pero estos sólo fueron capaces de «comunicar» en la medida en que apuntaron al «servicio» o al «derecho» en términos generales.

Un ejemplo casi paradigmático fue el de la Marea Verde que se desarrolló en Madrid en otoño de 2012. Lo que dio recorrido a este conflicto no fueron la secuencia de diez días de huelga de los funcionarios, castigados con un aumento del número de horas de clase, y de los profesores interinos, condenados a no trabajar por los recortes. Lo que empujó el conflicto fue la defensa de la educación como derecho social universal: la masiva participación de alumnos, padres y activistas 15M en los encierros de los institutos, las clases que se impartieron durante semanas en la calle y la capacidad de abrir un debate social más amplio sobre la educación. Lo mismo se podría decir de la llamada «primavera valenciana», que durante el mes de febrero de 2012 estalló repentinamente en forma de una gigantesca protesta estudiantil, duramente reprimida por la policía; o también de las huelgas de educación en Baleares, donde jugó un importante papel la cuestión del uso de la propia lengua.⁵⁵ De hecho, al menos

⁵⁵ La huelga de educación comenzó en Baleares en las primeras semanas del curso de 2013. El motivo era doble: la protesta contra los recortes en educación pero también contra el modelo del trilingüismo que quería imponer el gobierno del Partido Popular. La lengua (el catalán), que había sido hasta ese momento un consenso en la política institucional, se convertía en caballo de batalla contra un modelo (que como en otras muchas partes) iba a ir en detrimento tanto de la calidad de enseñanza, como del uso de la que es la lengua materna de la mayor parte de la población en las islas. La huelga se prolongó durante todo el otoño y buena parte del invierno con un apoyo mayoritario por parte de la población y los estudiantes. Fue el conflicto más importante en Baleares desde los años setenta.

en Madrid, fue la «recuperación» de la movilización por los sindicatos lo que finalmente dinamitó el impacto de la Marea y lo que terminó por plegarla como un conflicto laboral más.⁵⁶

Lo mismo se podría decir de la Marea Blanca de Madrid, que tuvo una organización más virtuosa, también con mejores resultados. El origen del movimiento fue previo al 15M, organizado en torno a distintas plataformas de defensa de la sanidad pública, animadas por pequeños sindicatos, asociaciones de usuarios y algunos profesionales de prestigio. No obstante, no fue hasta el verano de 2012 cuando la Marea estalló con la multiplicación de las asambleas de centro y los encierros en algunos hospitales, en los que participaban además de personal sanitario, pacientes y «gente normal». A partir de ese momento, la Marea Blanca convocó sucesivas manifestaciones que fueron tomadas como citas obligadas del 15M y en las que se reprodujo las «formas de estar» del movimiento: expresión alegre, ausencia de banderas, llamamiento a toda la sociedad «afectada» por la privatización. Precisamente el «desborde» de la Marea, su capacidad de convertir la cuestión de la «sanidad pública y universal» en «problema común», trastocó los planes de un partido enrocado. Tras año y medio de conflicto, a principios de enero de 2014, el gobierno autonómico echó para atrás los planes de privatización de los hospitales públicos. Poco después dimitió el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La Marea Blanca tuvo también importantes capítulos en Murcia, Cantabria y Cataluña.

Al considerar las Mareas, se podría decir que el conflicto se desplazó de la «producción» a la «reproducción», o si se prefiere de la relación salarial a la vida en toda su amplitud, exprimida por el capital financiero. También se podría decir que las Mareas fueron una forma de conflicto propia de una sociedad «post-salarial» en la que la articulación de una lucha común se organiza en torno a lo que todavía hay de «común», los derechos sociales universales. Pero lo cierto es que, aun cuando no faltan elementos capaces de sostener esta lectura, fueron poquísimos quienes en esos años interpretaron el movimiento en este sentido.

⁵⁶ El conflicto impulsado por las asambleas de docentes que se reunieron durante el verano fue después cabalgado por los principales sindicatos (CCOO, UGT, CSIF). Los grandes sindicatos terminaron por descarrilar la energía de las asambleas que votaron por la huelga indefinida, imponiendo una serie de paros controlados de resultados dudosos. En términos laborales, el conflicto se perdió, hasta el punto que la extensión del horario lectivo de los profesores madrileños fue luego aplicado a todo el país por medio de un Decreto-ley de la administración central publicado en abril de 2012.

¿Falta de madurez, de capacidad de expresar, y sobre todo, de estirar políticamente el contenido de unas luchas que por no violentar —por no dividir— se redujeron al común denominador de la «dignidad de todas», de la urgencia humanitaria, de los derechos humanos?

En el rebajamiento de las expectativas se encontraba de nuevo la composición y el imaginario del 15M, lo que al mismo tiempo le hacía hegemónico y débil. Por ser claros, las luchas por la educación y la sanidad reivindicaron el acceso a estos bienes en tanto derecho universal, pero no fueron más allá de unos términos defensivos. Se reivindicaba el Estado de bienestar realmente existente. Y aunque siempre rondaron algunas cuestiones tradicionales relativas al igualitarismo republicano —como la supresión de la educación concertada—, la defensa del Estado de bienestar quedaba muy lejos de cuestionar la propia naturaleza clasista y excluyente de este régimen social.⁵⁷

«Clasista» fue también, en un sentido no necesariamente negativo, la proyección de la llamada Marea Granate que pretendió reunir a los llamados «exiliados», aquellos que a falta de oportunidades laborales se vieron obligados a emigrar a los países del centro y el norte de Europa. La imagen de «estos» exiliados se reconocía principalmente en «el universitario emigrado por la falta de oportunidades en su país». Una figura que podía coincidir con el viejo imaginario «mesocrático» dominante y que fue efectivamente la clave del éxito de este movimiento.

El lugar, no obstante, en el que mejor se mostró esta ausencia-presencia de una perspectiva de clase y donde al mismo tiempo se logró el máximo de potencia en el conflicto, poniendo por momentos en retirada al núcleo duro del capitalismo financiero español, fue en el movimiento de vivienda. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los grupos de Stop Desahucios tenían una composición particular. La mayor parte de los nodos de estas plataformas vino animada por activistas que provenían de los movimientos sociales, notablemente ampliados tras el 15M. Su trabajo se desplegó en una doble dirección. Ofrecían servicios directos a los desahuciados: asesoría e intermediación en la negociación con el

⁵⁷ El sesgo «clasista» del Estado de bienestar se reconoce en casi todos sus capítulos: la constitución dual de la enseñanza pública, con un sistema de colegios concertados que garantiza y promueve la segregación social del alumnado; la promoción pública de los seguros médicos privados (amparados por el Estado para el funcionariado) en pruebas diagnósticas y atención primaria que permite una sanidad a dos velocidades, según sea para las clases medias o bajas; los regímenes especiales de la seguridad social para las empleadas domésticas, lo que facilita el acceso y abaratamiento de este tipo de servicios a las clase medias, etc.

banco. Pero lejos de conformarse con una labor de asistencia, las ejecuciones de desahucio se convirtieron en un acto político, una suerte de juicio ciudadano a la banca y a la legislación que la protege.

En el movimiento de vivienda, la figura del «desahuciado» tendía a organizarse de una forma sindical novedosa. Los «derechos humanos» se articulaban en una posición política de impugnación del capitalismo financiero, por medio de la organización de unos «afectados», que potencialmente comprendían a una amplia parte de una sociedad endeuda y empujada por la pendiente de desclasamiento. Durante los meses posteriores al 15M, la ejecución de muchos de estos desahucios dio lugar a verdaderas manifestaciones públicas con cientos de personas y una amplia publicidad. Entre 2011 y 2015, la PAH retrasó y detuvo la ejecución de varios miles de desahucios y actuó de parte de los hipotecados en un número aún mayor de procesos de negociación con los bancos. Ningún movimiento ligado al 15M fue probablemente más legítimo y tuvo más fuerza que el movimiento de vivienda.

Y sin embargo, el movimiento no logró, al menos no mayoritariamente, salvar un nivel de discurso anclado en el reconocimiento del derecho a la vivienda y de la dignidad de los desahuciados. A pesar de la radicalidad de su crítica práctica, que apuntaba al modelo de extorsión financiera del capitalismo inmobiliario español y a la lógica antisocial del rescate bancario, en la que explícitamente se renunciaba al «rescate de las personas» y a un modelo de acceso a la vivienda de carácter social —los parques públicos en alquiler con los activos de los cajas nacionalizadas—, el movimiento más potente del 15M no logró constituirse como una nueva modalidad, más o menos estable, de «sindicato social». ⁵⁸ Sindicato es una palabra cargada de historia, que convoca a la constitución de un sujeto político popular, sobre la base de su autoorganización y de la construcción de sus «intereses materiales».

En la «no» constitución de este nueva modalidad sindical se reconocían problemas de largo recorrido. La formación de un sindicato de desahuciados, inquilinos y propietarios precarios exigía niveles de

⁵⁸ La opción existió, no obstante, en la mayor parte del curso del movimiento, y es todavía el motor de las discusiones internas al propio movimiento. Tanto dentro del grupo promotor de la PAH en Barcelona (arremolinado en torno a los núcleos de Terrasa y del Observatori DESC) como de algunos grupos activos en Madrid, se planteó y se plantea la necesidad de extender las formas de organización probadas en el movimiento de vivienda a otros derechos sociales relativos a la salud, los servicios sociales, la renta, etc. Por distintas razones, sin embargo, esta discusión no ha llegado a materializarse, hasta el momento, en un proyecto definido de nueva organización sindical.

autoorganización, que no existían entre las capas sociales en las que principalmente se cebaban los desahucios. La desestructuración cultural de «lo popular» (de las viejas clases obreras), sin tradiciones, referentes propios, culturas organizativas, actuaba como un difícil punto de partida. Consecuentemente, la dependencia de los «sectores organizados», de los activistas que organizaban los grupos, era demasiado alta. La individualización del problema (la hipoteca, el desahucio) tampoco facilitaba la constitución de un colectivo estable.

En las Mareas y en los movimientos que propició, en sus contenidos políticos y en su propia composición, el 15M mostró un paradójico pero clarísimo perfil de clase. De un lado, correspondía con un proceso de desafiliación social de larga trayectoria, que impedía la inmediata constitución de un sujeto político realmente popular. De otro, las clases medias en descomposición, que protagonizaron las protestas, se expresaron con un lenguaje radicalmente democrático, y al mismo tiempo no dejaron de reproducir una cierta aspiración a la recomposición de su vieja posición de clase. Todo el ciclo político posterior se desarrolló también dentro de esta tensión.

«Techo de cristal» (otoño de 2012 y nuevo invierno)

A mediados de agosto se dio a conocer una iniciativa algo extravagante. Su nombre era ya de por sí toda una declaración de intenciones, Plataforma En Pié. Convocaba a «Rodear el Congreso» para el 25 de septiembre. El calor del verano de 2012, con el anuncio del rescate europeo, las manifestaciones de funcionarios, la crisis de la prima de riesgo, parecía no ceder a la entrada del otoño. El texto y el tono de la convocatoria eran algo distintos a los que habían sido dominantes durante el 15M. El manifiesto, escrito con un lenguaje mucho más duro, más de «izquierdas», se marcó, ante todo, un objetivo realmente ambicioso: se proponía la dimisión del gobierno y dar los pasos necesarios para iniciar un proceso constituyente.

El 25S generó polémica en los entornos del nuevo activismo que el 15M había galvanizado. ¿Merecía la pena asumir, sin tapujos, un enfrentamiento directo con el Estado? ¿Existía realmente una disposición suficiente para romper la baraja, aunque sólo fuera en los términos de una escenificación teatral, con la institución que, por antonomasia, representaba la democracia española? ¿No suponía todo esto romper el clima de alegría y unidad que hasta entonces reunía «a cualquiera» en

las movilizaciones? Por primera vez, el 15M estaba asumiendo franca y directamente el problema del poder y el antagonismo implícito al conflicto político. Y por primera vez, el movimiento se lanzaba a una prueba de fuerza que debía llevarle a dar un «salto de cualidad».

Frente a la amenaza del 25S, el gobierno reaccionó como más le convenía. Asumió el envite de una forma desmedida y dramática, rayana en lo estrafalario. Algunos políticos hablaron de «golpe de Estado», como antes lo habían hecho de «boicot a la democracia». Delegación de Gobierno blindó el Congreso como si una horda bárbara fuera asaltararlo. Se cortó el tráfico, se levantaron vallas con alambradas en las calles aledañas, se incrementaron los controles, se devolvió a sus lugares de origen algunos de los autobuses que traían a los «asediantes» y se convocó nada menos que a 1.300 antidisturbios para controlar la concentración. El dispositivo de seguridad parecía más propio de una operación de contra-insurgencia, dispuesta para responder agresivamente ante una inminente oleada de atentados terroristas, que a regular una simple protesta ciudadana que sin duda acudiría desarmada. Pero el objetivo no era tanto la seguridad, cuanto generar miedo, sensación de emergencia, de que algo grave iba a ocurrir, de ahí la teatralidad impuesta. La estrategia funcionó.

La convocatoria se realizó en la tarde-noche del 25. Las cifras oficiales contaron unos poquitos miles de personas (6.000), pero probablemente fueron 20 ó 30.000. Pasados los días, se puede decir que la partida quedó en tablas: ambos contendientes lograron salvar los trastos. El movimiento elevó el nivel de desafío y produjo una potente imagen de un Congreso asediado que recorrió el mundo en la portada de los principales periódicos internacionales. El gobierno, por su parte, consiguió dosificar su fuerza a costa de sobrerrepresentarla. La noche acabó en altercados, instigados por infiltrados de la policía, y con varias decenas de detenidos. Según el patrón que consiguió imponer el 15M durante todo el ciclo, las cargas se devolvieron como un contra-golpe a la policía y el gobierno, que recibió una marea de críticas en las redes sociales. Pero en esta ocasión, la actitud gubernamental tenía el efecto de un aviso: «Si se eleva el nivel de enfrentamiento habrá represión». En un gesto de emulación de lo que fueron las acampadas, la convocatoria del Rodea el Congreso se repitió durante los días 26 y 29, con resultados semejantes. La idea de desencadenar un nuevo episodio insurreccional, pero en forma de una impugnación del régimen, no llegó a cuajar.

El 15M, o mejor, los participantes del 15M se explicaron a sí mismos como un movimiento pacífico y democrático. «Los violentos son ellos» fue una de las consignas repetidas en aquellas manifestaciones. Con pragmatismo, la renuncia al enfrentamiento en la calle tenía una función táctica. Se trataba de huir de las representaciones de disturbio que pudieran ser funcionales a la criminalización, al tiempo que cada gesto de represión era convertido en una muestra de brutalidad y arbitrariedad. Con ello se confirmaba, y se asumía también, una cierta idea que explícitamente repudiaba el llamamiento a la «violencia», entendida en un sentido tan amplio como para incluir el simple choque con los antidisturbios o los «ataques contra el mobiliario urbano». En la democracia española, el empleo del terrorismo etarra y luego del islámico, había servido a la gobernabilidad sobre la base de la emergencia, hasta el punto de ampliar el campo de «lo violento» hasta lo más insignificante.

Pero la verdad es que tras casi año y medio de movilizaciones, el movimiento se encontraba en un impás, que resultaba cada vez más difícil de superar. Desde el verano de 2011, la dinámica expansiva y proliferante de las primeras semanas se había ido apagando en el proceso de «territorialización», que llevó a la constitución de una multitud de asambleas barriales. Por inevitable desgaste, estas asambleas acabaron durante 2012 en poco más que colectivos de barrio, cada vez más homogéneos y cada vez más pequeños. Resultaba difícil imaginar qué otras acciones, qué otros gestos, podían lograr lo que había sido la primera fase de las acampadas. Frente a las grandes manifestaciones que dominaron el año 2012, tras el 25S se manifestó una creciente incapacidad para mantener siquiera los niveles previos de movilización. Para muchos, el estallido del caso Bárcenas a principios de 2013 y la escasa capacidad para organizar una respuesta —apenas unos cientos o miles en Madrid y Barcelona durante los primeros días de febrero— indicaron inequívocamente que la fase 15M estaba tocando a su fin.

En las redes del movimiento, el impás o el bloqueo se nombró con la metáfora del «techo de cristal», una película traslúcida que dejaba ver el cielo pero que no se sabía cómo traspasar. Pero quizás sea más interesante abordar el problema desde otro lugar, seguramente algo menos complaciente. El 15M había hecho un rápido recorrido que le había llevado igualmente rápido a toparse con sus propios límites. Estos se encontraban en su propio marco social y discursivo. Si el movimiento

quería proyectarse, crecer, aumentar su propia potencia debía superarlos. Pero para que el 15M tuviera continuidad tenía que quebrar su propia carcasa, convertirse en otra cosa.

La constelación de fuerzas que bloqueaba al movimiento era, no obstante, compleja. De un lado, operaban las inercias, ya señaladas, de la composición social mayoritaria del movimiento, y la complejidad para generar aliados en otras capas sociales y culturales. También influía el bloqueo institucional, sometido al *diktat* de la austeridad europea que hacía que las Mareas se toparan con márgenes muy estrechos de reforma a la hora de revertir los recortes; y esto, aun cuando tales límites provocaran también un interesante contra-efecto de radicalización. Sin embargo, el elemento determinante estaba en la velocidad de la coyuntura: la situación cambiaba en unos meses lo que en otro tiempo le hubiera llevado años.

Para ser eficaz, para elevar los objetivos y el nivel de movilización, los elementos internos del acontecimiento-movimiento 15M debían evolucionar al mismo ritmo de la coyuntura. Y para ello tenían el problema enorme de su falta de experiencia, de su incapacidad relativa para leer la situación, para constituirse como un sujeto colectivo siempre más potente, más inteligente. Por ser justos: no era un problema de falta de inteligencia, menos de falta de discusión. El 15M pasará a la historia como una prueba de la capacidad de generar y expandir la inteligencia colectiva y en red, expandida y manifiesta en asambleas, blogs, intercambios en redes sociales. El problema estaba en el material subjetivo con el que trabajaba esa inteligencia policéntrica, así como en los referentes que le servían de catapulta a su imaginación política.

El 15M había nacido de un acontecimiento radical en total ruptura con la izquierda tradicional. En su rechazo a la misma había algo fuerte y positivo. Se echaba a un lado el caínismo de la política de poder, el ideologismo vacío, la fragmentación y el sectarismo. Pero con ello también, los únicos elementos de «tradición» con los que se podía abordar una coyuntura y unos retos que para sus contemporáneos aparecían como radicalmente nuevos. En términos políticos, el 15M apenas llevaba una mochila ligera: la herencia de la política «inmediatista» de los movimientos sociales y de las luchas de Internet, su prevención anti-intelectual y la idea —de matriz tecnológica por vía del hacktivismo— de que los problemas se resuelven «haciendo», antes que pensando. De entre los movimientos que tuvieron peso en el 15M, quizás sólo el

feminismo podía transmitir otras formas, otra herencia, otros referentes y una tradición intelectual y política consistente. Su influencia, desgraciadamente, tampoco fue tanta.⁵⁹

En otro orden, y al lado de esta carencia de referentes históricos, en el 15M gravitó siempre un miedo patente a los argumentos fuertes, a las hipótesis que pudieran crear rupturas internas, a los conflictos y confrontaciones que inevitablemente traía el enfrentamiento político. Cualquier posición era antes calculada por las crisis internas que podía generar, que por aquello que podía abrir. Aquí residía el núcleo de su «buenismo», volcado en el «cuidado», la participación, la inclusión de todos y todas, y al mismo tiempo impedido para hacer las apuestas que quizás se hubieran requerido. Seguramente por eso, su determinación para asumir una confrontación directa con el Estado resultó tan débil.

La falta relativa de lo que en otro momento se hubiera llamado «violencia contra lo instituido», pero que no obstante —y esto nunca se debe olvidar— fue capaz de horadar hasta sus cimientos los consensos de la democracia española, tenía también su correlato en la escasa «capacidad constituyente» real, concreta, del movimiento. En el lenguaje político que inventó el 15M, se decía que se había abierto una fase destituyente, y que el «proceso constituyente» debía esperar a la quiebra completa del régimen. Pero si estos términos se devolvían al campo de experimentación «micropolítica» interna al movimiento, una de las cosas más sorprendentes es lo poco consistente que fueron los modelos organizativos ensayados (las asambleas, los coordinadoras, los colectivos, el propio sistema-red 15M), también los modos de experimentación y construcción de otras formas de vida. El 15M dio lugar, en efecto, a una nueva oleada de ocupaciones, centros sociales, cooperativas, colectivos, medios de comunicación, etc. Pero esta apenas fue más allá de repetir y ampliar lo que ya existía. En muchos casos, se limitó a recorrer los mismos caminos que habían hecho ya multitud de experiencias previas, pero de una forma más precaria, y casi siempre menos inteligente.

⁵⁹ Un caso ampliamente comentado en aquellos meses puede servir aquí de indicador del papel del feminismo en el movimiento. Durante los primeros días en la Puerta del Sol, se colgó junto a las ya existentes una amplia pancarta en la que se leía: «La revolución será feminista o no será». La pancarta fue rápidamente retirada por algunos activistas con el argumento de que este tipo de pronunciamientos marcaba ideológicamente al movimiento e impedían la «conexión» con la «gente normal». A pesar del inevitable conflicto con una parte del movimiento, lo cierto es que la discusión interna de los grupos feministas implicados en el 15M se tradujo en la articulación de comisiones y grupos de trabajo específicos. Gracias a este trabajo, el feminismo —no necesariamente en sus versiones más potentes— se convirtió en un elemento transversal en las movilizaciones posteriores.

Lo mismo se puede decir de su innovación cultural. El 15M tuvo un componente festivo y de interrupción del orden simbólico, de gigantesco encuentro y demostración de la fuerza que supone estar juntos. En eso consistió su carácter insurreccional. A la hora, sin embargo, de probarse como un campo de experimentación, de generación de contraculturas o simplemente de material cultural nuevo fue notablemente parco. El 15M produjo una repolitización de masas, una increíble activación subjetiva, pero no llegó a cuajar ni en formas de organización, ni en formas de vida en las cuales esta se pudiera anudar. De ahí, su inconsistencia relativa a la hora de elevar los niveles de confrontación, que suelen ser simétricos a la fuerza y consistencia de las comunidades políticas y, por ende, a su capacidad de asumir mayores niveles de riesgo.

De hecho, sólo en unos pocos lugares en los que la dimensión comunitaria tenía una indiscutible centralidad, el conflicto saltó de los niveles de demostración simbólica al rechazo explícito, incluso al «choque violento». Ninguno de ellos fue protagonizado por el 15M como tal, aunque este supo reconocerse en ellos. Dos casos, quizás los más importantes, fueron los del barrio burgalés de Gamonal y el del centro social de Can Vies en Barcelona. El episodio de Gamonal saltó a la prensa como una algarada popular más propia de otros tiempos: la respuesta de un barrio obrero y popular —el principal de Burgos— a la última cacicada de su alcalde. Dispuesto a construir un bulevar en la principal arteria del barrio, en contra de la mayoría del vecindario, el alcalde ordenó levantar la calle sin previo aviso. Con el fondo de escenario de una típica trama de políticos corruptos, constructores ambiciosos y conexiones mediáticas —el contratista de la obra era también propietario del *Diario de Burgos*—, el conflicto ganó en intensidad a partir del día 10 de enero de 2014 cuando las manifestaciones y asambleas públicas acabaron en sabotajes de maquinaria y disturbios nocturnos. Ante la creciente presión y después de una semana de grandes manifestaciones y choques policiales, el día 17, el alcalde renunció a llevar a cabo la obra.

El conflicto de Can Vies se produjo a raíz del desalojo de un centro social en el barrio de Sants (Barcelona). El espacio llevaba abierto desde 1997. La madrugada del 26 de mayo la policía comenzó el desalojo, con orden de iniciar la inmediata demolición del edificio. Las acciones de protesta tampoco tuvieron nada que ver con las formas de estar del 15M: se quemó maquinaria, se atacaron sucursales bancarias y sedes de Convèrgencia (el partido en la alcaldía) y hubo enfrentamientos nada simbólicos que terminaron en numerosos detenidos. También aquí la

combinación de manifestaciones públicas y altercados logró detener la demolición del edificio. El 31 de mayo, lo que quedaba del «centro social» fue reokupado. De inmediato, vecinos, activistas y parte de los bomberos de la ciudad iniciaron la reconstrucción del mismo.

Ambos conflictos se produjeron —quizás no por casualidad— en 2014. Mediaba más de un año desde los rodea el Congreso del septiembre de 2012. Un año rico en conflictos, en el que las Mareas siguieron un curso más o menos activo, especialmente en algunos territorios, y en el que la PAH consiguió recoger casi un millón y medio de firmas con el propósito de llevar al congreso una Iniciativa Legislativa Popular, que reconociera la dación en pago. El objetivo era conseguir que la banca cancelara inmediatamente la deuda después de la ejecución hipotecaria. Como era de esperar, el Congreso no hizo el más mínimo caso.

Pero a pesar de estos episodios y de los niveles relativamente altos de movilización, lo que había sido el motor del movimiento 15M parecía cada vez más atascado. Las acciones del segundo aniversario, celebrado entre los días 22 y 25 de mayo, mostraron todavía una enorme capacidad de convocatoria, pero también una incontestable tendencia a la ritualización de los gestos, las acciones y las asambleas. Según avanzaba el año 2013, el ímpuls del movimiento se hacía cada vez más evidente. En el primer semestre de 2014, además de los conflictos señalados, el último destello fueron las Marchas por la Dignidad. Convocadas por lo mejor de la izquierda sindical (el SAT andaluz y los sindicatos de matriz asamblearia de todo el país), el 15M se sumó a la que fue probablemente la mayor manifestación de todo el ciclo político: dos millones de personas en el centro de Madrid. Pero las marchas no dejaron de ser un episodio puntual, una gigantesca protesta por la dignidad del trabajo y de las clases populares. Nada que ver con la capacidad de contagio del 15M.

El agotamiento de la capacidad de propuesta y de la creatividad de los primeros tiempos mostraba no sólo el cansancio físico de más de dos años de movilización, sino también una creciente impotencia para encontrar una vía política propia. El vacío relativo se estaba llenando de rituales, de repeticiones, incluso de una evidente tendencia a la «izquierdización», que se puede interpretar en un sentido no necesariamente positivo. Quizás el «techo de cristal» no era sólo el del 15M, sino la demostración de los límites de formas de movilización y de «hacer política», que arrancaban de mucho antes de 2011. El problema del

poder no tardaría en volverse a plantear, esta vez, por medio del ensayo de una vía mucho más tradicional y ajustada a los medios de integración de la democracia representativa, la vía electoral.

SEGUNDA PARTE

LA FASE PODEMOS

«Ganar» (invierno-primavera de 2014)

El 17 de enero de 2014 se presentaba en el Teatro del Barrio de Lavapiés (Madrid), el Manifiesto *Mover Ficha*. El subtítulo era explícito con el propósito de la propuesta: «Convertir la indignación en cambio político». Tras dos largas páginas de «exposición de motivos» centradas en la dictadura financiera europea, se proponía presentar una candidatura a las elecciones al Parlamento europeo previstas para mayo de ese mismo año. El nombre de la candidatura era algo bizarro para un «partido», una conjugación verbal, Podemos; declinación a su vez del «Sí se puede», grito de guerra de los piquetes anti-desahucio.¹

Los asistentes al Teatro, así como las primeras firmas del manifiesto, respondían a una composición variopinta. El texto venía firmado y encabezado por Pablo Iglesias. El ya conocido presentador de la tertulia política La Tuerka,² se había labrado su fama como pugilista mediático primero en la TDT neocon (Intereconomía, 13TV) y luego en las tertulias de grandes cadenas como La Sexta y Cuatro. Su condición de

¹ La marca, reclamada por distintos padres, fue acuñada por alguien ajeno a Podemos, el luego concejal de Madrid, Guillermo Zapata. El entonces activista propuso este nombre para el grupo embrión de la iniciativa municipalista de Madrid, que finalmente se dio en llamar En Red (luego Municipalía). El nombre se filtró más tarde a través de los cuadernos de trabajo (digital) a los promotores de Podemos. También Guillermo Zapata fue el primero en proponer la marca Ahora Madrid.

² La tertulia se había comenzado a emitir en 2010 en la vallecana Tele K. El éxito de la propuesta y su difusión en Internet, a partir del año siguiente, le permitió saltar en 2012 a la TDT, de la mano de Canal 33. La invitación de tertulianos y comentaristas de distintos ámbitos, permitió al equipo de La Tuerka construir un amplia agenda de contactos, que sirvió para componer equipos políticos, generar alianzas heterogéneas y establecer contactos en determinados segmentos de la prensa y el periodismo.

comentarista y, en cierto forma, de portavoz oficioso de la «indignación», le habían convertido en poco más de un año en una figura reconocida, capaz de generar simpatía en entornos sociales relativamente amplios. Junto a él estaban algunos de sus colaboradores, tanto en La Tuerka, como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en la que Iglesias había estudiado y en la que llevaba algún tiempo trabajando como profesor interino. En la presentación se encontraban Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Ariel Jerez y alguna de las que serían figuras principales de la organización, en su mayoría profesores de esta facultad —muchos de ellos con contratos precarios—, y con los que Iglesias había compartido una larga trayectoria en distintas asociaciones universitarias.³ En la columna de los activos de este grupo se anotaba una amplia experiencia de colaboración y asesoría a los gobiernos progresistas de Venezuela, Bolivia y Ecuador.⁴ El ciclo latinoamericano, la quiebra de los gobiernos neoliberales y la emergencia posterior de los gobiernos de izquierdas en la región fueron para ellos un banco fundamental de experiencias inspiradoras.

También aquel día en el Teatro del Barrio, se dejaron ver algunas de las figuras más conocidas de Izquierda Anticapitalista (IA) como Miguel Urban, Teresa Rodríguez o Jaime Pastor. Este pequeño partido reunía seguramente a lo mejor y más resistente del largo naufragio de la extrema izquierda española. La fundación de IA se produjo a finales de 2008, a inspiración del Partido Anticapitalista francés encabezado por Olivier Besancenot. El precedente de los anticapitalistas era, no obstante, Espacio Alternativo, integrado hasta principios de los 2000 en Izquierda Unida, y formado principalmente por viejos militantes de la extinta Liga Comunista Revolucionaria de inspiración trostkista. Poco después del estallido de la crisis de 2007, IA se fundó con el propósito explícito de concurrir a las elecciones del Parlamento europeo de junio de 2009. La propuesta demasiado «ideológica» y demasiado marcada por los referentes de una extrema izquierda agotada en la Transición no

³ Las principales: La Promotora que reunió a estos profesores hacia finales de la década de 2000 y principios de la siguiente, la Asociación Contrapoder radicada en esa facultad y Juventud Sin Futuro en la que este grupo ya no participaba directamente pero que había sido su fuente de inspiración.

⁴ La mayor parte de este trabajo se realizó a través de la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), promovida inicialmente por profesores de derecho constitucional, muy activos en labores de asesoría a las asambleas constituyentes de América Latina, y que progresivamente extendieron esta función a otros campos y materias. El grupo de la Complutense tuvo una importante presencia en la Fundación CEPS, tanto en los equipos técnicos, como en la junta directiva.

alcanzó los 20.000 votos. Desde entonces la organización, atravesada por una relación continua con distintos movimientos sociales y fuertemente sacudida por el 15M, experimentó una intensa evolución interna, que le llevó a promover la iniciativa Procés Constituent en Catalunya.⁵ Encabezada por el viejo profesor Arcadi Oliveres y la controvertida monja benedictina Teresa Forcades,⁶ esta propuesta tuvo un considerable éxito: reunió 25.000 firmas en pocos días y promovió la creación de más de un centenar de asambleas locales. Con Podemos, los anticapitalistas pretendían aplicar la lente de aumento del experimento catalán, para una iniciativa ya claramente dirigida a una cita electoral.

Apenas día y medio después de la presentación, el 19 por la mañana Podemos alcanzó las 50.000 firmas que se anunciaron como barrera mínima para avalar la iniciativa. En los siguientes días, las expectativas se transformaron en participación activa, constituyéndose multitud de asambleas locales, que a inspiración del proceso venezolano recibieron el nombre de Círculos. El trabajo de los anticapitalistas, con militancia en medio centenar de localidades, contribuyó también a la rápida formación de círculos. En poco más de un mes, y de forma que sorprendió a los promotores se habían constituido más de 200 asambleas, en los meses siguientes superarían el millar. El sistema red 15M y la democracia plebiscitaria que caracterizó al movimiento se habían volcado en la nueva propuesta, reproduciendo la dinámica proliferante de mensajes y formas de hacer que se habían practicado en los años anteriores.

Los promotores de Podemos no fueron, sin embargo, el único equipo en explorar la idea de una candidatura electoral, ni siquiera los primeros. A comienzos de 2013, un año antes de la presentación del Teatro del Barrio, se dio a conocer en redes el primer vídeo del Partido X, «el Partido del Futuro». De inspiración hacker, con estética «futurista» y con una cuidada simplicidad en el mensaje, esta propuesta se presentó como una genuina proyección del 15M. Su eslogan y programa «democracia y punto» se resumía en unos pocos elementos:

⁵ El Procés nació en abril de 2013, impulsado por la organización catalana de IA, Revolta Global, con el propósito de empujar hacia un proceso constituyente en Cataluña. El objetivo era galvanizar la ruptura democrática en una clave que fuera más allá del protagonismo de Convergència.

⁶ Forcades se hizo particularmente conocida por su denuncia del presunto fraude de la gripe A en 2009. Teóloga, feminista y autodeclarada *queer*, la figura de esta monja benedictina se componía de una particular mezcla de elementos: la Cataluña más tradicional y la radicalidad y novedad de los movimientos sociales. Como personalidad pública funcionó francamente bien, al menos durante un tiempo.

erradicación de la corrupción, voto directo permanente y concurrencia de saberes expertos para la resolución de problemas complejos.⁷ En los primeros meses la insistencia en el «anonimato» y de los «ciudadanos cualquiera» también resonó con las formas 15M.

El Partido X se formó a iniciativa de ciertos entornos del movimiento especialmente vinculados a su dimensión «tecnopolítica». Se nutrió de activistas de Democracia Real Ya y sobre todo de Xnet; colectivo de defensa de las libertades digitales, la cultura libre y la neutralidad en la red, que con el nombre eXgae constituyó uno de los motores del movimiento contra la Ley Sinde. Era el mismo grupo que había lanzado la iniciativa 15MpaRato y que en sucesivas fases empujó políticamente el desarrollo del escándalo de Bankia.

Armado con lo mejor de la experimentación tecnopolítica y con centro en las propuestas de democracia digital, el Partido X avanzó algunas de las cuestiones que luego serían características del ciclo electoral. Las primarias abiertas con voto digital, la idea de programa colaborativo, la financiación directa a través de herramientas de crowdfunding, la llamada «hipótesis victoria» que se reafirmaba en el eslogan «ganar es posible» y la participación digital como marca de la «nueva política», fueron probadas, por primera vez por el Partido X. Concebido, no obstante, antes como una intervención artístico-política que como una propuesta electoral en sentido estricto, el Partido X resultó incapaz de conseguir lo que luego lograría Podemos: generar y aprovechar los cauces de la dinámica de «desborde» que caracterizaron al 15M. Excesivamente ensimismado en la cultura del software libre, sus propuestas en otras materias (por ejemplo en economía) resultaron demasiado pobres como para conectar con sectores sociales muy alejadas de «memes» como «resetear la política» o «reiniciar el sistema».⁸ De una forma todavía más limitante, su modalidad de organización

⁷ Sobre el Partido X la mejor fuente sigue siendo su web, todavía en activo, <https://partidox.org/>.

⁸ Valga como ejemplo su programa económico presentado en septiembre de 2015. Redactado de forma colaborativa, resultó más bien tibio y poco original. Concentrado en perseguir el fraude, una reforma fiscal poco ambiciosa y las propuestas de apoyo al emprendizaje, los autónomos y las PYMES, con algunas medidas de promoción de la banca ética y el tejido cooperativo, constituía poco más que un programa de mínimos. Aunque incluía la auditoría de la deuda, su acento en la corrupción apenas se seguía de un análisis de la crisis europea y de acumulación a escala continental. En otro registro, el proyecto de democracia digital del Partido X resumaba demasiada meritocracia y demasiada centralidad para los saberes expertos. Con este perfil, resultaba difícil convocar los humores populares capaces de empujar la iniciativa más allá de los entornos activistas de clase media en los cuales había nacido la propuesta.

mostró una excesiva preocupación por la posible contaminación o desviación de la propuesta, lo que impidió a otros núcleos salidos del 15M hacerla suya. En otras palabras, el estrecho kernel⁹ del Partido bloqueó la lógica replicante y proliferante de todas las iniciativas 15M. Incluso los aciertos de última hora, como el fichaje de Hervé Falciani, el programador franco italiano que filtró los datos de 130.000 defraudadores fiscales con cuentas en Suiza, no consiguieron situar al Partido X en situación de aprovechar o competir con Podemos tras su espectacular irrupción en el invierno de 2014.

Por paradójico que resulte, especialmente a la luz de su trayectoria posterior, Podemos se conformó como la propuesta que mejor supo aprovechar, movilizar y en cierta forma representar la oportunidad política que abrió el 15M. Podemos no nació, sin embargo, con un proyecto definido, mucho menos acabado. Como todo en esta fase, tuvo en sus primeros momentos un carácter de prueba y error. La «hoja de ruta» no quedó fijada hasta tiempo después. La improvisación y el constante tanteo de un contexto golpeado por la marea 15M marcaron tanto la idea original como los primeros meses de la formación.

Podemos nació, no obstante, en un contexto previamente agitado. Algo más de un año antes de los encuentros entre Pablo Iglesias y Miguel Urban (IA) en los que quedó definida la primera idea del proyecto, gran parte de lo mejor de la militancia «de izquierdas» había quedado fascinada con el éxito de la coalición de «izquierda radical» griega, Syriza. En las dobles elecciones de 2012, Syriza se confirmó como el partido de la oposición a la austeridad europea. Para muchos, el caso griego era la verificación práctica de las posibilidades de una gran coalición de izquierdas, siempre a condición de que fuera más allá de la vieja y anquilosada IU.

La experiencia de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que en las elecciones al Parlamento Gallego de octubre de 2012 obtuvo el 14 % de los votos, pareció volver a confirmar esta posibilidad. Encabezada por el líder histórico del BNG, Xosé Manuel Beiras tras la fragmentación del Bloque, AGE reunió a la Esquerda Unida galega y algunos otros

⁹ Kernel son las líneas de código que sirven de núcleo o motor de un sistema operativo. El Kernel era la metáfora para designar al estrecho grupo de la dirección del Partido X. La entrada en el kernel requería niveles altos de compromiso y trabajo, así como una inquebrantable fidelidad al grupo fundador y a su figura principal, Simona Levi. El término «tecnobolchevique», que algunos utilizaron entonces, encaja bien con una organización que siempre se entendió como vanguardia del movimiento, en el sentido más artístico de la palabra.

pequeños grupos. Pero lo que le dotó de capacidad de contagio fue su entronque con el imaginario del 15M y la ola de movimiento que en Galicia venía levantándose desde la catástrofe del Prestige.¹⁰ Como una premonición sobre el futuro desarrollo de Podemos, Pablo Iglesias colaboró en la dirección de la campaña de la nueva coalición gallega.

Carácter de precedente tuvo también el Frente Cívico-Somos Mayoría, iniciativa impulsada por el entorno del líder veterano de IU, Julio Anguita, y en el que también jugó un papel relevante, Juan Carlos Monedero. El Frente Cívico nació en 2012, para desarrollarse con una vida errática pero intensa durante 2013. La plataforma no pretendía convertirse en una iniciativa electoral, pero seguramente fue la propuesta de apertura más importante dentro de los ámbitos de la izquierda tradicional.¹¹ Por los demás, el grueso de IU, y especialmente su dirección encabezada por Cayo Lara, resultaron completamente sordos a las propuestas de apertura y renovación que dentro y fuera le azuzaban con las posibilidades políticas del 15M. Para la dirección de la formación, Izquierda Unida era la Syriza española, sin necesidad de mayores arreglos.

La realidad estaba, no obstante, lejos de las ensoñaciones de Lara y de los viejos cuadros del PCE. Sumergida en una crisis de perfiles complejos, IU rozó el extraparlamentarismo en las elecciones de 2008 en las que obtuvo un único diputado. Desde la explosión del 15M, las encuestas apenas le dieron resultados por encima del 10 %. Su condición de partido ideológico, alejado de lo más vivo de los movimientos sociales, salpicado por los escándalos de corrupción debido a su participación en los gobiernos de algunos municipios y sobre todo de las cajas de ahorro —en cuyos consejos tenía representación—, y en buena medida reactiva a las proclamas del 15M como la de no somos «ni de izquierdas ni de derechas», hicieron a Izquierda Unida un vehículo del todo inapropiado como expresión electoral del cambio social que atravesaba

¹⁰ El petrolero se hundió a 250 kilómetros de la costa gallega en noviembre de 2002. El desastre ecológico que siguió dio lugar, primero, a un fuerte movimiento de solidaridad con miles de voluntarios que se dedicaron a recoger los restos de «chapapote» a lo largo de toda la costa. Poco después se desató también una oleada de protestas que tuvo el carácter de un fuerte revulsivo en la sociedad gallega.

¹¹ La propuesta se presentó en septiembre de 2012 con el objetivo de constituir un referente de «poder ciudadano», con diez propuestas de reforma política y económica. El Frente Cívico tuvo cierta capacidad de replicación: generó varias decenas de asambleas locales que desde entonces funcionaron como un foro de discusión para los entornos, por lo general envejecidos, pero todavía dinámicos, de la vieja izquierda del país.

el país. La única excepción destacable estuvo en el empuje mediático del liderazgo de Alberto Garzón, economista y diputado por Málaga, que no había cumplido entonces 30 años.

En la misma línea, la recepción en IU a las propuestas del grupo promotor de Podemos fue más bien tibia. A lo largo de 2013, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, con militancia intermitente en IU, pero una larga experiencia de colaboración con esta organización, vieron definitivamente frustrada cualquier posibilidad de evolución de la formación de izquierdas, y con ella la oportunidad para la creación de una Syriza española. Su encuentro con los anticapitalistas, entonces empeñados en una operación similar, abría otro camino, más incierto pero seguramente más prometedor. Las repetidas negativas a la colaboración de la dirección de IU, la victoria del sector más corrupto de la federación madrileña en diciembre de 2012,¹² los contactos también infructuosos con otros sectores políticos —como el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con el Procés Constituent dirigitado por Forcades, con la CUP e incluso con la propia coalición gallega—, la actitud reactiva de muchos componentes de los movimientos sociales a Pablo Iglesias,¹³ llevaron al grupo de Pablo e IA a proponer la formación de una candidatura con sus únicas fuerzas. La Syriza española resultaba imposible. Pero casi todos los que luego serían dirigentes de Podemos, coincidieron después en que esta constituyó una de las grandes ventajas de Podemos: ningún lastre, ninguna mochila. Podemos no fue pues el resultado de un plan previamente diseñado, una vez más la miopía de la mayor parte de la izquierda del país empujó la nueva aventura política.

El primer Podemos, que se presentó el 17 de enero, respondía a un cuerpo

¹² La IX Asamblea de IU-CM ratificó el triunfo, por un ajustado margen, del sector más instalado en el aparato burocrático, solidificado desde hacía décadas y sostenido por una particular malla de redes clientelares con centro en algunos municipios del sur de Madrid. Los críticos del llamado «49 %» (por los votos que obtuvieron en la asamblea) quedaron arrinconados de la dirección, dirigida por los veteranos Ángel Pérez y Gregorio Gordo. Posteriormente, el estallido de las tarjetas black de Caja Madrid (tarjetas de «dinero gratis»), que incluía a cargos de IU como Moral Santín, acabó por sepultar la escasa credibilidad que le quedaba a la organización. De los «críticos» saldrían diversos grupos que en oleadas terminarían en Podemos o en las candidaturas municipalistas de la región.

¹³ Pablo Iglesias resultaba enormemente controvertido entre los activos en los movimientos sociales de Madrid. Conocido por su participación en las contracumbres del movimiento global, su figura casi siempre estridente se componía de una paradójica combinación de ambición política, chulería vernácula y un agudo sentido del humor, a veces rayano en lo bufonesco. En un error de cálculo que el autor comparte, muy pocos se tomaron en serio las valencias políticas del proyecto de La Tuerka.

político no muy amplio, unas veinte personas, que incluían al equipo técnico y político de La Tuerka y a algunos militantes anticapitalistas. Nada que no pudiera solucionar el éxito de la iniciativa, que tras su repentina irrupción pública incorporó rápidamente nuevos activos. Del lado de la Tuerka, se añadió un buen contingente de activistas que habían animado la iniciativa Juventud sin Futuro. Dentro de Izquierda Anticapitalista se produjo el correspondiente debate interno. No sin importantes disensos, el conjunto de la organización ofreció el apoyo orgánico a un proyecto que hasta entonces era sólo la apuesta de algunos de los miembros más jóvenes de la organización. Las dos principales «familias políticas» de Podemos quedaron definidas desde la temprana formación del partido.

Tras la presentación, las siguientes semanas discurrieron rápido. El 9 de febrero se realizó un gran acto con más de 1.000 personas en el Cine Palafox de Madrid. Se anunció un proceso de primarias abiertas para la elección de los candidatos a eurodiputados, al tiempo que se puso en marcha un proyecto de debate on-line, recogida de propuestas de los círculos y referéndum digital para la selección de las propuestas del programa. La tecnopolítica y la democracia digital, banderas del 15M, entraban también en Podemos. En unas semanas estaba ya preparada una herramienta de voto para las primarias. Y unos meses después se abrió un censo digital que permitía a cualquiera inscribirse en la organización y participar en una plataforma digital (Plaza Podemos) en la que proponer y votar propuestas.¹⁴

Las primarias fueron un éxito. Celebradas entre el 27 de marzo y el 2 de abril, votaron 33.000 personas; constituyeron las elecciones de este tipo más participadas en la historia reciente del país —en los meses anteriores Partido X, Equo y el PSC también convocaron elecciones de este tipo—. El método, voto múltiple de hasta cinco nombres y puntuación ponderada, permitía garantizar representación y pluralidad. Como era de esperar, Pablo Iglesias resultó elegido como cabeza de lista, seguido de la militante de IA Teresa Rodríguez, el fichaje estrella y ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, la camarera y politóloga Lola Sánchez y el científico argentino-aragonés Pablo Echenique.

¹⁴ La plataforma se llamó Plaza Podemos, y se construyó a partir de una adaptación del programa reddit. Desarrollado con software libre, reddit es un sitio web de marcadores sociales, donde los usuarios pueden dejar enlaces y propuestas que otros usuarios pueden votar de tal modo que ganen mayor o menor visibilidad.

A mediados de abril, el éxito inicial de Podemos parecía asegurar algún escaño. Una encuesta encargada por Podemos ofreció, sin embargo, unos resultados espectaculares: hasta cuatro eurodiputados. La recepción interna de esos datos fue de incredulidad y escepticismo. Pero la campaña, marcada por una imagen de novedad, con un tono descarado y alegre —«¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión?»—, muy centrada en la figura de Pablo Iglesias, que apareció finalmente en la papeleta electoral, terminó por confirmar los resultados de la encuesta interna. El 25 de mayo, Podemos obtuvo el 8 % de los votos, 1,2 millones de electores y cinco eurodiputados. Con una abstención del 54 %, el PP reunió el 26 % de los sufragios y el PSOE el 23 %. IU sólo recibió el 10 % de los votos, un eurodiputado más que Podemos. Aunque UpyD obtuvo tres diputados y Ciudadanos —una formación que por primera vez se presentaba fuera de Cataluña—, logró otros dos, la gran novedad de aquellas elecciones estuvo en la repentina irrupción de la formación morada. Podemos, liderado por un joven tertuliano que hablaba con desparpajo contra el régimen del '78, que declaraba reiteradamente que había que cambiar la Constitución y que acusaba sin descanso a la oligarquía política con la palabra «casta», había irrumpido en el panorama electoral español con casi el 10 % de los votos. El otro experimento electoral, el Partido X logró 100.000 votos, menos de la mitad de los que necesitaban para obtener un asiento.

Para los partidos políticos tradicionales, la irrupción de Podemos cayó como una bofetada. Algunos estudios señalaban que hasta el 25 % del electorado socialista estaba dispuesto a votar a Podemos. Por primera vez, el PSOE se veía amenazado por una fuerza política que le disputaba su propio suelo. En ese mismo verano, el partido veterano de la política española, con más de 135 años de historia, aceleró su renovación interna. La nueva promesa de la organización, Pedro Sánchez,¹⁵ una figura joven y atractiva, que imitaba el estilo de los chicos de Podemos, fue la apuesta de la dirección en las primarias que se celebraron en julio. En estos comicios, Sánchez venció a contrincantes claramente más orientados a la izquierda y más dispuestos a una renovación real: el popular Eduardo Madina, víctima de un atentado de ETA, y el líder del ala izquierda del partido, José Antonio Pérez Tapias.

¹⁵ Por lo demás, Pedro Sánchez era un típico producto de la burocracia de partido. Había escalado desde su posición como asesor europeo a los 26 años, para ser luego concejal en Madrid y posteriormente diputado. Sánchez se había probado en distintas tertulias con Pablo Iglesias con escaso éxito. Poco a poco, sin embargo, fue recuperando y reciclando las nuevas formas retóricas en su provecho. Obviamente recibió los avales de la dirección para relevar al ya muy desgastado Alfredo Pérez Rubalcaba, marrullero y fontanero profesional desde hacía ya más de tres décadas.

Siempre más torpe de movimientos, IU se vio obligada también a reaccionar frente a una fuerza que directamente tendía a succionar todo su espacio. Entre los herederos del PCE, la inclinación por una dirección joven tuvo que esperar hasta febrero de 2015, cuando Alberto Garzón fue elegido candidato a la presidencia. La elección de Garzón seguía el mismo patrón de Podemos. Era quizás la única figura de IU que podía representar de forma creíble proximidad al espíritu y demandas del 15M.¹⁶

El 25 de mayo por la noche, en una céntrica plaza madrileña, y ante un par de miles de personas, el equipo de Podemos celebró su victoria. Todavía con un tono de modestia, rehuyendo de toda forma de triunfalismo, Pablo Iglesias declaró «mañana habrá seis millones de parados y desahuciados», hay que seguir trabajando. Pero lo cierto es que desde ese 25 de mayo «ganar», ese significante impreciso respecto a los resultados políticos concretos, pero perfectamente cuantificable en votos y escaños, empezó a resultar posible.

La «hipótesis Podemos»

En el espacio de tres o cuatro meses, Podemos se había convertido en un espectacular fenómeno político. Poco después de las elecciones, el Barómetro del CIS del mes de julio daba un recorrido aún mayor a los morados, el 15,3 % de los entrevistados mostraba su predisposición a votarles. Los resultados en las europeas no marcaban un techo de voto. La escalada demoscópica, recogida por casi todas las encuestas, confirmaba porcentajes crecientes, que podían llegar a alcanzar, e incluso superar, el 20 %. Durante el verano, comenzó a parecer plausible que la «transformación de la mayoría social en mayoría política» podía ser tan clara como literal. Podemos estaba en condiciones de llegar como primera fuerza a las generales previstas para dentro de poco más de un año.¹⁷

¹⁶ Prueba del conservadurismo y el oportunismo congénito de esta organización es que Garzón no fuera nombrado secretario federal, en sustitución de Cayo Lara, hasta unas primarias retrasadas a mayo de 2016, cuando ya se había celebrado la primera vuelta a las elecciones generales, y se encaraban los segundos comicios de junio.

¹⁷ En el Barómetro de octubre del CIS, aparecía con el 22,5 % de los votos, frente al 23,9 y el 27,5 % de PSOE y PP respectivamente. Todavía en el barómetro de enero de 2015, Podemos reunía el 23,9 % del voto previsto, superando por primera vez al PSOE. Véase la serie de Barómetro del CIS, octubre 2014-enero de 2015, disponibles en www.cis.es

Pero ¿qué era Podemos en aquel entonces? Sin duda algo todavía poco coherente, apenas un partido. Se hablaba de un «comando mediático», formado por Pablo y su equipo técnico. El portavoz de Podemos realizó durante aquellos meses continuas intervenciones en televisión. Para Pablo y su grupo, la presencia en las grandes cadenas y su capacidad de articular un discurso público eficaz, habían sido el factor indiscutible del éxito de Podemos. Desde la irrupción en las europeas, una disciplina hasta entonces menospreciada por el activismo, la «comunicación política», se confirmó como el elemento fundamental de la «nueva política».¹⁸

La dirección explicaba el «éxito Podemos» por razones de imagen y discurso. La inteligencia política que había llevado a los resultados de las europeas se hacía coincidir con las competencias y la estrategia comunicativa del comando mediático. Un discurso experto, a medio camino de la práctica «científica» y el marketing, servía ahora también como arma arrojada contra los resabios reactivos y «minoritarios» de la izquierda militante, acusada de conformismo, cuando no de sectarismo, en cualquier caso incapaz de «construir mayoría».¹⁹ No era un elemento nuevo. Algo de esto estaba ya en el 15M y en su paradigma comunicativo, algo que también resonaba con el «no somos ni de izquierdas, ni de derechas», pero que convertido en la razón principal de Podemos tendía a identificar su práctica política con una suerte experticia comunicativa. La imposición de esta perspectiva no tardó en mostrar sus efectos en un amplio abanico de cuestiones; no sólo en el nivel del discurso, también en el de la organización.

De otra parte, existía una realidad plural, ciertamente caótica, pero rica y masiva, que se organizaba en la proliferación de los círculos locales y sectoriales. A finales del verano, 600 ó 700 asambleas de barrio o ciudad se habían constituido en círculos de Podemos. La

¹⁸ De acuerdo con estas claves, que difícilmente podrán superar la prueba del tiempo, se atribuyó el éxito electoral a una conjunción de marketing y de aciertos técnicos. Entre las decisiones que habían llevado el éxito, y que eran la prueba inequívoca de la inteligencia de la campaña, se encontraba la apuesta por la imagen de Pablo Iglesias en la papeleta de voto, la apelación continua a la ilusión o incluso cuestiones tan nimias como la elección de la tipografía Gotham (al parecer sería y honesta) en todos los logos de Podemos.

¹⁹ Un ejemplo de este tipo de lectura, en clave periodística, tendente a reducir la complejidad del proceso a la indudable pericia comunicativa del grupo promotor, es el relato del primer año de Podemos escrito por Jacobo Rivero, *Podemos objetivo: asaltar los cielos*, Barcelona, Planeta, 2015 (abril). Demasiado entusiasta y poco analítico, no obstante, gracias a su cercanía al Belén político de la formación ofrece información no disponible en ninguna otra fuente de ese periodo.

composición de los mismos tendía al abigarramiento. Una parte no pequeña de los entornos 15M se incorporó a los círculos, que a veces coincidían con algunas de las asambleas de barrio que todavía persistían.²⁰ En el desarrollo inicial de estas agrupaciones fueron también fundamentales los militantes de Izquierda Anticapitalista y de algunos movimientos sociales, que dotaron de cierto esqueleto a la incipiente organización. Otra «especie» habitual en las nuevas asambleas del partido fueron los activos de las generaciones más mayores, que habían vivido la Transición, a veces militado en aquellos años intensos y que ahora se sentían nuevamente interpelados. Pero de forma mucho más genérica, la mayoría de los integrantes del nuevo fenómeno político fueron un sin fin de gentes sin experiencia política previa. En un proceso sólo comparable a las primeras semanas del movimiento de las plazas, «gente común» entró en tropel a formar parte de los círculos. En su radical heterogeneidad apenas se puede decir que en su mayoría compartieron la intención de participar en un esfera política (los partidos, la política institucional) que sistemáticamente les había rechazado y que ahora podían practicar en el marco de una situación excepcional.

En términos generales, tanto por el patrón de desarrollo territorial a través de las asambleas locales, como por su proliferación en redes, la explosión de Podemos fue un calco de las formas de organización del 15M. Algunos desplazamientos sutiles parecían prefigurar, no obstante, un movimiento nuevo. En muchos casos, especialmente en las grandes ciudades, la militancia de los movimientos sociales que había animado el 15M o que incluso se había formado en el movimiento de las plazas rehusó participar en una iniciativa que nunca escondió su carácter centralista y marcadamente personalista. Podemos casó mal, desde el principio, con la crítica a la representación dominante en el 15M. Al fin y al cabo, el nuevo partido era un proyecto de «recuperación de la política», aun cuando fuera con modalidades novedosas. Podemos surgió, en efecto, de una búsqueda consciente de la «buena representación», del estos «sí me representan».

²⁰ En la región metropolitana de Madrid, hacia los meses de septiembre y octubre de 2015 se reunían un centenar largo de estas asambleas, por las que pasaban regularmente en torno a 15.000 personas. La realidad de Podemos tenía cierto carácter de calco de las asambleas de barrio del 15M. De hecho, muchas de las que todavía existían pasaron directamente a convertirse en círculos, en ocasiones, como una evolución natural de los acontecimientos y sin más discusión que el ciclo pasaba entonces por Podemos.

Más difícil aún de percibir fue la entrada en el ciclo político de una composición social, que había asistido con mayor pasividad al desarrollo de las movilizaciones previas. En muchas asambleas, especialmente en las periferias metropolitanas —y muy especialmente en la de Barcelona—, los círculos de Podemos fueron poblados por gentes de extracción indiscutiblemente «popular»; sectores que, de una u otra forma, protagonizaron el ciclo de movilización de los años sesenta y setenta, pero que se sentían o apartados o decepcionados con los partidos de izquierda y con la política institucional. También estaban sus hijos, ya claramente desclasados y ajenos a la vieja cultura obrera, y seguramente también con menor implicación. Al menos en sus «bases», Podemos no era ya un partido de clases medias, aun cuando lo fuera de forma unánime en su «dirección». La incorporación de este segmento social, salvo quizás en Cataluña donde la separación de clase tenía un cierto componente nacional y en menor medida también lingüístico, pasó prácticamente desapercibida.²¹ Las clases populares, la «gente común», pronto serían también subalternas dentro de ese «instrumento» llamado Podemos.

Solapados, el «comando mediático» y la realidad proliferante de los círculos, Podemos no constituía propiamente un partido. Desde su presentación pública, practicó una retórica quincemayista, se definió como un «partido anti-partido», un «instrumento de la gente» dirigido a «recuperar las instituciones para la ciudadanía». Pero ¿era esto suficiente para afianzar la escalada demoscópica y aún más convertirlo en una alternativa de gobierno? Si ciertamente se puede hablar de un primer Podemos y luego de un segundo, el umbral entre ambos estuvo en el significado concreto que se le otorgó al verbo «ganar».

El verano de 2014 fue para el equipo promotor de Podemos un periodo de paréntesis. La vuelta de vacaciones debía traer dos cosas: el diseño de una nueva estrategia acorde con las posibilidades abiertas por las encuestas y la definición del modelo de organización capaz de servir a este reto. La situación de partida no dejaba de ser confusa, también dentro del núcleo fundador del partido.²² Desde hacía meses, la débil

²¹ La aparición de Podemos en las encuestas catalanas resultó una sorpresa. En cierta forma, recogía la memoria del partido comunista catalán (el PSUC) y de un segmento social prácticamente inexistente en la política catalana, lo que quedaba de vieja clase obrera radicada en las periferias del área metropolitana. Mezcla de miedo y desprecio, sobre Pablo Iglesias cayó inmediatamente el apelativo de *lerrouxismo*, en referencia a la memoria del primer Lerroux de principios de siglo y de una realidad popular supuestamente anti-catalanista, agitada por un nuevo *xulo madrileny*.

²² Prueba de que la confusión estaba también instalada dentro del grupo promotor es la entrevista

y embrionaria organización que había impulsado la iniciativa empezó a corromperse por las disputas internas. Entre el grupo de jóvenes profesores de la Complutense, agrupados alrededor del proyecto de La Tuerka, y sus socios de Izquierda Anticapitalista, las tensiones resultaron constantes desde el principio.²³ Pero lo que podía tener razones políticas, *grosso modo* el mayor grado de experimentación al que estaba dispuesto el grupo de La Tuerka y la inevitable propensión «izquierdista» de los anticapitalistas, derivó muy pronto en luchas por el control de los precarios órganos de coordinación y dirección del partido. Con menos visibilidad mediática, pero con una implantación territorial efectiva, los anticapitalistas experimentaron rápidamente como la balanza caía del lado de Pablo Iglesias y sus aliados, a los que se incorporaron un número creciente de tráfugas que provenían de su propia organización.²⁴ Ya antes del verano, las posiciones de los anticapitalistas fueron claramente desplazadas por una dirección oficiosa que contaba como miembros principales a Pablo Iglesias, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. Los cuatro compartían la condición de profesores — titulares o en precario— de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Pero si prácticamente de inmediato las tensiones internas empezaron a fracturar la organización, el motor que las llevó al punto de ruptura estuvo sin duda en las expectativas abiertas tras las elecciones. Las europeas mostraron una posibilidad inédita, «ganar». Sobre la base de

a Pablo Iglesias, realizada el 20 de junio de 2014 por Jacobo Rivero (Barcelona, Turipial, 2014). Toda la entrevista y el propio epílogo de Pablo Iglesias, titulado significativamente «La hipótesis Podemos» (pp. 139-150) no deja de ser una exposición sistemática de las líneas retóricas previas a las elecciones de mayo, centradas en la oposición casta/pueblo y la necesidad de «señalar a los enemigos del pueblo». El primer «populismo» era apenas incipiente en sus contenidos.

²³ Ejemplo archicommentado de la continuidad de estas tensiones, y del que el autor de este trabajo pudo ser testigo, es el debate del 21 de agosto de 2013 en la Escuela de Verano de IA. Pablo Iglesias, sentado en una mesa con Miguel Urban, reprochó a su organización por su exceso de «machismo» revolucionario y una incapacidad congénita para leer un coyuntura política que exigía menos doctrinarismo ideológico. En tono chulesco y provocador, respondía así a las críticas que había recibido el día anterior su entonces compañera Tania Sánchez Melero, líder del sector crítico de IU. Y sin embargo, fue en esas jornadas donde se acabó por definir el primer embrión de Podemos. La competencia-colaboración entre los distintos liderazgos masculinos es seguramente uno de los rasgos que la cultura política de los grupos universitarios dejó como legado a Podemos. Capítulos semejantes, si bien con personajes diferentes, se repetirán a lo largo de los siguientes años.

²⁴ Así, por ejemplo, el que luego sería Secretario General de Madrid, Luis Alegre; el responsable de economía, Nacho Álvarez; o el que sería Secretario de Organización estatal, Sergio Pascual, entre otros muchos, fueron militantes anticapitalistas que abandonaron su organización en ese tiempo para formar parte de la dirección de Podemos.

algunos diagnósticos previos²⁵ y la comparación inevitable entre los países del sur de Europa y América Latina, un proyecto político de semejante envergadura —conquistar el gobierno de la quinta economía europea— exigía asumir un reto gigantesco, seguramente no al alcance de todos. Dentro de un marco que parecía determinarse en los márgenes estrechos de la dirección del nuevo partido, Íñigo Errejón resultó ser de los más preparados y seguramente el más ambicioso. Escéptico al principio con el proyecto, finalmente aceptó el encargo de dirigir la campaña de las elecciones europeas. Errejón tenía entonces 31 años.

El más joven del grupo había pasado largas temporadas en Bolivia y Venezuela como asesor político. Las estancias en América Latina marcaron una suerte de conversión político-intelectual en quien en aquel tiempo era un estudiante de doctorado. Su biografía anterior no escapaba a la típica trayectoria de un activista de extrema izquierda: militante en grupos libertarios, simpatizante de las CUP catalanas y luego promotor de la asociación universitaria Contrapoder, de corte más bien autónomo. La culminación de su metamorfosis se produjo durante la elaboración de su tesis doctoral sobre la reciente trayectoria política boliviana. El título elegido para este trabajo anunciaba el marco de lo que luego sería su hipótesis para Podemos: *La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del Mas en Bolivia (2006-2009) un análisis discursivo*. El trabajo académico interpretaba el ascenso del sindicalista Evo Morales en 2006, a partir de una particular teoría del discurso, fundada en los desarrollos teóricos de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. La base de la que luego partiría la hipótesis «errejonista» arrancaba de una lectura de Gramsci que estos mismos autores definían como «postmarxista», esto es, desprovista de los elementos de clase y «economicistas», que Laclau y Mouffe calificaban de «últimos resquicios esencialistas» de Gramsci.²⁶

En términos semejantes, pocos meses después de la irrupción del 15M, Errejón interpretó la situación española a la doble luz de sus nuevos referentes teóricos y del ciclo político latinoamericano, inaugurado por los movimientos de lucha contra el neoliberalismo y el triunfo de los gobiernos progresistas. En sus propios términos, el 15M

²⁵ Algunos artículos académicos o de prensa, como éste de Bescansa y Ariel Jerez: «Coyuntura fluida y nuevo sujeto constituyente» de febrero de 2013, disponible en http://www.eldiario.es/zonacritica/Coyuntura-fluida-nuevo-sujeto-constituyente_6_99100110.html

²⁶ Véase principalmente Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, *Hegemonía y estrategia socialista*, Madrid, Siglo XXI, 2015, la edición original en inglés es del año 1985.

había dejado entrever una posibilidad de «ruptura populista», manifiesta en la capacidad de contagio de lo que llamaba la «narrativa indignada»: el movimiento de las plazas había logrado arrebatarse la hegemonía al discurso neoliberal, poniendo de su lado una serie de «significantes flotantes» —como democracia, ciudadanía, dignidad— que podían «disputar el sentido» a la «casta». Esta separación de la sociedad en dos campos, entre casta y «pueblo», que como una cizalla había producido el 15M, descubría una «dimensión ganadora». Y constituía la base de la ruptura populista, que Errejón consideraba ya probada en algunos países latinoamericanos. Tres años después de que Errejón ensayara esta interpretación, sus análisis encontraron la posibilidad de materializarse de la mano de la «herramienta Podemos».²⁷

A diferencia de lo que resultaba corriente en la mediocre política institucional española, una de las mayores contribuciones de los nuevos líderes de Podemos fue la de otorgar relevancia al análisis teórico, avanzando una hipótesis propiamente estratégica. Aun cuando estas discusiones quedaron contenidas en las reuniones internas del grupo y aunque la traducción de la línea política permaneció casi siempre reducida a unas cuantas directrices de comunicación política, Podemos recuperó para el ciclo cierta capacidad de elaboración analítica. En cierta forma, Podemos empezó a descifrar un debate estratégico que el 15M había empezado ya a intuir, aunque fuera en su etapa de caída relativa.

Un nuevo partido: Vistalegre

La asamblea constituyente del partido, que culminó en los días 18 y 19 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid fue la escenificación de la necesidad de que Podemos se articulara en torno a una estrategia y, a la vez, de que este sería un asunto reservado a la dirección del partido. Inaugurada en palabras de Carolina Bescansa, con la intención de «hacer el partido político más deliberativo de la historia», la asamblea vino precedida por un proceso de más de un mes de presentación de los textos orientados a definir las líneas rectoras de la formación. Los tres documentos que se debían aprobar eran relativos al código ético, el

²⁷ Véase Íñigo Errejón Galván, *El 15-M como discurso contrahegemónico*, *Encrucijadas Revista Crítica de Ciencias Sociales*, núm. 2, 2011, pp. 120-145. Y también la entrevista al propio Errejón de «verificación de hipótesis»: «Pateando el tablero: “El 15M como discurso contrahegemónico” cuatro años después (Entrevista con Íñigo Errejón)», *Encrucijadas Revista Crítica de Ciencias Sociales*, núm. 9, 2015 disponible en: <http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/article/view/165>

modelo de organización y a la estrategia política. Y ciertamente, desde finales del verano, la adaptación de las herramientas tecnopolíticas, especialmente la creación del espacio de voto y deliberación Plaza Podemos, facilitaron la discusión de propuestas y la formación de «equipos de trabajo». En un largo proceso de negociación, estos equipos definieron los documentos finales que se presentaron a votación en Vistalegre. Igualmente, la creación de un censo digital abierto a cualquiera permitió que en pocas semanas Podemos contase con más de 100.000 inscritos, si bien con la única capacidad efectiva de participar virtualmente en las consultas del partido.

Como era previsible, la discusión más importante se dirimió en torno a la modalidad organizativa: se jugaban aquí el marco y las reglas de los procesos de decisión, así como el papel de los distintos sectores implicados. En términos generales, en los previos a Vistalegre existían tres sensibilidades con capacidad de articulación de propuestas. De un lado, el equipo de Pablo Iglesias sostenía la necesidad de apostar por un esquema de organización decididamente centralista —jacobino, sería una palabra más adecuada— que concediera plenos poderes a una dirección con plena autonomía para defender mediática y electoralmente el proyecto de Podemos. Desde esta perspectiva, los criterios asociados típicamente a una organización democrática eran considerados un engorro, un lastre en una carrera que se preveía corta y orientada a las generales. De otro lado, impulsada principalmente por Izquierda Anticapitalista y una parte de los círculos, se determinó una apuesta por un partido poroso, capaz de empujar la movilización y en el que los círculos tuvieran un papel reconocido como asambleas territoriales con capacidad decisiva. Las primeras modalidades de organización discutidas por esta corriente se inspiraban en los viejos partidos socialdemócratas y en el PCI de postguerra: un partido construido a partir de las agrupaciones locales y con un sistema de órganos intermedios elegidos por mandatarios de los elementos de base. Por último, se podía reconocer también una batería de propuestas asociadas a los grupos especializados en democracia digital y que provenían de los ámbitos «tecnopolíticos» ligados al 15M. Sucintamente, este grupo apostaba por facilitar el debate y la decisión digital, para dar forma a un partido radicalmente democrático y abierto a la «ciudadanía». Estas propuestas acabaron por «informar» todo el desarrollo de Vistalegre, y finalmente fueron incorporadas, casi siempre descafeinadas, a los documentos finales.

La asamblea de Vistalegre quedó pronto galvanizada en torno a las dos primeras posiciones, que encabezaban los dos núcleos fundadores: a un lado, el equipo Claro que Podemos, liderado por el grupo Complutense; de otro, Sumando Podemos, resultado de un complejo proceso de negociación de hasta 40 «equipos» y que fue apoyado por millares de personas integradas en los círculos. Esta propuesta, presentada por el eurodiputado Echenique e impulsada por Izquierda Anticapitalista, pretendía reconocer un cierto papel a la democracia interna.²⁸ Establecía la creación de un consejo ciudadano elegido por voto directo a candidaturas individuales, lo que debía garantizar la pluralidad y la representatividad del mismo, la elección por sorteo de un 20 % de sus miembros, la creación de un equipo de coordinación elegido por el consejo y una portavocía colegiada de tres miembros.

Frente a este modelo, Claro que Podemos defendía el centralismo más estricto. Se establecía la figura del secretario general, elegido por los inscritos en el censo. Además de la secretaría general del partido, dotada con amplios poderes, en todas las escalas territoriales se proponía la elección de una figura similar, de tal modo que cada autonomía y cada municipio dispusieran de su propio secretario general, autonómico o municipal. El proceso llegaba al absurdo de elegir secretarios en municipios donde hubiera más de 100 inscritos —recuérdese afiliados «digitales»—. Por debajo del secretario se situaba el Consejo Ciudadano, que a su vez se reproducía a todas las escalas, estatal, autonómica y municipal, y que resultaría elegido en el ámbito territorial respectivo por voto múltiple y aprobatorio —lo que luego se llamaría «lista plancha»—. Por último se establecía un rosario de secretarías dependientes de los consejos y de nuevo a todas las escalas: organización, financiación, participación, análisis político y social, amén de toda clase de órganos sectoriales como derechos sociales, economía, juventud, mujer, cultura.²⁹ La nueva organización prefiguraba la construcción de una amplia burocracia de partido. Su principal novedad residía en el carácter cesarista y plebiscitario del secretario general y del consejo, que dependían únicamente del censo y que podían proponer continuas consultas al mismo sin tener que pasar por la validación de ningún organismo intermedio.

²⁸ El documento está disponible en: https://www.reddit.com/t/podemos/comments/2ji7uy/sumando_podemos_documento_organizativo_final/

²⁹ El documento responde a los «Principios Organizativos de Podemos», disponible en: podemos.info/wp-content/uploads/2015/06/Documento-organizativo.pdf

Galvanizada entre estos dos polos, la asamblea de Vistalegre vino caldeada por los debates previos. Días antes se había dejado caer en los medios de comunicación que en el documento organizativo de Claro que Podemos se incluiría la prohibición de la doble militancia. El veto desplazaba a los socios fundadores de Podemos, Izquierda Anticapitalista, a una extraña posición de «clandestinidad» en la misma organización que habían contribuido a crear. A fin de no avivar la polémica, los anticapitalistas decidieron aceptar su disolución, si así era aprobado en la asamblea. En la misma línea, también antes de Vistalegre, Pablo Iglesias amenazó con dimitir si las propuestas de su equipo no lograban validación suficiente. El gesto era paradójico: mostraba una debilidad gratuita e infundada en un momento en que su visibilidad mediática le hacía insustituible. En el aspaviento ensoberbecido de Iglesias, resonaba la misma amenaza que Felipe González hiciera en el congreso del PSOE de 1979, caso de que este no aprobase su propuesta de que el «marxismo» fuera retirado de la definición del partido. Ya iniciada la asamblea, ante unas 7.000 personas, y al menos otros 20.000 por *streaming*, Iglesias arrojó directamente contra la sala: «El cielo no se toma por consenso: se toma por asalto».

A pesar del juego de declaraciones y de la tentación de muchos a abandonar un espacio que parecía deteriorarse a una velocidad inusitada, la tensión no llegó a la ruptura. Vistalegre transcurrió entre las presentaciones de los documentos de los distintos equipos y las discusiones entre bambalinas de lo que ya eran «diferentes familias». Con tanto público y atención mediática, la predisposición a un debate real era escasa. Y ciertamente salvo en Plaza Podemos, la discusión en prensa fue parca, apenas clara y mucho menos rica en argumentos. La asamblea acabó así de una manera contradictoria. Era prácticamente seguro que los documentos de Claro que Podemos acabarían por ser los más votados, pero entre las «bases» que formaban el grueso del público asistente había un evidente desconcierto, convertido cada vez más en malestar.

Las predicciones se cumplieron. Entre los días 20 y 26 de octubre, más de 112 mil inscritos votaron los documentos propuestos. Los textos combinados de Claro que Podemos obtuvieron el 80 % de los votos; Sumando Podemos se quedó con el 12 %, pero con el 20 % en los sufragios desagregados al documento organizativo.³⁰ En noviembre,

³⁰ En el marco de una práctica que se volvió corriente en aquellos meses, la organización no presentó los votos desagregados por documentos. El control de imagen parecía entonces justificarlo todo. La fuente de esta cifra es por eso extraoficial.

se celebró la votación al Consejo Ciudadano estatal: los 62 nombres de Claro que Podemos salieron sin excepción. Por primera vez, el sistema de «listas plancha» mostró sus verdaderas implicaciones políticas. El voto múltiple aprobatorio permitía seleccionar de golpe una lista completa. En las elecciones al Consejo, la mayoría de los electores votó sin conocimiento alguno de más candidatos que el propio Pablo Iglesias o alguno de los miembros más significados de la dirección, como Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa.³¹ La elección del máximo órgano del partido se había convertido en una mera validación, en un plebiscito de confianza al liderazgo de Pablo y su equipo. Como luego se comprobaría, el sistema de «listas plancha» arrojaba directamente a la irrelevancia todos aquellos votos dirigidos a las listas alternativas. Los consejos serían en su mayoría uniformes y no representativos de las minorías.

Vistalegre consagró al grupo Complutense. De la asamblea salió una dirección uniforme, una organización rígidamente estructurada y una modalidad de validación plebiscitaria. De acuerdo con el documento aprobado, y al tiempo que formalmente se ensalzaba su función como «unidad básica de organización», los círculos quedaron desplazados a un papel de mera comparsa política, relegados a las actividades de propaganda y agitación. El nuevo modelo de partido otorgaba todo el protagonismo a los órganos de dirección, o en su defecto a los cargos electos. Las medidas más elementales de una arquitectura democrática y de contrapesos internos, como la separación de la dirección del partido y de los grupos de representantes electos, ni siquiera estaba contemplada, en la previsión de que ambas funciones coincidieran en las mismas personas, como de hecho se solapan en todos los partidos oligárquicos. No sólo la militancia activa no tenía ningún reconocimiento efectivo en la organización, sino que esta parecía condenada a ser engullida por los aparatos de partido y desaparecer. Los argumentos repetidos que aconsejaban evitar el «ideologismo» y el «moralismo» de los activistas y favorecer la participación de aquellos que no tienen tiempo —por responder a otras obligaciones, como el cuidado de hijos o ancianos—

³¹ El consejo formado por 61 miembros más Pablo Iglesias, quedó compuesto sobre la base de la confianza personal y de viejas afinidades en torno a la penta dirección constituida entonces por el propio Iglesias, Carolina Bescansa, Errejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero. Casi la mitad de los miembros del consejo eran profesores, doctorandos y estudiantes de dos facultades de la Universidad Complutense de Madrid, Ciencias Políticas y Filosofía. La representación territorial, muy menguada, tampoco mostraba mayor diversidad. Ningún miembro crítico y ninguno salido de la emergente militancia de los círculos, más allá de las conexiones oficiales.

apenas podían esconder que la apuesta de Podemos no pasaba por construir organización, o lo que es lo mismo, por aprovechar la enorme energía que se había acumulado en forma de expectativa y capacidad de trabajo en los círculos.³² En aquel momento, el emergente sector crítico señaló que Podemos había perdido la oportunidad de construirse como un «partido-movimiento», una modalidad de organización ajustada a la crisis de los partidos tradicionales. Los grupos que apostaban por los mecanismos de participación digital también quedaron decepcionados. Las propuestas que podían traducirse en consulta interna quedaron sometidas al umbral del 10 % de adhesiones de un censo que crecía rápidamente y que sólo requería dejar el número del Documento Nacional de Identidad y un teléfono móvil.

En Vistalegre, Podemos quedó así configurado como una constelación de aparatos político-burocráticos, que crecería al mismo ritmo que la toma de posiciones institucionales. Al fondo del escenario permanecía una gran masa de simpatizantes, cada vez más impotente. Algunos hablaron entonces de una modalidad de «partido empresa», y ciertamente, existía una extraordinaria correspondencia con una estructura que hacía descansar su legitimidad en su competencia para el marketing electoral.³³

El documento político de Claro que Podemos aprobó como estrategia oficial del partido expresaba estas intenciones sin ambigüedad. En sus primeros párrafos se leía: debemos «evitar las lógicas de concesiones a partes, contentar a grupos y evitar polémicas». El marco de la «hipótesis Podemos» se dirimía en «una ventana de oportunidad profunda, pero estrecha y no eterna», que había que aprovechar antes de que las fuerzas del régimen tuvieran capacidad de recomponerse y de cerrar la «crisis de expectativas» en el marco de «un país ya disciplinado, que asuma el empobrecimiento y la exclusión de amplias capas sociales». La modalidad de organización, una *máquina de*

³² Ciertamente entre los activos del grupo Complutense no se encontraban muchos organizadores políticos o sociales. Al mismo tiempo se temía que una base organizada por sectores activos (como los anticapitalistas o grupos provenientes de los movimientos sociales) pudieran construir una contraorganización frente a los órganos elegidos de forma plebiscitaria.

³³ Seguramente fue Juan Domingo Sánchez Estop, intelectual y filósofo integrado entonces en Podemos en el círculo de Bruselas, quién acuñó por primera vez el término «partido empresa». La crítica se inspiraba en la creciente asimilación de los modos de Podemos a la aparición en televisión: una suerte de experimento rebajado, y desde luego distinto en orientación, al que probara la Forza Italia de Berlusconi en la crisis del sistema de partidos italiano a mediados de los años noventa.

guerra electoral, en palabras de la dirección, se hacía en clara oposición a las posiciones militantes y movimentistas consideradas incapaces de comunicar con la «mayoría». En el documento político, y en general en la estrategia del partido, se reconocía el original protagonismo de Íñigo Errejón. La idea de fondo consistía en dar total prioridad a la dimensión comunicativa en un *blitzkrieg* (guerra relámpago) electoral conducente a la toma del Estado. La operación se dirimía como un juego de seducción de la «mayoría social» o en los términos de fase: un Podemos capaz de «transversalidad».

La preponderancia probada de la «comunicación política» y las inspiraciones teóricas de Errejón, llevaron a la dirección de Podemos a otorgar una relevancia principal al discurso, entendido como el ámbito privilegiado de construcción de las identidades políticas. Según el nuevo santón intelectual del grupo —el anglo argentino Ernesto Laclau—, en sociedades desestructuradas, el populismo podía emplearse como estrategia retórica para la construcción de «hegemonía». La posibilidad de la misma se encontraba en la galvanización de las demandas aisladas en torno a un «significante vacío», capaz de reunir —en una suerte de «cadena equivalencial»— las demandas antes dispersas. La posibilidad «contrahegemónica» que había intuido en el 15M se manifestaba ahora en la posibilidad de que Podemos se convirtiera en el instrumento para la construcción de un nuevo «pueblo» en oposición a la «casta». ³⁴ Análisis pobre que pronto tendría que enfrentarse con una sociedad mucho más plural y compleja, pero que resultaba suficiente para explicar el rápido avance demoscópico de Podemos y justificar los obvios costes políticos de Vistalegre.

Tras las vacilaciones del verano, Vistalegre confirmó la «hipótesis Podemos» sobre la promesa de lograr la mayoría electoral, y como su sombra implícita, la toma del Estado, única palanca consistente para un proyecto de transformación en una sociedad analizada como pulverizada e impotente. En la nueva contabilidad de la máquina electoral, el lenguaje militante y los ritualismos de la izquierda engrosaron la columna de los «pasivos». En el paquete con destino al museo arqueológico fueron incluidos los movimientos sociales, acusados de «reactivos»; la izquierda, considerada «obsoleta»; y la

³⁴ Las ideas principales de Errejón en esta fase se pueden encontrar en la conversación entre Íñigo Errejón y Chantal Mouffe, *Construir pueblo. Hegemonía y radicalización de la democracia*, Barcelona, Icaria, 2015 (mayo).

militancia de cualquier tipo, tildada de «elitista».³⁵ El componente fuertemente intelectualista de la «hipótesis Podemos» privilegiaba, por contra, la capacidad de manejo del «discurso» que, como una ciencia esotérica, permitía a unos pocos el acceso a la «mayoría». Después de Vistalegre, Podemos se convirtió en un intenso campo de pruebas de «resignificaciones» que no se habían probado en el 15M. Así, por ejemplo, la reivindicación de la «nación», resumida en el sucinto eslogan «la patria es la gente». O en el mismo orden, el empleo del color blanco en los «textiles» de todos los portavoces de Podemos, símbolo de pureza inmaculada de una formación que provenía de la «gente común».³⁶

Primera crisis: crecimiento rápido, erosión rápida (invierno de 2015)

«Atreverse a vencer» había sido la consigna de la dirección en Vistalegre y un llamamiento a todos los sectores activos a que dejaran hacer a Podemos sin incordiar demasiado. Los tres meses que siguieron a la asamblea fueron la marcha triunfal de la nueva dirección. Las intervenciones y entrevistas de Pablo en las cadenas de televisión batieron récord de

³⁵ Valga aquí la clarísima respuesta de Iñigo Errejón a la pregunta «Cómo creéis que podrían ayudar a gobernar estos movimientos?» del periódico *Diagonal*: «Si te soy sincero creo que poco, porque están instalados en una cultura de la resistencia que no les obliga a mancharse con la discusión concreta de cómo se harían las cosas. Eso significa que para que las organizaciones políticas y sociales puedan ser útiles para gobiernos populares de transformación tienen que convertirse en semilleros de ideas y de formación técnico-práctica concreta, es decir, tienen que formar a gente que sea capaz de gestionar en sentido contrario del enemigo y mejor que el enemigo. Está esto de “para cuando se alcance un gobierno vamos a necesitar movimiento sociales que lo apoyen en la calle”. Es complicado, porque muchos de los problemas a los que se va a enfrentar ese gobierno no se dirimen luego con movilizaciones en la calle. Los problemas de tener cuadros para una Administración pública que funcione para los de abajo, de tener expertos que no te digan “esto no se puede hacer”. En las experiencias de los gobiernos populares latinoamericanos hemos visto que en algunas de las problemáticas claro que ayuda tener sociedad civil organizada, pero hay otras en las que no mucho. Si resulta que hay un fondo buitre que quiere poner a tu gobierno de rodillas, una dinámica más alta de movilización social es verdad que te puede sostener, pero no te solventa la guerra de posiciones que tiene que librar el Estado. La ocupación de terreno para ir haciendo poder popular y deshaciendo poder oligárquico requiere dar la pelea en el Estado, en la gestión y en la administración. A menudo le hemos prestado menos atención a ese tipo de formación, y el enemigo no. Necesitamos cuadros político-técnicos que aseguren que las posiciones conquistadas no sólo se conquistan, sino que construyen irreversibilidad». Entrevista a Iñigo Errejón, 7 de noviembre de 2014. Disponible en: <https://www.diagonalperiodico.net/panorama/24573-estamos-orgullosos-la-oligarquia-espanola-tenga-miedo.html>.

³⁶ Entre las consignas de estilo que por esos días se dieron a los portavoces de Podemos estaba también la de esconder los tatuajes, no presentarse con minifaldas o pantalones cortos y tener por lo general una presencia conveniente y aseada. Sencillamente se trataba de impostar una imagen de buenos chicos.

audiencia. El CIS de enero confirmó a Podemos como primera fuerza en intención de voto directo y anunció claramente al *sorpasso* del PSOE en voto estimado. El 31 de enero de 2015, Podemos se atrevió con una demostración pública, la llamada Marcha del Cambio, que reunió probablemente a más de 100 mil personas en Madrid. Bajo el eslogan «la sonrisa va a cambiar de bando», y el grito entre irónico y mecánico «tic, tac, tic, tac», el reloj imaginado de Podemos descontaba el tiempo final de la casta. Apuntalando este meteórico ascenso, el 21 de enero, Syriza ganó las elecciones en el parlamento griego, lanzando un claro desafío a la Troika: no aceptamos las condiciones del rescate.

Aquellos días del ascenso imbatible de Podemos duraron poco, no obstante. A mediados del mes de enero, la dirección del partido se enfrentó a una gigantesca campaña mediática que apuntaba a la línea de flotación de su imagen pública: su inmaculada inocencia política. En las primeras semanas del invierno salieron a la luz pública dos pequeños «escándalos». Fueron dirigidos como torpedos contra la línea de flotación de Podemos. En diciembre se dio a conocer que Errejón estaba contratado a tiempo completo por la Universidad de Málaga para realizar una investigación sobre vivienda en la región. Aunque el hecho de que no trabajara en Andalucía no suponía irregularidad alguna —estaba contemplado que pudiera trabajar en otra localidad—, era obvio que no estaba trabajando para la Universidad con la dedicación convenida.

La publicidad del chanchullo de la investigación de Errejón —una práctica, por otro lado, corriente en una universidad marcada por el nepotismo y la mediocridad—, siguió a la de la declaración de la renta de Juan Carlos Monedero. El profesor había recibido un total de 425 mil euros por sus trabajos de asesoría de siete años en Venezuela. Lo que más interesaba a la prensa no era ni la cantidad, ni que hubiera una irregularidad con hacienda, sino las conexiones entre el grupo promotor de Podemos y Venezuela. Antes de Podemos y en sus primeros pasos, Iglesias y los miembros más significados de la organización habían defendido la labor de Chavez, el vínculo político con este país y en general con los nuevos gobiernos de la región. Sin duda, las donaciones de las labores de asesoría habían servido para financiar al grupo de La Tuerka. Y era también obvio que esto podía ser defendido en términos políticos frente al oligopolio mediático. Pero ante la ofensiva mediática, la dirección de Podemos decidió no probar una defensa pública. De acuerdo con la nueva orientación «transversalista» de la organización, Venezuela aparecía como una posición especialmente

delicada. La vinculación que trataron de demostrar casi todos los grupos de prensa, entre el populismo venezolano y el nuevo populismo de Podemos, se tradujo en la dimisión de Monedero. Empujado, por no decir purgado, por la emergente fracción podemita organizada en torno a Íñigo Errejón, Monedero fue la primera pieza que se cobraron las viejas élites político-mediáticas.³⁷

Podemos había encajado, por primera vez, serios golpes en el terreno que consideraba «estratégico» para su proyección político-electoral. La irrupción de los morados, y sobre todo la posición política de la dirección de Vistalegre, se había fundado en la capacidad virtuosa de convertir cada intervención en las cadenas de televisión en altavoz de un discurso de protesta e indignación. El error elemental de este cálculo, siempre demasiado acrítico y optimista, estaba en una obvia sobrevaloración de la «comunicación política»: el hecho de que la sola presencia de Iglesias tuviera un valor económico para las cadenas, que duplicaban o triplicaban sus audiencias cuando invitaban a alguno de estos nuevos políticos elevados a la condición de estrellas mediáticas. Ciertamente en la decisión de las cadenas de abrir los platós a Podemos, además de la mediación de un puñado de periodistas convencidos, había una apuesta política por canalizar el «voto de la protesta», y en buena medida de intentar gobernarlo.³⁸ La explicación «económica» difícilmente podía explicar las decisiones políticas de unas empresas que dependían del favor político —en forma de licencias y publicidad institucional—, hasta el punto de determinar una parte sustancial de sus beneficios. La dirección de Podemos aprendió algo del revés mediático, durante los meses siguientes las apariciones de Pablo se hicieron mucho menos prolíficas y mucho más calculadas. Al mismo tiempo, Podemos se hizo

³⁷ La dimisión resultaba paradójica en un grupo que debía buena parte de su aprendizaje a los vínculos con los nuevos gobiernos latinoamericanos. En la misma línea, era también curioso que fuera Monedero quien abandonara sus funciones cuando había sido el único que había declarado directamente sus diferencias con Chávez y con el proceso bolivariano envenenado por la corrupción, la mentalidad rentista del país, el clientelismo político y el excesivo personalismo del liderazgo de Chávez. En la «purga» de Monedero pesó definitivamente el carácter y la singularidad del profesor, propenso a las declaraciones recurrentes y poco «calculadas».

³⁸ Apenas sabemos cómo se organizó la respuesta de las élites del régimen al fenómeno Podemos. En entornos cercanos al PSOE, se elaboró la idea de una conspiración oculta tramada entre La Sexta, Cuatro y elementos afines al PP, que facilitando la entrada de Podemos en los platós acabarían por minorizar a los socialistas. Es una hipótesis descabellada. Pero lo cierto es que durante aquellos meses hubo reuniones entre propietarios de estos medios, como el fallecido Jose Manuel Lara, y asesores y seguidores políticos del más alto nivel con el objetivo de manejar o gestionar el «fenómeno Podemos».

«más plural», el número de sus «tertulianos» se multiplicó, aunque al precio de perder en calidad y frescura y depender cada vez más del esquematismo de los argumentarios que la organización fabricaba ya con regularidad.

Pero sin duda, el golpe maestro al rápido ascenso de Podemos vino de la mano la irrupción de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera se había formado en Cataluña en el año 2006, a partir de una plataforma de intelectuales (Arcadi Espada, Félix de Azúa, Albert Boadella), empeñados en enfrentar la hegemonía catalanista de CiU y el PSC. En sus primeros años, tuvo una vida errática, pero en las elecciones autonómicas de 2012 se consolidó como el partido catalán del constitucionalismo español frente al «desafío soberanista».³⁹ Ciudadanos pretendía ocupar el terreno de la regeneración democrática;⁴⁰ terreno abonado por la experiencia previa de Unión de Progreso y Democracia (UPyD). Este último se fundó en Euskadi en el año 2007, también con apoyo de distinguidos intelectuales del régimen (como Fernando Savater o Mario Vargas Llosa) y también de la mano de un vago proyecto de renovación democrática de España, enemigo interno mediante, en este caso ETA. No obstante, UPyD, fuertemente impregnada por los hábitos autoritarios y el estilo «viejo» de la ex-socialista Rosa Díez, difícilmente podía servir como el «Podemos de derechas», al que aspiraban una parte de la clase empresarial tras las elecciones de mayo de 2014.⁴¹ En aquellos comicios, los de Rosa Díez quedaron por debajo de Podemos, con cuatro eurodiputados después de atravesar más de seis años de pruebas electorales. Apenas se podía esperar mucho más de este experimento.

Apuntalado en un discurso de «ciudadanía», «transparencia» y «democracia», el partido de Albert Rivera parecía mejor preparado para ocupar el nicho de la regeneración. Con liderazgos jóvenes, diseñados para encajar en el molde imaginario de una clase profesional dinámica y capaz, Rivera y los suyos se presentaron en televisión como algo

³⁹ Término común en la prensa española para referirse al «Proceso soberanista», promovido en los meses posteriores al 15M por una constelación social amplia, en la que se reconocía desde la experiencia radical de las CUP, hasta las organizaciones de la «sociedad civil» catalana próximas a los partidos tradicionales catalanistas, ERC y sobre todo CiU.

⁴⁰ Una historia crítica y aguda de esta formación se puede leer en Josep Capabadal y Francesc Miralles, *De Ciutadans a Ciudadanos. La otra cara del neoliberalismo*, Madrid, Foca, 2015.

⁴¹ Son términos del presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, al poco de las elecciones de mayo. Reivindicaba así la formación de «un Podemos» dirigido a la iniciativa empresarial y el desarrollo económico.

completamente ajeno a los viejos hábitos de la política profesional. Eran el «Podemos bueno», según la fórmula inteligente y desparpajada de la lideresa del PP, Esperanza Aguirre: la imagen y el proyecto de una regeneración democrática que no tocara ninguno de los pilares fundamentales del régimen político, sobre la base del nacionalismo constitucional y la política de orden y gestión de los viejos partidos. Sus resultados en las europeas fueron prometedores, dos eurodiputados. Poco después, Rosa Díez, con sus reiteradas negativas a la fusión de ambos partidos, acabaría por resolver la cuestión de qué siglas acabarían por monopolizar el voto de la «regeneración».

Jaleado por los medios de comunicación, Ciudadanos supo aprovechar la oportunidad. En el barómetro del CIS de abril de 2015, Albert Rivera irrumpió como opción electoral hasta acumular el 13,8 % del voto estimado. Al mismo tiempo, Podemos perdió más de siete puntos respecto al mes de enero: pasó del 23,9 al 16,5 % del votos estimado.⁴² La «cocina demoscópica», la labor de los medios y las debilidades del nuevo partido habían logrado, al fin, fabricar una contratendencia al avance incontenible de la opción 15M.

Mientras las cosas se torcían en los medios y en las encuestas, dentro de Podemos, el malestar generado en Vistalegre empezó a convertirse en crítica pública. En paralelo, el modelo de organización basado en la multiplicación *ad infinitum* de secretarías y consejos desató una espectacular tormenta de luchas fraccionales que se pudo ver desde muy lejos de la organización morada. Como en todo partido oligárquico también en Podemos había surgido un sector crítico, articulado en torno a los anticapitalistas. Pero esta división no fue el elemento determinante que destrozaría la incipiente organización local del partido. Vistalegre dio lugar a una oleada de abandonos y desencantos que no pararía de profundizarse en el siguiente año y medio. La elección de los consejos municipales a finales de diciembre y de los autonómicos a principios de febrero agudizó la tendencia, y literalmente reventó la organización a nivel municipal.

El método de organización elegido en Vistalegre implicaba la elección de consejos locales según el sistema probado de las «listas plancha». El resultado consistió en la formación de multitud de candidaturas enfrentadas entre sí: hasta 7.000 para los 769 municipios en los que

⁴² Véase los barómetros del CIS de enero de 2015 y abril de 2015, en www.cis.es

Podemos tenía presencia. Como estaba previsto, el sistema de lista completa y voto aprobatorio desechó el voto recibido por la inmensa mayoría de estas candidaturas, que quedaron sin ninguna representación. Frente a la organización más o menos caótica pero basada en la colaboración de los meses previos, la forma de elección de los órganos de gobierno fomentó irremediablemente la competencia y el enfrentamiento. Y fue la causa de que la confianza interna se convirtiera en un bien cada vez más escaso en los niveles más bajos de la organización. Las primarias enfrentaron a grupos de reciente formación y en su mayoría sin experiencia política previa; las primarias acabaron por destruir la dinámica asamblearia que había estado en los orígenes de Podemos. El premio «del todo» a la lista mayoritaria —en forma de reconocimiento orgánico como «consejero» y posteriormente quizás como candidato— animó luchas interminables por cuotas de poder a la postre ridículas.

Vistalegre promovió así un incendio devastador, alimentando las pequeñas vanidades y las ambiciones más mezquinas. En los lugares con mayor madurez y trayectoria, en los que los círculos estaban vertebrados por la trayectoria de las asambleas que procedían de la experiencia del 15M se logró, mal que bien, salvar la situación. Pero en la mayor parte de las localidades, en las que no existía la masa crítica capaz de volver a articular una dinámica virtuosa que restaurase la capacidad de cooperación interna, Podemos quedó reducido a un grupo de amigos, ahora proclamado «consejo ciudadano». Un espectro burocrático sin implantación en aquellos territorios donde las realidades activas rehusaron pasar por el aro de Podemos.

En las escalas más pequeñas, no se asistió por tanto a ninguna discusión política significativa. La organización quebró principalmente debido a una arquitectura organizativa que bloqueaba toda dinámica de autoorganización. No obstante, en los ámbitos territoriales mayores, principalmente en los consejos autonómicos se repitió la misma divisoria que se había producido en Vistalegre. La dirección presentó sus equipos «Claro que Podemos», constituidos según criterios de confianza y afinidad con la dirección. En demasiadas ocasiones, este proceso de reclutamiento se alimentó de personas políticamente mediocres y sin legitimidad o capacidad de trabajo real sobre los territorios. Del lado «crítico», se presentó una variopinta colección de candidaturas que provenían de las alianzas tejidas en torno a Sumando Podemos y, en algunos casos, de grupos y movimientos con base territorial. Seguramente por eso, el resultado de las primarias a los

consejos autonómicos no fue, en conjunto, favorable a la dirección. En La Rioja, Baleares y Navarra el «sector crítico» fue capaz de vencer a las candidaturas con el aval de Pablo Iglesias. En Aragón y Andalucía, los eurodiputados Echenique y Teresa Rodríguez, que habían encabezado las propuestas Sumando Podemos se confirmaron como secretarios generales de sus respectivas autonomías. En Asturias, una candidatura extraña a Claro que Podemos, pero con fuerte implantación territorial consiguió la secretaria para Daniel Ripa. Desde ese momento, Podemos Asturias quedó constituido como una realidad territorial singular y en buena medida autónoma a la dirección madrileña.⁴³ En Madrid, los críticos encabezados por el también eurodiputado Miguel Urban llegaron a amenazar la candidatura liderada por el ahora oficialista Luis Alegre. Obtuvieron en conjunto más votos y más consejeros que los CQP, pero no la secretaria general. A nivel autonómico, Podemos quedó conformado de una forma bastante dispar al modelo jacobino previsto en Vistalegre. El arraigo territorial y la necesidad de construir organización con los activos locales, salvaron a la organización de convertirse en el rígido canal uniforme que la dirección había previsto en la asamblea constituyente. A la postre, fue esta diversidad y el mínimo arraigo territorial que se logró en estos comicios lo que dotó a Podemos de cierta flexibilidad y pluralidad orgánica.

Las batallas internas, el creciente desgaste de la organización, la primera ola de desencanto pero sobre todo la pérdida de empuje en las encuestas, convertidas en el único criterio de verdad para la dirección, desataron las primeras dudas respecto a la hipótesis de Vistalegre. También en estos meses se produjeron los primeros amagos de fisura en la dirección. Desde el Congreso Constituyente, Podemos siguió una política de comunicación que se quería coherente con las ideas de «transversalidad» y «centralidad». Traducido a términos de «discurso», se trataba de afirmar y profundizar en la imagen de moderación de un partido, que rápidamente estaba perdiendo los perfiles más ásperos y críticos —también frescos y originales— de los primeros tiempos. En términos políticos, la

⁴³ Con el nombre de Somos Podemos, esta candidatura había sido animada por un sector de activistas vinculados al Centro Social La Madreña de Oviedo, así como a organizaciones del «asturianismo» político. El propio Daniel Ripa, de origen oscense, provenía del aragonesismo político, antes de su militancia en Asturias. La dirección de CQP consciente de su incapacidad para enfrentar nada semejante en la región, mantuvo con Somos Podemos una actitud que basculó entre la colaboración y el desdén.

demanda de proceso constituyente, presente de forma continúa en las elecciones europeas, no desapareció, pero fue progresivamente sustituida por un discurso que valoraba los «logros» de la Transición y que incluso se reconocía en la victoria socialista de 1982. De acuerdo con el guión del joven estratega Íñigo Errejón, el nuevo «relato» anudaba una «narrativa» en ocasiones rayana en lo paródico. Centrado en una supuesta traición al pacto social de la Transición por parte de los grandes partidos, la restauración del mismo era ahora el gran proyecto de Podemos.⁴⁴ Podemos debía concitar las mismas ilusiones de «cambio» que el PSOE en 1982: el partido del cambio se estaba convirtiendo en el proyecto de afirmación de lo mejor de la Transición, antes que de una segunda Transición.

En la misma línea, se fueron abandonando las reivindicaciones más sólidas como la Renta Básica, en favor de vagos proyectos neokeynesianos, fundados en una improbable reindustrialización del país y en una paradójica reinención de la socialdemocracia.⁴⁵ Con una publicidad intencionada, la dirección de Podemos concertó una serie de reuniones con los viejos poderes del país: grandes banqueros, empresarios, viejos líderes del PSOE, etc. La consigna «hemos venido a patear el tablero», pasada por el tamiz de la «transversalidad», transmutaba en «sentido de Estado». Se quería mostrar solvencia, capacidad de gobierno, seriedad, responsabilidad. Pero este deslizamiento hacia el «centro» acabó por enajenar de Podemos no sólo a la izquierda, sino también a importantes sectores de sensibilidad quincemayista, que cada vez se sentían menos reconocidos en el «tacticismo» de la dirección. No importaba. Desde la perspectiva de la hipótesis Podemos este era «voto consolidado». La respuesta era «hay que sumar a los que faltan»

⁴⁴ En el Instituto 25 de Mayo, creado como el *think tank* del partido y controlado por afines a Errejón, se cocinó lo principal de este discurso, no muy profundo ciertamente, pero protegido de la crítica por sus ínfulas estratégicas. Para conocer la vulgata de la hipótesis Errejón merece la pena leer los trabajos de la Fundación y especialmente su revista *La Circular*.

⁴⁵ Así a finales de noviembre, se presentó la propuesta «Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida». Con forma programática, la propuesta económica de Podemos, en lugar de ser el resultado de los trabajos de los expertos de la organización, que trabajaban en los círculos sectoriales especializados en la materia, como el de Economía, Ecología y Energía (3E), fue encargada a dos estrellas de las ciencias sociales: Vicenç Navarro y Juan Torres. Ambos eran conocidos por sus posiciones post y neokeynesianas. Podemos prefirió una vez más asegurar una posición en el terreno de lo que ellos consideraban el *mainstream* alternativo, que un análisis riguroso con propuestas al mismo tiempo realistas y de ruptura en una época de crisis del empleo y de irreversible debacle de la socialdemocracia.

La prueba de realidad vino con las elecciones andaluzas de marzo de 2015. Los resultados estuvieron muy por debajo de lo esperado. En una plaza difícil, en la que el peso del PSOE tenía una densidad histórica casi rocosa, sedimentada en más de tres décadas de gobierno autonómico y por sólidas tramas clientelares, Podemos no alcanzó el 15 % de los votos, 15 diputados sobre 109. IU tampoco fue barrida y mantuvo el 7 % de los votos, y Ciudadanos sin ningún peso en la región alcanzó el 9 %. El PSOE repitió una holgada mayoría con el 35 % de los votos. Su líder regional, Susana Díez, apoyada por la viscosa dirección histórica del partido —Felipe González a la cabeza—, jugó las cartas de un izquierdismo deslavazado y vacío, aderezado con la repetición infinita de «andaluces y Andalucía», añadidos a la imponente imagen de un embarazo que mostraba tanto en platós de televisión como en mítines multitudinarios. Teresa Rodríguez, líder de Podemos en la región y militante de anticapitalistas, logró no obstante mantener un perfil propio en una campaña dirigida contra sus propias posiciones.

Los resultados autonómicos no podían explicarse por la «excepción andaluza», que con variaciones a favor del PP o del PSOE, podían reproducirse en las dos Castillas, Extremadura y Galicia. Algo en la hipótesis Vistalegre estaba fallando, y ese «algo» apuntaba a los significados de la palabra centralidad. La aspiración de «transversalidad» diseñada principalmente por Errejón y sus colaboradores tenía su eje de rotación en un imaginario suspendido en las ideas de moderación, responsabilidad y cambio, pero ya «sin ruptura». Sin muchas mediaciones, el país imaginado, con el que trabajaba el discurso «populista», se articulaba en torno a la nostalgia de los presuntos «años dorados» de las clases medias españolas, aquellos de las primeras legislaturas socialistas. En este «relato» influía también cierto sesgo de clase de la mayor parte de los discípulos de Errejón. En estos meses, este grupo nutrido principalmente por estudiantes, doctorandos y profesores de las facultades de políticas y filosofía de la Universidad Complutense acabó por constituirse como fracción dentro de la dirección.⁴⁶ Sin más experiencia previa que los colectivos universitarios y las mezquinas peleas departamentales, entre los creyentes del nuevo «populismo» primaba un origen social de clase

⁴⁶ Por aquel entonces se encontraban en línea con Errejón la mayor parte de los integrantes de Juventud sin Futuro, que entraron en el proceso de Podemos, así como una serie de intelectuales de «rango medio» integrados en el Consejo Ciudadano Estatal como Eduardo Maura, Germán Cano y Jorge Lago.

media profesional, e incluso de vieja casta socialista. Por experiencia —por la propia inconsistencia de su propia politización—, los nuevos aspirantes a formar la nueva clase dirigente apenas podían imaginar un país que no fuera la proyección de su propio contexto social.⁴⁷

Y sin embargo, entre estas «imágenes sociales» de la supuesta centralidad y el votante «medio» de Podemos existía un marcado contraste. Los estudios demoscópicos parecían demostrar que el perfil del votante potencial de Podemos no estaba en el «centro», sino en otros lugares. De un lado, los jubilados y los mayores, en su inmensa mayoría, tenían pocas simpatía por Pablo Iglesias y apenas estaban en condiciones de comulgar con el cambio político que había abierto el 15M. Podemos tampoco era el partido de las élites profesionales, los altos funcionarios y los directivos de empresa; ni desde luego de las clases medias tradicionales, lo que con un lenguaje viejo definiríamos como «la pequeña propiedad y/o la pequeña producción». En estas categorías su implantación era casi residual, y así mismo entre los descontentos de las clase medias profesionales (por cuenta propia), Podemos estaba siendo sustituido por Ciudadanos.

En aquellos meses, y en realidad durante todo el ciclo, Podemos fue el partido preferido por los estudiantes, también de forma casi mayoritaria por los trabajadores manuales cualificados —el único segmento laboral con niveles de sindicación significativos— y por los desempleados. En estas dos últimas categorías, así como entre los obreros sin cualificación, el voto al PSOE era similar o superior al de Podemos. El único perfil sociológico que podía apoyar la conjetura de una transversalidad «centrada» en las clases medias estaba en la fuerte presencia de Podemos en aquellos segmentos de las clases medias en proceso de proletarización —«personal administrativo y de servicios» y «profesionales por cuenta ajena»—, y especialmente en sus segmentos más juveniles. La fractura generacional era, en el caso español, fractura de clase, ruptura de los mecanismos de

⁴⁷ Seguramente este perfil de aspirante a formar parte de la «clase dirigente» se podía contar por centenares sólo en Madrid. Entre estos nuevos cuadros, «liberados» en la emergente burocracia de Podemos, se encontraban hijos de altos cargos socialistas (algunos ministros), altos funcionarios y profesores universitarios. Mayoritariamente eran o vecinos o hijos recién emancipados del arco suburbano del noroeste de la región metropolitana, formado por poblaciones como Pozuelo, Aravaca, Majadahonda o Las Rozas, municipios en la lista de mayor renta per cápita de todo el país, y todos ellos cercanos al campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid, donde se encuentra la Facultad de Políticas de esta Universidad.

reproducción clase.⁴⁸ Eran los mismos sectores de las clases medias «desclasadas» que habían protagonizado el 15M y experimentado formas de politización que no terminaban de acoplarse con la moderación, el sentido de Estado y el nuevo «patriotismo» de Podemos. Con los datos en la mano, Podemos era el partido de la crisis: de los más castigados, de los segmentos populares, de lo que quedaba de clase obrera, de los estudiantes «sin futuro» y de las clases medias en proceso de descomposición. Hacer un discurso de moderación y responsabilidad, a rebufo de la ola del 15M, sin tratar de estirar la situación política, aunque sólo fuera en términos discursivos, era sinónimo de desmovilizar a una base social que la dirección parecía conocer sólo de forma parcial.

En la primera crisis seria de la organización, la discusión en prensa que se estaba alimentando desde sectores de movimiento y a veces dentro de los márgenes de Podemos acabó por alcanzar a la dirección. Fue un amago de debate público. En varias ocasiones Pablo Iglesias criticó abiertamente la estrategia populista encabezada por Íñigo Errejón.⁴⁹ La respuesta venía también de los temores de Iglesias al avance de la «fracción populista», que copaba la siempre creciente burocracia de Podemos. Desde hacía meses, el secretario general había tratado de organizar a un grupo de fieles colocados en cargos de responsabilidad del partido. Alimentada por el flujo continuo de antiguos militantes de Izquierda Unida (como Irene Montero, Tania Sánchez o Rafa Mayoral) con los que Iglesias había compartido trayectoria, esta corriente «pablista» traía consigo la vieja cultura militante del PCE, una suerte de eurocomunismo mal reciclado, que apenas dejaba escapar los vicios del carrillismo congénito al comunismo español. Este combinado de viejos y nuevos elementos se oponía al populismo discursivo, casi postmoderno, de los jóvenes de Errejón. Aunque la crisis no estalló abiertamente, las diferencias entre ambos grupos no dejaron de ampliarse desde entonces.

⁴⁸ Véase, por ejemplo, el barómetro de abril del CIS, y los cruces de voto y simpatía con variables sociodemográficas como la edad o la clase social. Estos nichos sociales del voto a Podemos, con ligeras variaciones, inclinadas por lo general hacia el PSOE e IU, se repiten durante todo el ciclo electoral. Una pequeña explotación de estos datos se puede encontrar en un artículo del autor: «Transversalidad o ruptura. Lo que el CIS enseña a Podemos», *Público*, 18 de mayo de 2015, disponible en: <http://blogs.publico.es/contraparte/2015/05/18/transversalidad-o-ruptura-lo-que-el-cis-ensena-a-podemos/>.

⁴⁹ La declaración más seria en este sentido fue el artículo «La centralidad no es el centro», *Público*, 20 de abril de 2015 (disponible: <http://blogs.publico.es/contraparte/2015/05/18/transversalidad-o-ruptura-lo-que-el-cis-ensena-a-podemos/>), pero desde entonces esta se convirtió en una crítica sostenida del grupo de Pablo Iglesias.

La vía municipalista (mayo de 2015)

Los chicos de la Complutense no fueron el único, ni siquiera el primer «equipo político» que pensó en la necesidad de abordar las elecciones como palanca del «cambio». El Partido X le antecedió en un año, si bien con mucho menos éxito. Casi en paralelo también, desde finales de 2013, se empezaron a formar distintos equipos locales con el fin de afrontar las elecciones a aquellas instituciones, que por ser de cercanía, podían resultar más favorables al «método 15M», los ayuntamientos. La cita electoral estaba prevista para justo un años después de las europeas.

No habían pasado dos meses de la presentación del Manifiesto Mover Ficha de Podemos, cuando el 12 de marzo de 2015, se presentó en Madrid el Movimiento por la Democracia (MpD). El acto fue la culminación de un trayecto de más de dos años de encuentros entre activistas de centros sociales y movimientos pre y post 15M. Aunque hasta entonces sus esfuerzos se habían concentrado en el impulso de un proceso constituyente en el país, en su «hoja de ruta» se deslizaba la idea de impulsar candidaturas ciudadanas para las siguientes municipales. Del MpD salió el embrión de la primera propuesta de este tipo para la ciudad Madrid, con el nombre de Municipalia; la iniciativa quedó constituida tras la convocatoria de un amplio plenario el 26 de junio. También las asambleas de las candidaturas municipalistas de Zaragoza y Málaga fueron resultado de la iniciativa de los nodos locales del MpD. En los mismos meses, pero en la ciudad de Barcelona y en torno al grupo de activista de la PAH y de su portavoz Ada Colau, se convocaron los primeros encuentros que condujeron a la constitución de Guanyem Barcelona. Su presentación pública se realizó a finales del mes de junio.

A inspiración de Barcelona y Madrid, empujados por resortes locales autónomos, surgieron procesos similares o parecidos en multitud de ciudades. En otoño de 2014 y en las primeras semanas del invierno de 2015, se dieron a conocer Orense en Común, Marea Atlántica de Coruña, Aranzadi de Pamplona, los Ganemos de Madrid, Zaragoza, Terrasa y otro medio centenar de ciudades, los Sí se Puede de Cádiz, Valladolid, Gijón y algunas poblaciones más, los Somos de Oviedo y Avilés, y así hasta sumar alrededor de trescientas plataformas municipalistas.

Apenas se pueden destacar una serie de elementos comunes para esta multitud de iniciativas. Las metodologías, los actores, las realidades locales eran distintas, a veces radicalmente. No obstante, y especialmente en lo que luego fueron los casos más exitosos, se observan algunas rasgos

que luego resultaron ser sus mejores bazas. El primero, y más obvio, era su arraigo en el territorio. Las candidaturas municipalistas —al menos en las grandes ciudades— fueron creadas y desarrolladas por especies políticas que apenas se incorporaron a los círculos de Podemos. Sus primeros núcleos estaban formados por activistas de los movimientos sociales urbanos, y su primer trabajo fue precisamente el de contactar, hacer saber y construir la legitimidad necesaria del proyecto entre los grupos y colectivos que trabajaban sobre el terreno. Los entornos implicados en el movimiento de vivienda, por la sanidad, en las plataformas contra los grandes proyectos urbanísticos, en la Marea Verde, el nuevo activismo que había surgido del 15M, algunos centros sociales, incluso cierto sindicalismo, fueron o bien los promotores de la iniciativa, o bien los soportes principales de la misma. En el peor de los casos, estaban enterados y mantenían cierta simpatía por el proceso.

Esta composición política presentaba ventajas frente al proceso interno de Podemos. El compromiso con las realidades locales, la prevención con respecto de la institución y la problematización de todo aquello que tenía que ver con el «poder», tan propia del 15M, dio lugar a formas de organización mucho más democráticas y complejas. En muchas candidaturas se remitía constantemente a una dimensión de movimiento que debía acompañar el proceso de «asalto institucional». La asunción de afrontar el reto de unas elecciones y asumir la representación electoral, se pretendía combinar con la construcción de un movimiento, y a veces de un «contrapoder» externo. Esta tensión se hacía manifiesta en la necesidad de atender a la construcción de controles democráticos —«desde abajo» se decía— en todo lo que tenía que ver con la elección, los perfiles y la acción de los representantes. Un trabajo que a la postre tendería a disolverse en la inercia institucional, pero que entonces resultó capital para las candidaturas.

El desarrollo de los embriones municipalistas se hizo, por tanto, de un modo singularmente atento a la organización asamblearia y al desarrollo de las garantías democráticas en el proceso. La formación de comisiones se siguió de interminables reuniones, asambleas y plenarios con el objetivo de redactar y aprobar «códigos éticos», «reglamentos de primarias» a veces extremadamente sofisticados y el desarrollo de programas que por lo general reunieron las principales demandas de los movimientos en la última década. Cuatro o cinco puntos dominaron los programas de las candidaturas: la auditoría de la

deuda,⁵⁰ la remunicipalización de determinados servicios, el desarrollo de un urbanismo no predador, la garantía de los derechos sociales — vivienda y educación infantil principalmente, por ser competencias municipales— y la articulación de mecanismos de democratización y participación en la vida política del municipio. En pocas palabras, se trataba de revertir el secuestro de la democracia local por parte de las mismas élites políticas y corporativas que dirigieron —en su provecho— el ciclo inmobiliario en las escalas locales.

El problema inmediato estaba en dar cuerpo y consistencia al experimento, empezando por el «nombre». El 15M, y en general todo lo que le acompañó, fue notablemente magro y bisoño en términos conceptuales. En el curso del ciclo político, la sucesión de las iniciativas al tiempo que mostró a veces una enorme potencia y creatividad, arrastró una increíble improvisación a la hora de afrontar problemas para los que obviamente no había más que intuiciones, ideas vagas, en absoluto hipótesis políticas capaces de orientar la acción. La recuperación del término «municipalismo» y la acuñación del más complejo «municipalismo democrático», trataron de paliar al menos la incapacidad de nombrar el proyecto en marcha.⁵¹ Al rescatar el término del viejo baúl de la historia —sólo las CUP en Cataluña y algunas experiencias aisladas mantenían memoria de su significado— se probaba una cierta recuperación de la tradición federal, fuente histórica para la recreación de una democracia «de abajo a arriba» —esta consigna del 15M coincidía literalmente con la del republicanismo federal, aunque pocos conocieran su raíz homónima en el siglo XIX—. Con ello se optaba por una solución distinta y alternativa al rápido proceso de verticalización de Podemos. La relación del partido con los «nuevos municipalismos» resultó, de hecho, particularmente controvertida y polémica.

⁵⁰ El saldo vivo de la deuda municipal a 31 de diciembre de 2014 era de 31.722 millones de euros, poco más del 3 % de la deuda pública del Estado. No obstante, muchos ayuntamientos habían rozado la bancarrota durante los años de crisis. En respuesta, el gobierno aprobó a finales de 2013 una reforma de la ley de bases de regulación del régimen local que era la traducción municipal del nuevo artículo 135 de la Constitución. En la práctica la nueva ley reducía el margen de acción económica y las competencias de los ayuntamientos, menguando la ya de por sí maltrecha autonomía municipal.

⁵¹ En marzo de 2014, a fin de servir de guía y orientación para la nueva ola política que entonces ya se intuía, desde el Observatorio Metropolitano publica un panfleto con el título: *La apuesta municipalista. La democracia empieza por lo cercano* (Madrid, Traficantes de Sueños). El objetivo era expresamente dar motivos y referencias históricas al nuevo movimiento municipalista.

En la asamblea de Vistalegre, cuando la levadura del municipalismo ya había cuajado en las principales ciudades del país, la posición de Podemos no pudo ser más táctica y conservadora. El documento político aprobado ratificaba que Podemos no acudiría como tal a las elecciones municipales. En su propia letra, se limitaría a apoyar, y en ocasiones a participar en las «candidaturas de unidad popular» (CUP), siempre y cuando cumplieran «a rajatabla con los requisitos de la nueva política, la transparencia, la regeneración y las posibilidades de victoria y cambio».⁵² La elección por parte de Podemos del término «unidad popular» se inspiraba en marcos «populistas», de nuevo con origen en Latinoamérica, especialmente en la UP chilena, pero no dejaba de ser bizarra en un contexto como el español, donde sólo la izquierda abertzale y el independentismo anticapitalista catalán lo empleaban para nombrar sus propias experiencias.⁵³

Más allá de las diferencias lexicales —en este caso, bastante significativas—, el apoyo de Podemos a las CUP se hizo pasar por el filtro de la política de alianzas de la dirección. Podemos concedió apoyo, no sin tensiones, a aquellas candidaturas que tenían un perfil estratégico fuerte, ya fuera en términos de presencia territorial o de prestigio de sus liderazgos, como era el caso de Ada Colau en Barcelona. Al mismo tiempo, trató de discriminar, no sin cierta razón, aquellos proyectos en los que IU podía tener la iniciativa y el protagonismo, encorsetando la candidatura en las claves izquierdistas del partido. Aunque a rastras, algunos segmentos de una IU en descomposición habían empezado a participar en muchas candidaturas, siendo el sector protagonista en no pocas ciudades. La idea de «confluencia», que entonces empezaba a circular como clave del éxito electoral, empujó a la agrupaciones y federaciones locales de esta organización —en ocasiones a sus sectores más críticos y porosos— a entrar en los procesos municipalistas, lo que en algunos casos dio lugar a experimentos de colaboración virtuosa y en otros a escisiones sonoras.

Lo cierto es que la decisión de Podemos de prescindir de las municipales se apoyaba en un cálculo realista, pero también cortoplacista, de sus posibilidades. Como se ha visto, el partido había crecido de forma exponencial y caótica, y la dirección había reaccionado con

⁵² Documento «Principios Políticos», cit., p. 12.

⁵³ Unidad Popular es Herri Batasuna en euskera y es también la fórmula de las CUP catalanas, Candidatures d'Unitat Popular.

una mezcla de oportunismo y miedo hacia sus «bases». El documento organizativo que salió de Vistalegre y la opción por burocratizar rápidamente la organización dejaron a los círculos territoriales en una suerte de orfandad práctica, más allá de lo simbólico. Los círculos estaban llamados a ser la «tropa» de las grandes campañas. Poco más. Al mismo tiempo, Podemos carecía de ese nivel esencial de organicidad que viene dado por los activistas y los organizadores locales, lo que en la tradición comunista se llamaban «cuadros», y que era justo de lo que disponían las candidaturas municipalistas. Sin ellos resultaba imposible evitar el desastre en unas elecciones en las que se votaba con conocimiento de las personas y de su trabajo local. En el documento político se expresaba sin ambages esta desconfianza a sus propias «bases», de nuevo en clave de marketing electoral: «La marca Podemos, resultado de un buen trabajo y de muchas ilusiones puestas en marcha, tiene un prestigio que no puede arriesgarse en contiendas y contextos difícilmente evaluables caso por caso».⁵⁴

Con la ratificación de Vistalegre, Podemos dio la orden de no formar candidaturas a partir de sus propios círculos y de participar sólo en aquellos procesos que consideraba amigos y viables. En la práctica, la dirección y la mayor parte de los esfuerzos del partido se desentendían, tanto de la suerte de sus asambleas locales, como de las candidaturas municipales, que en su mayoría iban a considerarse submarinos de IU o «de activistas y movimientos haciendo política-estética para sí mismos».⁵⁵ El resultado no pudo ser más paradójico. El cambio de fase que abrieron las elecciones del 24 de mayo de 2014 acabó por bifurcarse en una doble vía institucional, la de Podemos y la del municipalismo. Gracias a la posición ambigua —en realidad debido al rechazo— de Podemos al nuevo municipalismo, se abrió la oportunidad para otra posible versión del «partido del cambio». Y paradójicamente fueron los éxitos de esta vía los que permitieron arrancar a Podemos de su propia crisis interna, al menos durante un tiempo.

En esta misma clave de separación de estas dos modalidades institucionales distintas, las relaciones entre los Podemos locales y las candidaturas municipalistas estuvieron distorsionadas por una

⁵⁴ En el documento político, que venía acompañado de una «Guía para construir candidaturas de unidad ciudadana y popular», se exhortaba a «ser responsables y no dejar abierto un flanco que puede debilitar el instrumento más poderoso que existe hoy para lograr la recuperación de la soberanía popular». Véase *Principios Políticos de Podemos*, op. cit.

⁵⁵ *Ibidem*.

continua tensión, que en ocasiones derivó en simple competencia. Por regla general, en aquellas ciudades en las que el protagonismo «social y ciudadano» de la candidatura —esto es, el apartidismo— era indiscutible, los consejos municipales de Podemos elegidos a principios de enero de 2015 o bien tardaron en dar su aval, o bien no lo hicieron en absoluto. En los cálculos de la dirección —también de los círculos locales— estaba no sólo el recelo frente a IU, que agazapada en las candidaturas municipalistas podía encontrar una vía de aire para asegurar su supervivencia electoral, sino también frente a otros sectores activistas. No se equivocaban del todo. En la cabeza de muchos fuera de Podemos, planeaba la idea de que estas candidaturas podían ser un plan B frente al modelo de los morados, excesivamente rígido, jacobino, centralista, poco o nada aterrizado sobre el territorio.

La relación entre los municipalistas y Podemos fue especialmente tensa en Barcelona y Madrid, aquellas ciudades en las que por su relevancia demográfica y simbólica la «vía municipalista» se jugaba su viabilidad como proyecto político alternativo. En la primera, la inercia de Guanyem, que despegó con actos públicos masivos y una estructura de activistas fuerte y extensa, al tiempo que la escasa presencia de actores locales relevantes en el consejo ciudadano de Podemos, acabaron confirmando el protagonismo de Ada Colau. La candidatura, que finalmente adoptó el nombre de Barcelona en Comú, a inspiración de Ourense en Común, fue claramente protagonizada por el ámbito de confianza de la portavoz del movimiento de la vivienda. Pero en tanto «candidatura de confluencia» tuvo que incluir a algunos candidatos que venían en representación de Podemos y también de ICV-EuiA. Paradójicamente en lo que sería considerado uno de los «modelos de éxito», la figura de Colau y el liderazgo carismático heredado de su portavoz de la PAH, acabaron por construir el que fuera seguramente el modelo más centralizado de todas las candidaturas municipales.⁵⁶

En Madrid, plaza fuerte que Podemos no podía dejar escapar, las cosas fueron bastante más tensas. Como en tantas otras ciudades, el embrión de la candidatura apenas había contado con presencia de

⁵⁶ Prueba de ello es la modalidad de primarias elegidas: un doble plebiscito al cabeza de lista, que como no podía ser de otra manera ganó la propia Colau, y otro a los candidatos a concejales que se convirtió en un acto aprobatorio de la lista oficial (no se presentó alternativa) negociada en despacho con Podemos, ICV y EuiA. Esta lista incluyó en los puestos de salida a tres estrechos colaboradores de Colau en el Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals): Gerardo Pisarello, Gala Pin y Jaume Asens, que paradójicamente se presentó como candidato de Podemos.

Podemos. Hacia finales de año, Ganemos Madrid estaba definitivamente consolidado con asambleas en casi todos los barrios y con la participación de buena parte de las realidades políticas y sociales de la ciudad, desde movimientos hasta partidos como Equo y una IU local en proceso de descomposición. La dirección del proceso había seguido el marco establecido por el grupo promotor que provenía del MpD; el proyecto mantenía una fuerte identificación con los lineamientos retóricos de la «nueva política». Pero lo que acabó de torcer el brazo a Podemos fue una multitudinaria presentación pública en la que participaron más de 1.500 personas y el lanzamiento de una campaña de firmas a imitación de lo probado en Barcelona.⁵⁷

A pesar, sin embargo, de la entrada de Podemos, la confluencia en Madrid fue todo lo tortuosa que se pueda imaginar, dominada por negociaciones interminables sobre cuestiones de detalle y casi siempre relativas a repartos de cuotas de poder, generalmente con una valencia política ínfima. Las negociaciones desembocaron, de todos modos, en la formación de una candidatura unitaria, Ahora Madrid. Esta se constituyó de acuerdo con un sistema complejo, dirigido a incluir a todos los sectores que habían participado en su formación. Podemos tuvo que tragar con una modalidad de primarias radicalmente opuesta al voto múltiple y aprobatorio (las listas plancha) que habían probado para la elección de los consejos autonómicos y municipales. La propuesta de Ganemos Madrid consistía en un método explícitamente diseñado para garantizar la representación de las minorías, por medio de un sistema de listas abiertas que obtenían representación proporcional.⁵⁸

Dos meses antes de las elecciones, a modo de avance de la campaña electoral, se celebraron las primarias para la nueva candidatura. Sin un candidato claro a la alcaldía, Podemos propuso finalmente a la jueza, ya veterana, Manuela Carmena. Al frente de un equipo nutrido también por sectores de Ganemos e IU, la magistrada, laboralista en el antifranquismo, militante comunista en los años setenta y próxima al PSOE en las décadas de 1990 y 2000, contó con el apoyo de importantes

⁵⁷ La cifra propuesta de 30.000 se alcanzó el 30 de diciembre de 2014, antes de que se hubiera constituido el consejo municipal de Madrid. El número de firmas dejaba a Podemos ante el hecho consumado de que Ganemos iría a las elecciones.

⁵⁸ Esta modalidad, conocida como sistema Dowdall, proporcionaba, a un tiempo, el máximo de discrecionalidad a los votantes, que podían confeccionar su propio orden de preferencia, y cierta coherencia de voto en la presentación de listas. Fue uno de los métodos más empleados en la selección de los equipos de las candidaturas municipalistas.

sectores de socialistas e incluso con una cierta benevolencia del grupo PRISA. Como era de esperar ganó las primarias con un 60 % de los votos. No obstante, otras dos listas, una formada por la IU más fiel a la idea de confluencia (liderada por Mauricio Valiente) y otra por la parte más movimentista y municipalista de Ganemos (encabezada por Pablo Carmona) obtuvieron cerca del 40 % de los votos.

Más allá de Madrid y Barcelona, la dirección de Podemos no mostró especial interés por el desarrollo de las candidaturas. Fue directamente hostil cuando detectó la preponderancia de miembros de IU, y en otras sencillamente indiferente. En la mayor parte de los casos, su posición dependió de la capacidad y la inteligencia de los consejos locales, de acuerdo con la geografía variable del municipalismo. Así por ejemplo, en algunas ciudades como Zaragoza o Coruña se consiguió una unidad virtuosa, con un protagonismo todavía mayor que en Madrid de los activistas de los movimientos; en Valencia y Alicante, IU resultó preponderante y la candidatura quedó como una carcasa de la vieja formación; en otras como Cádiz, Podemos resultó ser el embrión principal de la candidatura; mientras que en ciudades tan importantes como Sevilla o Valladolid llegó a haber dos y hasta tres propuestas diferentes que representaban distintas combinaciones de los tres elementos en juego: las familias de una IU cada más fracturada, las distintas fracciones de Podemos, a veces también enfrentadas, y los activistas de los movimientos sociales.

Por fin, el domingo 25 de mayo de 2015, se celebraron las dobles elecciones a los parlamentos autonómicos y a los gobiernos municipales. Los resultados ofrecieron un relieve de significativos contrastes. A nivel autonómico, los comicios, celebrados en 13 de las 17 comunidades autónomas (Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía tenían citas propias), dieron a Podemos resultados modestos, entre el 18 y el 21 % en las plazas fuertes de Aragón, Asturias y Madrid, y entre el 10 y el 12 % en los dos Castillas y Valencia, en la que Podemos cedió protagonismo a la coalición Compromís. Como ya había sucedido en los comicios andaluces, el número de votos obtenidos resultó francamente mediocre, al menos de acuerdo con las expectativas creadas. Por lo general, Podemos quedó por debajo del PSOE.

La sorpresa estuvo, en cambio, en los resultados de las municipales. Del 25 mayo salieron hasta cinco alcaldías de grandes ciudades encabezadas por las nuevas candidaturas, guinda de un amplio corrimiento del mapa electoral. La Marea de A Coruña, con casi el 31 % de los votos, y

Barcelona en Comú, con algo más del 25 %, fueron primeras fuerzas en sus respectivas ciudades. Ahora Madrid quedó segunda, con casi el 32 % a sólo dos puntos y medio del PP, pero con mayoría suficiente caso de sumar el apoyo del PSOE; Zaragoza en Común, con el 25,6 %, también resultó segunda a dos puntos del PP, pero con amplia mayoría de la izquierda en el consistorio; Por Cádiz Sí Se Puede consiguió el 28 % de los votos, por debajo del PP, pero muy por encima del PSOE y gracias a los apoyos de la candidatura de IU logró el gobierno. Además, con el soporte de las candidaturas municipalistas, Compromís obtuvo el gobierno municipal de Valencia, Bildu el de Pamplona-Iruña e IU el de Zamora (en esta ocasión con los concejales del PSOE). Los municipalistas habían obtenido las tres alcaldías de la provincia de Coruña (A Coruña, Santiago y Ferrol) y la de Badalona en el área metropolitana de Barcelona. En el sur de Madrid, casi todos los grandes municipios cambiaron de signo por la irrupción de las nuevas candidaturas.

Junto a estos éxitos hubo también clamorosos fracasos, especialmente donde las diferencias y el enconamiento de los distintos sectores acabaron en la formación de distintas siglas. En ocasiones, la dispersión del voto resultó tan inútil y contraproducente, que en algunas ciudades ni siquiera obtuvieron representación. Tomadas en conjunto, las candidaturas municipalistas lograron unos resultados sólo algo inferiores a los de Podemos en las autonómicas. Era suficiente para iniciativas que arrancaban de fuerzas locales, que no tenían la ventaja de la «marca» y que contaban con tan escaso apoyo de la dirección de Podemos. Los éxitos clamorosos en Galicia y Cataluña donde Podemos no concurría a las autonómicas, pero en las que no era previsible que lo hiciera con tanto éxito, y los resultados de Madrid, donde Ahora Madrid casi duplicó los votos que fueron a Podemos en la elecciones autonómicas, confirmaron no obstante que el municipalismo había abierto una vía propia y distinta a la de Podemos.

Grosso modo, los patrones sociales de voto a estas candidaturas no mostraban una tendencia clara. Los municipalistas formaron gobierno en ciudades industriales sometidas a una crisis de larga data como Ferrol y Cádiz, en capitales de provincia con niveles de vida relativamente elevados como Pamplona y Coruña, y en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza. Un análisis más detallado demostraba la «transversalidad realmente existente» de las «fuerzas del cambio», similar pero más exitosa que la de Podemos. En Madrid y Barcelona, la concentración del voto se producía en las viejas periferias obreras,

donde la concentración del paro, los desahucios y las situaciones de radical desamparo era mayor, como los distritos del sur de Madrid o del conglomerado urbano de Nou Barris en Barcelona. Pero las candidaturas resultaron también ampliamente mayoritarias en los espacios de mayor concentración de esa clase media juvenil desclasada, que en ambas ciudades se podía reconocer en algunos barrios del centro de la ciudad.⁵⁹

Para la dirección de Podemos, los resultados tuvieron un sabor agríndice. De un lado, suponían un éxito propio que podía ser celebrado y reivindicado de cara a los comicios generales. En esta línea, el «esfuerzo interpretativo» de portavoces y estrategias se concentró en defender los casos más exitosos como una suerte de epifenómeno a menor escala de Podemos. Ahora Madrid y Barcelona en Comú, con Manuela Carmena y Ada Colau al frente, fueron presentados según los mismos patrones de la hipótesis Podemos: hiperliderazgo, transversalidad, presencia mediática, etc.

Sin embargo, era patente que el éxito en muchas ciudades no había tenido nada que ver con las funciones del carisma y del liderazgo mediático, sino con el modelo de colaboración y descentralización del 15M. Apenas unos meses antes de las elecciones, pocos podían pensar que los que serían alcaldes de Coruña (Xulio Ferreiro), Cádiz (Jose María Gonzalez, alias Kichi) o Zaragoza (Pedro Santiesteve) fueran poco más que activistas reconocidos en el entorno de los movimientos sociales y sindicales de sus respectivas localidades. En estos casos, como en muchos otros (Badalona, Santiago, Ciempozuelos), resultaba claro que las figuras «alcaldables» habían sido «máscaras», construcciones del movimiento, como lo fue Manuela Carmena, prácticamente desconocida para las generaciones nacidas a partir de 1970, y de las que recibió más de las dos terceras partes de su voto.⁶⁰

⁵⁹ El mapa electoral de Madrid es significativo de la composición social del voto a la candidatura de Ahora Madrid. Esta fue mayoritaria en los barrios principales de la izquierda, lo que en los años setenta se conocía como el «cinturón rojo» (el sur y el este del municipio), donde por lo general obtuvo entre el 30 y el 50 % de los votos, normalmente en disputa con los socialistas. Sin embargo, los porcentajes de voto más amplios se obtuvieron en algunos barrios del centro, como Lavapiés y Malasaña, concentraciones del tipo de población aludida, en muchas secciones censales se obtuvo más del 50 % e incluso el 70 % de los votos.

⁶⁰ Casi todos los análisis de la campaña de Ahora Madrid coinciden en destacar el papel de construcción de la imagen de Manuela Carmena. Varios grupos de diseñadores trabajaron de forma autónoma y paralela durante toda la campaña elaborando imágenes y carteles en los que Manuela aparecía sucesivamente como Angela Davis, como Cat Woman, en la figura-cartel de la célebre obrera estadounidense de la II Guerra Mundial, mirando al cielo, con una bici, etc. La mayoría de estos trabajos y otros semejantes de otras ciudades están recogidos en el libro colectivo, *Y al final... ganamos las elecciones*, de próxima publicación.

A diferencia del modelo de Podemos, la vía municipalista, especialmente en los procesos más virtuosos, demostró la importancia del tejido activista, del arraigo local y de la colaboración de distintos actores; lo que en los términos del ciclo, siempre «conceptualmente toscos», se llamó «confluencia», un método de alianza y acuerdo basado en la cooperación y participación de todos. En un análisis más profundo, no obstante, el municipalismo parecía haber surgido de una corriente subterránea de notable profundidad, enganchada de una u otra forma a la tradición radical democrática y federal casi siempre presente en la historia política del país, pero también en algo que protagonizó las jornadas del 15M: el recelo a los partidos. Sólo por medio de una distorsión de la forma-partido, sobre la única base de la concurrencia electoral, las candidaturas podían ser asimiladas a las clásicas modalidades partidarias.

En su mayoría, las candidaturas fueron composiciones assemblearias y variopintas hechas de elementos heterogéneos: activistas 15M, fragmentos de partidos a veces enfrentados, a veces dispuestos a construir una agenda común (como IU, Equo y Podemos), movimientos sociales que apoyaban la vía municipalista, multitud de individualidades libres que querían contribuir a la iniciativa; un collage de activistas, militantes de partidos, voluntarios, ilusionados, oportunistas y ambiciosos, que en la mayor parte de los casos no llegó a cuajar en una estructura política claramente definida, mucho menos en una cultura política propia. Muy pronto la debilidad organizativa de las candidaturas acabaría por derivar en una situación atípica. La consolidación posterior de los ayuntamientos dejó una multitud de grupos municipales dispersos, con escasa conexión entre sí, pero también cada vez más separados de la ola de movimiento que construyó las candidaturas. En los meses siguientes, las asambleas y los precarios espacios de organización de las candidaturas fueron languideciendo poco a poco. El municipalismo había logrado escapar a la forma partido, pero no así a la institucionalización.

Las «elecciones del cambio» (verano-otoño de 2015)

Las elecciones de mayo fueron un revulsivo. El éxito en las grandes ciudades contrastaba con los resultados de Podemos: estos habían mejorado sensiblemente respecto de las europeas, pero quedaban como una migaja para el partido que en sus propios términos había «nacido para ganar». La «confluencia», a su vez, se había convertido en la consigna del momento, único remedio para solventar el desgaste de Podemos, patente en

el deterioro de su imagen pública, sometido al bombardeo de los media, debilitado por las disputas internas en torno a la verticalización del partido y desplazado del «centro» por la operación Ciudadanos. Podemos había perdido empuje: la máquina de guerra electoral estaba atascada en el propio barro que había contribuido remover.

Apenas unas semanas después de las elecciones de mayo comenzó una «fase de manifiestos», de declaraciones públicas que exigían un cambio de rumbo a la dirección de Podemos, fundamentalmente apertura interna, pero también externa. El 21 de junio se presentó una iniciativa con el significativo rótulo «Abriendo Podemos»,⁶¹ la firmaron más de 2.000 personas; pedían mayor pluralismo y la reorientación del partido hacia el programa original centrado en la propuesta de proceso constituyente. El 6 de julio, se dio a conocer «Podemos es participación»,⁶² promovido por los sectores críticos de la organización. 950 cargos internos y 8.000 personas firmaron un documento, en el que se exigía una modificación del reglamento de primarias y la sustitución de las odiadas listas plancha por métodos más representativos. En ambos casos, se reconocía que el éxito de las candidaturas municipalistas había abierto una vía nueva, también electoral.

Pero el mayor reto para Podemos vino de la mano de una iniciativa exterior a la organización. El 7 de julio se publicó el manifiesto *Ahora en Común*. En apenas 36 horas recogió 18.000 adhesiones. En su penúltimo párrafo, tras declarar que se proponía como una iniciativa de la «gente» y «para la gente» y de reivindicar los éxitos de las municipales, se leía: «Ahora en común es una iniciativa ciudadana inspirada por la creencia de que el éxito está en la unión de la diversidad y que, consecuentemente, quiere crear espacios amplios, en los cuales todas las personas y fuerzas políticas que apuestan por el cambio, se sientan cómodas trabajando en común, mediante un método inclusivo y democrático que garantice la pluralidad y la equidad en el proceso de elección de los candidatos y candidatas».⁶³ El nombre era el resultado de la contracción de Ahora Madrid y Barcelona en Comú, y había sido empleado, desde semanas antes, como la marca posible de una «confluencia» para las elecciones generales previstas para finales de año.⁶⁴

⁶¹ Disponible todavía en: <https://abriendopodemos.org/>.

⁶² También disponible en: <http://podemosesparticipacion.info/manifiesto/>

⁶³ La página original de Ahora en Común desapareció de la web en el mes de septiembre tras la quiebra de la iniciativa.

⁶⁴ El más conocido de los artículos fue el de Javier Gallego, el Crudo, que publicó en EIDiario. es con el título «Ahora en común», 9 de junio de 2016, disponible en: <http://www.eldiario.es/>

La propuesta pretendía reproducir a escala estatal lo que se había probado para el Ayuntamiento de Madrid: un proceso de confluencia abierto, basado en la cooperación entre partes y en el que el protagonismo estuvieran en los no alineados con los partidos. La idea era seguramente demasiado ambiciosa y no contaba con suficientes activos después del desgaste causado por las elecciones municipales. La reacción de la dirección de Podemos, precipitada y visceral, se resumió en una acusación: «Detrás de Ahora en Común está IU». El temor de Podemos, excesivo a la vista de la potencia de la propuesta, venía agitado por la posibilidad de que Ahora en Común tomara cuerpo sobre los mismos presupuestos «ciudadanos» y «de la gente» que habían empujado a la formación morada. Incapaz de reconocer en el llamamiento a una confluencia, una oportunidad para salir de su propio impás —objetivo inicial de los promotores—, en los últimos días del mes de julio, Pablo Iglesias decidió afirmarse contra la propuesta, lanzando una nueva consulta interna. El plebiscito reservaba la posibilidad de la «confluencia» a los ámbitos autonómicos y a discreción de la dirección. La consigna era «no a una confluencia de izquierdas», y ante todo las siglas del partido. Fue la consulta con menor participación de todo el ciclo electoral: sólo votaron 44.000 inscritos, el 13 % del censo.⁶⁵

La acusación sobre la larga mano de IU no era, de todos modos, infundada. En una carrera que se iba a resolver en días, la propuesta de Ahora en Común pasó de las redes, el lugar del que para ser eficaz quizás nunca debió salir, a territorializarse en asambleas locales. La historia de estas agrupaciones es demasiado prolija e insignificante como para reproducirla aquí. Basta señalar que en algunas ciudades los municipalistas se inhibieron de participar en el Ahora en Común local; en otras los movimientos tomaron la iniciativa y consiguieron mantener vivo el proceso unas semanas más; y en la mayor parte, Ahora en Común se convirtió en territorio de disputa entre las distintas familias de IU. En su propia pendiente hacia la descomposición, la vieja organización fundada en 1986

zonacritica/Ahora-comun_6_396920306.html. Con fórmulas parecidas, Juan Carlos Monedero ya había anunciado la posibilidad de formar un Podemos en Común con la incorporación de «elementos confluentes».

⁶⁵ La pregunta era calculadamente clara: «¿Aceptas que el Consejo Ciudadano de Podemos, en aras de seguir avanzando en la construcción de una candidatura popular y ciudadana, establezca acuerdos con distintos actores políticos y de la sociedad civil siempre que 1) los acuerdos se establezcan a escala territorial (nunca superior a la autonómica); 2) se mantengan siempre el logotipo y el nombre de Podemos en el primer lugar de la papeleta electoral, incluso si eso implica concurrir a las elecciones generales en algunos territorios con formulas de alianza (Podemos-X)».

se había dividido entre los que querían honestamente la confluencia, y consideraban el espacio como una oportunidad de refundación; y los que en sentido contrario, emplearon Ahora en Común como la posibilidad de una plataforma alternativa y suficiente frente a Podemos. Para ambos sectores, el objetivo era compartido: se resumía en su supervivencia política, esto es, en su reproducción institucional. Sea como fuere, debido a las disputas y al escaso peso específico del sector apartidista o «15M», del que legítimamente procedía la iniciativa, Ahora en Común terminó por despenarse. A la vuelta del verano, el 27 de septiembre, el grupo de los redactores y primeros impulsores del proyecto tomaron la decisión de abandonarlo.⁶⁶ Poco después, a primeros de octubre, se produjo la salida de Equo,⁶⁷ que guiados por el ventajismo que caracterizó a esta pequeña organización durante todo el ciclo, negoció su propio acomodo en Podemos. En los días posteriores se desencadenó la implosión en cascada de casi todas las asambleas territoriales.

Mientras a nivel estatal se deshacía la posibilidad de reavivar y re-unificar al «partido del cambio», Podemos, Iniciativa y la marca local IU se presentaron juntos en la campaña a las elecciones catalanas. Los comicios, convocados para el 27 de septiembre, se desarrollaron dentro del marco plebiscitario de la vía «parlamentaria» hacia la independencia.⁶⁸ En esas elecciones, en las que la suma de Convergencia, Esquerra

⁶⁶ El 12 de septiembre se había celebrado una caótica asamblea estatal en la Complutense con la participación de medio millar de personas. La asamblea terminó en un nuevo enfrentamiento entre los «confluyentes», que incluían a parte de IU y los «no confluyentes», que se agrupaban en torno a la Izquierda Abierta de Llamazares y a los expulsados de IU-Comunidad de Madrid. A raíz de esta asamblea, en la que resultaba obvio que no había manera alguna de crear una iniciativa más allá de las disputas y los intereses de IU —en aquellas semanas, Garzón hizo varias declaraciones como representante oficioso de Ahora Común—, el grupo promotor y tres de los cinco portavoces, entre los que se encontraba el autor, decidieron preparar la salida del proyecto. En sus manos quedó la marca y el partido: Ahora en Común-IU tendría que presentarse con otro nombre.

⁶⁷ Equo es un pequeño partido «verde» fundado en 2010 por el antes presidente de Greenpeace en España, Juan López de Uralde. A la formación se incorporaron algunos elementos del ecologismo más posibilista y antiguos cuadros de Izquierda Unida como Inés Sabanés. En las elecciones de 2011 apenas superó los 200.000 votos, aunque en Valencia y Baleares acudió en coalición. No fue una fuerza ni relevante ni significativa durante el periodo de movilizaciones que se abrió tras el 15M. Partido principalmente de «notables» encontró, sin embargo, un rápido acomodo en los procesos de confluencia que se desarrollaron en las municipales y autonómicas de 2015, y luego en sus propias negociaciones con Podemos.

⁶⁸ Convergència, Esquerra y la CUP apostaron por convertir las elecciones en una continuación de la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014. En esta convocatoria, que no tenía carácter vinculante y que no fue reconocida por el Estado, votó sólo un tercio del censo electoral, con un 80 % de votos afirmativos a la independencia. Los resultados de las elecciones se presentaron como una suerte de nuevo plebiscito.

Republicana y la «sociedad civil» de ambos partidos, obtuvieron casi el 40 % de los votos, la «confluencia» de Podemos, Iniciativa e IU (sin el concierto de los municipalismos), y con el particular nombre de Catalunya Sí Que Es Pot, sólo logró seducir al 9 % de los votantes, algo más que las CUP y la mitad de votos que Ciudadanos. El fracaso de Podemos, que en algunas encuestas de primavera, aparecía como segunda, e incluso primera fuerza, le sirvió, sin mayores elementos de análisis, para reforzar su posición: las sumas de siglas eran «perdedoras».⁶⁹

Tras las elecciones catalanas y la reducción de la salsa de Ahora en Común, esta última quedó como formato electoral de una IU renovada por la exigencia de que los candidatos se sometieran a primarias internas y por el protagonismo de Alberto Garzón, único líder de la organización que presentaba un formato adaptable —no sin rozamiento— a la «nueva política». Perdido el nombre de Ahora en Común, en manos del grupo promotor del primer manifiesto, y en un claro «relevo de marcas», IU tomó entonces las siglas definitivas de UP, Unidad Popular. Sin embargo, los de Garzón no quedaron del todo excluidos por el rodillo Podemos.

De acuerdo con los términos explicitados en su consulta, los morados decidieron aceptar la confluencia allí donde el protagonismo de los «municipalismos» u otras fuerzas se podía traducir en una opción electoral viable y alternativa a Podemos. Esta era probable en cuatro territorios y en los cuatro se probó una forma de confluencia «controlada»: Galicia donde un acuerdo entre aparatos (Anova, Podemos y Esquera Unida) tomó prestado el capital simbólico de los municipalismos, con el nombre final de En Marea; en Catalunya, con la marca En Comú Podem, tras la decisión de Barcelona en Còmu de implicarse a cambio de

⁶⁹ La explicación de los resultados dentro de Podemos despertó un nuevo amago de debate público. La dirección interpretó sus modestos resultados como el producto de una dinámica de fuerte polarización del voto provocada por lo que no dejaba de ser un referéndum encubierto. Sectores independentistas de izquierdas barrieron para casa, y explicaron el fracaso de Podemos por el «etnicismo» de la campaña de Pablo Iglesias, que apelaba al ascendente de la inmigración de buena parte de las clases populares del área metropolitana de Barcelona. Pero lo cierto es que Podemos y Pablo, que habían encontrado un lugar en la política catalana según el patrón que el conservadurismo catalán denomina con el término «lerrouxismo», no tuvieron espacio dentro de una coalición de nombre confuso (*Cataluña sí que puede*, pero ¿qué?, ¿los derechos sociales?, ¿la independencia?), en la que no se había hecho esfuerzo alguno de organización y con unos compañeros de viaje (Iniciativa) que durante los últimos tres años habían estado plegados a un soberanismo de conveniencia y a una protesta que en términos sociales no escapaba a la imagen amable y conciliadora de las clases medias progres catalanas. En el área metropolitana y en las periferias de Barcelona, la abstención fue fuerte: paradójicamente Ciudadanos obtuvo una cantidad tan apreciable de votos como para ser primera fuerza en muchos barrios.

controlar la campaña local; en Valencia, donde se formó coalición con Compromís; y por último, en el extraño y anómalo caso de la provincia de Huesca, donde las «bases» de Podemos e IU consiguieron desplazar a las direcciones para formar Podemos - Ahora Alto Aragón en Común.

Las elecciones fueron convocadas para el 20 de diciembre. Hacia el mes de octubre las expectativas eran, sin embargo, sombrías: la media de las encuestas daba a Podemos las peores expectativas de voto en el último año, por debajo, en ocasiones muy por debajo, del 15 %.⁷⁰ La apuesta de los media por Ciudadanos trabajaba entonces a pleno rendimiento. Rivera recuperaba la retórica que durante meses habían practicado los de la «nueva política» y el mismo Pedro Sánchez hacía lo propio reivindicando para sí el ambiguo término del «cambio». La situación económica tampoco remaba a favor de Podemos. Los síntomas de recuperación, que habían empezado en el segundo semestre de 2013, se habían convertido en 2015 en incrementos trimestrales del PIB de cerca del 1 %. A finales de año, se esperaba una cifra de crecimiento de un 3 %. Aunque lentamente, los números de afiliación a la Seguridad Social se habían ido incrementado. La recuperación del consumo doméstico crecía en paralelo al PIB, y se había convertido, como es habitual en la economía española, en el principal factor de la demanda.⁷¹

En otras palabras, si durante 2014, la «recuperación» apenas tenía más suelo que haber dejado atrás la posibilidad de un colapso —que sin duda se bordeó en 2012—, en 2015 el clima económico se afrontaba con relativo optimismo. La UE había concedido sucesivos aplazamientos al programa de reducción del déficit. Las élites europeas habían puesto un cerco al incendio político con un programa de respiración asistida al presupuesto público español. Además, el programa de compra de activos del BCE (el QE⁷² europeo) había desplazado la presión

⁷⁰ Una encuesta muy comentada, y seguramente fabricada políticamente, pero que de todas formas reflejaba la tendencia, fue el Barómetro del CIS del mes de octubre que le daba a Podemos una estimación de voto del 10,8 %, frente al 14,7 de Ciudadanos, y más del 29 y el 25 % a PP y PSOE respectivamente. Véase Barómetro de Octubre, 2015, CIS. Disponible en: http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14243

⁷¹ Véanse las series para esos años de Contabilidad Nacional, INE, y los Indicadores Económicos del Banco de España.

⁷² El programa de «expansión cuantitativa» (*Quantitative Easing*) del Banco Central Europeo se puso en marcha en marzo de 2015 con paquetes de compra de bonos soberanos de los países miembros de hasta 60.000 millones. El programa seguía la senda del QE estadounidense y tenía como finalidad aliviar definitivamente la presión financiera sobre la deuda pública. Era tanto un intento de estimular el crecimiento económico, como una respuesta a la creciente inestabilidad política en el sur del continente.

de la deuda pública a los flujos erráticos de los mercados bursátiles, ahora sobrealimentados por la «expansión cuantitativa». Con su particular mediocridad analítica, el PP, con Mariano Rajoy al frente, podía presentar los datos económicos como el resultado de su ejercicio político, de esas reformas económicas y sociales «tan necesarias», como duramente aplicadas en los años previos.

Sin embargo, el desarrollo de la campaña cambió las tornas, al menos en parte. Podemos pudo, quizás, por última vez mostrar sus habilidades en el terreno de la «comunicación política». Con vocación de convertirse en una profecía autocumplida, la consigna de la «remontada» tuvo efectos, aunque sólo fuera porque, a pesar de todas las antipatías que su dirección había despertado, Podemos representaba prácticamente la única alternativa a la podredumbre de un sistema de partidos en descomposición, marcado por la corrupción y erosionado por casi una década de crisis económica. De otra parte, la incorporación de los «municipalistas», aún con sonadas ausencias,⁷³ y especialmente de los nuevos alcaldes, permitió renovar y dar mayor pluralidad a la imagen del «partido del cambio», que especialmente en Cataluña y Galicia se presentaba como una alianza amplia de fuerzas.

Los resultados de las elecciones confirmaron la tendencia. El hundimiento del bipartidismo resultó evidente, especialmente en las grandes ciudades. PSOE y PP se quedaron con el 50 % de los votos, aunque todavía tuvieran la mayoría de escaños. El PP, con sus 7,2 millones de papeletas, había perdido más de 3,5 millones respecto a 2011; el PSOE, con sus 5,5 millones de votos, se dejó casi uno y medio. Los diputados de ambas formaciones fueron reducidos a 123 y 90 respectivamente, de una suma anterior que superaba los 300. Además, Ciudadanos, castigado por la atomización de las circunscripciones electorales, sólo pudo convertir el 14 % de sus votos en 40 diputados. Pesaron desde luego los errores de una campaña que en buena medida fue fabricada por los medios. Las apariciones de Rivera excesivamente nervioso, hasta el punto de dar crédito a la repetida broma de su adicción a los excitantes, y sobre todo su «rendición» en el final de campaña, al aceptar que apoyaría la lista más votada (naturalmente la del PP), limitaron seriamente el alcance de su éxito prefabricado.

⁷³ La más sonada de estas ausencias fue la de Manuela Carmena, que en su «condición de independiente», decidió mantener su «neutralidad», esto es, sus guiños al PSOE, al que al fin y al cabo pertenecía, si no en términos formales sí sociológica y culturalmente.

Para Podemos y las confluencias los resultados fueron satisfactorios. Se quedaron a menos de punto y medio de alcanzar al PSOE, con el 20,66 % de los votos, 5,2 millones de sufragios y 69 diputados. Pero de nuevo, los resultados tuvieron un sabor agrídulce. La pretensión de mantener un perfil centralizado y autosuficiente, se desdibujó en favor de una constelación plural y de carácter cuasi federal. Los mayores éxitos se cosecharon en las circunscripciones en las que se acudió bajo el paraguas de la «confluencia». Estas aportaron dos millones de votos y 28 escaños, que casi en tres cuartas partes no iban a responder a la disciplina de Podemos. Así en Cataluña, la confluencia resultó primera fuerza con cerca del 25 % de los votos, en Galicia y Valencia segunda, también con el 25 %, y en Huesca se obtuvo por primera vez representación para un partido de la «izquierda».

En conjunto Podemos recibió en torno al 18 % de los votos donde acudió únicamente con su marca. En sus «bastiones», donde las candidaturas municipalistas habían obtenido buenos resultados, las generales ofrecieron rendimientos modestos. En Madrid, Asturias y Aragón el voto morado osciló entre el 18,5 % y poco más del 21 %; entre el 6 y el 8 % del voto de estas circunscripciones fue a parar a UP e incluso una parte del apoyo que recibieron las candidaturas locales se escapó a la abstención.⁷⁴ En Andalucía, el voto a Podemos se quedó en el 17 % y en las dos Castillas por debajo del 14 %. Las dos únicas excepciones resultaron ser los dos archipiélagos y un imprevisto Euskadi que ofreció los mejores resultados de todo el Estado, el 26 %.⁷⁵ En definitiva, Podemos había

⁷⁴ El caso más obvio es el de Madrid municipio, donde Podemos obtuvo 376 mil votos y el PSOE 307 mil, al tiempo que UP se hacía con 96 mil sufragios, todo ello con una participación del 76,7 %. En las municipales con una participación mucho menor, de casi ocho puntos menos (el 68,85 %), Ahora Madrid obtuvo 519 mil votos, el PSOE 250 mil e IU 28 mil. Incluso en el improbable caso, en un contexto de mayor movilización del voto, de que en el 20D, 55 mil votos de Ahora Madrid hubieran vuelto al PSOE y 59 mil a UP-IU, la diferencia de 143 mil todavía arrojaría 28 mil votos lanzados a la abstención, teniendo en cuenta que el trasvase a PP y Cs debe resultar ínfimo. Al considerar la mayor movilización del voto de PSOE e IU en estas elecciones generales, los abstencionistas de Podemos, sólo en el municipio de Madrid, pudieron superar con creces los 50 mil. Este fue el coste de renunciar a la confluencia en la región.

⁷⁵ Los resultados de Podemos en Euskadi y Navarra, donde fue primera fuerza, resultaron sorprendentes. Los ritmos de la crisis habían seguido allí un curso bastante diferente al del resto del país, especialmente en la Comunidad Autónoma Vasca, donde la crisis de régimen no llegó a articularse en un fuerte desgaste del partido hegemónico (el PNV) y donde la crisis económica tuvo un impacto mucho menos severo, debido a la especialización industrial y tecnológica de ese territorio. Su especificidad cultural y económica le convertía, de hecho, en otro país también en términos políticos. Y sin embargo, en ese espacio, en el que Podemos tenía una presencia social (en forma de círculos, cuadros) rayana en lo marginal, los morados obtuvieron sus mejores

resultado tercera fuerza, pero sólo gracias al suplemento vitamínico de los municipalismos y de las confluencias levantó esa posición en algunas comunidades. La estrategia pasó inevitablemente factura. El objetivo mínimo de superar al PSOE se había perdido. Quedaba un parlamento plural y de difícil gobierno, condicionado por pactos complejos.

Cómo desgasta un Parlamento (2016)

2016 resultó un año anómalo, de esos que sólo con el paso del tiempo acaban mostrando su trascendencia. En muchos aspectos, fue el año de la «normalización». La política volvió a sus antiguos cauces. Estado, gobierno y partidos fueron devueltos a su posición de monopolistas de lo político. Las secciones políticas de periódicos y telediaris volvieron a recrear de forma obsesiva el juego de declaraciones y contradecaraciones de los líderes de los partidos. Apenas hubo noticias que se refirieran a nada que desbordara los canales institucionales: ni protestas, ni movimientos. Podemos y los municipalismos fueron asimilados como un actor entre otros: las operaciones al margen de los nuevos partidos y de la nueva clase política, quedaron por el momento arrinconadas. Y sin embargo, las elecciones tuvieron que repetirse, no hubo gobierno hasta prácticamente finales de año y los partidos fueron destrozados por dentro, rasgados por sus propias contradicciones. 2016 demostró que la crisis de régimen iba a continuar por otros medios, por la vía seguramente de una involución sin final previsto. Quizás lo único que terminó en 2016 fue la fase de «asalto institucional» que comenzó en mayo de 2014. La restauración distaba, sin embargo, de haberse logrado.

La excepcionalidad del periodo se mostró apenas terminadas las elecciones. Formada la nueva cámara, el teatro parlamentario abrió sus puertas al espectáculo de la representación, pero este no convenció. Durante tres meses, los partidos compitieron en «responsabilidad» para formar gobierno y demostrar «sentido de Estado». Sin mucha convicción, el PP trató de obtener el apoyo de la mayoría. Pero sin los votos de Ciudadanos y de algún partido menor, la investidura de Rajoy resultó imposible.

A su modo, el PP se había convertido en el mayor obstáculo a la posibilidad

resultados. La razón no estaba tanto en Podemos, como en la amplia zona de desgaste tanto del partido socialista, en caída libre en todo el Estado, como de la izquierda abertzale, empeñada en un proceso de institucionalización sin rumbo claro.

de una reforma interna del régimen. Amarrado al gobierno y destruido internamente por los escándalos de corrupción, que de forma continua salpicaban al equipo de Rajoy, los populares parecían no tener otra opción que mantener el gobierno a cualquier coste. Con el control de la fiscalía y de los resortes de Estado podían evitar la descomposición, o en un juego mucho más corto, la destitución de Mariano Rajoy como jefe de partido. La supervivencia del partido y de su candidato se enfrentaban, una vez más, a los requerimientos de la regeneración del régimen. La lógica del turnismo democrático empujaba, en cambio, en dirección contraria: lo preferible en términos de estabilidad institucional hubiera sido el relevo del PP, por un PSOE más o menos renovado. Con cartas cada vez más ideológicas —la unidad de España contra la posibilidad de un referéndum catalán, «lo de siempre» frente al populismo a la venezolana—, que eran rápidamente imitadas por Ciudadanos, el PP apostó por unos nuevos comicios, en los que seguramente repetiría como primera fuerza.

Atrapado el PP en su propio dilema, el juego quedaba del lado de la «izquierda», que tenía mayoría en las cámaras. Para ello era necesario que el PSOE y Podemos llegaran a un acuerdo. Resultaba claro, sin embargo, que en ninguna de las dos formaciones existía una mayoría dispuesta al pacto. De acuerdo con las formulaciones a las que tan propensos son los politólogos, el eje político se habían reorganizado en torno a la dicotomías nuevo / viejo, frente a la más desgastada izquierda / derecha. Amarrado a su bote salvavidas, el PSOE trataba de representar, ante todo, una voluntad dialogante tanto a «derecha» como a «izquierda», con gestos de amistad a uno y otro lado, en el propósito de asimilar lo «nuevo», sin dejar de distanciarse de Podemos. Las opciones de Sánchez eran claras: el pacto con Podemos sólo podía pasar por la subalternización de Pablo Iglesias, a lo que naturalmente no estaba dispuesto Podemos. Durante semanas, ambos partidos jugaron al escondite con propuestas y contra-propuestas de gobierno. Tras encallar sucesivas veces, a finales de febrero el PSOE optó por el pacto con Ciudadanos.⁷⁶ Pero sin el apoyo tácito del PP, el acuerdo de «centro» fue condenado a pasar sin pena, ni gloria. El tándem de la reforma Sánchez-Rivera no consiguió apoyos suficientes para la investidura, o lo que es lo mismo, la abstención del PP.

Incorporado como un actor político más, Podemos fue también empu-

⁷⁶ La propuesta de gobierno se cerró en un documento de compromiso: «El acuerdo para un gobierno reformista y de progreso». El texto definitivo era un brinids al sol, mezcla de medidas de transparencia y propuestas más bien inverosímiles de reforma de la administración, todo ello dentro de un marco socioliberal bastante convencional.

jado al contradictorio juego de la aritmética parlamentaria. Aunque la «hipótesis» seguía siendo «asaltar los cielos» (el gobierno, el Estado), el método se había convertido en el motivo de un nuevo ensanchamiento de la fisura que separaba a Iglesias de Errejón, o si se quiere al experimento populista, cada vez más inspirado en el peronismo,⁷⁷ y al neoeurocomunismo de Iglesias. A pocos días de las elecciones, Íñigo Errejón calificó la situación de «empate catastrófico». Término, una vez más, de inspiración gramsciana, pero reducido de nuevo a ser un registro electoral. Lo que ya era «su» fracción dentro del partido fue la única en apostar decididamente por un pacto con el PSOE a cualquier precio. Consciente de que la alternativa a unas nuevas elecciones pasaban por sumar los votos de IU, y seguramente perder posiciones en las listas de Podemos, Errejón apostó en lo posible a forzar esa opción.

Los movimientos de Errejón no pasaron por alto. Con un Pablo Iglesias apenas dispuesto a un pacto con el PSOE, y menos de la mano de Ciudadanos,⁷⁸ la ruptura entre ambos sectores no pudo esconderse a la prensa. Iglesias castigó al sector «populista» con la destitución del secretario de organización Sergio Pascual, número dos de Errejón y uno de tantos tráfugas de Izquierda Anticapitalista.⁷⁹ El 19 de abril, la afirmación de autoridad de Iglesias concluyó con una nueva consulta interna sobre los pactos con el PSOE. Con una participación similar a los mejores momentos de Podemos, 150.000 inscritos, el 88 % votó en contra del pacto con el PSOE. Podemos se decantaba también a favor de unas nuevas elecciones. Estas fueron convocadas para el 26 de junio 2016.

⁷⁷ Por aquellas fechas se daba a conocer la iniciativa Jóvenes en Pie, JP acrónimo también de la Juventud Peronista. Estas juventudes de Errejón, inspiradas en el peronismo tanto en el nombre como en la intención, reproducían no obstante el perfil político y sociológico de la burocracia de Podemos: jóvenes ambiciosos, aspirantes de clase dirigente y mayoritariamente de clase media. La iniciativa no tuvo mucho recorrido pero demostraba persistencia en una hipótesis política ya agotada, si bien funcional a la construcción de una fracción propia dentro del partido.

⁷⁸ En el debate de investidura de Sánchez, Iglesias fue claro y contundente frente a los socialistas, con una alusión a los GAL y al terrorismo de Estado: «Felipe González tiene el pasado manchado de cal viva»

⁷⁹ La destitución llegaba tras la renuncia de nueve miembros del Consejo Autonómico de Madrid próximos a Errejón, con los que se pretendía forzar la intervención de la Secretaria de Pascual y la imposición de una gestora con los miembros que habían abandonado su cargo. La operación ocurría en paralelo a las negociaciones ya mencionadas para promover una moción de censura en la Comunidad de Madrid y seguramente para reforzar la posición de esta misma fracción dentro del consejo municipal. El resultado, de haberse concretado, hubiera dado a Errejón el control casi absoluto sobre los órganos territoriales de Madrid. Al parecer la estrategia había sido definida en un documento, con el petulante y a la vez ingenuo título de «Jaque Pastor». Las intrigas eran ya el modo permanente de la organización.

A diferencia del arranque de la campaña de 2015, en esta ocasión el viento parecía soplar a favor de Podemos. Aunque tarde, sin primarias, por medio de un simple acuerdo de aparatos, la dirección de Podemos decidió sumar sus fuerzas a las de la Izquierda Unida de Alberto Garzón. La adición matemática de los 900.000 votos que ésta había recibido con Unidad Popular el 20D, colocaba a la nueva «confluencia» en condiciones de superar claramente al PSOE. Y de hecho, las encuestas, incluido el CIS, confirmaban el *sorpasso* sobre los socialistas, incluso la posibilidad de acercarse en votos al PP. Las expectativas eran, por tanto, altas. Podemos y sus nuevos aliados parecían poder cumplir la promesa de Vistalegre: «atraverse a ganar», y ganar.

Pero nada de esto ocurrió. Con el verano, y el calor despuntando con fuerza, las urnas del 26 de junio se dejaron por el camino un millón largo de votos con respecto de los obtenidos en diciembre. Unidos Podemos, fórmula electoral de la unión con IU y las confluencias autonómicas, obtuvo los mismos 71 escaños que cuando acudieron por separado. Podemos había quedado de nuevo por debajo del PSOE, tanto en votos como en asientos. Por contra, el PP repitió como primera fuerza y añadió casi 700.000 nuevos votos, en buena parte arrancados a la fuerza subsidiaria del orden constitucional, Ciudadanos.

¿Qué había ocurrido? Pocos previeron el descalabro. Los días previos vinieron agitados por el triunfo de la salida de Reino Unido en el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. Pero el «miedo al cambio», apenas repercutió en el incremento del voto al PP, que además sólo se nutrió del retorno de algunos de «sus» antiguos votantes. La explicación tenía que lidiar con lo que mostraban los datos y las encuestas posteriores: la vuelta a la abstención de un gran número de electores de Podemos y también de IU. La campaña, dirigida por Íñigo Errejón se había centrado en los tópicos de la centralidad: los guñíos al electorado socialista, jalonados con la reivindicación de Podemos como la nueva «socialdemocracia» y de «Zapatero como el mejor presidente del país». Tales eslóganes poco o nada podían entusiasmar a lo que había sido el motor de las victorias electorales previas, las redes que provenían del 15M, y que en esta ocasión permanecieron básicamente apáticas. Aburrida, sosa, ya repetitiva, la campaña no encontró —tampoco buscó— forma de «desbordarse» más allá de los canales del partido.⁸⁰ Para muchos,

⁸⁰ Frente a los actos todavía masivos de la campaña de diciembre, la de junio destacó por su incapacidad para contagiar y convocar entusiasmo. El *meeting* central de la campaña, el 11 de junio, con todas las figuras de la nueva política en Arc del Triomf (Barcelona) apenas llegó a contar con 3.500 participantes, frente a los 12.000 de Caja Mágica (Madrid) del domingo 13 de diciembre.

la nueva clase política y los nuevos partidos resultaban cada vez más parecidos a los viejos. Los acuerdos de despachos, las retóricas desgastadas y oportunistas, el tacticismo hipersensible a los cambios de coyuntura, además de unos canales de participación inoperantes y marginales, difícilmente podían entusiasmar, siquiera movilizar, a aquellos capaces de promover eficazmente el voto a la coalición. El vasto archipiélago que empujó y luego cabalgó las sucesivas olas políticas que se habían levantado desde el 15 de mayo de 2011 permaneció prácticamente ajeno a la segunda vuelta de elecciones. Una vez más, Unidos Podemos pagó su incapacidad para entender realmente el ciclo. Pero en esta ocasión ya no había vuelta atrás.

Con las elecciones del 26 de junio, el ciclo electoral se podía dar por cerrado. Sin embargo, la cámara resultante era apenas distinta de la surgida en diciembre. La formación de gobierno no podía ser automática. Y de nuevo durante tres meses se repitió la misma obra de teatro, si bien con menos interés del público. Una propuesta de Rajoy para formar gobierno, esta vez con apoyo de Ciudadanos, pero sin escaños suficientes, devolvió al PSOE de Sánchez la llave para formar gobierno.

La amenaza de nuevas elecciones volvía a cernir su sombra sobre el conjunto de los actores políticos. Pero a pesar del indudable descrédito que esto acarreaba a la clase política, el riesgo era muy distinto para cada partido. Para el PP suponía una nueva oportunidad de afianzar su mayoría. Rajoy podía emplearse en el mismo juego que dirigió su política desde que ganara su primera legislatura: el desgaste. Quizás no consiguiera remontar hasta alcanzar la mayoría absoluta de Aznar, pero sabía que el drenaje de votos de Ciudadanos, y la perspectiva de una abstención creciente que castigaría sobre todo a la izquierda, jugaban a su favor. Por las mismas razones, para Ciudadanos las perspectivas eran mucho peores. Había cumplido ya su papel. La negativa del PP a un gobierno con el PSOE, le había puesto a los pies del partido de la verdadera derecha. Apenas podía sostener ya un perfil distinto, ni siquiera en materia de regeneración democrática.

Por paradójico que parezca, considerada desde la perspectiva de la estabilidad institucional, y por tanto de la neutralización de los efectos del 15M, la ventaja de la nueva situación estaba precisamente en su inmovilismo. Desde el 20 de diciembre, sólo las elecciones del 26 de junio habían servido como motivo de movilización, y de todos modos con un resultado decepcionante. La llegada al Parlamento le sentaron

mal a Podemos y a las confluencias. Como era previsible, en ausencia de movimiento, las posibilidades de hacer política en la cámara se limitaron a dar vueltas en el vacío, asomando en ocasiones con declaraciones grandilocuentes, pero con un impacto público menguante. Sin capacidad para liderar la formación de gobierno, Podemos era víctima de su propia hipótesis, reducida en última instancia a Estado o nada. La situación tendía a acorralarlo en el segundo término. La crisis estaba acotada dentro del sistema de partidos pero de una forma agónica y sin solución a la vista.

El punto más débil estaba en el PSOE. El 26J dejó claro que no había suelo en la caída de los socialistas, y que el voto dirigido a Podemos no volvería. Enfrentado a un PP que se negaba a dejar paso al turno, para el sucedáneo de Iglesias, Pedro Sánchez, las opciones sólo eran dos: o aceptar el gobierno del PP, agotando la escasa credibilidad que le quedaba al partido, o intentar una fórmula de alianza que de algún modo tenía que pasar por el apoyo de Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes. La situación fue resuelta por la vieja cúpula del partido, tras las elecciones autonómicas de Euskadi y Galicia del 25 de septiembre. Los pésimos resultados —el PSOE quedó tercero en Galicia frente a una mayoría absoluta del PP y cuarto en Euskadi— empujaron a la antigua dirección, Felipe González y Zapatero incluidos, a dar la puntilla a la tibia renovación que representaba Sánchez. El 28 de septiembre dimitió la mitad de la ejecutiva socialista. Poco después se impuso una comisión gestora que desplazaba a Pedro Sánchez de la dirección. A finales de octubre, 68 diputados socialistas se abstuvieron en la votación parlamentaria que permitía a Rajoy formar gobierno. La vieja clase política del país había mostrado, por fin sin máscaras, su solidaridad interna, aún a riesgo de dar al traste con toda vía de renovación.

El premio se rotulaba «España tiene gobierno». Hicieron falta diez meses, en los que la administración de los funcionarios demostró el carácter eminentemente superfluo de la clase política. Hizo falta reventar por dentro al partido por antonomasia de la democracia española. Y todo para colocar al frente del país a la misma dirección política del mismo partido político, que trufado por el interminable reguero de escándalos de corrupción, padecía el merecido descrédito de la mayoría de la población. Con semejantes mimbres, por muchos que hubieran sido los errores de Podemos, se podía asegurar que la crisis política seguiría abierta en el medio plazo.

«El 15M en las instituciones»: primeras conclusiones

El ciclo electoral se había agotado a una velocidad trepidante. En poco más de dos años y medio, la ola que provenía del 15M había dado lugar a distintos experimentos políticos, destilando una secuencia de éxitos electorales sin precedentes. En cierto modo, el 15M —o al menos una parte sustancial del mismo— había llegado a las instituciones. En todos los parlamentos del país y en casi todas las ciudades existía representación de un grupo reconocible bajo la marca de la «nueva política». Y sin embargo, tras el éxito electoral parecía que había poco más que proponer.

Desde su estallido en mayo de 2011, la ola de movilizaciones elevó la improvisación a condición de virtud política. Los nuevos partidos, la «nueva política» no escaparon a la lógica de la urgencia. Tras el éxito de Podemos en las europeas, en el filo de un año y medio que se prometía frenético, la estrategia política se redujo a conquistar el máximo de cuota de representación institucional. Sin embargo, más allá de la consigna que marcó época —«ganar, ganar, ganar»—, apenas había ideas, un proyecto político, y lo que es más grave, una intuición de que otras máquinas y motores resultaban necesarios para sostener a largo plazo las posiciones institucionales.

El vacío se intentó rellenar con una retórica protagonizada por las apelaciones a la «gente», a la «ciudadanía», al «pueblo». Las sucesivas elecciones empujaron el ascenso de una nueva generación política que prometía honestidad, transparencia, respeto al mandato popular. Pero lo cierto es que frente a la riqueza de contenidos políticos que se expresó en los momentos que podríamos llamar de «asamblea» —como en el «proceso constituyente desde abajo» que se dio en los primeros meses del 15M, o incluso en la elaboración colectiva de los programas municipalistas—, la «fase institucional» sufrió un rápido desgaste.

La pérdida de «contenidos» se justificó primero en la necesidad de «incluir a los que faltan» y después en la de «gobernar para todos». El movimiento de cuestionamiento de la «representación» y la prevención de la «institucionalización» se había disuelto ante los requerimientos de una nueva política que terminó por parecerse demasiado pronto a la vieja. Al fin y al cabo, la ilusión democrática, de la cual el 15M nunca terminó de desprenderse, se transformó en las instituciones en una afirmación impotente de la «autonomía de lo político». Quizás fuera un resultado inevitable de la concentración del esfuerzo en la construcción de «maquinarias electorales», al tiempo que languidecían las iniciativas

de movimiento. La «autonomía de lo político» proclamaba el privilegio de la política institucional, desatada de los poderes efectivos y de la relación de fuerzas que atraviesan la sociedad. El gobierno y el Estado devenían palanca autónoma de los procesos de cambio: «Las cosas se cambian desde arriba».⁸¹ La ficción no tardaría en disiparse convertida en desencanto y apatía, al tiempo que se imponían las inercias de la autorreproducción de la nueva clase política.

La tendencia se acusó a lo largo y ancho de todo el frente institucional. En las siete u ocho grandes ciudades con gobiernos protagonizados por las candidaturas municipalistas, los llamados «ayuntamientos del cambio» se toparon, una y otra vez, con los límites materiales del gobierno formal. La falta de competencia, la financiación escasa, la inexperiencia de los nuevos equipos, pero sobre todo el rápido contramovimiento de los viejos partidos políticos, de los medios de comunicación y de los grupos económicos puso rápidamente a la defensiva a los nuevos consistorios. Una política de gestos, aplicada a los temas más variopintos —retirada de retratos del monarca, de símbolos del franquismo, declaraciones municipales a favor de los refugiados de la guerra de Siria, campañas contra las agresiones homófobas, etc.—, se convirtió, en demasiadas ocasiones, en el sucedáneo de una transformación institucional para la que había pocos recursos y para la que había que asumir batallas mucho más duras.⁸² Pero incluso en el terreno de los gestos, los ayuntamientos, singularmente el de Madrid, tuvieron que retroceder ante las ofensivas de una derecha neocon bien pertrechada a la hora de ganar ventaja en las batallas culturales.⁸³

⁸¹ Poco después de los comicios del 26 de junio, en un curso de verano de la Universidad Complutense, Pablo Iglesias decía: «Nosotros aprendimos en Madrid y Valencia que las cosas se cambian desde las instituciones, esa idiotez que decíamos cuando éramos de extrema izquierda de que las cosas se cambian en la calle y no en las instituciones es mentira».

⁸² Los dos elementos fundamentales, a escala municipal, recogidos en casi todos los programas eran: (1) la auditoría de los pasados gobiernos, lo que implicaba revisar toda la contratación pública y destapar las tramas clientelares encastradas en los presupuestos públicos; y (2) una política de remunicipalización a gran escala de los servicios y el patrimonio público cedido o malvendido a determinados grupos económicos. Pasados más de año y medio (y por lo tanto la mayor parte de la legislatura útil), las transformaciones de los consistorios en este terreno habían sido poco más que testimoniales.

⁸³ Caso sonado fue la dimisión, poco después de la constitución del gobierno municipal, del concejal de cultura Guillermo Zapata por unos tuits sacados de contexto y publicados bastante años antes. En estos tuits, el entonces activista bromeaba (en una suerte de concurso de humor negro) con el holocausto y las víctimas de ETA. La alcaldesa Manuela Carmena, con una sensibilidad siempre ajena al 15M, dejó caer a su concejal y actuó de forma parecida en sucesivos casos que se

De acuerdo con un guión que en ningún caso se puede considerar único, y tampoco exento de excepciones, el retroceso de los nuevos gobiernos, siempre con escaso apoyo de Podemos, se expresó en el retorno a un lenguaje de la responsabilidad institucional. La consigna «gobernar para todos» acabó por justificar políticas concentradas en una gestión honesta, pero sin capacidad de ofensiva sobre las élites económicas que durante décadas predaron sin control sobre los presupuestos públicos. La crítica acabó por acuñar el término «gubernismo»⁸⁴ para definir la parálisis de la transformación institucional. Tras más de año y medio de gobierno, casi la única línea de transformación institucional, tibia y trabada por las ingenuidades de la «democracia procedimental» era la que apuntaba a la extensión de los mecanismos de participación física y digital, aplicada principalmente en los llamados presupuestos participativos.⁸⁵ En casi todo lo demás, los ayuntamientos se mostraron notablemente parcos. La reinención de la democracia local, que había sido el proyecto último del municipalismo, y que obviamente comprendía cambios sustanciales de la ley de Bases del Régimen local e incluso de la propia Constitución, se quedó en el camino de las reformas tibias y de la gestión honesta.

Si los nuevos ayuntamientos, siempre con excepciones «degeneraban» rápidamente en el «gubernismo», empujados por la inercia y los límites de la institución, en Podemos el «estatismo» fue siempre el elemento principal de la «hipótesis». De forma paradójica, sin embargo, en su constitución como «partido de gobierno», «partido de Estado», se ventiló la principal contradicción con el motor democrático del ciclo: el movimiento —masivo, multitudinario— que caóticamente se constituyó tras el 15M. En las claves «populistas» del proyecto esta contradicción se trató de resolver en términos de «sujeto», con la mágica invocación a la «construcción de pueblo». Podemos quedó así atrapado en un trile-

presentaron durante los meses siguientes, relativos a la Memoria Histórica y la función de unos titiriteros en el carnaval de 2016. Los artistas fueron acusados de enaltecimiento del terrorismo por una obra de ficción explícitamente grotesca.

⁸⁴ El término empezó a circular a las pocas semanas, ante el creciente malestar frente a la gestión de Manuela Carmena. Desde entonces se convirtió de uso corriente en las críticas que provenían de los ámbitos de movimiento.

⁸⁵ A los pocos meses, en muchos ayuntamientos se redactaron los primeros reglamentos de participación ciudadana, por otra parte muy parecidos a los de los años setenta. En los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona se lanzaron las plataformas de participación digital Madrid Decide y Decidim Barcelona. Concebidos como espacios principalmente «expresivos» —de propuesta y voto de propuestas— fueron poco utilizados por la población.

ma apuntalado en los términos 15M, «pueblo» y «partido». Al convertirse y definirse cada vez más como partido, y menos como movimiento, Podemos tendió inevitablemente a comportarse según la lógica «de partes», de representación de «intereses», con la que habitualmente son identificados los partidos. Para una parte del «movimiento» —a veces en términos puramente intuitivos, a veces como crítica consciente—, Podemos se había convertido en «un partido más»: la decantación vertical de la organización, las continuas luchas intestinas y el regate corto del giro táctico permanente no ayudaban a pensar de otro modo.

Su constitución como partido, lo aislaba así de ese territorio amplio y difuso —de «movimiento»— que le había dotado de su fuerza irresistible en los primeros tiempos. El metabolismo de Podemos dirigido a convertir la «mayoría social» en «mayoría política» produjo un increíble despilfarro de energía política. En ningún otro punto la improductividad del partido resultó más evidente. Fue un coste asumido conscientemente, pero que resultó inasumible a medio plazo. La renuncia a construir organización, estaba contenida en el objetivo declarado de llegar al gobierno y desde el Estado actuar como herramienta de construcción política. Pero ni siquiera de acuerdo con su guión oculto de inspiración «bolivariana», Podemos supo traducir bien las enseñanzas de América Latina. En la gramática del ciclo latinoamericano, el partido fue después —no en términos temporales sino políticos— del acto de constitución política del «pueblo». En Ecuador y Bolivia, también en Venezuela, los nuevos gobiernos progresistas vinieron de la mano de la demanda de una constituyente, no de un partido de Estado.

El 15M fue *in nuce* un movimiento político amplio en clave constituyente. Una traducción no estrictamente «partidaria» del movimiento tendría que haberse empeñado en la construcción de una plataforma electoral amplia, capaz de incluir a todo aquello que al final se escurrió en el proceso de decantación interna de Podemos, que se organizó en las candidaturas municipalistas o que no tuvo traducción política debido a una desafección rápida con el partido. Quizás sólo de este modo se podría haber alcanzado la mayoría electoral. Pero Podemos acudió tarde y mal a todas las invitaciones que se le presentaron para constituirse como expresión política y multitudinaria del cambio: arruinó su base social (otoño de 2014), desprecio los municipalismos (primavera de 2015), rechazó la confluencia democrática (verano de 2015) y finalmente sólo fue capaz de apostar por una coalición de despachos (primavera de 2016). Caso de haber optado por la hipótesis de una confluencia amplia, democrática

y constituyente, seguramente, el movimiento abierto tras el 15M no se hubiera agotado en un nuevo proyecto de gobierno con todos sus rituales y límites (estabilidad, responsabilidad, reformas tibias). Probablemente, hubiera mantenido durante algunos años, las suficientes reservas como para llegar hasta la siguiente crisis con posibilidades de formar una asamblea constituyente, dirigida a un cambio del modelo de Estado.

Al renunciar, debido a su «estatismo», a aquello que constituye por excelencia un «pueblo político» —el «acto constituyente», la redacción de un nuevo pacto, de una nueva constitución—, la dirección de Podemos precipitó contra sí todos sus límites: la incapacidad para hacer frente a Ciudadanos, de incorporar al proyecto político constituyente a todo lo que se expresó en las candidaturas municipalistas y de movilizar un abstencionismo reacio a los juegos partidarios. En última instancia, resultó incapaz de entender la contradicción política entre constituirse como partido con aspiraciones de gobierno y conformarse como movimiento que impone electoralmente el debate sobre una nueva constitución. En la decantación hacia el primer término contribuyeron su escasa confianza en la propia madurez del 15M, de los movimientos sociales y de los sectores políticamente activos. Así pues, renunció a dar un salto de escala constituyente que condujera a otra forma de Estado: única situación —junto a las guerras y revoluciones— que constituye un «pueblo político».

Ciertamente, la bandera constituyente estaba lejos de animar un radical cuestionamiento del régimen social y económico. En el mejor de los casos, esta hipótesis habría chocado con los límites y ficciones del «acto constituyente», pero a la hora de consolidar una memoria viva del «poder constituyente» y de dar cuerpo a los contrapoderes de un nuevo ciclo político, el avance hubiera sido gigantesco. Entre los muchos factores ya señalados, la urgencia por consolidarse como élite política y el incurable estatismo de la izquierda española, acabaron por decantar las opciones abiertas en la zona pantanosa, y a la postre miserable, de la política institucional.

TERCERA PARTE

ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN: CRISIS DE RÉGIMEN, CLASE MEDIA Y RESTAURACIÓN

La velocidad que imprimió el acontecimiento 15M, el surtido de hechos e iniciativas que le siguieron, exigen una lectura propiamente histórica, tal y como se ha intentado en los dos capítulos precedentes. No obstante, apuntalar una interpretación (social, política, profunda) requiere abordar en detalle, aún a riesgo de inevitables reiteraciones, aquellos aspectos centrales que en el relato histórico sólo se han atendido de un modo superficial. En las páginas que siguen se intenta elaborar una interpretación basada en la crisis de larga duración de las clases medias. Este proceso subyace e informa prácticamente todos los aspectos de la crisis política, incluida la ola de movilización posterior. Una lectura de este tipo no puede limitarse, sin embargo, a los aspectos de «clase»; al mismo tiempo tiene que comprender estos factores en su relación con la crisis política, y especialmente en su impacto sobre las viejas élites del régimen. Dentro de este marco, se debe analizar además la cultura política del movimiento, la traducción política del malestar, y esto tanto en su «forma 15M», como en su «forma Podemos».

El objetivo, como se podrá adivinar, no es otro que determinar los límites del ciclo, pero también las potencias y las zonas de inestabilidad. Quizás la consecuencia más interesante de esta interpretación es que el futuro no parece marcado por la normalización institucional. El horizonte inmediato es de desestabilización persistente, de dificultad para un arreglo político viable. No se esconde, que lo que se quiere es repolitizar la explicación, y que el objeto no es otro que emplearla como un acicate para empujar más allá de la «fase institucional».

Crisis de régimen, pero ¿qué crisis?

La crisis política se ha mostrado ante todo como una crisis —con reinvención posterior— del sistema de partidos. No es casual. La flexibilidad de la democracia representativa reside en su capacidad para bordear la rigidez interna de los partidos concretos y las escalas políticas en las que estos se definen —izquierda / derecha, tal o cual adscripción nacional—, incorporando al juego electoral nuevas formaciones que «representan» posiciones políticas no necesariamente encajadas en patrones previos.¹ La fortaleza de la democracias liberales descansa en este continuo juego de negociación de valores políticos vueltos relativos, esto es, integrados en el juego representativo, y por lo tanto neutralizados en tanto «signos» del intercambio político reglado.

Al matizar, y luego renunciar a los elementos de crítica de la representación —que todavía podían tener un lugar en la demanda de proceso constituyente—, el 15M, o al menos su fracción mayoritaria, asumió su integración en el marco de la democracia representativa. De forma congruente, la centralidad política fue restituida a las formas de la política convencional, el acceso a los niveles de gobierno, sobre los que se hizo descansar la posibilidad de un «cambio», vuelto paulatinamente más impreciso, vago e indefinido. Esta es, en pocas palabras, la conclusión que se puede extraer del trepidante desarrollo de la fase institucional. No obstante, cabe preguntarse por qué la crisis política fue tan lejos como para quebrar la hegemonía política de los dos partidos que habían dominado la política española durante los primeros cuarenta años de democracia, y a la vez por qué la ruptura apenas fue más allá de la constitución de nuevos partidos. La razón es doble, y se encuentra en los dos significados que se pueden atribuir a la crisis del régimen político español: la crisis de legitimidad de la clase gobernante y la quiebra de la sociedad de clases medias, fundamento material del régimen.

¹ La fortaleza de la democracia liberal descansa en el sistema de partidos y en el Parlamento, en su capacidad para integrar en una única clase política, lo que en principio podrían parecer diferencias irreconciliables. Este argumento opera en dirección contraria a la perspectiva de los teóricos clásicos del pensamiento reaccionario, como Schmitt que señalaba a la constitución de «partidos totales» como la ruina del Estado. En cambio, el pensamiento liberal —léase a Kelsen, o incluso del propio maestro de Schmitt, Weber—, consideró el parlamentarismo como un método de integración política. Algo que podemos comprobar históricamente en la sucesión de ideologías, banderas y partidos en la historia de Europa occidental. El único «pero» a este argumento es que la integración de los partidos en la democracia liberal resulta operativa sólo en la medida en que los partidos sean eso, fundamentalmente partidos; o en otras palabras, en la medida en que no sean expresión «orgánica» de una fuerza extraparlamentaria como pueda ser el movimiento obrero o la Iglesia católica.

La debilidad de las élites de Estado

La primera cuestión es superficial, resulta casi obvia: el rápido descrédito del sistema de partidos mostró la rigidez relativa de las élites de Estado. Con el término «élites de Estado» se alude a algo más que a la clase política y a sus partidos. Estas comprenden todas aquellas figuras privilegiadas, con capital-prestigio y poder efectivo dentro del aparato representativo que depende de los partidos y de la concurrencia electoral, así como dentro del aparato administrativo regulado por la carrera política. Esta forma de las élites incluye también a las principales figuras del mundo académico, del periodismo, de la «cultura», al igual que a las llamadas instancias de representación de los intereses económicos —principalmente los grandes sindicatos y la patronal—, todas ellas dependientes del presupuesto público o de rentas políticas. Las élites de Estado constituyen eso que se llama «lo oficial» de un país, o lo que en lengua inglesa, se ha dado en llamar la «nación política»; comprenden tanto a la clase política, como a la llamada «sociedad civil».²

Ya sea en el Estado, o aparentemente fuera del mismo, las élites de Estado aparecen unificadas. Por lo general, y a pesar del disenso público en aspectos superficiales, actúan de forma concertada en todos los asuntos relevantes; y reproducen su posición por medio de una validación continua que tiene tanto forma «institucional», como «cultural». Por eso es importante reconocer el papel protagonista que tienen determinados actores (periodistas, intelectuales, representantes de la «cultura»), que más allá de la crítica superficial, refuerzan una y otra vez la unidad de esta «forma» de las élites, al tiempo que se confirman como parte de las mismas.

Naturalmente, las élites institucionales no coinciden con el viejo término de la «clase dominante», que tiene lugares y formas de acción mucho más opacas e invisibles, esto es, que no pasan por «lo oficial» y no requieren en primera instancia de los mecanismos legitimadores

² A este respecto la división entre sociedad política y sociedad civil se resuelve en los Estados modernos en una simple cuestión de «posición», del todo arbitraria cuando se considera su dependencia en última instancia del presupuesto público o de su articulación con el Estado. Nos podemos referir aquí también a los términos gramscianos, y especialmente a la lectura de aquellos pasajes —que nunca tuvieron la pretensión de formar una obra acabada—, en los que la sociedad civil era tratada según la fórmula del «Estado más allá del Estado». Véase principalmente la selección de los *Cuadernos de la cárcel* recogida en el título A. Gramsci, *La política y el Estado* (varias ediciones). Una buena interpretación de Gramsci acerca de esta cuestión se puede leer en Perry Anderson, *Las antinomias de Antonio Gramsci*, Barcelona, Fontamara, 1978.

del Estado.³ Antes bien, las élites de Estado sólo son «dominantes» — normalmente de una forma puramente nominal o subsidiaria— en la medida en que representan al Estado, y a lo que tradicionalmente se llama sociedad civil. Las élites institucionales constituyen la «clase gobernante» en un sentido amplio, que más allá de la clase política, se reconoce como representación subsidiada (por el Estado) de intereses sectoriales, como los sindicatos y la patronal, pero también de los «intelectuales», los especialistas en producción de «opinión pública» y los representantes de la «cultura».

Tal y como se ha visto, la centralidad del papel de estas élites de Estado en la crisis del régimen político español ha residido en su debilidad. En España no han quebrado tanto las «instituciones políticas», similares en casi todo a las de otros países europeos y sometidas a tensiones de largo recorrido, como sus «representantes». Sin duda la crisis institucional española descansa en la crisis de Estado que se puede reconocer en muchos otros países, pero no se hubiera decantado como «crisis política», si no se hubiera visto acompañada del vacío de legitimidad de las élites que administran el «régimen». No se trata de un fenómeno coyuntural: la debilidad de las élites es en España una constante histórica y se manifiesta en forma de «desgaste y descrédito» en la evolución de casi todos sus «régimenes políticos» —causa también de su inestabilidad—. El Estado español, a diferencia de las viejas potencias imperiales europeas, carece de instituciones específicas para la reproducción de élites, como las Écoles Normales francesas o como las universidades y colegios más reconocidos del Reino Unido (el complejo Oxford-bridge, la London School of Economics, etc.). Basta decir que lo que aquí pasan por centros de formación de élites⁴ apenas pueden servir de espejo de estas instituciones europeas, en su mayoría con varios siglos de historia a sus espaldas.

Históricamente, y también en la democracia española, la formación de las élites institucionales españolas se produce antes en el juego político, esto es, dentro del propio campo institucional, que por medio

³ Empleo el término clase gobernante como sinónimo de élites institucionales o de Estado, pero con la salvedad de que este conjunto social no es una «clase social» en sentido estricto, cuanto una «representación» del Estado, lo que al mismo tiempo, la convierte en una suerte de pantalla del Estado sin ser realmente el sujeto del poder real o efectivo. El término ha sido ampliamente empleado en teoría política con otros propósitos.

⁴ Por señalar los más conocidos: el colegio del Pilar de Madrid para la generación de la Transición, la escuela de derecho y económicas de los jesuitas, o los modernos centros tipo ESADE o IESE.

de mecanismos reglados —fundamentalmente académicos— de reproducción. Los partidos, los cuerpos superiores del Estado, las carreras profesionales son los lugares que sirven de trampolín hacia las posiciones características de la clase gobernante. El efecto es paradójico. De una parte, las élites de Estado españolas tienen perfiles aparentemente más democráticos que en otros países que disponen de mecanismos propiamente aristocráticos de reproducción de sus cuadros superiores. La política y el Estado son en España mecanismos principales de ascenso social de las clases medias, al tiempo que el funcionariado y la protección estatal son el principal resorte de reproducción de las clases medias. Esta centralidad del Estado, y la subsiguiente anarquía en el recuento de las élites, dota a la política española, y en conjunto a la democracia española, de un carácter que podríamos llamar «mesocrático». Por mesocracia se debe entender el carácter político del Estado en un país de clases medias y gobernado aparentemente por y para las clases medias.⁵ De otra parte, sin embargo, la relativa ausencia de mecanismos reglados de selección y reproducción de esta clase gobernante apenas consigue garantizar una mínima consistencia interna.

Resumiendo, las élites institucionales españolas carecen de la autoidentificación y del boato de herencia aristocrática que todavía rezuman buena parte de las élites europeas, formadas en las escuelas de élite. En la historia reciente, y en lo que se refiere a su configuración concreta durante la Transición, las élites españolas aparecen demasiado ligadas al «régimen», esto es, demasiado «próximas al gobierno» y no al Estado. En la formación de la democracia española, las nuevas élites de Estado se formaron a partir del reclutamiento masivo de aquellos elementos que representaban a la «izquierda»; una generación que habían recibido una educación sentimental —por superficial que fuera— en el «antifranquismo» y que era, a su vez, un producto de la expansión de la educación universitaria. Ciertamente, su incorporación al Estado se produjo sobre un sustrato previo, formado por los jóvenes retoños de la clase política franquista, que medró bajo el marco de los mecanismos

⁵ Merece la pena aquí hacer una precisión importante: la «mesocracia» es sólo aparente, opera como una representación del «régimen» que se identifica con (y trabaja para) las clases medias, lo que resulta en una verdad sólo a medias. No se puede dejar de analizar que la mayor parte de las políticas de Estado siguen fuertemente ancladas a los intereses del capitalismo familiar español, y desde hace ya unas décadas a las conexiones entre este y el capitalismo financiero global. Es cierto, sin embargo, que las élites de Estado en España no son reclutadas únicamente, ni siquiera mayoritariamente entre las élites económicas, sino fundamentalmente entre las clases medias profesionales, que constituyen el epítome de las clases medias españolas.

de promoción interna del régimen. Y no es casualidad que todavía hoy los altos cuadros del Partido Popular provengan principalmente del funcionariado público, y especialmente de cuerpos de élite como la abogacía del Estado, y los del partido socialista de la docencia universitaria y de la propia burocracia interna del partido.

En lo que se refiere a los aparatos cultural y académico, las élites institucionales de la democracia quedaron también configuradas en aquellos años. Pero la expansión de estos cuerpos dio como resultado inevitable su rápida saturación. A principios de los años ochenta se produjo un bloqueo relativo de la carrera docente, debido a la «funcionarización» de una gran cantidad de profesores no numerarios, de origen y «educación» similares a los de los altos cuadros del PSOE. De forma parecida, en los terrenos más lábiles de la «cultura» y la «intelectualidad» quedó definida una cierta forma de «oficialidad», estrechamente conectada con la nueva clase política y consagrada por un específico plantel de nombres. Por último, y ya en el terreno del periodismo, durante las décadas de 1980 y 1990, el trabajo del grupo PRISA y el periódico *El País* jugaron en estos «campos» el mismo papel que el PSOE en la política. Este conjunto de aparatos acabó por definir una específica gramática política y cultural, que tendía a reproducirse en un discurso que, por pobreza de variaciones, se parecía cada vez más a una homilía recitada en referencia a los mismos figurones y santones. En términos algo más que intuitivos, el término Cultura de la Transición, puesto en circulación en estos años, ha tratado de recoger los efectos y las características de este discurso.⁶

El carácter genéticamente «político» de esta clase gobernante tenía, no obstante, un severo inconveniente: identificó excesivamente al régimen político con la propia composición y estilo de las élites institucionales, hizo progresivamente indistinguibles clase y régimen, de tal modo que la erosión de la legitimidad de la primera acabaría por arrastrar al segundo. Casi desde el principio, las élites empezaron a ser

⁶ El concepto se debe a Guillem Martínez, coordinador del libro colectivo *CT o cultura de la Transición*, Madrid, DeBolsillo, 2012. Sobre los intelectuales y la Transición, se debe leer también Gregorio Morán, *El cura y los mandarines (Historia no oficial del Bosque de los Letrados). Cultura y política en España, 1962-1996*, Madrid, Akal, 2014. Y en términos de denuncia periodística, Ignacio Sanchez-Cuesta, *La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política*, Madrid, Catarata, 2016. Si se quiere una lectura más especializada y únicamente dirigida a analizar la situación de la filosofía en España, véase: Francisco Vázquez, *La filosofía española: herederos y pretendientes. Una lectura sociológica (1963-1990)*, Abada, 2009.

identificadas como demasiado cercanas al gobierno (el poder), y demasiado poco identificadas con la ficción de lo «común» que se representa en el Estado. Su propia presencia acabó por corromper la sustancia de su legitimidad que reside en la neutralidad del Estado. El problema resultó crítico en el «polo izquierdo» del espectro elitista. Y esto en la medida en que sus prerrogativas descansaban en la integración de los movimientos críticos, o en otras palabras, en su capacidad para dirigir una reforma institucional en caso de crisis. Tal y como hoy queda demostrado, un papel que estas mismas élites eran incapaces de cumplir.

Convertida en el cemento del régimen, la identificación con el legado de la Transición por parte de la clase política «de izquierdas» acabó por convertirse en el principal factor de su rigidez. A ello contribuyó el evidente sesgo generacional de buena parte de sus miembros, que en su mayoría alcanzaron privilegios, cargos y capital en los comienzos de su vida adulta, y que en raras ocasiones tuvieron que pasar por las largas y complejas mediaciones que implican los mecanismos reglados de recuento de élites. En nada debe sorprender así que la evolución del régimen político haya seguido una curva de erosión que discurre en paralelo con el agotamiento biológico de esta generación, al tiempo que se se producía una progresiva ampliación de la distancia entre estas mismas élites institucionales y las dinámicas vivas de la sociedad española. Los desajustes se produjeron desde muy pronto, pero sólo se convirtieron en factores de crisis a medida que pasaron los años.

El síntoma más superficial de esta rigidez se volvió patente con la rápida saturación de las posiciones de mando y prestigio, convertidas en monopolio de una única generación política. La generación de la Transición resultó incapaz de garantizar su reemplazo, despreciando reiteradamente a las generaciones que venían por detrás. Los lamentos sobre el «desencanto», el «pasotismo», la «despolitización» y la «incultura» de los jóvenes se convirtieron en una letanía recurrente desde finales de los años setenta, las más de las veces acompañados por elogios igualmente infundados al legado de «educación, prosperidad y bienestar» que la generación de la Transición había dejado a sus sucesores.

La autocomplacencia de los «viejos» y la escasez de «puestos» hicieron que la circulación de élites se produjera a cuenta gotas, primando casi siempre el servilismo y la reproducción mimética de estilos, garantía también inevitable de la creciente mediocridad de la clase gobernante, cuando esta trataba, a trancas y barrancas, de organizar su sustitución.

Que la «regeneración democrática» haya sido encabezada desde fuera de esta clase política, y tan tarde, es seguramente la prueba mayor de su fracaso como «clase» en el gobierno, de su fracaso como élite.

Los partidos políticos, punto especialmente sensible a la proliferación de la corrupción por su cercanía al poder político, han sido sin duda el escenario principal de la degeneración de la élites de Estado. La permanencia de los mismos actores, la ausencia de renovación, también de una verdadera «competencia por el poder», determinaron la tendencia a la patrimonialización de lo público, una corrupción que, presente desde los primeros tiempos de la democracia, se volvió sistémica. No obstante, el fenómeno de los partidos corruptos ha sido la punta de lanza de un proceso más vasto de degeneración de la clase institucional, que afectó igualmente a los grandes grupos de prensa, a los mandarines universitarios y a lo que llamamos «cultura».

De acuerdo con este guión, el envejecimiento, la corrupción moral (amén de material), el narcisismo y la autocomplacencia se convirtieron en las marcas distintivas de las élites de Estado. Y de nuevo según este patrón, las contratendencias y señales de alarma, los experimentos tímidos de reforma y renovación, que se manifestaron en distintos terrenos, fueron sistemáticamente desoídos o abortados. Conviene reconocer que a pesar de la crisis patente de la política española, esta ha sido incapaz de encontrar instrumentos de reforma viables. La emergencia de los medios neoconservadores durante los años dos mil apenas consiguió construir un marco nuevo para la derecha política del país,⁷ aún cuando seguramente pudo romper parcialmente la hegemonía cultural que la izquierda «progre» había mantenido desde la Transición, y que parecía el santo y seña de la democracia española. De igual modo, y como reacción tardía, el intento del primer gobierno Zapatero, dirigido a recuperar la iniciativa y renovar el estilo de la «izquierda», se quedó en un simple intento. Este experimento descafeinado de renovación, que encontró su apoyo en determinados sectores de la «cultura», fue rápidamente engullido por las viejas máquinas del partido y por la inercia política encabezada desde fuera principalmente por el grupo PRISA.

⁷ Merece la pena analizar el marcado sesgo antisistema de estos medios y también que estuvieran tan bien armados contra los lugares comunes del «progresismo» que se consolidó tras la Transición. No es casualidad que lo más inteligente del plantel neocon español esté formado por antiguos izquierdistas como Jiménez Losantos, Pio Moa o Gabriel Albiac. Para una lectura de este fenómeno véase: P. Carmona, B. García y A. Sánchez, Spanish Neocon. *La revuelta neoconservadora en la derecha española*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2012.

Con estas premisas, sorprende poco que cuando estalló la crisis política, pocos, realmente muy pocos, intuyeran la magnitud de lo que estaba sucediendo. El 15M sorprendió a sus protagonistas, pero a las élites institucionales las pilló completamente a contrapié. La reacción unánime contra el movimiento demostró, una vez más, que habían vivido más de tres décadas de espaldas a todo aquello que de fundamental había sucedido en el país.

Con la crisis, se inició la fase agónica de la clase gobernante. La depresión económica y el 15M acabaron por dar la puntilla a la legitimidad que todavía les quedaba. No es sólo que el movimiento de las plazas apuntara directamente a la clase política y a los grandes medios de comunicación. La crisis económica apuntaló el desplazamiento del gobierno real —el centro de decisión—, de los parlamentos de Madrid y las capitales autonómicas, a las sedes de Bruselas y Frankfurt. Las élites institucionales aparecieron, por primera vez, en toda su impotencia, como una pantalla que ya no impedía ver quien detentaba el poder real. La crisis interna de las élites de Estado se redobló con la crisis de soberanía del propio Estado: España (el Estado y sus élites) aparecían en un papel subsidiario y subordinado. En una pendiente que se puede considerar de autoabolição, la merma de recursos públicos llevó a la ruptura en cadena de las tramas clientelares que unificaban a las élites institucionales y que ligaban clase política y élite empresarial. Desde 2008-2009, la descomposición de las alianzas por arriba desencadenó una tormenta autoalimentada por escándalos de corrupción, traiciones y procesos judiciales. El tiempo de la validación automática de la clase política había tocado a su fin. Para una parte creciente de la población, estas aparecían como una oligarquía predatoria y arbitraria, y aún peor sin poder real.

La crisis de las clases medias

El segundo nivel de explicación resulta todavía más importante y está claramente conectado con la naturaleza y la composición de esta «forma» de las élites. En la línea con lo explicado en este trabajo, se trata de probar una interpretación social del ciclo, lo que inevitablemente coloca en el centro a las clases medias, o más precisamente al proceso de su descomposición. La clase media, como en general todos los elementos referidos a la teoría de clases —y no de grupos de estatus—, tiene una constitución política, y no meramente socioeconómica. Concretamente, la pertenencia a la clase media por parte de la mayoría de la sociedad

se articula como negación de toda fractura social significativa. La constitución de la clase media, y aún más de la sociedad de las clases medias, se realiza en la forma de una superación de la sociedad de clases, en la relegación del conflicto de clase al Museo de Historia. Naturalmente, la base social de la democracias occidentales —y con ella su capacidad para generar y reproducir los consensos elementales— se encuentra en esta constitución social «media».

Pero para que la ficción de una sociedad de clases medias resulte eficaz se requiere, no obstante, de algo más que ideología. Como se ha visto, desde su formación, las clases medias han tenido una constitución frágil, manifiesta en la debilidad de unos salarios que dependían de una estructura económica especializada en sectores de productividad media o baja, en la estrechez relativa del empleo profesional cualificado y en su dependencia de la protección del Estado, sobre la base de un sistema de bienestar dual —educación concertada, seguros médicos privados, altas tasas de estudiantes universitarios al tiempo que elevado fracaso escolar—. Durante la mayor parte del periodo democrático, la especialización inmobiliario-financiera de la economía española funcionó como un vigoroso contrafuerte del débil edificio de las clases medias españolas. La eficacia social de la financiarización descansó en los efectos riqueza derivados de la patrimonialización de las economías domésticas. Durante las fases de crecimiento (o burbuja) de 1985-1992 y de 1995-2007, el incremento de los precios de la vivienda y del número de propietarios permitió anudar con fuerza clases medias y sociedad de propietarios. Por eso, sólo cuando la crisis desanudó este lazo se pudo descubrir, con todas su crudeza, la debilidad relativa de las clases medias, e incluso la erosión que había empezado a experimentar hacía algo más de una década. En el marco de esta historia se pueden entender los elementos «ideológicos» y políticos que también constituyen a las clase medias. En cierta forma, las clases medias españolas siguen una trayectoria que corre pareja a la de las élites institucionales, lo que determina su inercia, pero también muestra una fuerte identificación con el régimen político.

Por ser más precisos, y aún a riesgo de repetir argumentos: la constitución de la sociedad española como una sociedad de clases medias se dibujó en el tardofranquismo, en los años del desarrollismo (1959-1973), término nativo que sirve para designar una modalidad específica de fordismo y de expansión de formas estatales de seguro social. No obstante, es posteriormente, durante la Transición y en la primera

década de democracia, cuando las clases medias encontraron su confirmación política y cultural de la mano principalmente del partido socialista. Conviene recordar que los elementos culturales de la democracia y de la nueva élite gobernante fueron tomados directamente de estas clases medias en ascenso: modernidad, europeísmo, consumo de masas. El optimismo de aquel momento, a pesar de la galopante crisis económica y de la desvertebración del universo societario obrero, se alimentó de un puré hecho de expansión de la educación, crecimiento del empleo profesional, dilatación de la contratación pública y rápida terciarización de la economía. Esta combinación logró mantener la expansión de la clase media durante toda la década de 1980 hasta la crisis de 1992-1993. Desde la muerte de Franco hasta 1992, el gasto público español creció desde el 15 % del PIB a más del 40 %, engullido en buena parte en la reproducción y ampliación de estas clases medias. Por eso, al igual que sucede con la élites institucionales, que tienen una composición marcadamente mesocrática, la identificación entre clases medias y régimen político tiene lazos tan invisibles como sólidos. Se explica así también que la crisis haya quebrado, o al menos interrumpido parcialmente, la circulación entre estos tres elementos principales: el régimen político, las élites institucionales y las clases medias.

El momento crítico se desencadenó en la fase bajista del ciclo económico. Como se ha visto, durante la fase alcista (1995-2007), que constituye el periodo de crecimiento económico más prolongado de la democracia, se produjeron cambios significativos en la articulación de estos tres elementos. La década de 1990 se inició con una inversión de la tendencia de los quince años previos. El Tratado de Maastricht dictó la regla de acero de contención del gasto público de los estados miembros. Si hasta 1992, el neoliberalismo europeo tuvo una función principalmente de restricción salarial, cuyo principal pagador fue una clase obrera en retirada, en realidad herida de muerte por la desindustrialización y las políticas de reconversión. A partir de 1992, la nueva ofensiva del capital financiero se concentró en la construcción de una arquitectura europea capaz de bloquear el gasto social y relanzar la acumulación por medio de la privatización y la externalización. En la provincia España, esto supuso el punto y final a la espectacular expansión del empleo público que se había producido entre 1970 y 1992. El principal instrumento de protección y expansión de las clases medias no iba a ofrecer mayores rendimientos, tampoco se podía esperar mucho de una economía ya completamente terciarizada, pero con pocos nichos

empleo de alta cualificación y remuneración. También la clase media quedó, por así decir, fijada en la generación o generaciones de la Transición. El futuro que podían esperar sus hijos era mucho más incierto.

La extraordinaria prolongación de la «burbuja» inmobiliario-financiera de 1995-2007 produjo, no obstante, una amplia gama de prótesis financieras que permitieron mantener la vitalidad de las clases medias. El mecanismo de respiración artificial consistió en el relevo de los salarios por las rentas patrimoniales como principal factor en el incremento de la renta personal. Durante este periodo, el consumo doméstico prácticamente se duplicó, al tiempo que los salarios reales disminuyeron en varios puntos porcentuales. La razón de este fenómeno, inexplicable para la economía convencional, estaba en la multiplicación por un factor 3 de la riqueza patrimonial —fundamentalmente en forma de bienes inmuebles— de las familias. Las facilidades de acceso al crédito, la expansión hipotecaria y las plusvalías inmobiliarias permitieron compensar con creces la debilidad relativa de los salarios en el país con las tasas de desempleo y temporalidad más altas de Europa. Al mismo tiempo, el crecimiento económico se alimentó con la entrada de casi cinco millones de trabajadores extranjeros, que ocuparon los nichos de empleo de peor remuneración, al tiempo que aportaban toda una amplia gama de servicios personales a bajísimo coste para la reproducción de esos mismos sectores «mesocráticos».

Las clases medias habían encontrado unas muletas financieras. La burbuja patrimonial arrojó dentro de la «sociedad de propietarios» a importantes segmentos sociales, que ni por cualificación, ni por patrimonio, ni por niveles salariales, ni capital cultural, tenían garantizada su pertenencia a las clases medias. La dependencia de su posición del ciclo inmobiliario produjo un correlato similar, pero a otra escala, de la corrupción y la decadencia moral de las élites de Estado. Fue una época de exceso de gasto, crédito e inversión a costa de todo aquello que podía tener un valor a largo plazo, llámense formación y estudio, conservación medioambiental, sentido del servicio público, fomento de la vocación profesional o valores comunitarios. Al igual que sucedió con la clase gobernante, las clases medias mostraron el mismo desprecio e indiferencia a los fundamentos sobre los que, en última instancia, descansaba el régimen político y social. A pesar de los costes del modelo, apenas hubo atisbos de proyectos de reforma y regeneración, al menos en los términos «cívicos» con los que tradicionalmente se suele expresar el «malestar de las clases medias». Sencillamente la mayor parte de la

sociedad española estaba satisfecha con el encadenamiento de varias fases sucesivas de ampliación del consumo y de la renta, aunque fuera por medios atípicos e insostenibles a medio plazo. La inmadurez de las clases medias, derivada tanto de su «juventud» como de su debilidad histórica, se correspondía con la ausencia de un proyecto propio, o siquiera de tradiciones políticas que sirvieran a tal propósito.

Naturalmente, nos referimos aquí a la «mayoría» y no a la totalidad de la sociedad española. Este «modelo económico de éxito» dejó fuera a importantes sectores sociales, principalmente los restos del naufragio de la vieja clase obrera, que sólo a duras penas encontraron acomodo en la nueva sociedad de clases medias, y a la casi totalidad de los inmigrantes transnacionales incorporados como mano de obra a la burbujeante economía de la construcción y de los servicios de mercado altamente precarizados. Otro importante segmento que quedó marginado de los parabienes de la *belle époque* fueron los jóvenes. El fuerte sesgo generacional de las clases medias, al igual que de las élites institucionales, no tiene nada de misterioso: las clases medias españolas se formaron en el tardofranquismo y se expandieron hasta 1992 aproximadamente; la contracción posterior apenas ocultó la creciente fractura social (que no cultural) entre padres e hijos.

La crisis iniciada en 2007 mostró, sin tapujos ni paliativos, la contradicción entre las facilidades que habían tenido las generaciones de la Transición (entiéndase las clases medias formadas entonces), en el marco de un periodo de ampliación de las élites institucionales, expansión del empleo profesional y del gasto público, y los incorporados al mercado laboral en aquellos años en los que resultaba casi imposible acceder a los empleos y a los niveles de remuneración de otros tiempos, pero que todavía se consideraban el objetivo natural de las expectativas familiares y de la formación recibida. Desde fechas tempranas, tan tempranas como la década de 1980, esta fractura generacional llevó a una parte cada vez mayor de los sucesivos reemplazos de la clase media a mostrar una desafección institucional creciente. La forma de politización mayoritaria de este segmento juvenil «mesocrático», e incluso de muchos de los que en otras condiciones habrían sido promocionados a las élites profesionales e institucionales, pasó por la experiencia de los movimientos sociales.

El término movimientos sociales no pertenece a ninguna tradición y proyecto político definido. Se trata de un concepto extraído de las ciencias sociales y tan políticamente improductivo como estas.

No obstante, el concepto tiene la misma carga que suele asociarse a las clases medias. Los «movimientos sociales» se reconocen como la figura por excelencia de la proliferación del conflicto sobre toda la superficie social, sin conceder lugar principal (ni siquiera relevante) a las divisiones de clase, y por lo tanto sin las rupturas sociales traumáticas que se reconocían en la vieja lucha de clases.⁸ Los movimientos sociales reflejan, en sus connotaciones implícitas, la figura descafeinada de la política en las democracias con base en las clases medias.

En el caso español, como en el resto de Europa, la amplia panoplia de experiencias que aparecen incluidas dentro de los movimientos sociales se desplegó entre dos polos: la exploración de formas de vida «alternativas» o al «margen», como puedan ser la okupación y los llamados neorrurales; y las movilizaciones por los nuevos (y viejos) derechos, como el reconocimiento de minorías, las libertades civiles y la defensa del Estado bienestar.⁹ Tras la liquidación del movimiento obrero y la integración o ruina de las viejas izquierdas, «estos» movimientos han constituido prácticamente la única experiencia política a disposición de las generaciones del reemplazo frustrado de las clases medias. Constituyen la escuela principal de una generación política alternativa a las élites institucionales y, por eso, merece la pena analizarlos también como experiencias «de clase».

Como era de prever, los límites de estas experiencias de politización aparecen también como los límites a los que tuvo que confrontarse el ciclo político que abrió el 15M. En ambas experiencias se destaca cierta «soledad política» de esas mismas clases medias en descomposición, que todavía servían de espejo al resto de la sociedad, pero que apenas podían contar con el elemento «popular/obrero»,

⁸ Los movimientos sociales han dado lugar a un portentoso campo de especialización en la ciencia política y en la sociología. El avance de esta disciplina ha sido tan fuerte que ha llegado incluso a reinterpretar terrenos hasta hace muy poco bastante sólidos, como la propia historia del movimiento obrero, asimilado y analizado como «movimiento social». Sin embargo, basta comparar, en términos estrictamente políticos, la pobreza de las aportaciones de las ciencias sociales, con las distintas ramificaciones de la tradición teórica revolucionaria asociada al movimiento obrero para obtener un balance político no demasiado favorable a esta especialización de la sociología.

⁹ Obviamente, esta definición es reductiva y no se aplica más que a los movimientos sociales de «segunda generación», en los que la articulación de un proyecto político global resulta mucho menos evidente que en los movimientos sociales «de primera generación». En efecto, en el ecologismo y en el feminismo hay un proyecto social y político ambicioso que comprende una transformación de raíz de la sociedad en dos dimensiones fundamentales: la relación con el medio natural y la relación entre géneros.

quebrado en su autonomía y consistencia durante la Transición. Difícilmente los sectores «mesocráticos» podían por sí solos convertirse en un sujeto de ruptura suficiente. Al mismo tiempo, dentro de los restos del naufragio de la clase obrera, se requería de algo más que cinco años de explosión política, experimentados en posición subalterna, para despejar siquiera el espejismo cultural que fue la promesa de su incorporación a las clases medias en crisis. El drama social de la deuda y el desempleo no podían devolver a estos segmentos sociales la posición de fuerza política y social que habían conquistado cuarenta años antes en un terreno político —la fábrica y el barrio— que ya no existía.

En el centro de la crisis política, se situaba por tanto una clase media que de repente se encontraba —en sus tramos más frágiles y en las generaciones jóvenes— con límites obvios a su reproducción, y que al mismo tiempo asistía aislada, si bien en una posición culturalmente hegemónica, al desmoronamiento del régimen político que la había confirmado y amparado. La esclerosis histórica de las tradiciones políticas (las izquierdas) que podían haberle dotado de elementos de análisis sobre la propia naturaleza social de la crisis e incluso de autoanálisis sobre sus propios condicionantes, así como la falta de contraste y alianza con otros sectores sociales, propiamente «populares», estuvieron en la base de la principal paradoja del ciclo político: la combinación de un radical cuestionamiento del régimen político, unido a aspiraciones más bien vagas de reforma social; la oscilación entre la crítica de la representación con la inercia al restablecimiento —por vía meritocrática— de los mecanismos de selección y reproducción de las élites institucionales; la intuición de que el colapso de la sociedad de las clases medias es definitiva, al tiempo que muchos se dejaban vencer por la inercia social que empujaba a la integración en el régimen político. Las formas de politización generadas en este ciclo llevaban en su seno las mismas contradicciones que se podían reconocer en el colapso de la vieja articulación entre régimen político, élites institucionales y clases medias, y para las que no se había previsto ningún proyecto alternativo.

La «nueva política»

El análisis del ciclo político requiere atender también a aquellos elementos que con palabras viejas llamaríamos «subjetivos», o en otros términos, exige analizar la composición social y política del movimiento:

sus modalidades organizativas, sus formas ideológicas y sus patrones de análisis, así como las inercias de sus minorías activas, las rupturas y dependencias de tradiciones previas; esto es, su cultura política. Estos elementos rara vez se definen como un cuerpo acabado y coherente. Antes al contrario, normalmente aparecen como un conjunto bastante abigarrado de ideas y prácticas que se renuevan en un proceso abierto y contradictorio, y en el que son corrientes las bifurcaciones, las contradicciones y los conflictos, máxime en unos años tan estirados por la velocidad de la crisis política y tan poco comprometidos con tradiciones previas.

En sus comienzos, como se ha visto, el 15M actuó como una pulidora de las diferencias. La experiencia de las plazas, la masividad de los primeros meses, la propia naturaleza del acontecimiento-insurrección y sus repercusiones a todas las escalas, incluidas la internacional, trituraron y volvieron a dar nueva forma a la multitud de pequeños fragmentos que, hasta entonces, constituían el núcleo a veces orgulloso de las culturas militantes. En medio de este nuevo océano, los grupos y activistas simplemente se fundieron. La izquierda institucional —IU, los sindicatos, también los pequeños partidos— o bien se quedó al margen, o bien entendió que su tiempo había de recomenzar a partir de aquella irrupción.

Durante aquellos primeros tiempos del 15M, el movimiento se definió también en torno a algunos elementos que acabarían por ser su marca: el asamblearismo de las plazas y la preferencia por el consenso, la organización tecnopolítica según el nuevo paradigma comunicativo y en red, y por último una suerte de democratismo radical opuesto tanto a las modalidades partidarias de organización como a la política institucional. Mientras duraron las grandes manifestaciones, la sucesión de mareas, la ocupación casi continua del espacio público por las protestas, pocos cuestionaron la constitución en red y asamblearia del movimiento. El 15M no tenía, además, otra forma de crecer que estas formas de integración más o menos horizontales, en las que «cualquiera» podía intervenir en cualquier espacio y en el que toda propuesta de acción tenía que probar su validación en la aprobación masiva en redes sociales.

El paradigma comunicativo o la prioridad del mensaje

El llamado «asalto institucional» produjo, no obstante, una discontinuidad, una ruptura con las formas de hacer previas. El desplazamiento se puede constatar en los manifiestos y en la primera evolución de los

nuevos partidos. De forma brutal y ya claramente decantada, el cambio se constata en la asamblea de Vistalegre, cuando un Pablo Iglesias triunfante y amenazante advertía a los asistentes: «El cielo no se toma por consenso, se toma por asalto».¹⁰ Con formas más sutiles, venía también anunciado en los esfuerzos del Partido X por definir un nuevo estilo de «representación», manifiesto en los procesos de selección de los candidatos según criterios puramente meritocráticos, y de acuerdo con una idea implícita de normalidad y pulcritud, que ya poco tenía que ver con las formas de hacer del 15M.

Y sin embargo, el éxito del primer Podemos, de su llamamiento inicial, se debió, como se ha visto, a su capacidad de crear el marco para un calco político del 15M. Los más de mil círculos que salpicaron toda la geografía del país, su organización asamblearia y abierta, la replicación en redes, siguieron el patrón del movimiento de las plazas. Al igual que a las asambleas del 15M, a los círculos acudían desde militantes a individuos «cualquiera», y esos mismos «cualquiera» proponían y discutían con idéntico desparpajo que los activistas más experimentados. El éxito de Podemos en las redes siguió también las pautas del 15M. E igualmente, Podemos estuvo sometido al «criterio plebiscitario» de las grandes acciones que el movimiento se propuso en los años previos. Sin la capacidad de concitar al 15M, en el sentido más íntimo, relativo a sus formas y experiencia, no hubiera existido Podemos.

Del 15M los nuevos partidos heredaron también una obsesión: se trataba de ser «más», de llegar a los «normales», de convencer a la población. El objetivo electoral tiene, sin embargo, una modalidad de cuantificación precisa (el número de votos) y una modalidad de «éxito» distinta a la del «movimiento», esta se concreta en «cantidades» de poder institucional. A esto se añade también un nuevo factor, el «asalto institucional» requiere «representantes», «portavoces», «caras visibles»; lo que supone la primera cristalización de una clase política capaz de llevar el movimiento a la institución. La fase institucional trajo consigo una serie de decantaciones políticas, de diferenciaciones internas dentro de la ola 15M, que hasta el éxito de Podemos apenas se habían esbozado. De un lado, dio carta de oficialidad a un grupo de «representantes» o «portavoces» que fueron elegidos por el movimiento, ahora reunido

¹⁰ El discurso inaugural del Pablo Iglesias en Vistalegre se producía a tan sólo cinco meses de las primeras elecciones europeas, el 18 de octubre, delante de 7.000 personas, no todas ellas convencidas de renunciar al asamblearismo del 15M.

en los círculos y en el censo de Podemos. De otro, produjo una nueva dilatación de la distancia entre la minoría movilizadora y la «mayoría» a la que se pretendía alcanzar con la solicitud del voto.

El éxito en las elecciones del 25 de mayo y la espiral de crecimiento en las encuestas electorales confirmaron la hipótesis Podemos, como solución electoral al impás de la movilización. Y con la confirmación, se ampliaron también los dos procesos de separación señalados entre minoría activa y mayoría pasiva, y entre representantes y representados. La primera resultó, sin duda, la fundamental: se encontraba contenida de una forma algo más que embrionaria en el 15M. Si en el 15M la comunicación era el marco de organización y autonomía del movimiento; en la fase institucional, la comunicación adquirió una centralidad redoblada, que a su vez ya no se desplegó según el patrón en red predominante en la fase de movimiento, como en la dirección centralizada de los mensajes desde la nueva «portavocía» hacia la «mayoría».

La consolidación de los nuevos liderazgos y la forma plebiscitaria de la organización estuvieron fundados en la centralidad de la comunicación. El paradigma de los nuevos partidos fue, por eso, «comunicológico». El objetivo era «alcanzar» a la «gente», formar una mayoría; en la lengua «populista» del primer Podemos, «construir pueblo». «Comunicológico» y no «comunicativo», en tanto la «comunicación política», que se relaciona con la eficacia del mensaje, se presentó desde entonces como una suerte de saber especializado y principal, que tiene por fin la seducción y el convencimiento. En la fase Podemos, la comunicación política se desplegó en los grandes medios, en la arena de las tertulias de televisión. A partir de Podemos, las redes sociales, hasta ese momento el lugar de organización y la esfera pública del movimiento, quedaron progresivamente relegadas: la vocación de mayoría —se dice— sólo podía tener lugar en los grandes medios de comunicación. La comunicación dejó de tener una función de autonomía del movimiento, para plegarse a los canales de comunicación convencional.

La entrada de Podemos, y previamente de algunos portavoces oficiosos, en las grandes cadenas de televisión confluyó con la «urgencia» por representar la «indignación». A medio plazo, según hemos visto, la debilidad de esta apuesta se manifestó en la dependencia de la esfera mediática sobre la que el movimiento carecía de toda capacidad de control. El desarrollo de la política en los media estaba en la misma línea de la integración institucional que la participación en el juego electoral. La deriva estaba, sin embargo, ya *in nuce* en el paradigma comunicativo del 15M.

El «asalto a las instituciones» se cobró, por esta vía, un importante peaje. En la medida en que el objetivo era la acumulación de votos, la lógica de crecimiento del «movimiento», convertido en máquina electoral, dejó de ser la extensión del conflicto o la expansión de la subjetividad del «convencido» que todavía fue característica del 15M.¹¹ En el paradigma comunicativo-electoral, lo único que en última instancia resultaba crucial era la adaptación al lenguaje y los deseos del mayor número de segmentos de población, que luego podían traducirse en votos. En el curso de apenas unos meses, Podemos perdió aristas, agresividad y frescura, en favor del cálculo y de la reproducción de argumentarios. El proceso terminó de profundizarse a medida que el número de portavoces de la formación, y con ello su impericia, se multiplicaron. A la vez que el mensaje se volvía más mecánico y menos incisivo, se hacía menos claro, más propiamente electoral y menos propiamente político, a fin de servir a la captación de votos.

En línea con lo que fue la constante «pedagógica» del 15M, los contenidos sustantivos de propuesta política, como la demanda de proceso constituyente o la propuesta de Renta Básica, que invistieron las figuras de Pablo Iglesias, o en otro terreno a Ada Colau, acabaron siendo sustituidos por significantes cada vez más vacíos como «cambio» o «transparencia». La lucha política, desplazada al único terreno del discurso y de su expresión en los media, se convertía en un juego de representación y mensaje, en la lengua de Podemos, en «resignificación de símbolos» y de lugares comunes. Las propuestas más audaces y la crítica al régimen —que nunca llegó a desaparecer del todo— quedaron relegados frente a los topos de la regeneración democrática: la denuncia de la corrupción y la reclamación de transparencia.

En términos de fase, la oposición entre régimen y democracia fue sustituida por la de vieja y nueva política. Ya acuñado antes de Podemos, el término «nueva política» estimulaba evocaciones suficientemente vagas y plurales como para servir como concepto-síntesis de la «centralidad del discurso». Pero como sucede con otros elementos, la «nueva política» no fue una invención de los nuevos partidos. En cierto modo, fue también resultado del corpus ético-político del 15M, de sus mismas ingenuidades.

¹¹ Esto mismo se puede comparar con la dinámica de crecimiento clásica del movimiento obrero, en la que el conflicto, y especialmente la huelga, constituyen la prueba de expansión y contagio del movimiento. El crecimiento del movimiento sólo se verificaba en la dinámica conflictiva que producía y afirmaba al sujeto obrero: sujeto que se «autoconstituye». A diferencia del viejo movimiento obrero, en el paradigma comunicológico, sometido a la prueba única de las elecciones, lo que acaba por predominar es la adaptación conservadora al lenguaje y los deseos de la mayoría.

El énfasis en lo nuevo correspondía con una *ética* antes que con una *política*. Se trataba de valores y sujetos, no de análisis y estrategia: aquellos de la honestidad y la sencillez de la «gente corriente» y sin «voluntad de poder». Frente a la corrupción de la vieja política y la rencilla mezquina por intereses partidarios, la nueva política se quería encarnación del sentido común, de la «gente», de la ciudadanía. Trataba de corresponder con el 99%, pero en su traducción a política electoral. Esta ética se convirtió pronto en un estilo retórico que admitía distintas variantes dialectales, desde el lenguaje más bien sensiblero de los «sencillo», a la recuperación de los viejos discursos republicanos de la «ciudadanía» y el «bien común». En el extremo del estilismo, durante el otoño-invierno de 2014-2015, los portavoces de Podemos aparecieron en público con un blanco immaculado, símbolo estudiado de su pureza.

Otra consecuencia del paradigma comunicológico: sometido a la inercia de la democracia competitiva, el objetivo —«alcanzar a la mayoría»— se transformó en principio autolegitimante de la nueva política —«somos la mayoría, la gente»—. En una suerte de desplazamiento metonímico, del todo por la parte, era la gente y la ciudadanía la que «tomaba las instituciones», no Podemos o las plataformas municipalistas. En este tránsito se produjo un abandono, no pensado y tampoco valorado, respecto a la fase anterior todavía dominada por la dinámica de movimiento. El éxito del 15M tuvo raíces sociales complejas, pero se sostuvo en la capacidad de multiplicar la expresión del conflicto, que iba desde la indignación a los desahucios. En este sentido, el 15M fue una máquina de producción de sujeto, de sujetos políticos. La nueva fase institucional apenas logró generar un discurso electoral capaz de convocar un sujeto. Su vocación era convencer y seducir pero en un terreno que ya no lograba determinar, por eso su tendencia a adaptarse, a perder agresividad, a hacerse respetable. En ausencia de otros factores, la política post-15M tendió a asimilarse a la política convencional. Y con ello, perdió su capacidad de producir iniciativa, potencia política.

Si bien, el paradigma comunicológico permitía una enorme flexibilidad táctica, una adaptación rápida a las tendencias y a los cambios de contexto, no tenía capacidad de generar marcos nuevos. Sin movimiento, se produjo un rápido agotamiento de la capacidad de subjetivación política que acompaña a la generación de conflicto. Se explica así que la primacía de la comunicación, que en el 15M era una ventaja, que afianzaba conquistas, al margen y más allá del dominio de la agenda política por parte de los grandes grupos de prensa, en la fase electoral, se volviera

necesariamente conservadora. La agenda empezó a estar cada vez más marcada por la capacidad de reacción de los viejos actores políticos, de las élites de Estado. La primacía de lo discursivo-comunicativo desplazó al pensamiento estratégico. Su valor resultó tan flexible como cortoplacista.

Mérito de Podemos fue, no obstante, superponer a esta propensión comunicológica, que ya existía en el 15M, un saber «politológico». Este permitió dotar de fundamento y de metas concretas a la técnica comunicativo-electoral, informado por medio de encuestas independientes¹² y orientado hacia sectores sociales «objetivo». Pero la politología no puede sustituir a una hipótesis estratégica.¹³ En tanto solución política del ciclo, solución puchista o gobernista del ciclo, no fue más allá de dotar de cierta densidad conceptual a la idea central del 15M de «llegar a la mayoría», y que era ahora la llave del gobierno, los votos.

En esta línea, la principal innovación de Podemos se podía resumir en los conceptos de «centralidad» y «transversalidad». Estos venían a certificar que el éxito electoral sólo resultaba asequible por medio de la adaptación —entiéndase, discursiva— a una mayoría imaginada, representada en las figuras normalmente asociadas a una clase media despolitizada y más bien timorata. El resultado fue el previsto: el discurso se adaptó a un conservadurismo social supuesto antes que probado.

Entre este pensamiento táctico, subordinado a la eficacia inmediata del discurso, y uno estratégico concentrado en las tendencias a medio y largo plazo, existe un contraste no siempre fácil de salvar. El primero apenas requiere del trabajo de la palabra, del mensaje y del discurso: está motivado únicamente por la ampliación de públicos. Por eso en Podemos, apenas se dio un paso más allá respecto de los activistas del 15M, cuando en los años previos estos hablaban con esa «familiaridad nombrada en femenino» sobre lo impolítico —convencer a mi «vecina», mi «madre», mi «tía»—. En la transversalidad de Podemos, el centro seguían siendo los «no politizados» —«los que faltan»—, pero estos se identificaban con el entorno cercano de una nueva élite política casi universalmente de clase media. Por contra, el pensamiento estratégico requiere de saberes que van más allá del trabajo del discurso y de la producción de encuestas con respuestas distribuidas. Requiere de un reconocimiento de la complejidad social, y de las tendencias, en absoluto evidentes, que empujan el «cambio», o si se prefiere, requiere al menos de una intuición de la «tendencia».

¹² Podemos llegó a establecer un gabinete de encuestas independientes bajo la competencia técnica de Carolina Bescansa, la llamada «Secretaría de Análisis Político y Social».

¹³ Véase el último epígrafe de este capítulo.

La formación de la nueva clase política y la debilidad de la organización

El otro proceso de separación política se produjo dentro del movimiento. Se realizó con la construcción de una nueva élite, al principio reconocida como poco más que un puñado de portavoces de la «ola del cambio». A diferencia de la distancia entre minoría activa y mayoría pasiva reconocible en el 15M, aquí se fomentó una ruptura nítida que se justificó en términos de eficacia, de eficacia comunicativa. En principio se trataba de «personalizar» el discurso para llegar a «más», y de hacerlo a través de los lugares a los cuales se supone asiste esa mayoría: los grandes medios de comunicación.¹⁴ La cuestión es que para operar en los medios y alcanzar a la mayoría, se requiere, como hemos visto, de rostros, portavoces, personificaciones concretas.

La lógica de la personalización resulta contraria al consensualismo, e incluso a cierto anonimato político que dominó la fase de movimiento. Una parte del movimiento no participó en la fase institucional, no sólo porque hubiera hecho suya una reflexión sobre el poder político, la lógica electoral, etc., sino de forma más visceral, por urticaria a la construcción de «liderazgos». Baste decir que, en los primeros meses, estos liderazgos sólo resultaron legítimos en la medida en que entraron en resonancia con el democratismo del 15M.

Por eso, también, candidaturas y nuevos partidos aplicaron sin excepción el mayor número de controles formales sobre sus «representantes». Las primarias abiertas como forma de selección política, los llamados «códigos éticos» como mecanismos de regulación de los mismos, la rendición de cuentas y los revocatorios como modos de fiscalización y castigo de los representantes, fueron sólo los principales instrumentos para limitar la autonomía de los liderazgos. En algunos casos, estos sistemas llegaron a ser tan barrocos y sofisticados como para constituir, por derecho propio, uno de los mayores experimentos de democracia electoral que se hayan probado en la historia reciente de Europa.¹⁵ Y sin embargo, en su mayoría acabarían por ocupar el espacio reservado a las formalidades sin efecto práctico. La razón de este fracaso en la selección y control de la nueva clase política no estuvo en la letra

¹⁴ La teorización sobre este punto se puede encontrar con cierto nivel de desarrollo en el artículo y en la entrevista a Pablo Iglesias en la *New Left Review*, núm. 93, año 2015. Allí se puede encontrar un análisis de la política supuestamente ajustada a la época del «pueblo de la televisión», en la que los platós, y especialmente las tertulias, se han convertido en el principal medio de socialización política.

¹⁵ Es el caso de las primarias de Ahora Madrid, analizadas en el capítulo 2 de este libro, nota 58.

de unos protocolos, a veces intrincados, complejos y capaces de prever toda clase de eventualidades, cuanto en la ausencia del sujeto capaz de imponer estas regulaciones. Ni los nuevos partidos, ni las nuevas candidaturas fueron capaces de construir organizaciones consistentes; difícilmente estas serían capaces de actuar como contraparte de la nueva clase política.

Siendo claros, el criterio último de validación de los nuevos liderazgos descansó en su eficacia como máquinas «comunicativas». La forma de los nuevos liderazgos acabó por tener así un carácter esencialmente plebiscitario, o cesarista si nos referimos a sus figuras principales como Pablo Iglesias o Ada Colau. Las primarias, las consultas de documentos, las preguntas que de cuando en cuando lanzaba Podemos a su censo, incluso la elaboración de listas por parte de la dirección tuvieron una función validatoria, de confirmación reiterada y a veces obsesiva de los liderazgos. Persistía aquí, no obstante, algo también heredado del 15M, y que correspondía con su radical democratismo, algo que podemos denominar «ideología participativa».

Primarias y consultas fueron, en efecto, legados del «participacionismo» del 15M, pero acabaron siendo poco más que un formalismo vacío en los nuevos partidos. Su función real consistió en servir como mecanismos de validación de liderazgos, que a la postre trataron de suprimir el conflicto inscrito en la construcción de las nuevas élites. Y lo hicieron paradójicamente de un modo que, por lo general, impidió la discusión política. En las llamadas listas plancha, en los avales oficiales a tal o cual lista o candidato, en las consultas de Podemos se desarrolló sin ambages una tecnología de validación plebiscitaria de la dirección.

De otra parte, y al contrario de lo que pudiera parecer, esta insistencia en los mecanismos de validación no mostraba la fortaleza de una nueva élite reconocida por el movimiento —su carisma—, cuanto su debilidad. Valga recordar los ejemplos más significativos. En Vistalegre (octubre de 2014), Pablo y su equipo amenazaron con abandonar la dirección de Podemos si su documento no era aprobado. Poco después, la consolidación de la modalidad organizativa de Podemos se basó en la replicación de un modelo presidencialista y elitista, con secretarios generales y consejos ciudadanos hasta en la última población del país con un círculo en activo. En la selección de «cargos», las direcciones privilegiaron la selección de amigos y fieles, sobre aquellos capaces de intervenir como organizadores sobre el

terreno. En la negativa a la confluencia en los previos del 20 de diciembre de 2015, se mostró de nuevo el miedo de la élite de Podemos a medirse en primarias con otra élite: la de IU.

La modalidad de partido que resultó de esta separación —respecto del movimiento convertido en maquina electoral volcada en convencer a la «mayoría» y a la vez dirigida por una estrecha «minoría»— fue el partido-empresa. El partido-empresa respondía todavía a la forma partido; de hecho en algunos de sus rasgos era, por exageración, su caricatura. Pero en ningún caso se asemejaba a los viejos partidos de masas, a los que el primer Podemos pudo alguna vez aspirar. En los debates organizativos previos y posteriores a Vistalegre se reiteró una renuncia explícita a la construcción de organización política. Ni el modelo propuesto según el patrón de la vieja socialdemocracia, ni la modalidad «espontánea» surgida de la coordinación de los círculos, ni la vaga idea de partido-movimiento consiguieron oponerse a la férrea verticalización prevista en Vistalegre. No obstante, acusar de verticalización a la cúpula de Podemos sería demasiado obvio. La verticalización todavía considera la necesidad de una organización rígida, disciplinada, sometida a mandato. Lo que había en Podemos, y también en muchas de las candidaturas municipalistas, era por contra un rechazo explícito a la consolidación de una organización formal. La organización se sustituyó por la «comunicación directa» entre liderazgo y masa, esto es, por una particular forma de plebiscitarismo.

La renuncia a la organización fue explícita, y quedó sólidamente asociada al significante «nueva política». Durante los previos a Vistalegre y en la tenue discusión sobre el modelo de organización, se argumentó cansinamente contra las modalidades clásicas de partido, en las que el elemento militante y activo se identificaba con lo «viejo», pero también con algo externo y ajeno a la «gente». La «militancia» aparecía como una actividad especializada y «separada». Se decía: «las con hijos», «los ancianos», «los sin tiempo» tienen que poder ser parte del proyecto político de «la gente». Y para ello, nada mejor que instaurar mecanismos de vinculación directa entre la emergente clase política y la «ciudadanía». La lógica plebiscitaria de la consulta digital sirvió a este propósito; se apoyaba en la ideología de la «gente» pero también resultó funcional a la necesidad de validación de la nueva élite.

La «organización» debía ser así tan abierta, tan de la «gente», como para que «cualquiera» pudiera participar, obviamente de un modo tan laxo y delegado que apenas guardaba similitud con los mecanismos de

participación y democracia de los viejos partidos obreros. Podemos se reclamó como un partido de inscritos (su censo digital), no de militantes, ni siquiera de afiliados. A los participantes tan sólo se les pedía que pusieran su nombre en una base de datos y que dieran un «click» de vez en cuando. Ni cuotas, ni obligaciones, ni tampoco derechos. La tecnopolítica aportaba las herramientas técnicas (censos, sistemas de votación on-line, plataformas de discusión), pero también una justificación ideológica, el «participacionismo», como marco nuclear de la democracia interna del partido. Estos mecanismos de participación se establecieron, no obstante, de una forma tan destilada y con tan poca capacidad decisoria, que muchos de sus defensores—provenientes de los entornos hacker y tecnopolíticos—acabaron por criticar el uso plebiscitario de las herramientas. El participacionismo elemental del 15M pareció confundirse con el plebiscitarismo, pero nunca llegaron a ser lo mismo. Y es que a la contra de buena parte de la sociología y de la teoría política, que en Weber o Schmitt han hecho coincidir carisma y democracia—e incluso dictadura y democracia—democratismo y plebiscitarismo son elementos de raíz radicalmente distinta.¹⁶

En términos organizativos, la máquina electoral requería únicamente de portavoces, de aparatos de campaña, aliados mediáticos, buena presencia en tertulias, organizadores de actos y quizás un ejército de fans que replicaran mensajes y de, cuando en cuando, pegaran carteles. Ese conjunto de funciones correspondía más con la estructura de una empresa de marketing, encargada de promocionar a una pop star, que con una organización política. En esta misma línea, ninguna profesión fue más premiada y reconocida en los nuevos partidos que la del experto en redes, el *community manager*, el comunicólogo de profesión. Las plantillas de los nuevos partidos incorporaron a una enorme cantidad de este tipo de expertos en comunicación política. Dentro del paradigma comunicológico, la organización con sus voces incontrolables y

¹⁶ Son notables los párrafos en los que Weber explica que la democracia de masas es indisociable del liderazgo carismático. Véanse, por ejemplo, *El político y el científico* (Madrid, Alianza, 1967) o la colección de ensayos en los que apostaba por una particular forma de democratización del Estado alemán escritos al final de la Primera Guerra Mundial y reunidos con el título *Escritos Políticos* (Madrid, Alianza, 2008). No obstante, Schmitt empujó mucho más allá este argumento: definió la democracia como el régimen en el que existe un núcleo íntimo de identificación entre gobernantes y gobernados, que no se encuentra en los regímenes parlamentarios liberales, sino en las democracias cesarísticas y plebiscitarias. Véase, por ejemplo, su *Teoría de la dictadura* (Madrid, Alianza, 2003) donde este argumento apenas se esboza; pero sobre todo, sus escritos de finales de los años veinte y del periodo nazi como *Legalidad y legitimidad* (Granda, Comares, 2006) o *Estructura del Estado y Derrumbamiento del Segundo Reich* (con una pésima traducción en Editorial Reus, Madrid, 2006).

casi siempre polifónicas, con sus irremediables debates públicos, con su maquinaria hecha de grasa y metal oxidable, no parecía ajustada a las condiciones exigidas para el lanzamiento de una marca electoral.

Tanto es así, que la preocupación obsesiva por la «marca» llevó a Podemos a decisiones drásticas, la principal: no ir con su logo a las elecciones municipales. La razón de esta renuncia estuvo en la posibilidad manifiesta de que un buen número de círculos presentasen candidaturas propias, candidaturas incontrolables. Paradójicamente, el abandono de las elecciones municipales dio la oportunidad al municipalismo. Pero incluso entre las candidaturas municipalistas, la «marca» se convirtió en motivo de acaloradas disputas, operaciones de apropiación —por parte de IU y otros colectivos— y motivo de amenazas legales. En el juego electoral, la marca encerraba la magia de unos significantes que connotaban lo nuevo, el cambio, lo por venir, con independencia de la capacidad real de proyectar una discusión capilar en la sociedad. La centralidad de la marca era sólo la centralidad del paradigma «comunicológico».

Pero que la organización fuera considerada un «resto», resultara redundante o innecesaria, no quiere decir, que a pesar de todo no se construyese organización. Esta acabó por aparecer. Aunque sólo fuese porque desde el momento fundacional, la proliferación de los círculos de Podemos, su capacidad de generar espacios propios y autónomos de coordinación, generó organización. O porque a pesar del vaciamiento de los círculos y del burocratismo competitivo y anti-cooperativo impuesto por las luchas de poder, la persistencia de aquellos círculos de Podemos, que funcionaron de forma autónoma en asambleas locales, se mantuvo como un recuerdo de la experiencia 15M. La generación de organización se convirtió también en un imperativo para Podemos cuando se vio obligado a «territorializarse» a fin de participar en las elecciones autonómicas y en las confluencias municipales. Los grupos parlamentarios autonómicos, los concejales, los liberados de estas estructuras, al lado de la improvisada burocracia interna —hecha de consejos y secretarios— conformaron necesariamente «otro nivel» de organización.

Podemos terminó así por dar forma a una organización que subyacía al partido empresa, pero cuya modalidad distaba de ser coherente y homogénea. A falta de una hipótesis organizativa, que debía ser tanto el correlato del ejercicio «espontáneo» de la autoorganización de los círculos como de una hipótesis estratégica, la organización «realmente existente» acabó por ser resultado de una combinatoria improvisada que contenía elementos del 15M, de la estructura del partido-empresa

y de las inercias heredadas de las tradiciones organizativas de la izquierda española. Una organización heterogénea y por eso rica en contrastes, que pueden ser reconocidos bajo la proliferación del sufijo «ismo»: circulismo, burocratismo, participacionismo, plebiscitarismo. De todos ellos, sin embargo, el burocratismo fue el elemento principal que acabó por determinar a todos los demás.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la fase Podemos reside en la velocidad del proceso de «institucionalización» de los nuevos partidos. La sorpresa no está en el fenómeno en sí, difícil de evitar sin la acción de contrapesos fuertes, cuanto en la rapidez y profundidad del mismo. Como se ha visto, el democratismo del 15M no consiguió establecer los diques éticos para detener o retardar estos procesos, seguramente porque el problema nunca fue ético, sino político. El único contrapeso eficaz —la construcción de organización— requería no sólo de tecnopolítica y voluntad, sino de la sedimentación, necesariamente larga, de una cultura política nueva. Así pues, lo que en la socialdemocracia de la II Internacional, con la construcción de gigantescos partidos de masas, llevó al menos dos generaciones; a los bolcheviques, en las duras condiciones de la Revolución Rusa y la economía de guerra, al menos cinco o seis años; o en el caso de los verdes alemanes algo menos de una década de duros enfrentamientos entre realistas y «fundis»; en los nuevos partidos apenas sí se cuenta en meses. Como en otros aspectos del ciclo político, el lenguaje de la traición o de la *degeneración* resulta inútil a la hora de entender el fenómeno, en tanto este aparece inscrito desde el primer momento en las hipótesis «estadista», en el paradigma comunicológico, en la renuncia a la organización y en la composición social de los nuevos actores políticos.

De todos modos, el proceso de burocratización de la nueva política no se puede entender a partir de una relación de determinación unívoca entre la composición social del movimiento y sus resultados, por resumir mucho, entre clases medias y política de clase media. Entre ambos elementos, media un proceso de subjetivación complejo y lleno de bifurcaciones, tal y como se reconoce en la experiencia de los movimientos sociales —nutridos mayoritariamente por las clases medias—, y que bascula entre la desconexión anti-normativa de las «alternativas» y la ampliación de la democracia por medio de la generación de nuevos derechos. La misma oscilación se encuentra en el 15M, que en todo momento apareció estirado por sus dos polos o, en términos más espirituales, por sus «dos almas»: la propensión más «utópica» de

la crítica a la representación y la más «realista» de la restauración de la meritocracia. Sobra decir que esta última acabaría por ser el elemento determinante de la fase institucional, pero en todo caso siempre dentro de un proceso contradictorio.

Si la aceptación de la democracia representativa, comprendida como un juego competitivo entre élites electorales, se elevó a determinante «objetivo» del proceso de institucionalización, la meritocracia constituyó, de facto, su motor «subjetivo». Este hubiera sido más lento y complejo, si el protagonismo hubiera descansado en una composición social más propensa al igualitarismo. En la contradicción interna de los regímenes democráticos, regímenes de clase, fuertemente oligárquicos, se reconoce siempre la promesa del «mérito» como elemento constitutivo de las clases medias que le sirven de soporte. Las oposiciones, la carrera funcional, las credenciales educativas —en tanto elemento constitutivo de la jerarquía administrativa— hacen del Estado, y de los cargos prebendados, la institución por excelencia de la meritocracia.¹⁷ Quizás por eso, nunca resultarán suficientes los estudios sociológicos que, una y otra vez, destacan la capacidad de los mecanismos de reproducción de clase para reservar los puestos medios y altos del Estado a determinados sectores sociales. La nostalgia de una restauración de la meritocracia ha constituido la promesa principal de la regeneración democrática y, como hemos visto, ha estado inscrita desde el principio —de una forma ambigua y no exenta de contradicciones— en el 15M y en la nueva política.

De hecho, en ningún otro aspecto, el 15M y los nuevos partidos mostraron mejor su naturaleza de clase, que en la asimilación de la meritocracia como un elemento natural (ideológico) de su constitución interna. En el proceso de separación de las nuevas élites políticas del movimiento, el «mérito» se presentó, una y otra vez, como el principio de legitimación de su propia decantación como «nueva» clase política. Los procesos de selección a través de primarias, la restauración de eslóganes como el «gobierno de los mejores» o la centralidad concedida a los expertos, son sólo algunos de los elementos que sirvieron a la validación de la nueva clase.¹⁸

¹⁷ Resulta del todo oportuno volver a recordar que la legitimidad de los Estados modernos en Europa, pero especialmente en España, tiene mucho que ver con su reconocimiento como organismos de promoción meritocrática. Y que la crítica a su carácter arbitrario, nicho de privilegios injustificados, es también motivo de su crisis.

¹⁸ Se trata, no obstante, de un proceso contradictorio. Durante el proceso de discusión de los mecanismos de selección hubo propuestas arriesgadas y de claro sesgo «igualitarista» y radical democrático, como la de introducir el sorteo para la selección de las «comisiones de garantías» dentro de Podemos.

La frase «este es nuestro momento», que entre bambalinas han repetido sin descanso los representantes de la nueva política, es sólo la forma chabacana y desnuda de lo que constituye, en los hechos, la «meritocracia» política. La fase institucional ha tenido un aspecto casi inconsciente — sólo casi— de sustitución de élites. Frente a las viejas élites de Estado, envejecidas, corrompidas, envilecidas; las élites de la nueva política «están ahí» por sus méritos, por su preparación, pero sobre todo por aquello que se identifica como la virtud del político, «la conexión con la gente». La ficción de la meritocracia y la ilusión de la democracia —el gobierno «representativo»— aparecen aquí reunidas.

Pero si la meritocracia ha servido como motivo ideológico para la validación de la nueva clase política —esto es, como motor de la institucionalización—, la forma de su reconocimiento ha pasado invariablemente por la burocratización de los aparatos que pretendían la conquista del Estado. Burocratización es quizás un término excesivo para nombrar los procesos de jerarquización interna de los nuevos partidos, y desde luego tiene poquísima validez para describir el proceso de «institucionalización» de multitud de candidaturas en ciudades medias y pequeñas, todavía sostenidas por procesos más o menos abiertos, más o menos asamblearios. La propia dispersión y diversidad del municipalismo impide, afortunadamente, las generalizaciones. Sin embargo, burocratización constituye un término adecuado para describir y entender las dinámicas internas de Podemos y también la propensión de algunas candidaturas municipales a convertirse en partidos, especialmente en las grandes ciudades. Valga decir, que los nuevos partidos se han encontrado muy pronto con la realidad, que igual da Weber o Marx, Schumpeter o Togliatti, consideraron consustancial a la forma-partido cuando se convierte en prolongación del Estado, en nuestro caso cuando adquiere cierta cuota de poder institucional: el «reparto de cargos».¹⁹

Un aviso preliminar: la burocracia política es muy distinta de la burocracia legal weberiana, ejemplificada también por el funcionario profesional. Esta última ha sido la consecuencia necesaria del proceso de racionalización del Estado; la constitución de un cuerpo de administradores, celosos de la independencia de su estatuto y especializados en

¹⁹ La sociología y la política de la época clásica del Estado moderno eran tajantes y en absoluto complacientes con este aspecto. Weber insistió, una y otra vez, que la vocación de todo partido era la lucha por el poder institucional y que este se concentraba siempre en el «reparto de cargos». Togliatti, secretario del partido «ideológico» con mayor afiliación e implantación social de la Europa de postguerra (el PCI), no se engañaba cuando repetía una y otra vez que un partido es una «máquina de repartir cargos».

el «cumplimiento neutral de la ley». En última instancia, la burocracia legal acaba engullendo todo problema político como un problema de administración. La burocracia política, la burocracia de partido es, por el contrario, de naturaleza prácticamente contraria. Depende también del Estado, pero no de forma inmediata, cuanto mediada por el partido. A diferencia de la burocracia legal, la propensión de la burocracia política consiste en convertir todo problema político en un problema de poder interno a la organización del partido, o bien de la parte del Estado controlada por el partido.

Hacia finales de 2016, sólo en asientos en el Congreso y el Senado, diputados autonómicos y sus correspondientes equipos de asesores y expertos, además de los «liberados» de las secretarías centrales del partido, Podemos podía contar con un par de millares de efectivos. Si a ello se añadían los concejales «con sueldo»²⁰ y los cargos asociados, la cifra seguramente se multiplicaría por tres. En una escala más modesta pero relevante, los grupos municipales, los asesores y los liberados de Barcelona en Comú o Ahora Madrid sumaban cerca un par de centenares de personas cada uno. En conjunto la nueva política, generó un «nicho de empleo» para aproximadamente cinco o seis mil personas.²¹ En su inmensa mayoría, la financiación de este personal dependía del

²⁰ Los más de 8.000 ayuntamientos españoles eligen al mismo número de alcaldes y a poco más de 68.000 concejales. No obstante, sólo 15 o el 20 % de estos cargos reciben una remuneración salarial regular. Especialmente en los municipios rurales es corriente que los concejales que no estén en el gobierno no cobren nada, y en ocasiones tampoco los que están al frente del mismo. Difícilmente se puede hablar, por eso, de una profesionalización de la política municipal, más allá de los municipios urbanos.

²¹ Se puede hacer una estimación de la industria de la representación en su capítulo «nueva política», en la Comunidad de Madrid. Por empezar con los cargos y representantes del municipio, en 2016 estos sumaban 20 concejales más la alcaldesa, además de algo más de cien eventuales (traduzcan por asesores), otra treintena de cargos políticos en empresas municipales y una decena de liberados del grupo municipal, en total alrededor de 160-180 personas entre cargos, asesores y representantes. Si consideramos los concejales de las candidaturas municipalistas de los municipios de más de 20.000 habitantes de la región, en los que es usual que se remunere a los concejales en el gobierno, pero también en la oposición, el resultado era de 143 ediles, que podríamos multiplicar por un modesto factor, 1,5, para incluir a los asesores y liberados de los grupos; en conjunto, en torno a otras 200 personas más. Si seguimos con Podemos, habría que anotar los 27 diputados autonómicos más una docena de liberados del grupo en la Asamblea, otra docena del consejo autonómico y otra del consejo municipal. Además habrá que incluir los 100 liberados que se estima que la organización mantiene con sede en Princesa: ciertamente en Madrid está el grueso del «aparato» pero no deja de ser una cifra importante. También habrá que añadir los diputados elegidos en las elecciones generales y los senadores, con su correspondientes equipos. El resultado final es que en Madrid hay más de 1.000 cargos y representantes de la nueva política, de los que bastante más de la mitad son de los aparatos municipal y autonómico. Recordemos que la Comunidad de Madrid supone el 17 % de la población total. La estimación de 5.000 o 6.000 personas parece adecuada.

presupuesto público ya sea directamente, por medio de subvenciones a la representación, de los salarios establecidos para los representantes públicos y sus asesores y de las asignaciones a los grupos parlamentarios, ya indirectamente a través de la redistribución interna de los excedentes de estas partidas dentro de los aparatos de partido.

La clave de bóveda de esta nueva burocracia está en que la asignación concreta de cada persona a su «cargo» es el resultado de una decisión discrecional dentro de cada organización, el resultado de un difícil juego político que acaba por dar forma a las plantillas de asesores, cargos de confianza, «secretarías», etc. Con independencia de que algunos de estos «nombramientos» fueran validados en primarias, la práctica totalidad respondía a una lógica competitiva por el «reparto de cargos». De una forma más cruda, la perpetuación de la nueva «burocracia política» se ha convertido en la principal fuerza «material» de la nueva política, y probablemente en el principal obstáculo a su redefinición más allá del ámbito institucional. La nueva política, de nuevo por falta de organización, ha quedado sujeta a los elementos más nocivos y evidentes de la «industria de la representación».

La burocracia política no constituye, sin embargo, una invención de la «nueva política». Su formación se reconoce en los orígenes de la lucha competitiva por el control del gobierno en las democracias liberales; y de forma parecida a lo que sucede en Podemos, desde la constitución de las primeras organizaciones obreras de masas. El objeto del conocido libro de Michels sobre los partidos políticos fue el estudio de la burocracia política, a partir principalmente de la evolución de la socialdemocracia alemana.²² Las conclusiones de su trabajo se resumieron en su conocida ley de hierro de las oligarquías, que enunciada de forma sencilla venía a decir que toda organización tendía a evolucionar en una oligarquía y, por ende, que la política de masas es, al final, política oligárquica.

Aunque el principio de Michels tiene notables agujeros argumentales²³ nos sirve para probar otra genealogía de la organización política. Se puede decir que la burocracia política es el resultado de una doble

²² Robert Michels, *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna*, 2 vols, Buenos Aires, Amorrortu, 2008.

²³ El principal de todos ellos es que en su larga enumeración de organizaciones al toparse con el sindicalismo revolucionario (la CGT francesa) es incapaz de reconocer un mecanismo oligárquico claro y establecido, esto es, institucionalizado. Michels, que había militado en la Segunda Internacional, evolucionaba ya entonces en la dirección de las corrientes antidemocráticas y elitistas de buena parte de la intelectualidad burguesa que se encarnaría en el proyecto conservador. Véase de nuevo, *Los partidos políticos...*

separación, de una doble «degeneración». Su origen lejano está en una figura arquetípica del movimiento obrero, y luego de los movimientos sociales, el organizador activista. Este es un militante vocacional y entregado, que normalmente destaca por sus capacidades para componer una comunidad en lucha. Cuando el organizador es cooptado (o se organiza) en las estructuras de partido pasa a ser un «cuadro». Y en tanto «encuadrado» le corresponde mediar entre los requerimientos concretos de la comunidad o colectivo en conflicto y las orientaciones estratégicas del partido.

El paso siguiente implica una mayor separación de la comunidad de lucha. El «cuadro» pasa a convertirse en una figura «orgánica». El burócrata de partido es remunerado con los recursos que este obtiene de sus afiliados, o más recientemente a través de las subvenciones y cargos que resultan de la transformación de los partidos en prolongaciones del Estado. A diferencia de la burocracia funcionarial, el burócrata de partido no requiere de más aptitudes que la lealtad al líder o sublíder del cual depende. Su celo es puramente ideológico y se resuelve en el trabajo para el «partido» o la «fracción del partido» a la que pertenece. Por ello, sus rasgos característicos son el cinismo, del que sabe que lo que cuenta no son los «principios» sino la lealtad al cuerpo o líder al que se está asociado, y el oportunismo, del que está dispuesto a todo para aumentar el poder personal o de su fracción. Es completamente contrario a esta figura, la posibilidad de tener un pensamiento —y mucho menos una acción— propio y autónomo.

En Podemos, y también en las candidaturas municipalistas con mayor vocación de partido, el proceso de burocratización arrancó de los liderazgos más consolidados, aquellos arremolinados en torno a los núcleos fundadores. En progresivas ramificaciones estos fueron colocando a «su gente» —por el único criterio de la confianza—, al tiempo que el partido se desarrollaba como una estructura de cargos y funciones. En torno al control de los cargos, se fue imponiendo la lógica clientelar del aparato, que acabaría por dar forma a una colección variable de capillas o fracciones, en continua alianza y enfrentamiento, para las que la fidelidad personal terminó por resultar mucho más importante que la diferencia política.

Debido a la dispersión de «aparatos», entre los municipalismos y Podemos, pero también dentro de Podemos, la nueva política consiguió generar una burocracia única, al estilo de los viejos partidos comunistas. Su organización resultó plural, pero también a causa de su propia

debilidad organizativa, la dinámica del poder interno se entiende mejor como un juego de «familias», al modo napolitano, en permanente cooperación y competencia alrededor de los grandes líderes carismáticos: Pablo Iglesias, Ada Colau, Íñigo Errejón, pero también un sinfín de figuras de rango medio como Tania Sánchez, Teresa Rodríguez, Pablo Echenique y tantos otros. En la medida, en que esta lógica de «fracciones» —de burocracias políticas fragmentadas— se convirtió en un rasgo estructural de la nueva política, no escaparon a esta siquiera los sectores políticos más vocacionales, incluidos todos los nombres señalados. El resultado fue una colección de organizaciones absortas en las conspiraciones palaciegas, en el *who's who* del nuevo belén político, condenadas a girar en torno a sí mismas y cada vez menos capaces de producir una discusión pública, abierta y masiva.

Paradójicamente, y de vuelta a Michels, el único antídoto a la ley de hierro de las oligarquías habría consistido en la articulación de organizaciones democráticas y porosas a un debate público continuo. La organización democrática constituye la única palanca capaz de romper la lógica clientelar interna, establecer controles sobre la «clase política» y comprender mecanismos de contrapeso que impongan las decisiones colectivas. El debate público se define, a su vez, como el elemento principal en la constitución de una inteligencia política propiamente dicha; sin este, la producción interna de decisiones apenas recibe más inputs y contrastes que los que provienen de la lucha por el poder dentro la organización. En la medida en que estos dos elementos sólo consiguieron existir en dosis escasas y casi siempre a pesar de las «direcciones políticas», se explica porque el proceso de institucionalización y de burocratización avanzó tan rápido; o en otras palabras, porque la nueva política se convirtió tan pronto en vieja.

La Restauración imposible

El cierre del ciclo político, o si se prefiere la clausura de lo que ha sucedido desde el 15M, descansa principalmente en la siguiente condición: la capacidad de las élites para lograr un marco de equilibrio institucional viable. Esto no supone, por fuerza, que la crisis acabe en algo así como una «solución feliz». La estabilidad no es el pago debido a un arreglo político progresivo y democrático. Estabilidad quiere decir, simplemente, que los dos elementos que estaban en el origen de la crisis del régimen político —la crisis de legitimidad de las élites de Estado y la quiebra de las clases medias— encuentren algún medio para superar la inestabilidad,

a fin de dar cuerpo a un arreglo legítimo. A este respecto, «sólo» se requiere un marco de entendimiento entre viejas y nuevas élites, reforma institucional y garantías para la paz social. Incluso con el actual modelo económico cuyos efectos sociales seguirán, a buen seguro, en la senda de la involución, estas condiciones políticas pueden resultar suficientes para garantizar cierta estabilidad, por temporal que sea.

En términos históricos, estos arreglos constituyen lo que propiamente deberíamos llamar una «restauración del régimen». A modo de espejo, los pactos políticos de la Transición sirven una vez más de guión posible. Como en la actual crisis política, el fondo social y económico de la Transición no admite otra representación que la de la «crisis», en aquel momento bajo la forma de una alta conflictividad, una rápida destrucción del tejido industrial y finalmente el nihilismo manifiesto en una clase obrera en descomposición. Y sin embargo, la Transición fue un modelo exitoso. El brillo rutilante de las nuevas instituciones democráticas, la recuperación de las libertades negadas durante cuarenta años, la legitimidad transmitida a las nuevas élites políticas salidas de la izquierda, la expansión continua de las clases medias y el horizonte de esperanza puesto en la modernización del país —¡Europa! se gritaba entonces—, consiguieron tejer la alfombra que ocultó los aspectos más oscuros de la realidad económica y social. Tanto es así que incluso se logró soslayar la liquidación de un espacio social (la clase obrera) que había sido protagonista de la política española desde los tiempos de la Primera República.

Pero a diferencia de la Transición, el problema consiste ahora en reunir los materiales con los que se puede levantar el edificio de una nueva Restauración. En la respuesta a esta pregunta se concentran los esfuerzos de lo más inteligente de la vieja clase política —y también de parte de la nueva—, de los grandes grupos de comunicación y de los principales *think tanks* económicos y políticos. Negociaciones de despacho, proyectos de reforma, conspiraciones de restaurante, campañas de prensa, presiones y chantajes económicos, además de todo aquello que en definitiva constituye las cloacas del Estado —servicios secretos y medios extralegales—, son los medios principales que las élites disponen para torcer la situación de su lado. En su contra, se concitan, en cambio, el alto margen de imprevisibilidad y complejidad de los factores en liza, la dinámica caótica de los acontecimientos, la distorsión que producen las escalas europea y global, y las divisiones y contradicciones internas de las élites que, encadenadas, se han empeñado en desbaratar toda hoja de ruta. En

ocasiones, pareciera más bien que el trabajo de las élites se concentrase en la contención de riesgos, en la regulación de las salidas más peligrosas del ciclo, que en un proyecto claro de normalización del país.²⁴

Prueba además de que seguimos sumergidos en un ciclo político abierto, es que el dominio de la coyuntura, con sus quiebros imprevistos y sus arreglos chapuceros, sigue siendo abrumador. Por eso, resulta fundamental analizar las tendencias que van a seguir operando en el medio y largo plazo; los factores sobre los que se va a tener que articular cualquier agenda de las élites y que lejos de apuntar a un arreglo en ciernes, siguen aguando toda certidumbre respecto al futuro.

Arreglos entre élites

El primer aspecto, seguramente el más superficial y quizás la única variable realmente a disposición de los «de arriba» —en la lengua 15M— es el que tiene que ver justamente con ellas, con su capacidad de alcanzar nuevos acuerdos. La crisis política ha girado en torno al señalamiento de los «políticos», la corrupción y el expolio de lo público. La liquidación del crédito y de la legitimidad de la clase política ha salpicado también a los grandes grupos de prensa, marcados por su conexión con el poder; a las élites intelectuales, señaladas por su mediocridad; e incluso a instituciones tan centrales como la monarquía, que en la figuras del rey y su familia han quedado contaminadas por las palabras corrupción y nepotismo.

Puede que con una constitución más sólida y meritocrática de las oligarquías del país, modalidades de depredación de los recursos públicos más racionales y mecanismos de recambio generacional suficientes, la crisis política hubiera quedado limitada en profundidad, desplazada a otros lugares como las políticas de austeridad y la deuda, o a otras escalas como la crítica al *diktat* europeo. Pero para buena parte de la población, lo que ha convertido la crisis en una exhibición cínica y desvergonzada, ha estado en la retirada de los velos a una corrupción sistemática; de altura literaria, si consideramos algunos casos del PP madrileño y valenciano o de la CiU catalana, en los que políticos, empresarios, periodistas y en ocasiones policías y jueces, formaban una trama hecha de poder y dinero, pero también de sexo y crimen.

²⁴ Las grandes operaciones de reforma y lavado de cara del Estado, en estos años, como la sucesión de Juan Carlos por Felipe VI o el experimento de Ciudadanos se deben leer en esta dirección.

En estas condiciones, se explica que el epicentro del seísmo se haya localizado en el sistema de partidos, en la clase política. Y también que la solución aparente se haya desplazado a la emergencia de nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos, acompañados por los intentos de renovación de los ya existentes, principalmente PSOE e IU. Dejando a un lado la crisis del modelo inmobiliario-financiero, la amenaza de un colapso del Estado se ha desplazado desde la superficie (la clase política y las élites) hacia el interior (el propio Estado), y no al revés. En última instancia, la débil proyección de la demanda de proceso constituyente tiene su razón en este impacto diferencial de la crisis política sobre el Estado, que ha puesto a la clase política en la picota, pero no tanto al núcleo duro del Estado: el sistema de representación, la judicatura, el ejército, la policía, etc. De hecho, las dos únicas excepciones, la monarquía y el modelo territorial, ambas fuertemente agitadas en estos años, han entrado en crisis tanto en su constitución como «clase política», e incluso como «símbolos» de la «condición moral» de la clase política española, como en su condición de instancias centrales del modelo de Estado.²⁵

Por eso, también, la crisis institucional se ha podido representar — con la contribución innegable de la nueva política, absorbida por el cortoplacismo — como un problema ético y moral, antes que como una crisis del modelo de Estado, que obligaría a algo más que a un remozado de fachada. En esta versión descafeinada de la crisis de régimen, reducida a las élites, explica también que el sistema de partidos haya concentrado los esfuerzos de renovación. Regeneración, como a finales del siglo XIX, se ha convertido ya en el sinónimo amable de Restauración.

Las obras de restauración presentan un doble aspecto: la recuperación de la legitimidad institucional, que pasa principalmente por renovar la imagen de la clase política, y la integración de los «nuevos» actores políticos, cuyo objetivo último consiste en neutralizar el ciclo político en pro de una era de recuperada estabilidad. En el primer punto se pueden reunir todos los esfuerzos relativos a la sustitución de liderazgos políticos (Alberto Garzón en IU o Pedro Sánchez en el PSOE) y

²⁵ Esta afirmación es, sin duda, discutible y demasiado simple en lo que se refiere a Cataluña. Pero también en el Principado, la crisis del sistema de partidos, primero del PSC y luego de Convergència, vino acompañada por la aparición de una multitud de nuevos partidos (tanto del lado del soberanismo como del nacionalismo español), que fue tanto consecuencia como motor de la crisis política. En el marco del equilibrio estable entre Convergència y PSC de los años noventa, difícilmente se hubiera desencadenado la crisis del modelo territorial.

a la refundación de los partidos. El presupuesto está en que lo urgente es una «remoralización de la política». Conviene insistir: la crisis ha apuntado a la clase política como colectivo privilegiado, dedicado a su propio provecho antes que al servicio público. De forma correlativa, la crítica social apenas ha ido más allá de enlazar esta crisis de autoridad con la corrupción entendida como «enfermedad moral». Sin el señalamiento de otras causas de orden estructural, la regeneración política ha tendido a pasar por el filtro de las nuevas retóricas de la transparencia, los códigos éticos o la eficacia judicial. Se trata de un terreno tan ambiguo como para resultar propicio tanto a los nuevos actores, como a los segmentos más inteligentes de las viejas élites.

Mucha más importancia que la renovación de los viejos partidos tiene la segunda línea de trabajo referida a la integración de «lo nuevo», o por ser más precisos, la absorción política de la indignación y el rechazo de una parte creciente de la población, que como tendencia apunta más allá del sistema de partidos. Lo que nos devuelve a un viejo problema: ¿de qué modos se puede absorber la protesta, cuando esta empieza a cristalizar en términos políticos?

En la crisis española, la respuesta a esta pregunta no se puede reducir a un único nivel. De una parte, Ciudadanos en tanto partido por antonomasia de la regeneración, tras el fracaso de UPyD, se ha articulado como una opción política «nueva», no contaminada por los vicios de la «vieja política». Su propuesta se ha inspirado en una suerte de «vuelta atrás», a aquello que de más virtuoso tuvo la Transición: el gran acuerdo político, la restauración de una meritocracia siempre ficticia, la recuperación del centro político en las clases medias. No obstante y a pesar de su espectacularidad, Ciudadanos ha sido un movimiento que ha llegado tarde, después del estallido del 15M y después de Podemos, un comodín que sólo ha resultado operativo en determinados segmentos sociales: la recuperación de una importante masa de votantes del PP y del «centro» de la ciénaga de la abstención. Además su posición estrictamente funcional al equilibrio del viejo sistema de partidos —acuerdos con el PSOE tras el 20D de 2015 y con el PP tras el 26J del 2016— le han hecho perder autonomía, y a la postre credibilidad, como proyecto de reforma.

En un segundo nivel, más profundo, la posibilidad de una auténtica regeneración descansaba en la integración de la marea de politización difusa desencadenada tras el 15M, y que no se puede reconocer ni en Ciudadanos, ni en ninguno de los viejos partidos. Integración es aquí sinónimo de estabilización, implica el logro de un equilibrio complejo

entre fuerzas contradictorias, algunas ciertamente difíciles de domar. No obstante, tras el primer shock producido por el 15M, a veces combinado con la criminalización de la protesta, la integración ha figurado siempre en el repertorio estratégico de lo mejor de la *intelligentsia* del régimen.

El primer paso de la «integración» estaba en lograr «representar» al 15M, no de la forma caótica en la que operaban las protestas y del modo autónomo en el que el movimiento se construía en las redes sociales, sino en la forma «personificada» que requerían las cadenas de televisión y los grupos de prensa. Se trataba de encuadrar un discurso del todo desencajado de las gramáticas políticas convencionales. Fue la época de la tertulia política, de los primeros analistas del movimiento, de la formación de un plantel de periodistas «amigos del 15M», de las primeras portavocías. Fue también, de este modo, cómo el discurso asonante y crítico empezó a tener un lugar en la agenda mediática, al tiempo que «servía» a las viejas élites de Estado para asumir el desafío que se les enfrentaba aprendiendo nuevos lenguajes y nuevas retóricas. En el acceso a los media de las nuevas figuras —y luego de Podemos y las candidaturas municipalistas— había un interés puramente comercial, patente en el aumento de las audiencias, pero también un evidente deseo de poner nombre, dar forma y de este modo contener una protesta de límites difusos.²⁶

La «representación» del movimiento no obedeció, desde luego, a una operación de las élites. Tal y como se ha visto, fue el resultado de una «decisión» del movimiento, tras el impás de 2013. A partir de finales de 2013, el debate sobre la necesidad de dar un salto de calidad abrió la vía electoral hasta entonces bloqueada. La apertura de la nueva fase institucional implicaba, en sus términos, la construcción de algo parecido a una portavocía oficial, la representación efectiva de la «ola de cambio». La formación de los partidos 15M —Podemos y las candidaturas municipalistas— promovió la separación progresiva entre el movimiento y el segmento político; condujo a la formación de una nueva clase política, «los del cambio». Esta quedó confirmada con el acceso a las instituciones, en el nombramiento de los nuevos parlamentos y consistorios, y sobre todo con la profesionalización política de unos cuantos miles de personas, que a partir de ese momento sencillamente

²⁶ El papel de los grandes medios y sus conexiones con la clase política es seguramente uno de los aspectos más fascinantes del ciclo político y seguramente de los más desconocidos. Requiere de una investigación en profundidad con los distintos agentes comprometidos, y probablemente de cierto trabajo biográfico sobre los actores clave. Por el momento, la historia del papel de las élites en el ciclo resulta más bien opaca.

iban a «vivir de la política». Al investir una nueva clase política se produjo un típico proceso de sustracción de activos de movimiento, que ahora eran encuadrados en la institución y en los aparatos de los nuevos partidos.

De igual importancia fue el cambio de prioridades que entrañó la nueva fase institucional. Durante más de dos años, desde principios de 2014 hasta mediados de 2016, la atención y las energías del movimiento fueron deglutidos en una secuencia casi continua de citas electorales, así como en la construcción de los nuevos partidos, a su vez absorbidos en su estructuración y definición interna, incluidas las luchas intestinas. El ritmo y la creatividad de las movilizaciones, ya muy debilitados en 2013, dio paso a la construcción de aparatos políticos, la realización de campañas electorales, el seguimiento de la prensa y la tertulia política. En muy poco tiempo, para una parte apreciable de ese conjunto difuso y amplio que se había politizado o repolitizado con el movimiento de las plazas, las prioridades se desplazaron de la movilización a aspectos de la política institucional antes despreciados o desconocidos. La cuestión es ¿son todos estos elementos suficientes para dar por cerrado el proceso de integración que requiere la restauración del régimen?

Las persistentes potencias del 15M

El proceso de «institucionalización» significa tanto «integración simbólica», acceso a los marcos de representación de la política convencional, como «integración política», en tanto los nuevos partidos gestionan importantes parcelas del Estado, que a su vez se han convertido en el principal medio de su financiación interna. No obstante, esta integración difícilmente se podría dar por concluida atendiendo meramente al proceso de institucionalización de los partidos. Podemos y las candidaturas municipales dieron cuerpo a una nueva élite política, pero esto no significaba, al menos no del todo, la «integración» del 15M. En términos puramente internos al movimiento, varios factores trabajaban en dirección contraria.

De una parte, la debilidad de la fase institucional, su carácter improvisado —sobre la base de organizaciones sin trayectoria ni tradición—, hizo a las nuevas élites extremadamente dependientes de una legitimidad, que sólo se podía renovar con cierto servicio y fidelidad al propio origen rupturista del 15M. Ninguno de los liderazgos construidos en esta fase podía abandonar, y de hecho ninguno lo hizo, el «campo

político» que creó el 15M, lo que en la jerga y retórica del momento se le dio el nombre, más bien ambiguo, del «cambio». A pesar de la lógica de reproducción institucional, de la inercia de los aparatos políticos y de los peajes pagados a la propia autoperpetuación, la nueva clase política siguió atada al «movimiento», a la «indignación», a potencias en última instancia incontrolables.

En otras palabras, Podemos, al igual que los municipalismos, no sustituyeron al 15M y tampoco consiguieron representarlo de una forma orgánica. Durante todo el periodo, siempre quedó un «afuera» suficiente, que sólo se reconocía en los partidos de un modo más instrumental que representativo. Además, el ciclo político dio pie al surgimiento de una nueva esfera pública, que se desarrolló en las redes sociales, pero también a través un nueva serie de medios de comunicación digital nacidos a partir de la crisis política.²⁷ Lo fundamental era, no obstante, el resto «social» que había dejado la ola de movilizaciones: un inmenso sustrato móvil poco dispuesto a conceder mayores márgenes de confianza a la vieja clase política, desconfiado de las instituciones representativas, que se habían expresado en movilización y simpatía hacia el 15M y luego en resultados de voto espectaculares —en mayo de 2014, mayo de 2015 y también diciembre de 2015—; resultados que sorprendieron, una y otra vez, a los estrategas de los partidos y que se pueden considerar como uno de los síntomas (no el único) de que algo fuerte bullía en las entrañas de esta sociedad. Este «resto social», que no se ajustaba a formas de medida estándar —como los estudios demoscópicos—, venía empujado por el hartazgo y el espanto de la crisis, y formaba un magma que admitía nombres de estados de ánimo, como «indignación». Por su propia condición fluida y difusa, esto es, no del todo representable, este espacio no podía ser reducido a unas cuantas figuras políticas.

Por elegir un término, hablamos aquí de las «persistentes potencias del 15M». Es preferible el concepto «potencias», y no malestares, en tanto el ciclo ha venido marcado por una serie de experimentos positivos: movimientos, movilizaciones, partidos. Estas potencias son, no obstante, una incógnita política. Constituyen el elemento más fascinante de la nueva época. El movimiento de las plazas produjo una

²⁷ Aquí se debe citar un grupo bastante amplio de medios digitales que encontraron o ampliaron su público a partir de las rupturas del 15M como *La Marea*, *ElDiario*, *Infolibre*, *Cxxt*, *Diagonal*, *La Directa*, así como una multitud de blogs y de diarios menores, muchos de ellos de implantación local o regional.

politización de masas, conectó una corriente eléctrica de alto voltaje a tramas humanas previamente receptivas a conducir «mensajes políticos». No obstante, el motor del ciclo ha permanecido como una gigantesco interrogante. Conocemos, sin duda, algunos elementos de su mecánica. Hemos sabido que el 15M produjo un contagio y una simpatía «transversales» debido a elementos de clase determinados: la quiebra de la promesa de nivelación social contenida en la sociedad de clases medias y la politización de las generaciones más jóvenes de la «mesocracia» condenada a la precariedad. Alcanzamos también a intuir que el 15M se solapó, y al mismo tiempo suprimió, posibles «soluciones» políticas a los malestares de la crisis en forma de guerra entre pobres: como los populismos racistas dirigidos contra los migrantes que predominan en buena parte de Europa o la reinención de una derecha del «hombre común», proyección política y cultural de las clases medias en crisis, al modo que, ya tarde, probó Ciudadanos. Sin embargo, sabemos poco o nada acerca de cómo se articula socialmente la «indignación», más allá de la representación y de las prácticas de los nuevos partidos, esto es, más allá de un cuerpo político reducido a un discurso ciudadanista hecho de transparencia, antiausteridad y cierto «comunalismo» ligado a la defensa de los derechos sociales.

Apenas unos pocos movimientos, principalmente la PAH, trataron de activar ese material humano en contacto con las superficies más ásperas de la crisis. Más allá de este, y de las clases medias tardo juveniles, nos encontramos no tanto con un vacío, como con algo que no se sabe identificar. «Ciudadanía», «clases populares», «pueblo» han sido formas de nombrar algo que no se conoce muy bien, pero que parece que tiene capacidad de agencia. Quizás este sea el resultado de una época cuyo signo fundamental es la descomposición —de las clases medias—, antes que la aparición de nuevos sujetos políticos. Si quisiéramos resumir el problema en términos clásicos, deberíamos decir que la crisis ha desencadenado un movimiento amplio de ruptura y cambio, pero sin lograr definir un sujeto o sujetos de ruptura.

Ni el 15M, ni los movimientos que le siguieron dispusieron de un referente social (como la clase obrera), tampoco de un proyecto de perfiles claros o de una historia de varias décadas de lucha y organización, como casi siempre tuvo el movimiento obrero. El 15M y la ola de cambio ha sido de todo, original, creativa, rupturista, reformista, pero en ningún caso «orgánica», relativa a un sujeto social, a una tradición o a un proyecto articulado. En este terreno, la ventaja y el acierto de la

hipótesis populista en Podemos radicaba en su capacidad para intervenir sobre una realidad múltiple y compleja, sin necesidad de preguntarse por lo que esta era y, de fondo, expresaba.

La aplicación «populista» a la política española tuvo así la virtud de reconocer y trabajar sobre la fragmentación, sobre una superficie social hecha añicos. Es el mayor mérito intelectual de la dirección de Podemos, y especialmente de Íñigo Errejón. La teoría de los significantes vacíos, de las cadenas «equivalenciales», de la construcción de «pueblo» sobre un caleidoscopio social, por otra parte desconocido, tocaba el problema central del ciclo. Pero en lugar de resolverlo, con organización, conflicto, complejidad, se soslayó en una suerte de atajo discursivo-electoral. De forma lastimosa en su aplicación concreta, la transversalidad y el «pueblo» tendieron a coincidir con las representaciones y demandas de una clase media restaurada, proyección biográfica natural de la nueva clase política. Sea como fuera, el populismo señaló —curiosamente para negarlo— el gran problema del ciclo.

La cuestión a futuro es ¿cabe esperar más de estas potencias? ¿Se puede decir que han quedado articuladas en las demandas y formas de organización de los nuevos partidos, en una suerte de politización de masas «subordinada», tendente a la delegación? ¿Estamos ante algo parecido a una nueva Transición, que como la anterior recogió toda una ola de movilización para encajarla dentro del marco institucional que salió de los pactos de finales de los años setenta? La respuesta es seguramente negativa. Basta tratar de apuntar a los sujetos que podrían ser encuadrados e institucionalizados, para reconocer que no se sabe bien qué es «el sujeto», más allá de ese ambiguo espacio de las clases medias tardojuveniles. Es evidente que estos «sujetos» no se reconocen en los sindicatos de clase, en los partidos ideológicos o en los órganos de encuadramiento intelectual, como en su momento fue PRISA. Paradójicamente, los mismos elementos de debilidad del ciclo, su carácter difuso y poco orgánico, hacen también difícil imaginar en qué consistiría la «integración».

A pesar de todo, desde la perspectiva del régimen, la memoria de la Transición y de los pactos actúan como una irresistible fuerza gravitatoria. En el guión espontáneo de la estrategia de integración por parte de las viejas élites, se incluye, aunque sea a medio o largo plazo, algún tipo de pacto, que ponga en posición subordinada a los «nuevos» partidos, al tiempo que incluye a la nueva clase política en el concierto

de las élites de Estado. Aunque esto cambie muy poco la distribución del poder real en la sociedad española, esta integración debería representarse como un justo y necesario recambio de élites. En los términos ya empleados por el periodismo de estos años, asistiríamos así a una Nueva Transición, a una *Segunda Transición*.

De acuerdo con este guión, los acuerdos deberían tener, seguramente, algún tipo de reflejo constitucional. Este se podría traducir en la reforma de algunos títulos relativos a una mayor transparencia y autorregulación de la clase política, los encajes territoriales de algunas comunidades (principalmente Cataluña) y el reconocimiento (poco más que formal) de los derechos sociales. También es posible que estos acuerdos precipitaran la fractura de este conglomerado improvisado de nuevos partidos y nueva clase política. Tras meses, e incluso años de acuerdos y pactos de gobierno, una parte de la nueva clase política se sentirá, sin duda, tentada a reivindicar los viejos espíritus del 15M, al tiempo que otra —seguramente mayoritaria— se confirmará en el lenguaje de la responsabilidad y de los límites de lo posible, de la estabilización razonable y necesaria. En cierta forma, esta ruptura entre gobernistas y quincemayistas, responsables y marginales, razonables y puristas, institucionales y radicales ha sucedido ya. Pero más allá de que el bloque mayoritario de la nueva política acepte participar en esta Segunda Transición, ¿podrán resolver estos eventuales acuerdos la crisis política abierta en 2011? ¿Podrán dar carpetazo al ciclo político con un nuevo marco institucional y nuevos consensos? ¿Lograrán siquiera dominar esas potencias persistentes del 15M, los tejidos vivos que no han quedado empantanados en el terreno institucional?

En dirección contraria a la estabilización del marco político, empujan fuerzas no controladas por las élites y sus apaños. Se trata de las fuerzas de la descomposición que están detrás de la crisis y que no van a dejar de trabajar en la erosión del régimen político español, o al menos de lo que hasta hace no mucho eran sus sólidas bases materiales.

La crisis no descansa

En la crisis de la democracia española, y específicamente en la crisis de las élites de Estado, existe otro elemento apenas tenido en cuenta. La descomposición de las élites se produjo de forma violenta y acelerada no sólo por un exceso de corrupción, también por una mecánica política

quebrada. Seguramente hubiéramos sabido poco —o mucho menos— del expolio público, ambiental y social que producía este modo de extracción de las élites, si ellas mismas no hubieran aireado decenas de miles de documentos, luego convertidos en un par de millares de imputaciones fiscales. Ciertamente, detrás de estas investigaciones se encontraba, en ocasiones, el trabajo de movimientos sociales y de fiscales honestos. Pero nos engañaríamos si pensásemos que fueron una sociedad vigilante y los mecanismos de autorregulación del Estado quienes desvelaron los innumerables casos de corrupción. Antes bien, la secuencia normal de los escándalos de corrupción siguió el ritmo de una novela de traición y desengaño: filtraciones, amenazas, declaraciones a prensa fueron la norma. Las élites se traicionaron a sí mismas, pero ¿por qué?

La crisis de las élites tuvo motivos internos. Entre estos factores se debe entender la acción de un segmento político reformista o regeneracionista, consciente de que sin la depuración de los viejos partidos estos resultaban inservibles. Este segmento inteligente ha sido, no obstante, minoritario dentro de una clase política mucho más prosaica en cuanto a sus motivaciones. Para comprender el proceso de abolición de la clase política española es preciso atender a esta premisa: el modo de extracción y reproducción de las élites ha estado atado al modelo económico español, a su especialización inmobiliario-financiera. Dentro de este marco, la realización de plusvalías descansaba en decisiones políticas sobre el suelo y el presupuesto. Por esta razón, durante los años centrales del ciclo, la diferencia entre empresarios y políticos llegó a ser una simple diferencia de roles en el mismo ciclo de negocio. La clase política se convirtió en una suerte de excrecencia institucional del ciclo económico.

Después de 2007, la crisis produjo una situación de escasez relativa: sencillamente había «menos a repartir». Enfrentadas a la nueva situación, las élites —las políticas pero también las empresariales— reaccionaron de una forma desordenada y no prevista. La mayoría se embarcó en una lucha competitiva por unos recursos menguantes. Fue entonces cuando se abrieron los eslabones más débiles de las cadenas de negocio. Los ceses, los cortes de suministro, las peleas entre familias políticas, repercutieron sobre toda la línea de relaciones trenzadas para desvelar las innumerables tramas de corrupción: Gürtel, Púnica, Palau. Como se ha visto, las luchas inter-élites tuvieron efectos desastrosos en su propia coherencia y legitimidad como clase.

En términos de los requerimientos de la futura estabilidad política, el problema fundamental pasa, no obstante, por saber si este proceso de implosión de las élites resulta o no reversible. La respuesta sólo llega ser afirmativa en el caso de que las propias élites encuentren una forma de reproducción legítima y un modo de «remuneración» que no pase por las versiones más vergonzosas de la corrupción y el nepotismo. No se trata de un problema de cultura cívica, tampoco de transparencia; se trata de modificar sustancialmente la propia constitución material de las élites de Estado en su relación estructural con el modelo económico. La pequeña trama político empresarial atada a los presupuestos de un ayuntamiento es sólo una reproducción en miniatura de las conexiones políticas que requiere el negocio financiero. La crisis económica redujo significativamente las oportunidades para extraer rentas a través del expolio público, social y medioambiental. Pero la nueva situación redobló también la presión para volver a aumentar los excedentes. El aumento de esta presión empujó la crisis de legitimidad de la clase política y esta la crisis de régimen.

Es la misma contradicción que se ha manifestado entre clase política y régimen, entre élites y razón de Estado. De forma sistemática, las élites vienen fallando en la función garante de la estabilidad política, hasta el punto de convertirse en un peligro para el propio régimen. Ejemplo paradigmático fue la incapacidad del Partido Popular para forzar la depuración de sus aparatos y ceder el poder del Estado a la alternativa PSOE-Ciudadanos en diciembre de 2015, lo que a todas luces parecía la opción más razonable de acuerdo con un «sentido de Estado» que necesariamente debía abrirse al «cambio» y a la regeneración democrática.²⁸ Ejemplo también notorio lo constituye la práctica autoinmolación del partido socialista cuando en octubre de 2016 cedió al gobierno el PP, abandonando el terreno de la oposición, en el que en última instancia tenía su razón de ser como «partido del turno».

En casi todos los momentos críticos del ciclo político, la incapacidad de la clase política provocó el vacío de legitimidad, que luego fue aprovechado por Podemos y las candidaturas municipalistas. Las divisiones internas de la clase política —no sólo entre los distintos partidos, sino también dentro de ellos— produjeron retrasos, con costes políticos enormes en las reformas que requería la regeneración democrática. La razón de esta incapacidad está en la mediocridad generalizada de la

²⁸ El Partido Popular, carcomido en efecto, por la corrupción, salpicado por continuos escándalos en sus direcciones autonómicas y estatal, renunció, sin embargo, a desencadenar las necesarias purgas que requería su renovación, empezando por la dirección de Rajoy.

clase política y en su falta de altura como parte orgánica del Estado, pero en último caso se reconoce también el colapso de un modelo de extracción de recursos basado en una corrupción sistemática. La crisis ha liquidado la ficción de la independencia del Estado y será difícil que esta se restaure en el medio plazo.

El colapso de las élites de Estado es, sin embargo, sólo una de las consecuencias de la larga depresión económica. De hecho, la desestabilización de la clase política aparece como un capítulo menor frente a las tendencias de fondo de una época que parece condenada a futuro. La incertidumbre política reside, en última instancia, en la incertidumbre económica.

En términos muy sintéticos, desde 2007, se evidenció primero el colapso de las burbujas inmobiliarias a nivel global, y casi inmediatamente del negocio financiero ligado a las mismas (subprimes, productos compuestos, titulizaciones, etc.). La crisis se prolongó desde entonces en una larga agonía financiera, que rebajó sustancialmente la rentabilidad general del capital financiero, pero también del crecimiento económico global. Los intentos de reactivar las plusvalías financieras pasaron por sucesivas estrategias sin resultados convincentes.²⁹

La fase austeritaria, ordenada por los órganos de la UE a partir de 2009, creó oportunidades de alta rentabilidad para las grandes agencias financieras, empeñadas en el ataque a los bonos de deuda soberana. El precio político pagado por estimular este «nicho de negocio» fue el colapso y posterior rescate de los países del sur de Europa. No sólo Portugal, Irlanda y Grecia fueron intervenidos, Italia y España tampoco consiguieron escapar a las garras de la Troika: la primera sometida al gobierno de un gestor, Mario Monti; la segunda a la fiscalización del sector bancario por medio de un Memorandum de Entendimiento, del que entre otros instrumentos salió la SAREB. Lejos de producir crecimiento, las políticas de austeridad deprimieron y luego sumergieron en el estancamiento a todas las economías europeas. El único resultado reseñable fue producir una suerte de rescate «social» del sistema bancario europeo, un típico y masivo proceso de «socialización de pérdidas».

²⁹ Existe ya una bibliografía crítica suficiente sobre el desarrollo de la crisis financiera en el contexto europeo. Por sólo citar algunos títulos imprescindibles: el trabajo del regulacionista Michel Aglietta y Thomas Brand, *Un new deal para Europa. Crecimiento, euro, competitividad*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2014; o también los de los economistas griegos que hasta 2015 protagonizaron el debate económico en Syriza, Costas Lapavitsas, *Beneficios sin producción. Cómo nos explotan las finanzas*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2016 y Yanis Varoufakis, *El minotauro global. Estados Unidos, Europa y el futuro de la economía global*, Madrid, Capitán Swing, 2012.

Al otro lado del Atlántico, en EEUU, la fase recesiva apenas se logró salvar con una batería de políticas públicas que pivotaron en torno a las políticas de expansión cuantitativa (QE por sus siglas en inglés). Desde 2009, la FED inyectó, en tres programas sucesivos, casi cinco billones de dólares en compras de bonos y activos financieros. En 2015, después de haber aplicado un contradictorio programa de recortes y de ajuste estructural, por otra parte absolutamente ineficaz, la UE se sumó a las políticas de expansión con su propio programa de compra de activos. La inyección monetaria permitió sostener, durante un tiempo, el valor de los activos en los mercados bursátiles, a la vez que empujaban hacia el futuro el fantasma de la deflación. Sus efectos sobre el crecimiento económico fueron, sin embargo, modestos. La única excepción parcial a este patrón fue la trayectoria de los países emergentes. Este bloque pudo prolongar durante algunos años el crecimiento de la década anterior por medio de una nueva serie de burbujas inmobiliarias y de crédito, hasta que en 2013, o 2014, estallaron o se desinflaron paulatinamente, haciendo retroceder los niveles de crecimiento de forma muy significativa (China) o directamente hundiéndolos en la recesión (Brasil).

En definitiva, tras casi una década de pruebas, no hay ningún indicio de que la economía global haya siquiera iniciado una senda de crecimiento autosostenido. En el marco del capitalismo europeo, la situación apunta a un largo estancamiento, con situaciones alternas, según países, de leve crecimiento y recesión. La parálisis institucional de la Unión, incapaz de subordinar los intereses financieros a una lógica política, apenas permite prever nuevos avances hacia la unión fiscal y presupuestaria que podría reequilibrar los aspectos más abracadabran-tes del euro, en tanto moneda extranjera para la mayor parte de los Estados. Tampoco se ha avanzado gran cosa en la dirección de reequilibrar los efectos antiproduktivos de la particular división del trabajo en el continente, que pone a un lado a los países centrales agrupados en torno a Alemania, corazón exportador de la Unión, y en otro a los países «periféricos», cada vez más plegados a ser el área de influencia neomercantilista de los primeros.

La crisis del capitalismo europeo, o todavía más del ciclo de acumulación global, tiene en el ámbito de la provincia España, un inevitable correlato social. La supuesta «salida de la crisis», manifiesta en los valores positivos del PIB desde 2014, no ha traído otra consecuencia que la intensificación de los elementos de su especialización económica: una mayor explotación turística y, de nuevo, la concentración de la

inversión en determinados segmentos del mercado inmobiliario, principalmente los de mayor valor. La crisis se ha «salvado» sin el desarrollo esperado de nuevas líneas de producción: el escasísimo desempeño en las «industrias de futuro» se ha quedado sin efecto en el empleo. De hecho, la «recuperación» que ya se intuía en las estadísticas de 2014 se concentró en los sectores típicos de la especialización española: junto al material de transporte —el automóvil sigue siendo la principal industria de exportación— aparecían el comercio, los servicios personales y sorprendentemente también las actividades inmobiliarias.³⁰ Traducido a términos sociales: la relativa recuperación del crecimiento y del empleo desde 2014 se produjo a costa de una profunda deflación social, manifiesta en la caída de los salarios y de los costes laborales.

En el cuadro de las tendencias económicas a medio plazo, no se reconoce pues ningún elemento capaz de articularse como contratendencia a la crisis de las clases medias. Ni se ha creado empleo profesional y de remuneración media, al menos no en la cantidad suficiente para producir un reemplazo siquiera significativo; ni se ha contenido la devaluación del capital educativo y escolar que tradicionalmente protegía a las clases medias. Por si esto fuera poco, la prótesis financiera de las burbujas de activos patrimoniales apenas tiene visos de que pueda reutilizarse en un futuro. La reactivación financiera de estos últimos años ha sido operada por grandes agencias y en beneficio de los sectores de mayor renta y patrimonio. Valga decir que no hay «efecto riqueza», tampoco «goteo» de la riqueza hacia abajo.

Si se quiere seguir con la comparación de la «solución» de los años setenta (la Transición), a diferencia de aquel periodo en el que los efectos sociales de la crisis se concentraron en el espacio en descomposición de la vieja clase obrera fordista, hoy la crisis sigue golpeando con más fuerza a los sectores de menor renta, pero ha alcanzado al corazón de las clases medias. La tendencia en el medio plazo es, por así decir, doble. Para aquellos sectores «invitados» a la sociedad de propietarios, epítome

³⁰ Se trata de datos referidos al aumento del valor añadido, y que se confirman con la información fragmentaria que se dispone de 2015. La sorpresa está en las actividades inmobiliarias, que contrastan con la depresión del sector de la construcción. La razón reside en el aumento de la compraventa en los tramos altos del mercado y en las ventas de la SAREB. En términos de empleo, las tendencias no coinciden del todo con los sectores señalados, así vemos crecimiento del empleo (precario) en el comercio y los servicios personales, y con menor intensidad en la hostelería, esto es, en los sectores más vinculados al consumo doméstico y al turismo. Véase Contabilidad Nacional, series 1999-2014, INE.

de las clases medias en este país, la situación de un retorno a la «normalidad» queda cada vez más lejos. No hay ninguna tendencia destacable a la recuperación de los niveles salariales, tampoco parece ya viable un retorno del «capitalismo popular» por la vía de la «democratización» del negocio inmobiliario. El alto endeudamiento de las «bajas clases medias» las vuelve ineficaces como *main d'ouvre* de una nueva burbuja inmobiliaria. Su empobrecimiento —su expulsión del «paraíso» de la clase media— es definitivo.

De otro lado, en el núcleo de las clases medias españolas, en su típica forma triádica —empleo profesional, credencial universitaria y patrimonio inmobiliario—, la desafiliación no se produce principalmente como una pérdida neta para sus actuales miembros, sino como un problema de reproducción de estatus en sus descendientes. Como se ha visto, la crisis tiene una modalidad «familiar», en forma de brecha generacional: los componentes de cada nuevo «recuento» se han visto sometidos a sucesivas rondas de proletarización en lo que se refiere a sus condiciones de vida y empleo. Para una parte no pequeña de las nuevas generaciones su condición de clase media terminará con el consumo del patrimonio inmobiliario de sus padres y sus abuelos, principalmente en una futura vejez no garantizada.

En última instancia, es aquí donde se manifiesta en toda su crudeza los límites del recambio de élites, realizado de forma parcial en este ciclo político. El régimen político que resulte de la crisis no contará con el estabilizador automático de unas clases medias amplias y satisfechas. La época apunta a la descomposición de ese elemento a la vez social e ideológico, que permitía mantener la ficción de una sociedad sin quiebras, ni fracturas significativas.

El recambio de élites que empuja el ciclo choca además con los límites de una crisis más general, de una crisis de la forma «estatal» de las élites. No se trata únicamente, de que en tanto clase profesional y directiva los componentes de la nueva política estén «menos preparados» que la generación de la Transición,³¹ sino de que el propio «sujeto

³¹ Una de las paradojas del asalto institucional post-15M, entendido como proceso de formación y recambio de élites, es que efectivamente ha sido mucho más frágil y se ha construido con materiales culturales y sociales de menor consistencia que los disponibles en los años setenta. El «orgullo» de la generación de la Transición frente a los advenedizos tiene sus razones últimas en el contexto expansivo de las clases medias durante el desarrollismo franquista, en comparación con la descomposición de estas mismas en las últimas décadas. Inevitablemente esto se ha reflejado en la peor calidad del proceso selección y formación de los nuevos cuadros políticos. Al fin y al

élite» está siendo desplazado fuera del Estado, hacia los lugares —las agencias financieras, las grandes corporaciones, los organismos transnacionales— en los que se concentra el poder real. En última instancia, el recambio de élites puede resultar ineficaz, por una razón tan banal como aquello que todavía se pretende ocupar (el Estado) ha sido vaciado de poder y autonomía efectivas. La crisis de las élites políticas, que comprende también a las nuevas —incluso antes de su llegada al poder—, aparece así conectada con una tendencia de fondo en la crisis general de las grandes instituciones modernas.³²

En definitiva, el signo de la época es la irremisible «descomposición» de las clases medias. Esta crisis no ha terminado de prefigurar ninguna tendencia política clara, más allá de lo comprobado tras el 15M. Si bien, el retorno de la sociedad de «clases medias» está definitivamente condenado, la «nostalgia de clase» puede ser eficaz para proyectos políticos de signo diverso, desde el Podemos populista al *processisme* catalán, desde Ciudadanos a una alternativa de derechas todavía por definir. En contraste con estos casos, toda política que quiera intervenir para producir democracia y nivelación social tendrá que poner en el centro la tendencia que empuja en la dirección de una nueva «proletarización» de masas.

cabo, la generación 15M, en términos publicitarios la generación «más preparada de la historia de España», no tenía en su agenda más futuro previsto que el de una precariedad generalizada y una juventud en permanente prórroga frente al bloqueo generacional de la clase media profesional.

³² Se trata de un fenómeno que aquí no se puede desarrollar en toda su amplitud. No obstante, desde hace décadas, propiamente desde la imposición de la hegemonía neoliberal —considérese como una toma del Estado por parte del capital financiero—, las instituciones que llamamos Estado, no sólo en España, también en la mayor parte de los países europeos, han ido perdiendo progresivamente su función como lugares de acción y reproducción de las élites (en el sentido más lato del término). Las élites son cada vez menos «estatales» y cada vez más «élites corporativas globales», que en el caso de algunos segmentos (como el sector financiero más especulativo) pueden tener, incluso, una clara propensión «anti-sistema». En términos de prestigio y poder, la carreras funcionarial y política están ampliamente devaluadas frente a la del ejecutivo global. Se trata de un fenómeno que camina de la mano de la patente mediocridad de las clases políticas de todos los países, y también de la propia crisis del Estado, al menos en su forma histórica en las democracias liberales.

EPÍLOGO

PRÓLOGO A UN DEBATE ESTRATÉGICO

¿Hasta dónde se puede estirar nuestro tiempo? ¿Cuál es nuestro programa de máximos? Dejando a un lado el mito de la revolución, la ficción de la gran ordalía, el momento mesiánico crucial y definitivo, ¿cuál es el horizonte de sentido que está ya contenido en nuestro tiempo?

No como arte, antes como premonición, la estrategia es una «ciencia práctica»: consiste en hacer realidad ciertos «futuros» contenidos en nuestro presente. Por eso, la pregunta por la estrategia es completamente inmanente a las condiciones de cada época. En los materiales que luego se publicaron bajo el nombre de *La ideología alemana*, Marx acuñó una fórmula que se hizo célebre: «Llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual».¹ Comunismo: «movimiento real» que labra el presente como potencia.

El «movimiento real» aporta los contenidos sobre los que se cifra «esa» posibilidad. Contiene estados sociales futuros, instituciones y formas de vida apenas intuidas, formaciones en estado embrionario. En la pregunta por la estrategia resulta difícil separar «medios» y «fines». El horizonte de transformación surge de los mismos materiales que se presentan para realizarlo. Incluso en opciones y teorías políticas que han defendido el extremo de la «profesionalización de la política», los elementos vivos al alcance del revolucionario profesional no eran otros que las luchas y los movimientos, el conflicto incesante que se desprendía del roce del «movimiento real». La cuestión es: ¿dónde se encuentra hoy el «movimiento real»? ¿dónde el comunismo *in nuce*?, ¿dónde la tendencia?

¹ K. Marx y F. Engels, *La ideología alemana*, Madrid, Akal, 2016.

Una premisa de partida: en la vieja división conceptual entre táctica y estrategia, a la primera le quedaban reservadas las tareas inmediatas, el juego corto de la organización, las metas concretas, la logística, la inteligencia de las acciones concretas. La estrategia correspondía con el horizonte de sentido general, los grandes objetivos y los grandes medios, las cuestiones generales de las modalidades de organización. A partir de esta división, resulta claro que nuestro tiempo ha estado obsesivamente concentrado en la táctica. El análisis tanto de la fase 15M como de la fase Podemos desprenden una enorme capacidad para el juego corto, un tacticismo virtuoso, una «comunicología» a veces extraordinaria, y al tiempo una sorprendente ausencia de estrategia, de objetivos a largo plazo, de interpretaciones en profundidad, de curiosidad incluso por el sentido que podría tener la dirección del movimiento, superados los umbrales de los objetivos inmediatos (votos, escaños, gobiernos). Valga al caso la tenue vitalidad, apenas retórica, que han tenido los consignas que podríamos llamar de «transición», como la de «revolución democrática» o la de «proceso constituyente». La centralidad del paradigma comunicativo se corresponde con esta preponderancia generalizada del tacticismo. Incluso, en los periodos de impás, en los que se atisbó un destello de discusión fundamental, como la que se produjo a partir de la crisis del ciclo de movilización que abrió el 15M, esta se resolvió —recuérdese la irrupción de Podemos— con un sencillo «funciona *ergo* he aquí su verdad».

La táctica se realiza en las prácticas concretas, evita obstáculos, ahorra movimientos, busca eficacia inmediata. La táctica no requiere cuestionamientos complejos, no necesita preguntarse por los fines. Por eso en política, y sobre todo en política institucional, el tacticismo suele ceñirse a la pregunta de «cuánto poder» —posición institucional, capital simbólico, votos, adhesiones— produce una acción concreta. Y por eso también, el tacticismo político es congruente con la lógica «elitista» de la concentración de poder en grupos pequeños, en liderazgos carismáticos; o en otra palabras, en el «gubernismo» y la «autonomía de lo político» que reduce la política a estos juegos de acción institucional y de minorías. Sin un marco de análisis más amplio, sin una conexión con la dinámica general del ciclo, sin una búsqueda concreta y siempre insatisfecha sobre el «movimiento de lo real», el tacticismo degenera en la aceptación de lo existente, en la confusión de la estrategia con el juego corto, «táctico». En los peores escenarios —es nuestro caso—, el tacticismo tiende a confundir la posición de poder de una minoría con las oportunidades de cambio que ofrece la coyuntura.

La estrategia requiere de análisis, de discusión, de conexión práctica con lo «que ocurre», de un debate inacabado sobre las potencias del «movimiento real». No todas las épocas presentan «predisposición estratégica». Durante los últimos cuarenta años en Europa, la ruina de la izquierda, entre la integración definitiva en el mando neoliberal y la marginación igualmente definitiva en los rincones de lo ideológico, ha corrido en paralelo a la renuncia de la estrategia. El sentido último de la «postmodernidad», la llamada extinción de los grandes relatos, no estaba en declarar el fin de la filosofía de la historia, cuanto de algo más simple y peligroso: dar carpetazo a la aspiración contenida en la pregunta de qué «sociedad nueva» podría andar escondiéndose en la vieja. De hecho, si hubo algo parecido a una estrategia en este largo invierno, esta vino de la mano del neoliberalismo y de su pretensión de imponer en todos los ámbitos el patrón utópico del libre mercado.

Después de cuatro décadas, el 15M y todas sus secuelas han vuelto a plantear la pregunta por la estrategia, pero de una forma tan elemental, tan ingenua en ocasiones, que apenas debe sorprender que el debate haya resultado tan pobre. Conviene avanzar que si ni siquiera recordamos los términos del viejo «arte de la estrategia», difícilmente podremos inventarnos otros nuevos. Quizás un buen método podría consistir en recuperar los hilos históricos de viejos debates: sus contextos, las oportunidades y los límites que encontraron. Este recorrido podría comenzar en los años centrales del siglo XIX, a caballo de la revolución del '48 y del surgimiento de la izquierda en sus formas canónicas.² Seguiría después con las décadas de la Gran Guerra, que va de 1914 a 1945, periodo denso en el que encalló la socialdemocracia, se probó el sindicalismo revolucionario, estalló y se torció la Revolución Rusa. La coda final vendría con los años sesenta y setenta, con los movimientos de liberación nacional, el tercermundismo, la ola del '68 y todos sus «post» y el cierre del «eurocomunismo» sobre los llamados compromisos democráticos. Quizás sobre estas bases sería posible plantearnos las posibilidades de este ciclo político, y a la luz de lo viejo, también, su novedad. Pero no tenemos ni tiempo, ni espacio, al menos no en este libro. Vayamos pues directos, ¿qué estrategia para nuestra época, y sobre todo a partir de qué línea de «tendencia»?

² Poco después del 15M, algunos espacios ligados a lo que luego fue la Fundación de los Comunes probamos a recuperar el hilo de estas discusiones a fin de articular un debate estratégico a la altura de la nueva coyuntura. Este quedó reflejado en un librito firmado por Emmanuel Rodríguez, *Hipótesis Democracia. Quince tesis para la revolución anunciada*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2013.

En los días previos a la convulsión de la primera gran revolución europea (1848), Marx y Engels escribían:

La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción, que tanto vale decir el sistema de la producción en su conjunto y con él todo el régimen social. [...] La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes.

[...]

[No obstante] las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad; son ya demasiado poderosas para servir a este régimen que embaraza su desarrollo. Y tan pronto como logran vencer este obstáculo siembran el desorden en la sociedad burguesa.

[...]

La burguesía no sólo forja las armas que han de darle la muerte, sino que, además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres son los obreros, los proletarios.³

Estos conocidos fragmentos de *El manifiesto comunista* resonaron durante siglo y medio en todas las discusiones relativas al método de la revolución. Fueron menos una fuerza inspiradora o una predicción científica, que un diagnóstico práctico: la burguesía (el desarrollo del capitalismo) se realiza en la transformación forzada y continua de la producción, pero esta a su vez genera su negación, y posteriormente su superación, bajo la forma de la revolución proletaria. A pesar de los ropajes de la dialéctica hegeliana, en este análisis se encuentra el núcleo de una tendencia práctica, reconocida como fuerza social principal durante casi dos siglos: el desarrollo del movimiento obrero como antagonista de la sociedad capitalista. Todas las crisis del siglo XX estuvieron anudadas a esta «posibilidad», que se definía en un juego de etapas (revolución democrática, revolución proletaria) y sobre la base de términos estratégicos hoy prácticamente olvidados.

Sobra decir que toda insistencia en estos patrones es tildada, y con razón, de «ideológica», «izquierdista» y anticuada. Nuestra diferencia, nuestra alteridad con la época gloriosa de la modernidad capitalista,

³ K. Marx y F. Engels, *El manifiesto comunista*, varias ediciones [1848].

es que hoy no somos capaces de detectar el doble movimiento de esta vieja política: ni la de un capitalismo revolucionado y expansivo, ni la de un movimiento obrero que crece bajo su sombra y como amenaza de superación de la sociedad burguesa. Empapados de un tiempo en el que ni la expansión capitalista, ni la constitución de nuevas clases obreras gozan de buena salud, el signo de época no parece otro que el de la descomposición, la crisis permanente. El capitalismo financiero, hoy predominante, y en el que la pieza española ha jugado un papel determinante, no es el capital expansionista de finales del siglo XIX, tampoco el capitalismo regulado de los años cincuenta y sesenta. Es la estrella declinante de una constelación ya completamente saturada por la expansión de la lógica de la acumulación.

Asistimos a una coyuntura que se ha vuelto época: los procesos económicos convencionales, la producción de bienes y servicios, ya no sirven como medios para la reproducción ampliada, ya no sirven a la acumulación de capital. La paradoja reside en el gigantesco exceso de capacidad productiva y a la vez en el déficit relativo de capital para iniciar un nuevo ciclo schumpeteriano de innovación y expansión de las rentas de innovación. En este ínterin que dura ya desde los años setenta, el capital se ha desplazado hacia los mercados financieros y desde ahí ha ido colonizando esferas que antes estaban garantizadas por el Estado: las pensiones, la educación, la sanidad; en una palabra, el futuro. Las viejas instituciones de la sociedad burguesa (la gran empresa, los Estados-nación) no son capaces de afrontar los problemas que plantea su propia reproducción. Menos aún parecen preparadas para contener y regular los retos que el capitalismo financiero plantea a la humanidad como especie; la crisis ecológica en primer término.

En el otro lado del espejo, el lado de aquella «ruda raza pagana» que durante un tiempo recibió el nombre de proletariado, también se ha interrumpido aquel flujo de noticias de esperanza. No es que la clase obrera, en cuanto tal, haya desaparecido: los procesos de proletarización persisten y, de hecho, no han dejado de ampliarse en estas últimas décadas, tal y como demuestra el análisis de la formación social española. Pero lo que no existe ya, al menos no en sus viejas formas, es el movimiento obrero que *hacía* la clase. Con la descomposición de la «sociedad burguesa», puede estar sucediendo lo que con la crisis del feudalismo, cuando sus elementos y fragmentos sociales salieron despedidos en distintas direcciones en un proceso que duró dos siglos.

En definitiva, el proletariado existe pero ya no como clase: he aquí una paradoja, también para el capital. Por eso ya no podemos sostener el viejo axioma del operatismo, que definiera con simplicidad Mario Tronti, al borde del último gran estallido político del siglo XX (el '68): «Desde la perspectiva del capital socialmente desarrollado, el desarrollo capitalista se halla subordinado a las luchas obreras, viene tras ellas y a ellas debe hacer que corresponda el mecanismo político de la propia reproducción». ⁴ Salvo quizás en China o de forma dispersa en otras partes del planeta, resulta difícil reconocer las luchas obreras que animan y empujan el desarrollo capitalista. También es dudoso que siga siendo válida esa «perspectiva del capital socialmente desarrollado». No al menos al nivel de los Estados singulares. La «crisis del régimen político» español, como la de muchos otros países europeos, es sobre todo la crisis de sus élites. La ausencia de una «perspectiva» para ese nivel institucional, instalado en la crisis de largo recorrido del Estado moderno, ha derivado en una suerte de vacío, de ausencia de regulación. Sin este factor, marcado por la desbandada e incompetencia de las élites políticas, difícilmente se podría haber producido el rápido avance de la «nueva política» en España, así como tampoco el gobierno de una coalición de «izquierda radical» en Grecia.

Se trata de un hecho que encaja mal con el diagnóstico de la dirección de Podemos, que insiste en definir la crisis española como una crisis de régimen y no de Estado. ⁵ Ciertamente el Estado no ha colapsado, no ha perdido control sobre el territorio, la administración ha seguido funcionando. Pero se quiera o no, la crisis del Estado moderno es la de la pérdida de sus viejas facultades soberanas. La vuelta a una poliarquía «medievalizante» de soberanías superpuestas y a veces contradictorias desbarata todo intento de restauración de una política estado-céntrica y de izquierdas. Los síntomas de este «trastorno del Estado» son la crisis de legitimidad, la crisis de representación y la crisis de las élites nacionales. Pero sus razones están en una crisis de autoridad: el Estado moderno ha sido laminado por la extensión de la fábrica global y el capitalismo financiero, la imposición de instancias de regulación

⁴ Mario Tronti, *Obreros y capital*, Madrid, Akal. Cuestiones de Antagonismo, 2001 p. 93.

⁵ Crisis de régimen pero no de Estado: ésta fue una de las premisas de la lectura de la crisis política española y que funcionó como un límite autoimpuesto a la hipótesis Podemos, esto es, al recorrido de la transformación política y social del ciclo. Lo cierto es que los elementos de crisis profunda del Estado están todavía por encontrar sus imprescindibles valencias políticas, tanto en España como en el resto de países europeos.

supraestatales como la Unión Europea y su «empresarialización», que transforma a los Estados en corporaciones en competencia por la captación de inversiones y para la explotación de las «ventajas competitivas» de los territorios que administran.

En el marco de esta sociedad implosiva,⁶ no hay posibilidad material de apoyarse en una tendencia, por así decir, «progresiva». Ni el capitalismo triunfante parece capaz de salvar su propia crisis, ni existe una contraparte poderosa que además de crecer entre sus contradicciones, le empuje a su reforma. El terreno no es pues el del futuro, el de las revoluciones democrática y socialista, burguesa y proletaria. Pero tampoco el del pasado. Nuestro tiempo es tiempo mórbido. Las contradicciones de esta sociedad están encarnadas en su crisis, crisis sin paliativos y sin superación imaginada o prevista. La dialéctica de la modernidad, también en lo fundamental, está atascada. Por eso, nos resulta tan difícil reinventar la consigna leninista de 1914, y que sin sorpresas prefiguraba en quince años a Carl Schmitt: «convertir la guerra (la crisis) en guerra civil». Pero ¿qué guerra, entre quienes, con qué propósito? ¿Del «pueblo» contra las élites, de la vida contra el capital? Demasiado impreciso, demasiado desencarnado.

No obstante, la política no tiene otro terreno, otra posibilidad, que el cambio. Aunque ese cambio sea ahora el de la larga marcha hacia la descomposición de la «sociedad burguesa». Basta admitir que la estrategia es hoy mucho más compleja y que no tiene, por así decir, a la historia de su parte. Sin duda, algunas de las posiciones políticas más interesantes de este ciclo han operado sobre la vieja idea progresiva de la «tendencia». Así la política 15M, con su intuición de que la comunicación en red estaba creando una esfera pública nueva, al margen de la organización tradicional de la opinión pública por parte de los grandes medios, y con su apuesta práctica por una reforma política basada en la democracia digital. A este tipo de prácticas quizás debamos que la política 15M sea formalmente «nueva», pero su límite a la postre se ha probado como el límite de todas las viejas formas del democratismo liberal, libre de toda injerencia de clase y posición social. Se trata de un límite que atraviesa todo el ciclo político. Ciertamente, sólo cuando la política 15M se ha topado con los materiales duros de la crisis social, cuando se ha hibridado con alguna forma de nuevo sindicalismo (como el movimiento de vivienda) ha logrado salvar estos límites.

⁶ Título de uno de los libros que más interés deberían despertar en aras del desarrollo de la teoría crítica, Corsino Vela, *La sociedad implosiva*, Bilbao, Muturreko, 2015.

La ausencia de «tendencia» tampoco impide definir tareas políticas claras, tareas que deberían operar en la dirección contraria a la descomposición manifiesta del tejido social. La principal: la posibilidad de dar acta de nacimiento a una «nueva clase», hecha de la alianza entre elementos de la clase media en descomposición y de los estratos definitivamente proletarizados. A lo largo de este libro, se ha tratado de considerar que el ciclo ha estado ligado, de forma demasiado estrecha, a las clases medias, concretamente a su propia decadencia, y que esta, en la medida en que se expresa como un problema de reproducción, ha transformado la vieja «cuestión de clase» en un asunto generacional, de acuerdo con la divisorio de «lo nuevo y lo viejo». En varias ocasiones también, se ha destacado que la paradoja del ciclo reside en esta «condición de clase» del sujeto social protagonista. Y que la formación de un sujeto de ruptura —la «nueva clase»— pasaba por la maduración y la alianza entre elementos sociales, hoy por hoy, radicalmente heterogéneos.

Prueba obvia de que cuando se sale del terreno de la única tendencia que resulta verificable, la de una irremisible crisis de la «sociedad burguesa», la de su descomposición sin contraparte, las propuestas empiezan a desprender un olor fermentado al que ya estábamos acostumbrados. Es lo que le ha pasado a Podemos, y en general a toda la «nueva política» metida en las instituciones. Es lo que resulta de la insistencia, cada vez más desgastada, en recuperar la «representación buena y honesta», en «recuperar unas instituciones para la gente» —que por cierto nunca fueron para la gente—, en la «responsabilidad institucional», en el «sentido de Estado». Conviene recordar que todo lo que ha tenido «éxito» durante este ciclo político ha sido en contra de esta práctica y esas retóricas: la democracia estirada hasta sus límites del 15M, el partido «anti-partido» que representó el primer Podemos, el municipalismo como lógica de reinención de la democracia en clave local y a veces anti estatal.

Quizás las lecturas que nos sigan, interpreten el ciclo 15M como el último intento de recuperar y restaurar unas instituciones en descomposición. Al fin y al cabo, aquí reside la principal contradicción del ciclo: desde el movimiento de las plazas, la nueva política ha sido tanto un intento de ruptura de los marcos políticos (la representación) y sociales (las clases medias), como de restauración de esos mismos marcos por medio de la «regeneración democrática». Preponderante, la «autonomía de lo político» ha respondido afirmativamente a la triple cuestión de que (1) era posible regenerar el Estado y recuperar su soberanía, (2) resultaba

viable restablecer el equilibrio político sobre la base de las clases medias y (3) este proceso podía ser comandado por una nueva élite política. Tres premisas que se han demostrado sencillamente falsas.

En el terreno de esta ambivalencia, en la inclinación de la nueva política hacia una restauración del Estado democrático, de las clases medias y de la renovación de las élites, debemos entender también la preferencia por la simplificación política, que se ha producido en todos los momentos decisivos. La renuncia a expresarse en claves políticas (proceso constituyente) durante los años 2011 y 2012, el rebajamiento de las demandas en favor de la anticorrupción y la transparencia, la decantación de Podemos y la candidaturas municipalistas por el gobierno, antes que por la prefiguración de contrapoderes efectivos. Finalmente, la solución política al 15M ha acabado por pasar por el «gobierno» y no por la transformación del Estado.

Y sin embargo, la autonomía de lo político ha tendido a girar cada vez más sobre el vacío. Tendencia y estrategia se anudan, por contra, en la imposible restauración de los previos a 2007 y en la aceptación sin paliativos de la crisis de las clases medias, la creciente impotencia del Estado como monopolista de lo político y la correlativa liquidación de las élites de Estado. La política que viene tendrá que cabalgar la crisis, estirar la crisis, desejar la crisis. Nada ideológico, ninguna presunción voluntarista; sólo la crisis.

La nueva política debería empezar no con el llanto a los pies del cadáver de una formación social condenada, explotando una nostalgia que al final revertirá en el monstruo de la guerra entre pobres, cuanto apostando a la tendencia, que desde hace tiempo anuncia su descomposición. Algunos materiales de esa política están en los movimientos por la creación de derechos sociales desligados de un trabajo (asalariado) vuelto cada vez más escaso, en las organizaciones parasindicales del movimiento de vivienda, en los movimientos de las «alternativas» que han experimentado con formas de vida y politización en éxodo de las clases medias, en el terreno abierto por la economía política ligada a las comunidades en lucha. Pero esta apuesta tendrá que hacerse sin ninguna complacencia. Ciertamente, considerados en su práctica concreta, ninguna de estas experiencias resulta suficiente, siquiera para empujar la imaginación política que abrió el 15M, y que estuvo en la base de una impugnación general. Es justamente esto lo que nos devuelve a una de las formas habituales de la «dialéctica» política del ciclo, la de mayorías / minorías.

«Ciudadanía» para el quincemayismo, «pueblo» para el populismo podemita, «clases populares» en una suerte de neolengua izquierdista, han sido fórmulas manidas con las que los protagonistas de la «nueva política» han tratado de dirigirse a la «mayoría», y superar las prácticas «minoritarias» de los movimientos sociales, por no decir de la izquierda impotente. No obstante, esta «mayoría» se ha representado como un «otro» social, imprescindible en el ciclo, pero al que únicamente se ape-la para pedirle adhesión, apoyo o voto. El problema reside en quién lo enuncia, y aquí no debemos apuntar a categorías como los «militantes» o los «convencidos», cuanto a las formas de politización de unas clases medias en descomposición. De hecho, la paradoja de estos segmentos sociales, que han protagonizado el ciclo, reside en su soledad política. Capaces de arrastrar a toda una sociedad en sus aspiraciones, incapaces de tejer una alianza real con capas sociales y culturales situadas más allá de la propia, la característica de la nueva política ha sido la de hacer tabula rasa con la «vieja política», incluso con aquello que de «política» quedaba en esta.

Pobrementemente armada, de politización tan reciente como el ciclo 15M, los nuevos políticos han imaginado la sociedad según un patrón hecho a su medida. Salvo el movimiento de vivienda, que pasó a un cajón secundario en la fase institucional, no ha habido en la «fase electoral» ninguna idea que vaya más allá de la política institucional. La nueva clase política se ha querido en comunicación directa con la mayoría: idea mística de la comunicación íntima e inmediata con las «masas», tan propia —tan históricamente propia— de las clases medias. Pero lo cierto, es que la política, al menos la única que interesa, comienza justamente cuando la distancia entre minoría activa y mayoría pasiva se estrecha hasta el punto de hacerse irrelevante.

El plebiscitarismo, el populismo, el participacionismo vacío, son resultados del déficit de politicidad no de las masas, sino de sus nuevas élites. La estrategia comienza cuando se deja de considerar el «todo» social como un espacio informe pero manejable —gracias a la «comunicación política»—, cuando se reconoce en la sociedad una extraordinaria complejidad hecha de fracturas, de zonas de tensión, de formas variables de politización. Paradójicamente, dentro de esta complejidad —en esto consiste el trabajo político— es de donde se articula la «unidad» que se reconoce en el sujeto político. Y es aquí también donde estrategia y sujeto, política y organización se presentan como modos de

un mismo problema. No habrá política si esta permanece en las claves de sus nuevas élites, de esas mismas clases medias aisladas «recién politizadas y pobremente armadas».

En términos más concretos, si la estrategia compete siempre al problema del poder y de la organización, este tiene hoy menos que ver con el acceso al gobierno y a las instituciones, que con reconocer y reunir todo lo vivo dentro de esta sociedad: en los jóvenes desclasados, en los territorios migrantes, en el viejo campo de la clase obrera derrotada, en el nuevo precariado de los servicios, y en un sinfín de recovecos culturales y comunitarios capaces de servir de palanca social. Seguramente, sobre la base de este trabajo de organización de contrapoderes efectivos, conseguiremos que el ciclo que se abrió el 15 de mayo de 2011 se prolongue en un ciclo largo todavía apenas imaginable. Sólo así merecerá la pena estar en esas instituciones de Estado, que de una vez por todas empezarán a resultar maleables.





